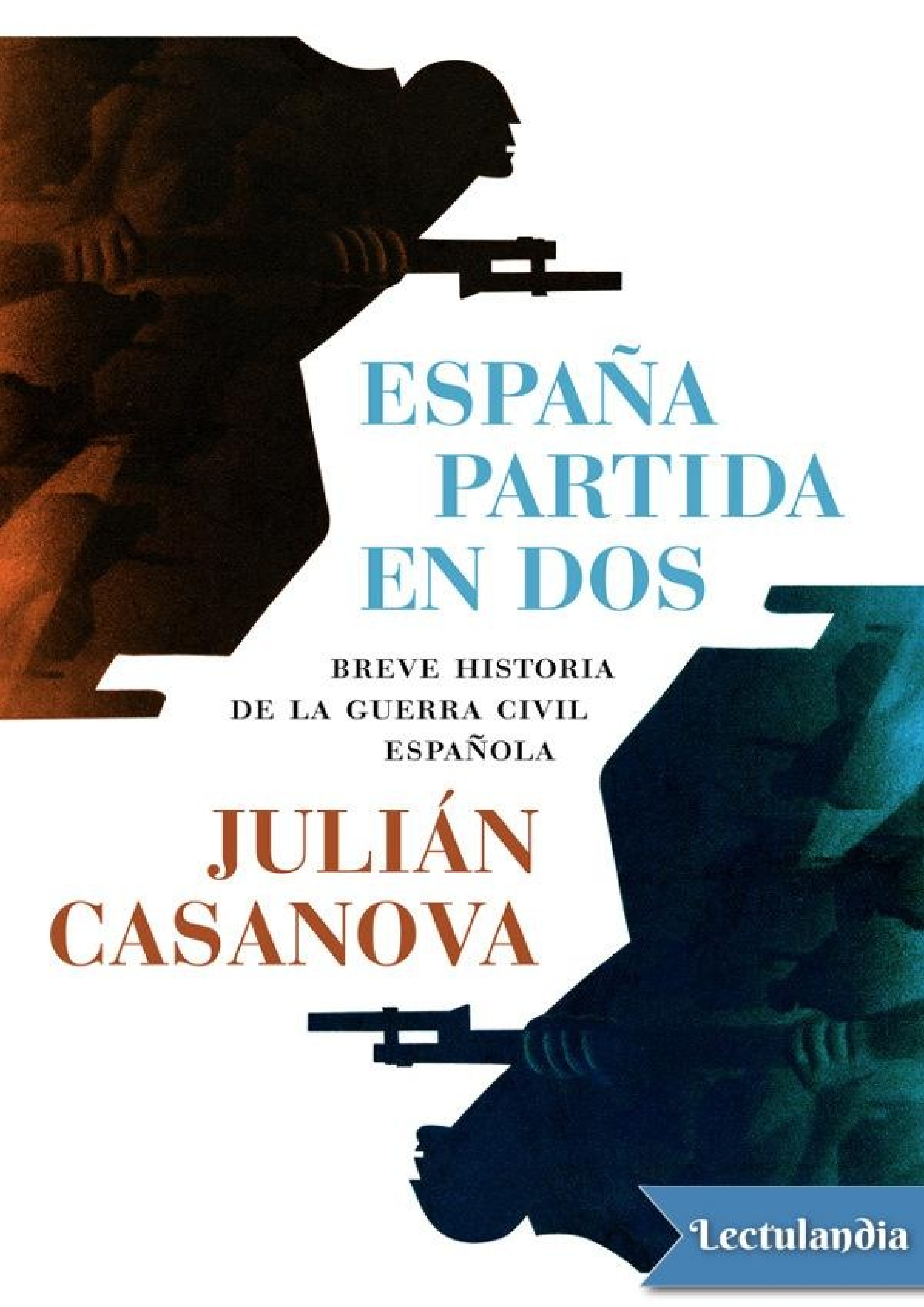

ESPAÑA
PARTIDA
EN DOS
BREVE HISTORIA
DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA
JULIÁN
CASANOVA
Lectulandia

La bibliografía reciente sobre la historia dela Guerra Civil Española está integrada, sobre todo, por obras especializadas, destinadas a los investigadores. Faltan hoy síntesis accesibles que puedan cumplir la función que en su tiempo desempeñaron libros como los de Gabriel Jackson o Hugh Thomas, aproximando al lector medio el estado actual de los conocimientos, lo cual resulta tanto más urgente tras unas décadas en que la investigación ha aportado nuevas certezas y ha desvanecido viejos mitos. Nadie más adecuado para realizar esta tarea que el profesor Julián Casanova, catedrático dela Universidad de Zaragoza, autor de una gran visión de conjunto de la época –República y guerra civil- y de estudios de tanta valía como *De la calle al frente, El pasado oculto, La iglesia de Franco o Europa contra Europa, 1914-1945*. Su nueva «breve historia» va a satisfacer, sin duda, a los muchos lectores de sus libros.

Lectulandia

Julián Casanova

España partida en dos

Breve historia de la Guerra Civil Española

ePub r1.0
Titivillus 17.01.15

Título original: *A Short History of the Spanish Civil War*
Julián Casanova, 2013
Traducción: Julián Casanova

Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2

más libros en lectulandia.com

A Lourdes y Miguel

Prólogo a la edición en español

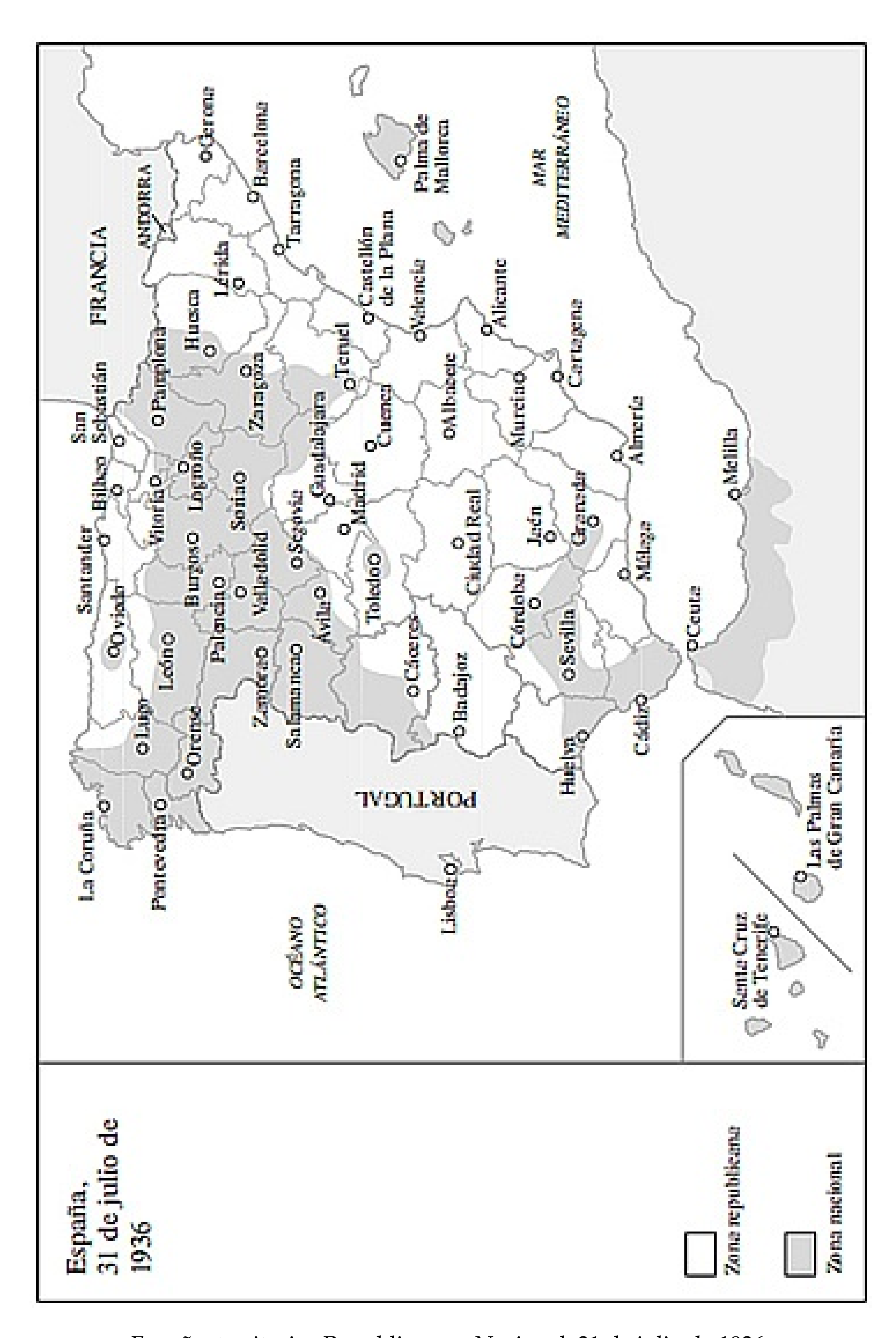
La guerra civil es el acontecimiento central de la historia del siglo xx español. Desde aquel verano de 1936, y ya casi ochenta años después, escritores de todo tipo, novelistas, poetas e historiadores han intentado explicar sus causas y sus consecuencias, los conflictos más agudos y las políticas que los orientaron. Ningún otro período de nuestra historia ha generado tantos libros, testimonios, debates y disputas tan agrias como estériles. Pero a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre ese enfrentamiento armado, la mayoría de los españoles no saben, o no quieren saber, mucho acerca de él, y además otros hacen lo imposible para que no lo sepan.

Combatir la ignorancia voluntaria, las manipulaciones y el aburrimiento que provocan muchos de esos libros no es una tarea fácil. Tampoco lo es captar nuevos lectores, atraer la atención de jóvenes estudiantes para los que la historia no es más que una pesada colección de fechas y nombres. Eso me llevó a aceptar el encargo de la editorial I. B. Tauris de escribir una historia breve de la Guerra Civil española en inglés, que registrara, como en una fotografía, los hechos más significativos de la tragedia y sus principales actores[1*]. Aparece ahora en español, gracias a Crítica, la editorial que siempre acoge mis escritos.

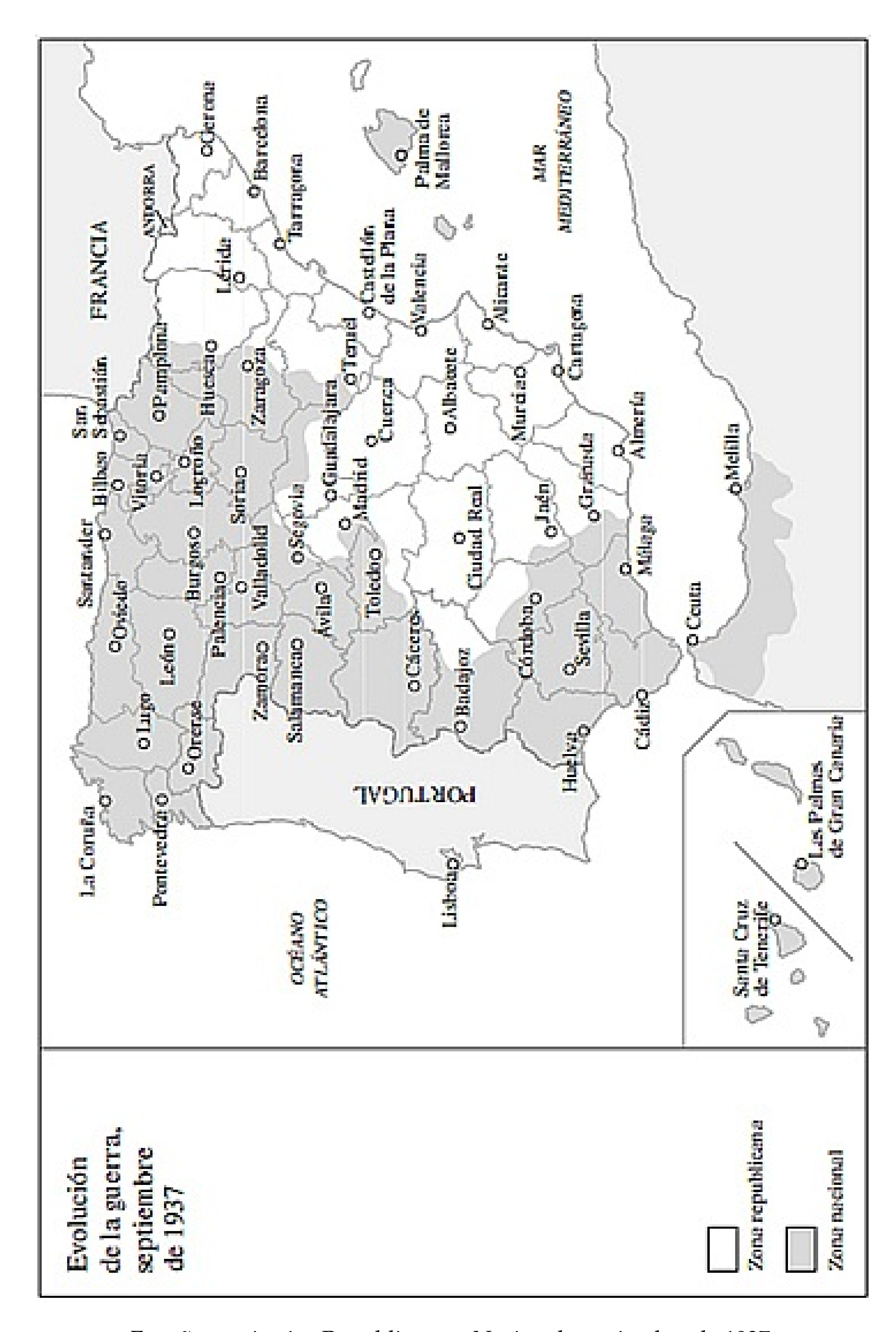
Ésta es la historia de un golpe de Estado contra la República, de la lucha por el poder que desató y de los violentos conflictos que afloraron por todas partes. Una historia, sin embargo, con rostro humano, que desmonta mitos y reconoce los trabajos e investigaciones de decenas de historiadores.

A quienes sepan mucho sobre la Guerra Civil, esta historia quizás les parezca breve, poco profunda. Pero en mis numerosos encuentros con maestros, profesores de enseñanza media y estudiantes he constatado que faltan libros de este tipo, concisos, de prosa accesible y con la garantía de una investigación rigurosa y profesional. A todos esos docentes que se dejan la piel intentado transmitir algo tan complejo y fascinante como la Guerra Civil española va dedicado este libro. Y espero que sea útil para todos quienes, como decía Sam Cooke en su canción, no saben mucho de historia. Ni de la Guerra Civil española.

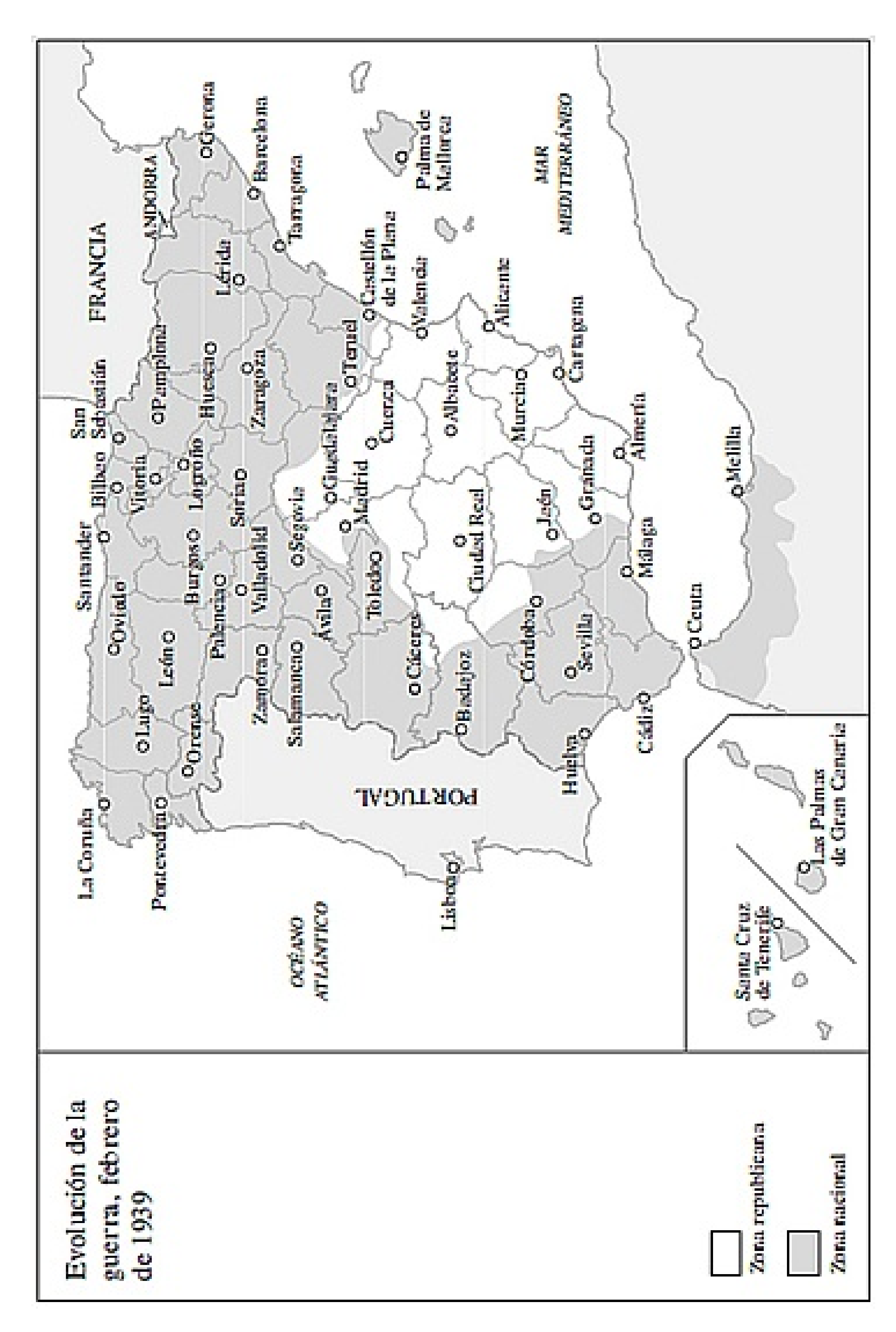
Zaragoza, agosto de 2012.



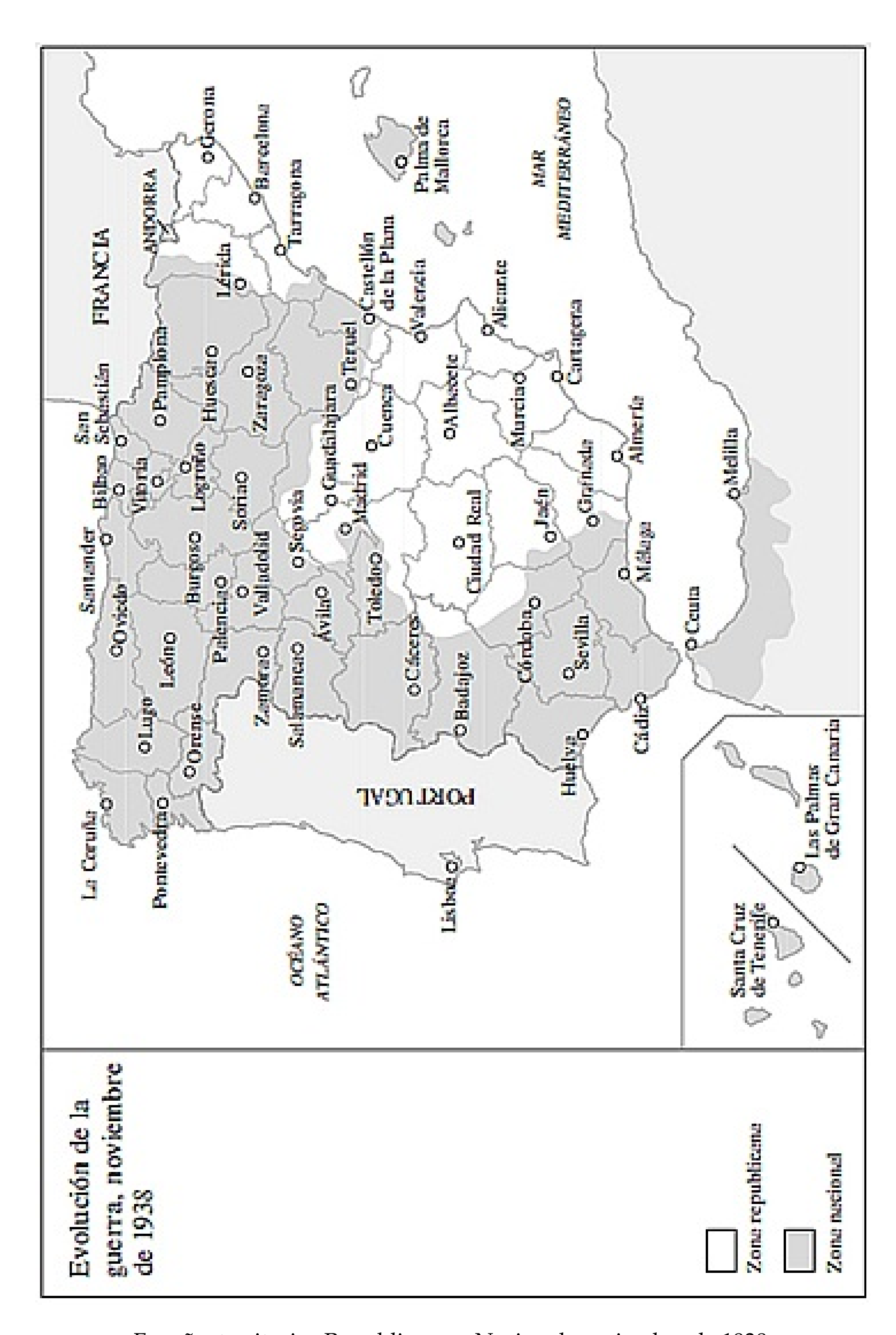
España: territorios Republicano y Nacional, 31 de julio de 1936.



España: territorios Republicano y Nacional, septiembre de 1937.



España: territorios Republicano y Nacional, febrero de 1938.



España: territorios Republicano y Nacional, noviembre de 1938.

Introducción: Las raíces del conflicto

EN LOS PRIMEROS MESES de 1936, la sociedad española estaba muy fragmentada, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar contra la República socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. Era julio de 1936 y así comenzó la Guerra Civil española.

La historia de España del primer tercio del siglo XX no fue la crónica anunciada de una frustración secular que, necesariamente, tenía que acabar en una explosión de violencia colectiva; un cúmulo de fracasos y carencias —de la industria, de la agricultura, o del Estado— que impidieron al país seguir la vía hacia el progreso y la modernización.

La historia de España no discurrió en esas tres décadas al margen de la europea, no fue ajena a las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales vividas en el resto del continente. Hay muchas más similitudes que diferencias, sobre todo con los países cercanos del ámbito meridional. Los historiadores sabemos también que no existe un modelo «normal» de modernización frente al cual España pueda ser comparada como una excepción anómala. Casi ningún país europeo resolvió los conflictos de los años treinta y cuarenta —la línea divisoria del siglo— por la vía pacífica.

Dos guerras mundiales y una «crisis de treinta años» en medio marcaron la historia de Europa del siglo XX[1]. En España bastaron tres años para que la sociedad padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX española hubo un antes y un

después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, durante al menos dos décadas, no hubo ninguna reconstrucción positiva, tal y como ocurrió en los países de Europa occidental después de 1945.

De la Monarquía a la República

Cuando nació el siglo XX, España era un país venido a menos. Acababa de perder Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y ese *Desastre* de 1898, como se llamó al derrumbe definitivo del viejo imperio, a la pérdida de las últimas colonias, incrementó el pesimismo entre los contemporáneos, aunque el debate sobre cómo «regenerar» a la nación abrió también nuevos caminos para la democratización de las instituciones políticas y de la sociedad.

En 1902, al alcanzar la mayoría de edad, Alfonso XIII accedió al trono de España, después de jurar la Constitución, un texto que tenía ya veinticinco años de vida legal. Dominaba entonces en España el llamado sistema político de la Restauración, un sistema en el que se turnaban en el poder dos partidos de notables, liberales y conservadores, que controlaban la administración a través de un entramado político basado en el *caciquismo*, el patronazgo, un modelo clientelar que estaba entonces también vigente en otros países del ámbito mediterráneo como Italia o Portugal.

El reto para Alfonso XIII y para las elites políticas era emprender una reforma del sistema político desde arriba, para evitar la revolución desde abajo, que ampliara las bases sociales sin poner en peligro su dominio. La historia política del reinado de Alfonso XIII es la crónica de ese fracaso. El rey intervino en política, tratando de manejar a su gusto la división interna de liberales y conservadores, con facciones, clientelas y cacicatos enfrentados por el reparto del poder. Por otro lado, a los problemas heredados del siglo XIX, como el clericalismo o el militarismo, se añadieron otros nuevos como la guerra de Marruecos, el nacionalismo catalán, la aparición de un republicanismo más radical o el crecimiento del movimiento obrero organizado.

Entre el atraso y la modernización, el estancamiento y el avance lento pero seguro. Ésas eran las rutas por las que parecería transitar la sociedad española durante esas tres primeras décadas del siglo XX, si se atiende a los relatos de diferentes observadores de la época y a los análisis históricos más recientes. Muchos testimonios de entonces transmitieron la imagen, que perduró, de que España, aquella misma España que acababa de perder los últimos reductos coloniales, era una sociedad rural y atrasada, apenas industrializada, con terratenientes parásitos y una burguesía débil y poco emprendedora. Los historiadores, por el contrario, cien años después, han revisado esa imagen, matizándola, comparándola con la de otros países del entorno y demostrando, con datos y cifras, que lo que se producían eran más bien fases alternas de atraso y modernización.

Entre 1900 y 1930 España vivió un período de notable modernización y crecimiento económico. Las principales ciudades doblaron su población. Barcelona y Madrid, que superaban el medio millón de habitantes en 1900, alcanzaron el millón tres décadas después. Bilbao pasó de 83 000 a 162 000; Zaragoza, de 100 000 a 174.000. No era gran cosa, comparada con los 2,7 millones que tenía París en 1900, o la cantidad de ciudades europeas, de Birmingham a Moscú, pasando por Berlín o Milán, que en 1930 superaban la población de Madrid o Barcelona. Pero el panorama demográfico estaba cambiando notablemente. La población total de España, que era de 18,6 millones de habitantes a comienzos de siglo, llegaba casi a 24 millones en 1930, gracias sobre todo a un acentuado descenso de la mortalidad.

Mientras que hasta 1914 esa presión demográfica había provocado una alta emigración ultramarina, a partir de la Primera Guerra Mundial, en la que España no participó, fueron las ciudades españolas las que recogieron los movimientos migratorios. En esas tres primeras décadas del siglo, la esperanza media de vida al nacer ascendió de 35 a 50 años y la tasa de analfabetismo se redujo del 60 al 35 por ciento, producto de un avance considerable de la enseñanza primaria y de las mejoras educativas y culturales que acompañaron al crecimiento urbano.

Alrededor de 1930, el mundo rural seguía siendo predominante en muchas zonas del interior de España, pero el conjunto de los trabajadores del campo ya no llegaba al 50 por ciento de la población activa. El sector agrario creció en productividad, en superficie sembrada y en diversidad de cultivos, aunque fue perdiendo peso respecto al sector secundario. La industria, con un millón de trabajadores nuevos desde principios de siglo, dobló su producción y el sector terciario, aunque con mayor retraso, mostró signos evidentes de crecimiento y renovación tanto en el sistema de transportes como en el comercio y la Administración.

En esos años, los transcurridos desde la subida al trono de Alfonso XIII hasta la víspera de su derrocamiento, la renta nacional se duplicó y España, en general, aunque mantenía fuertes disparidades regionales, disminuyó su desventaja respecto a los países europeos de referencia.

La sociedad que creció como consecuencia de esos cambios era también diversa y compleja. En la cúspide estaban las «buenas familias» de la burguesía, que controlaban por medio de la banca las grandes industrias e influían en la política económica de los gobiernos del reinado de Alfonso XIII. Era un capitalismo protegido por el Estado, con altos aranceles, corporativo y familiar, del que había buenos ejemplos en Cataluña, Asturias, Vizcaya o Madrid. Aunque quien de verdad estaba en la cúspide de esa sociedad era la oligarquía rural, una nueva clase de propietarios rurales, grandes terratenientes en el sur, que habían adquirido tierra a partir de las desamortizaciones decimonónicas. La mayoría de ellos no pertenecía a la nobleza, pero muchos accedieron a ella a través de enlaces matrimoniales, por lo que además acabaron concentrando en pocas familias enormes extensiones de tierra. Terratenientes que se ennoblecían e industriales y financieros que también obtenían

títulos nobiliarios: convergencia, en definitiva, de la nobleza vieja y nueva, eso que el historiador Manuel Tuñón de Lara llamó «bloque de poder»[2].

A ese bloque social dominante pertenecían los herederos de los antiguos estamentos privilegiados, la aristocracia y la Iglesia católica, junto con la oligarquía rural y de industriales vascos y catalanes. Y de ese bloque procedía la mayoría de los gobernantes de un sistema político, el de la Monarquía de Alfonso XIII, frente al que germinó la semilla republicana, anarquistas y socialistas, sembrada ya en las últimas décadas del siglo XIX.

El sistema político que presidía Alfonso XIII no pudo o no supo ensanchar su base, canalizar a través del parlamento los diversos intereses de esas clases sociales salidas de la industrialización, la modernización y el crecimiento urbano. El pueblo, las clases trabajadoras, con sus organizaciones, acciones colectivas y movilizaciones aparecieron en el escenario público y pidieron persistentemente que no se les excluyera del sistema político. Lo que al principio no pasaba de ser un lejano eco culminó en abril de 1931 en la quiebra de la cúspide de ese sistema.

Antes, el rey y los militares habían intentado evitarlo, con una dictadura implantada por el general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923, pero cuando ese dictador cayó, el 26 de enero de 1930, abandonado por el rey, la hostilidad frente a la Monarquía se extendió como un huracán imparable con mítines y manifestaciones por toda España. Muchos monárquicos, algunos de ellos ilustres, abandonaron a la Monarquía, convencidos de que era mejor defender los principios conservadores dentro de una República que dejar el campo libre a los partidos de izquierda y a las organizaciones obreras. El republicanismo, que hasta ese momento se había mantenido débil, incapaz de romper los controles del caciquismo e ineficaz para plantear verdaderas alternativas, se convirtió en pocos meses en un movimiento de varios partidos políticos, con dirigentes conocidos como Manuel Azaña y nuevas bases sociales.

La convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, a las que deberían seguir después elecciones generales, en un plan previsto para controlar desde el poder el proceso de vuelta a la normalidad constitucional tras la dictadura de Primo de Rivera, cogió a la derecha conservadora y liberal, a los partidos de siempre, desorganizados y desorientados, y a la extrema derecha, a los fieles al dictador caído, en proceso de rearme y sin capacidad todavía para movilizar a las fuerzas contrarrevolucionarias.

La jornada electoral del 12 de abril se convirtió en un plebiscito entre Monarquía o República. Los monárquicos pensaron hasta el último momento que lo iban a ganar, confiados en el manejo de la maquinaria gubernamental. Por eso mostraron su «consternación» y «sorpresa» cuando muy pronto supieron que los republicanos habían vencido en la mayoría de las capitales de provincia, en 41 de 50. Al día siguiente, muchos municipios proclamaron la República. Niceto Alcalá Zamora, exministro liberal de la Monarquía, presidente del Comité Revolucionario que habían

formado republicanos y socialistas, exigió al rey que abandonara el país.

«Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo», dejó escrito Alfonso XIII en la nota con la que se despedía de los españoles, antes de abandonar el Palacio Real la noche del martes 14 de abril de 1931. Cuando llegó a París, declaró que la República era «una tormenta que pasará rápidamente». Tardó en pasar más de lo que Alfonso XIII pensaba, o deseaba. Más de cinco años duró esa República en paz, antes de que una sublevación militar y una guerra la destruyeran por las armas[3].

La República

La República llegó con celebraciones populares en la calle, en medio de un ambiente festivo donde se mezclaban esperanzas revolucionarias con deseos de reformas. La multitud se echó a la calle, como puede comprobarse en la prensa, en las fotografías de la época, en los numerosos testimonios de contemporáneos que quisieron dejar constancia de aquel gran cambio que tenía algo de mágico, que llegaba de forma pacífica, sin sangre. La clase media «se lanzaba hacia la República» ante «la desorientación de los elementos conservadores», escribió José María Gil Robles, el principal artífice de la movilización católica y de los propietarios frente a las reformas republicanas[4].

El nuevo Gobierno republicano lo presidía Niceto Alcalá Zamora, exmonárquico, católico y hombre de orden, una pieza clave para mantener el posible y necesario apoyo al régimen de los republicanos más moderados. Había, además del presidente, once ministros, entre quienes destacaban Alejandro Lerroux, líder del principal partido republicano, el Radical, un partido de centro pese a su nombre; y Manuel Azaña, que encabezaba la representación de los republicanos de izquierda y que ocupó el Ministerio de Guerra. Por primera vez en la historia de España, entraron a formar parte también del Gobierno de la nación los socialistas, con tres ministros: Fernando de los Ríos, en Justicia; Indalecio Prieto, en Hacienda; y Francisco Largo Caballero, en el Ministerio de Trabajo.

El camino marcado por ese Gobierno pasaba por convocar elecciones generales y dotar a la República de una Constitución. Elecciones con sufragio universal, masculino y femenino, gobiernos representativos ante los parlamentos y obediencia a las leyes y a la Constitución eran las señas de identidad de los sistemas democráticos que emergían o se consolidaban entonces en los principales países de Europa occidental y central. Y eso es lo que intentaron introducir, y consiguieron en buena parte, esos republicanos y socialistas que gobernaron España durante los dos primeros años de la Segunda República.

La Constitución que salió del parlamento tras acaloradas discusiones, aprobada el 9 de diciembre de 1931, definía a España como una «República democrática de

trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia», declaraba la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero, introducía el matrimonio civil y el divorcio y prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Su artículo 36 otorgó el voto a las mujeres, algo que estaban haciendo en aquellos años los parlamentos democráticos de las naciones más avanzadas. Aprobada la Constitución, el parlamento eligió a Niceto Alcalá Zamora presidente de la República, mientras que Manuel Azaña era el hombre fuerte del poder ejecutivo, presidente y ministro de la Guerra.

Desde la llegada de la República en abril de 1931 hasta la destitución de Azaña en septiembre de 1933, los Gobiernos de coalición de republicanos y socialistas acometieron la reorganización del Ejército, la separación de la Iglesia y el Estado, y tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad agraria, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a una período tan intenso de cambio y conflicto, logros democráticos y conquistas sociales.

Para intentar consolidarse como un sistema democrático, la República necesitaba establecer la primacía del poder civil frente al Ejército y la Iglesia católica, las dos burocracias que ejercían un fuerte control sobre la sociedad española. El Ejército que se encontró la República en 1931 contaba con una historia repleta de intervenciones en política, ocupaba un lugar privilegiado dentro del Estado, carecía de armamento moderno y tenía un cuerpo inflado de jefes y oficiales, muchos más de los necesarios.

La reforma que emprendió Manuel Azaña desde el Ministerio de la Guerra, con el fin de hacer un Ejército más moderno y eficaz y sometido al orden político constitucional, fue duramente combatida por un sector de la oficialidad, por los medios políticos conservadores y por los órganos de expresión militares. Hubo ruido de sables ya desde el verano de 1931, aunque los primeros intentos conspirativos fueron neutralizados por el Gobierno. Más seria fue la sublevación militar protagonizada por el general Sanjurjo, héroe de la campaña de Marruecos en los años veinte, en agosto de 1932, que fracasó porque no logró arrastrar tras de sí a ninguna guarnición militar importante, salvo la de Sevilla.

Sanjurjo fue condenado a muerte por un consejo de guerra, aunque fue después amnistiado y desde Portugal, donde fijó su residencia, encabezó otro golpe de Estado contra la República, esta vez de fatales consecuencias, en julio de 1936. Muchos de los militares que lo acompañaron en esa segunda sublevación se habían visto perjudicados por la política de reformas y de ascensos puesta en marcha por Azaña, que se convirtió en la bestia negra de un importante sector del Ejército.

Establecer la primacía del poder civil exigía asimismo emprender una amplia secularización de la sociedad, lo cual enfrentó a la República con la Iglesia católica. El cumplimiento del artículo 26 de la Constitución exigía declarar propiedad del Estado los bienes eclesiásticos y prohibir a las órdenes religiosas participar en actividades industriales y mercantiles y en la enseñanza. Aunque la puesta en práctica

de esa ley que prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas fue suspendida cuando los socialistas y republicanos de izquierda perdieron las elecciones en noviembre de 1933, la legislación republicana en materia religiosa reforzó todavía más la tradicional identificación en España entre el orden social y la religión.

Junto a la religión, la tierra se convirtió en uno de los ejes fundamentales del conflicto durante la República, en un país en el que, pese al desarrollo industrial y al crecimiento urbano, la agricultura todavía representaba la mitad de la producción económica. Había en España escasas explotaciones de tamaño medio, con abundantes minifundios y pequeñas propiedades en el norte y dominio de la gran propiedad, con cientos de miles de asalariados empobrecidos, en el sur. La necesaria reforma agraria, capaz de distribuir la tierra de forma más equitativa, fue percibida por los propietarios como una revolución expropiadora[5].

La mayoría de esas leyes elaboradas por el Gobierno de coalición de republicanos y socialistas, y aprobadas por el parlamento durante los dos primeros años de la República, fueron moderadas en la práctica, y no pudieron desarrollarse en muchos casos, pero amenazadoras en principio. Y quienes percibieron esa amenaza se organizaron muy pronto para combatir a la República.

Frente a las reformas republicanas, las posiciones antidemocráticas y autoritarias crecían a palmos entre los sectores más influyentes de la sociedad como los hombres de negocios, los industriales, los terratenientes, la Iglesia y el Ejército. Tras unos meses de desorganización inicial de las fuerzas de la derecha, el catolicismo político irrumpió como un vendaval en el escenario republicano. Ese estrecho vínculo entre religión y propiedad se manifestó en la movilización de cientos de miles de labradores católicos, de propietarios pobres y muy pobres, y en el control casi absoluto por parte de los terratenientes de organizaciones que se suponían creadas para mejorar los intereses de esos pequeños agricultores. En esa tarea, el dinero y el púlpito obraron milagros: el primero sirvió para financiar, entre otras cosas, una influyente red de prensa local y provincial; desde el segundo, el clero se encargó de unir, más que nunca, la defensa de la religión con la del orden y la propiedad.

Dominada por grandes terratenientes y profesionales urbanos, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el primer partido político de masas de la historia de la derecha española, creado en febrero de 1933, se propuso defender la «civilización cristiana», combatir la legislación «sectaria» de la República y «revisar» la Constitución. Fue el partido más votado en las elecciones de noviembre de ese año y gobernó con los republicanos de centro de Alejandro Lerroux desde octubre de 1934 a diciembre del siguiente año. Durante ese tiempo, la CEDA no pudo cumplir su objetivo de rectificar a fondo el rumbo reformista y de revisar la República sobre bases corporativas. En las elecciones de febrero de 1936, las terceras y últimas que se celebraron durante la República, la coalición de izquierda del Frente Popular salió victoriosa y a partir de esa derrota, al no lograr conquistar el poder por medios parlamentarios, la derecha católica y los fascistas coincidieron en buscar una solución

de fuerza contra el Gobierno y la República.

La República fue también acosada desde abajo porque en España había un potente movimiento anarcosindicalista, organizado en torno a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1910, que prefería la revolución como alternativa al gobierno parlamentario[6]. Algunos de los grupos más puros y radicales de ese movimiento, se lanzaron a la insurrección, en enero de 1932 y enero y diciembre de 1933, como método de coacción frente a la autoridad republicana establecida. Lo que había detrás de esos intentos revolucionarios, reprimidos con facilidad por las fuerzas del orden, era un repudio del sistema institucional representativo y la creencia de que la fuerza era el único camino para liquidar los privilegios de clase y los abusos del poder.

Sin embargo, como la historia de la República muestra, desde el principio hasta el final, el recurso a la fuerza frente al régimen parlamentario no fue patrimonio exclusivo de los anarquistas ni tampoco parece que el ideal democrático estuviera muy arraigado entre algunos sectores políticos republicanos o entre los socialistas, quienes ensayaron la vía insurreccional en octubre de 1934, después de ser desplazados del poder por el voto en elecciones democráticas un año antes. Esa revolución, que mantuvo en jaque a las autoridades republicanas durante diez días en la región minera de Asturias, tuvo un balance aproximado de 1000 muertos entre los que apoyaron la insurrección, unos 2000 heridos y unos 300 muertos de las fuerzas de policía y del Ejército.

Con esa insurrección, los socialistas que la apoyaron demostraron idéntico repudio del sistema institucional representativo que habían practicado los grupos anarquistas más radicales en los años anteriores. Los socialistas, tras perder las elecciones en noviembre de 1933, rompieron con el proceso democrático y con el sistema parlamentario como método de actuación para reconducir la política hacia los proyectos reformistas del primer bienio. Los dirigentes del movimiento, instigados y presionados por los más jóvenes, que creaban milicias y mostraban su creciente gusto por el encuadramiento militar, trataron de repetir en España el modelo bolchevique.

Tanto las fuerzas de la policía y de la Guardia Civil como las del Ejército se mantuvieron fieles al Gobierno en todos esos intentos insurreccionales de la izquierda y no había ninguna posibilidad de que se pusieran al lado de los revolucionarios o de que se negaran a reprimirlos. Frente a un Estado que mantenía intactas y unidas sus fuerzas armadas, una estrategia insurreccional basada en apoyos dispersos y no muy amplios nunca pudo hacer estallar un disturbio general y acabó siendo fácilmente derrotada. Después del ejemplo ruso de 1917, donde el Ejército sufrió decenas de miles de deserciones tras severas derrotas en la Primera Guerra Mundial, ninguna insurrección obrera o campesina triunfó en Europa, con la excepción de la dirigida por Bela Kun en Hungría durante unos meses de 1919.

Esas insurrecciones contra la República española, graves alteraciones del orden reprimidas y ahogadas en sangre por las fuerzas armadas del Estado, hicieron más

difícil su supervivencia y la del sistema parlamentario, pero no causaron su final ni mucho menos el inicio de una guerra civil. Después de octubre de 1934, el movimiento socialista intentó restablecer la actividad política democrática y vencer en las urnas, algo que consiguieron en febrero de 1936, junto con los republicanos y otras fuerzas de izquierda unidos en la coalición de Frente Popular. En los meses que siguieron a esas elecciones, la gente de orden se sintió más amenazada que nunca por el nuevo empuje de las organizaciones sindicales y de los conflictos sociales. Un sector importante del Ejército conspiró y no paró hasta derribar al régimen republicano. En febrero de 1936 hubo elecciones libres y democráticas; en julio de 1936, un golpe de Estado.

¿Por qué hubo una guerra civil en España?

Entre 1910 y 1931 surgieron en Europa varias Repúblicas, regímenes democráticos, o con aspiraciones democráticas, que sustituyeron a Monarquías hereditarias establecidas en esos países secularmente. La mayoría de ellas, y algunas muy significativas como la alemana, la austriaca y la checa, se habían instaurado como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. La serie había comenzado en Portugal, con el derrocamiento de la Monarquía en 1910, y la española fue la última en proclamarse. La única que subsistió como democracia en esos años hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue la de Irlanda, creada en 1922. Todas las demás fueron derribadas por sublevaciones militares contrarrevolucionarias, movimientos autoritarios o fascistas. Pero el golpe militar de julio de 1936 fue el único que causó una guerra civil. Y ésa es la diferencia que conviene explicar: por qué hubo una guerra civil en España.

Habrá que comenzar por una afirmación obvia. Sin la sublevación militar de julio de 1936, no habría habido una guerra civil en España. Vista la historia de Europa de esos años, y la de las otras Repúblicas que no pudieron mantenerse como regímenes democráticos, lo normal es que la República española tampoco hubiera podido sobrevivir. Pero eso no lo sabremos nunca porque la sublevación militar tuvo la peculiaridad de provocar una fractura dentro del Ejército y de las fuerzas de seguridad. Y al hacerlo, abrió la posibilidad de que diferentes grupos armados compitieran por mantener el poder o por conquistarlo.

La Guerra Civil se produjo porque el golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras Repúblicas del período, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil.

La Guerra Civil fue, por consiguiente, producto de una sublevación militar que

puede explicarse por la tradición intervencionista del Ejército en la política y por el lugar privilegiado que ocupaba dentro del Estado, cuestionado por la legislación republicana, frente a la cual reaccionó. Ese golpe militar encontró resistencia porque la sociedad española de 1936 no era la de 1923, cuando la sublevación de septiembre de ese año del general Miguel Primo de Rivera se había visto favorecida por la abstención general del Ejército, la debilidad del Gobierno, la pasividad de la opinión pública, que no resistió, y, sobre todo, por el consentimiento del rey Alfonso XIII.

En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos. Frente a un nivel de movilización política y social tan amplio como el inaugurado y creado por el régimen republicano, el golpe de Estado no podía acabar, como tantas veces en la historia de España, en una mera vuelta al orden perdido, apoyado en los valores tradicionales. Si se quería echar la República abajo, se necesitaba una nueva versión, violenta, antidemocrática y antisocialista, creada ya por el fascismo en otros lugares de Europa, que cerrara la crisis y restaurara, tapándolas de verdad, todas las fracturas abiertas, o agrandadas, por la experiencia republicana.

Hasta que llegó la Segunda República en abril de 1931, la sociedad española se mantuvo bastante al margen de las dificultades y trastornos que sacudían a la mayoría de los países europeos desde 1914. España no había participado en la Primera Guerra Mundial y no sufrió, por lo tanto, la fuerte conmoción que esa guerra provocó con la caída de los imperios y de sus servidores, la desmovilización de millones de excombatientes y el endeudamiento para pagar las enormes sumas de dinero dedicadas al esfuerzo bélico.

En el continente europeo, tras la Primera Guerra Mundial, la caída de las Monarquías, la crisis económica, el espectro de la revolución y la extensión de los derechos políticos a las masas hicieron que un sector importante de las clases propietarias percibiera la democracia como la puerta de entrada al gobierno del proletariado y de las clases pobres. Como señala Mark Mazower, el sufragio universal amenazó a los liberales con un papel político marginal frente a los movimientos de izquierda y a los partidos católicos, nacionalistas y de nuevo cuño. Temerosos del comunismo, se inclinaron hacia soluciones autoritarias, un camino en el que se les unieron «otros tipos de elitistas, los ingenieros sociales, empresarios y tecnócratas que deseaban soluciones científicas y apolíticas para los males de la sociedad y a quienes impacientaba la inestabilidad y la incompetencia de la gobernación parlamentaria»[7].

Ocurrió además que esos nuevos regímenes parlamentarios y constitucionales se enfrentaron desde el principio a una fragmentación de las lealtades políticas, de tipo nacional, lingüístico, religioso, étnico o de clase, que derivó en un sistema político

con muchos partidos y muy débiles. La formación de gobiernos se hizo cada vez más difícil, con coaliciones cambiantes y poco estables. En Alemania ningún partido consiguió una mayoría sólida bajo el sistema de representación proporcional aprobado en la Constitución de Weimar, pero lo mismo puede decirse de Bulgaria, Austria, Checoslovaquia, Polonia o España durante los dos últimos años de la República. La oposición rara vez aceptaba los resultados electorales y la fe en la política parlamentaria, a prueba en esos años de inestabilidad y conflicto, se resquebrajó y llevó a amplios sectores de esas sociedades a buscar alternativas políticas a la democracia.

Una buena parte de esa reacción se organizó en torno al catolicismo, la defensa del orden nacional y de la propiedad. La revolución rusa, el auge del socialismo y los procesos de secularización que acompañaron a la modernización política hicieron más intensa la lucha entre la Iglesia católica y sus adversarios anticlericales de la izquierda política.

La opción dictatorial de una buena parte de Europa recuperó algunas de las estructuras tradicionales de la autoridad presentes en su historia antes de 1914, pero tuvo que hacer frente también a la búsqueda de nuevas formas de organizar la sociedad, la industria y la política. En eso consistió el fascismo en Italia y a esa solución se engancharon en los años treinta los partidos y las fuerzas de la derecha española. Una solución al problema de cómo controlar el cambio social y frenar la revolución en el momento de la aparición de la política de masas.

El fascismo y el comunismo, los dos grandes movimientos surgidos de la Primera Guerra Mundial y que iban a protagonizar dos décadas después la Segunda, apenas tenían arraigo en la sociedad española durante los años de la República y no alcanzaron un protagonismo real y relevante hasta después de iniciada la Guerra Civil.

El fascismo apareció en España más tarde que en otros países, sobre todo si la referencia son Italia y Alemania, y se mantuvo muy débil como movimiento político hasta la primavera de 1936. Durante los primeros años de la República, apenas pudo abrirse camino en un escenario ocupado por la extrema derecha monárquica y por la derechización del catolicismo político. El triunfo de Hitler en Alemania, sin embargo, atrajo el interés de muchos ultraderechistas que, sin saber todavía mucho del fascismo, vieron en el ejemplo de los nazis un buen modelo para acabar con la República. El que iba a ser el principal partido fascista de España, Falange Española, fue fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, el 29 de octubre de 1933[8].

También estaba ausente de la sociedad española por esos años el comunismo, la otra gran ideología y movimiento político que salió de la Primera Guerra Mundial. El Partido Comunista de España (PCE), fundado a comienzos de los años veinte siguiendo los principios esenciales de la Internacional Comunista, llegó a la República con un recorrido corto, comparado con el socialismo y el anarquismo, y

con una organización que aglutinaba a unos cuantos centenares de militantes. En las dos primeras elecciones, en junio de 1931 y noviembre de 1933, no consiguió ningún diputado y comenzó a adquirir presencia en la sociedad española por primera vez en 1934 cuando la Comitern cambió su política de «clase contra clase» de crítica a la democracia burguesa por la formación de frentes antifascistas. En las elecciones de febrero de 1936, integrado en la coalición del Frente Popular, el PCE obtuvo 17 diputados (de 470 que tenía el parlamento español). No era todavía un partido de masas, pero había roto el aislamiento.

En definitiva, sólo gracias a una guerra civil, el comunismo y el fascismo acabaron teniendo una notable influencia en la política y en la sociedad española de los años treinta. Antes de la sublevación militar de julio de 1936, ni fascistas ni comunistas tuvieron fuerza para desestabilizar a la República. En la primavera de ese año, tras las elecciones ganadas por el Frente Popular, la violencia hizo acto de presencia con algunos atentados contra personajes conocidos y los choques directos armados entre grupos políticos de la izquierda y de la derecha plasmaban en la práctica, con resultados sangrientos en ocasiones, los excesos retóricos y la agresividad verbal de algunos dirigentes. Los dos partidos con más presencia en el parlamento, el socialista y la CEDA, tampoco contribuyeron durante esos primeres meses de 1936 a la estabilidad política de la democracia y de la República. La política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significaba necesariamente que la única salida fuera una guerra civil.

No hay, en definitiva, una respuesta simple a la pregunta de por qué del clima de euforia y de esperanza de 1931 se pasó a la guerra cruel y de exterminio de 1936-1939. La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.

Mientras las fuerzas armadas defendieron a la República y obedecieron a sus gobiernos, pudo mantenerse el orden y los intentos militares/derechistas o revolucionarios de subvertirlo, aunque fuera, como en la revolución de Asturias de octubre de 1934, con un coste alto de sangre. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el seno de sus mecanismos de defensa, los propios militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936.

De la organización de la conspiración se encargaron algunos militares de extrema derecha y la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta, antiizquierdista, que incluía a unos cuantos centenares de jefes y oficiales. Un grupo de generales, entre los que estaba ya Francisco Franco, se reunió el 8 de marzo en

Madrid, acordaron «un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España»[9]. El general José Sanjurjo, que había protagonizado la primera intentona militar contra la República, en agosto de 1922, y que vivía en Portugal tras ser amnistiado en abril de 1934, fue nombrado jefe de la sublevación, aunque el principal protagonista de la trama, quien coordinó toda la conspiración, fue el general Emilio Mola.

El asesinato de José Calvo Sotelo, el dirigente derechista monárquico que defendía un Estado autoritario y corporativo, en la madrugada del 13 de julio de 1936, cometido por miembros de las fuerzas de policía de la República, convenció a los golpistas de la necesidad urgente de intervenir y sumó al golpe a muchos indecisos, que estaban esperando a que las cosas estuvieran muy claras para decir que sí y comprometer con más garantías sus sueldos y sus vidas. Entre ellos estaba el general Franco, destinado en las Islas Canarias y que se puso al frente de las guarniciones sublevadas en el Marruecos español en la tarde del 17 de julio de 1936. El día 18, de madrugada, Franco firmó una declaración de estado de guerra y se pronunció contra el Gobierno de la República. El 19 de julio llegó a Tetuán. Mientras tanto, otras muchas guarniciones militares de la Península se sumaban al golpe. Era el fin de la República en paz[10].

1
España partida en dos

EL GOLPE MILITAR no pudo lograr de entrada la conquista del poder. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares sublevados fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. Menos de una semana fue necesaria para aclarar el panorama. La sublevación, al ocasionar una división profunda en el Ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha armada, de rebelión militar y de revolución popular allí donde los militares no pudieron conseguir sus objetivos. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de mil días.

GOLPE DE ESTADO

El general Emilio Mola fue el principal protagonista de la preparación de la rebelión. Su plan preveía que los jefes militares que en las diferentes zonas de España se sumaran a la sublevación declarasen el estado de guerra para poner en manos militares la autoridad civil y controlar o liquidar de esa forma a sus posibles adversarios. El general Mola había sido el último Director General de Seguridad de la Monarquía de Alfonso XIII. Expulsado del Ejército por la República, fue amnistiado en 1934 y el Gobierno de centro derecha, en el que Gil Robles era ministro de la Guerra, lo envió a Marruecos en 1935 a ocupar la jefatura del ejército de Marruecos. El Gobierno de Manuel Azaña, salido de las elecciones de febrero de 1936, lo trasladó unas semanas después a Pamplona, alejándole del vital ejército de África, y desde esa pequeña ciudad del norte, con el seudónimo de «El Director», dictó los informes y las instrucciones reservadas para los que iban a ser jefes de la rebelión.

Al conocerse la noticia del inicio de la sublevación militar en Marruecos, el jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga[1], temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartiesen armas entre las organizaciones obreras. Y además quitó importancia a lo que estaba sucediendo. El Gobierno suspendió por decreto a los militares rebeldes, disolvió a las

unidades sublevadas y licenció a sus soldados. Como señala Gabriel Cardona, «fue un error inútil, porque los rebeldes hicieron caso omiso de los decretos y no dejaron marchar a ninguno de sus hombres. En cambio, las tropas de muchas fuerzas dudosas o gubernamentales abandonaron las filas cuando más falta hacía»[2].

Casares Quiroga, incapaz de hacer frente a los acontecimientos, dimitió el 18 de julio por la noche. En la mañana siguiente aceptó la difícil tarea de formar gobierno José Giral, otro amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. En el Gobierno sólo había republicanos de izquierda, prácticamente los mismos que estaban ya con Casares Quiroga, y entraron dos militares: el general Sebastián Pozas en Gobernación y el general Luis Castelló en Guerra. Giral dio el paso decisivo de autorizar el reparto de armas entre los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados, allí donde la fidelidad de algunos mandos militares y de las fuerzas de orden, o la indecisión de otros, lo permitió. Eso pasó en Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián.

En Madrid, el general Joaquín Fanjul, a quien el Gobierno había dejado sin mando por su probado antirrepublicanismo, se sublevó, aunque no era él la persona designada en los planes de Mola, y se hizo fuerte en el cuartel de La Montaña con más de dos mil militares y quinientos civiles falangistas a los que había armado. Horas después, grupos de obreros armados y militares fieles a la República asaltaron el cuartel y mataron allí mismo, cuando ya se habían rendido, a más de un centenar de militares sublevados y falangistas. Fanjul sobrevivió unos días, antes de ser juzgado y fusilado.

Tampoco la sublevación triunfó en Barcelona, la segunda ciudad de España, el bastión de los anarquistas, que se convirtió muy pronto en el símbolo de la resistencia popular y de la revolución. Barcelona tenía una guarnición muy nutrida y dividida entre militares que apoyaban a la República y otros que estaban involucrados en la conspiración. El general encargado a última hora de dirigir allí la rebelión, Manuel Goded, comandante general de Baleares, llegó tarde, cuando ya otro general, Álvaro Fernández Burriel, se había sublevado sin planes muy precisos.

Poco pudo hacer Goded, porque un sector de la Guardia Civil, las fuerzas de orden público de la Generalitat, del gobierno autónomo de Cataluña, y los grupos anarquistas más radicales, que se habían apoderado de cientos de fusiles, controlaban ya la situación. Cuando el 20 de julio se entregaron los últimos militares alzados en Barcelona y el general Manuel Goded, sitiado en el antiguo palacio de Capitanía General, anunciaba por radio su derrota y rendición, los enfrentamientos en la capital catalana habían dejado 450 muertos. Y ni la guerra ni la revolución habían comenzado aún.

La sublevación fracasó en las dos mayores ciudades de España, pero tuvo éxito en otras ciudades muy importantes estratégicamente, desde donde se podía controlar vastas extensiones de territorio. Sevilla, la ciudad más importante de Andalucía, cayó muy pronto en poder del general Gonzalo Queipo de Llano, que había pasado en poco

tiempo de ser uno de los militares de confianza de la República a su acérrimo enemigo. Y otro general supuestamente republicano, y afiliado a la masonería, Miguel Cabanellas, hizo que la sublevación triunfara en Zaragoza, la capital de Aragón, que tenía también un potente y numeroso movimiento anarcosindicalista. Que la sublevación triunfara en Zaragoza era muy importante para controlar la amplia zona de la ribera del Ebro, marchar sobre Madrid y detener a los grupos armados que pudieran llegar desde Barcelona.

Es fundamental subrayar, para comprender por qué se inició una guerra civil, que no fue el Ejército «en bloque» el que se sublevó contra la República y tampoco fue una «rebelión de generales», como divulgó posteriormente la propaganda. De los dieciocho generales que controlaban las unidades de intervención más importantes, sólo se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo de Llano, Goded y Franco. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros y quienes lo intentaron lo pagaron, empezando por varios jefes y oficiales pasados por las armas sin dilación ni juicio en el Marruecos español. Eso le pasó en Melilla al general Manuel Romerales, detenido a punta de pistola en su propio despacho por algunos de sus subordinados. Miguel Campins, gobernador militar de Granada, se opuso a la sublevación, lo detuvieron varios oficiales y, conducido a Sevilla, fue fusilado el 16 de agosto acusado de «rebelión». La misma suerte corrió el general Miguel Núñez de Prado, director general de Aeronáutica, que viajó a Zaragoza para convencer a Cabanellas de que no se sublevara.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales. Los sublevados contaron inicialmente con unos 120 000 hombres armados, de los 254 000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo las fuerzas de orden público. Pero, sobre todo, dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de unos 1600 jefes y oficiales y de los 40 000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por José Millán Astray y Francisco Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

Para los jefes militares sublevados, existía una larga lista de agravios causados por la República que había que vengar. Algunos de ellos se habían visto afectados por la revisión de los ascensos concedidos por méritos de guerra por la dictadura de Primo de Rivera y anulados por el Gobierno de Manuel Azaña por un decreto de enero de 1933. Era el caso de los generales Aranda, Orgaz o Varela, que iban a tener un papel relevante en el ejército de Franco, aunque otros militares como Asensio Torrado, Romerales o Hidalgo de Cisneros estaban en la misma situación y fueron leales al Gobierno republicano.

La revisión de los ascensos, la Ley de Reforma Militar de Azaña y las

destituciones de algunos de los jefes más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera estimularon la hostilidad de muchos militares contra la República. Los motivos por los que decían sublevarse, en julio de 1936, si hacemos caso a los bandos en los que proclamaban el estado de guerra, eran la «ausencia total de Poder Público» y la necesidad de mantener el orden y la unidad de la Patria. Pero aunque no constaban de forma explícita, ocupaban también un lugar destacado los agravios acumulados frente a los políticos a los que despreciaban y odiaban como lacayos del izquierdismo y del bolchevismo.

Al general Sanjurjo le habían nombrado sus compañeros golpistas jefe de la sublevación, pero murió el 20 de julio al intentar despegar con la avioneta que tenía que trasladarle a España desde su exilio en Portugal. Lo fue a recoger, enviado por el general Mola, el aviador falangista Juan Antonio Ansaldo. El avión, un frágil Puss Moth de dos plazas, se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. Ansaldo salió ileso del accidente.

Ese accidente mortal de Sanjurjo obligó a los sublevados a reorganizar sus planes. Cuatro días después, a propuesta de Mola, crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas. Fue el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada e iba a durar el resto del verano, hasta que el general Franco fue investido por sus compañeros de armas el 1 de octubre como único jefe político y militar.

Porque, muerto Sanjurjo, Franco, desde su privilegiada posición al mando de la guarnición de Marruecos, comenzó a labrar lo que Paul Preston, su mejor biógrafo, denomina «la forja de un Generalísimo»[3]. El problema que se le planteaba a Franco era cómo pasar esas tropas de África a la Península, dado que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por las tripulaciones de la escuadra republicana que se habían amotinado contra los oficiales sublevados.

Franco pidió entonces ayuda a Adolf Hitler y Benito Mussolini. Para llegar hasta el líder de la Alemania nazi, utilizó a un ejecutivo alemán residente en el Marruecos español, Johannes Bernhardt, quien se entrevistó con el Führer el 25 de julio y le informó de los acontecimientos en España y del carácter derechista y antibolchevique de la sublevación. Hitler decidió apoyar inicialmente esa causa con el envío de 20 aviones de transporte Junkers Ju 52, 6 cazas Heinkel 51, 20 cañones antiaéreos, municiones y personal de vuelo y de tierra, que comenzaron a llegar al Marruecos español el 29 de julio, apenas diez días después del inicio de la rebelión militar contra la República.

Mussolini decidió hacer lo mismo, tras recibir reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia SA-81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C. R. 32. El uso de esos aviones permitió a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas desde África a Andalucía y comenzar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, Franco estaba ya instalado en

Sevilla. En unas semanas, más de 13 000 soldados habían cruzado el estrecho de Gibraltar. De esa forma, escribe Paul Preston, «Hitler y Mussolini convirtieron un *coup d'etat* que iba por mal camino en una sangrienta y prolongada guerra civil»[4].

A finales de julio, el éxito o fracaso de la sublevación militar había partido a España en dos. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Huelva. En la zona republicana habían quedado las principales ciudades, los principales focos industriales y mineros, Cataluña, el País Vasco y Asturias, y las sedes de las principales empresas y entidades financieras. La ventaja financiera de la República era al principio muy clara. Contaba con el Banco de España y su reserva de oro, unas 700 toneladas, y su territorio controlaba aproximadamente el 70 por cien del presupuesto estatal[5].

La sublevación militar no logró su principal objetivo, hacerse con el poder y echar abajo a la República, pero el Gobierno tampoco pudo dominar la rebelión. La ayuda ítalo-germana permitió a los militares rebeldes continuar en su empeño y el Gobierno buscó también de forma urgente el auxilio internacional. Ante el acoso nazi y fascista, la solución estaba en las democracias. O eso pensaban las autoridades republicanas que tenían que hacer frente al golpe de Estado.

Según contó el socialista Léon Blum, presidente del Gobierno de Francia, el 19 de julio, José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la República, le envió un telegrama: «Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrarnos armas y aviones»[6].

La reacción inicial del Gobierno francés fue, en palabras de Blum, «poner en marcha un plan de ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, para proporcionar material a la República española». Pero no fue posible. Un agregado militar en la embajada española en París, agente de los sublevados, filtró la información sobre esa decisión del Gobierno francés al diario derechista *Echo de Paris*, que inició «una campaña fortísima revelando al público todas las decisiones tomadas de la forma más precisa y generando una conmoción considerable, particularmente en los medios parlamentarios».

La opinión pública se dividió, como iba a pasar también en Gran Bretaña, entre quienes mostraban simpatía a la causa republicana, representados por la izquierda, y la derecha política, amplios sectores católicos y de la administración, que rechazó ese plan de ayuda. El miedo a la revolución, a que el conflicto de España se extendiera a Francia, muy presente en la prensa derechista y en las fuerzas armadas, convenció también a los dos principales ministros del Partido Radical, Édouard Daladier, de la Guerra, e Ybon Delbos, de Asuntos Exteriores, de echar marcha atrás. «La intervención francesa en la Guerra Civil española sería el comienzo de la

conflagración europea deseada por Moscú», advertía el semanario *Candide* a finales de julio[7].

Las noticias que los representantes diplomáticos de Gran Bretaña en España transmitían a su Gobierno tampoco iban a ayudar a la República. Desde el primer momento describieron a los que defendían la causa republicana como comunistas al servicio del bolchevismo. Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, le pidió a Léon Blum el 24 de julio que fuera «prudente». Y Stanley Baldwin, el primer ministro conservador, le transmitió a Eden, dos días después, que «de ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos». Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en España obstaculizase su política de apaciguamiento con Alemania, y el Gobierno francés siguió los consejos de su principal aliado en Europa y el 25 de julio anunció la decisión de «no intervención de ninguna manera en el conflicto interno de España»[8].

Ése fue el punto de partida de la política de no intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades francesas, con Blum a la cabeza, creían que eso era la mejor forma de calmar y controlar la división interna del país, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la Guerra Civil española. Aunque esa propuesta fue inmediatamente asumida por el Gobierno británico, la extensión del conflicto español al escenario internacional no pudo evitarse porque Hitler y Mussolini ya habían comenzado a enviar ayuda militar a Franco y, además, la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de no intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda, hasta que la Unión Soviética comenzó a intervenir en el otoño de 1936, y los militares rebeldes, carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra provocada por ellos.

Mientras todo eso ocurría, el Estado republicano se tambaleaba, el orden se quebraba y una revolución radical y destructora se extendía como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos.

Sin reglas ni gobierno

De forma súbita, en ese doble proceso de rebelión militar y respuesta revolucionaria, la sangre comenzó a correr copiosamente por el territorio español. Los militares sublevados, con el general Emilio Mola a la cabeza, ya lo habían anunciado durante los meses anteriores cuando trazaron los planes para el golpe. «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes

posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado», decía Mola en la Instrucción reservada número 1, firmada como «El Director» el 25 de mayo. «Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento», añadía, a quienes se aplicarían «castigos ejemplares […] para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas». Estaba claro que si había resistencias, cosa contemplada como probable, la sublevación acabaría en una guerra de conquista para salvar a España de la anarquía[9].

La combinación de triunfos y fracasos en la sublevación pronto demostró a los militares rebeldes que la lucha iba a ser dura, larga, a varios asaltos. De ahí el clima de terror, calculado, nada espontáneo que presidió sus conquistas desde el primer día. Franco contaba para ello con las fuerzas militares del protectorado de Marruecos, famosas ya por su brutalidad. Mola tenía el apoyo de unos cuantos miles de carlistas de Navarra y Álava, con los que aplastó las resistencias y aterrorizó a miles de republicanos, socialistas y anarquistas de la ribera del Ebro, en Navarra y Zaragoza[10]. En otras ciudades como Sevilla, Córdoba, Cáceres o León, los militares y las fuerzas de policía contaron con el entusiasmo de centenares de derechistas y falangistas, que se consagraron desde entonces a tareas de limpieza, a edificar una nueva España sobre las ruinas de la República.

Comenzaron así los encarcelamientos en masa, la represión selectiva para eliminar las resistencias, la tortura sistemática y el terror. Alcaldes, gobernadores civiles, dirigentes sindicales y de las organizaciones políticas del Frente Popular fueron los primeros en sufrir el castigo. La obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje y la dialéctica de las armas, por el desprecio a los derechos humanos y el culto a la violencia. Inaugurado ese nuevo escenario de guerra total, donde la política pasó a ser valorada exclusivamente en términos militares, ya no había sino amigos y enemigos.

Las matanzas se centraron en los lugares donde más resistencia hubo, en las localidades donde los conflictos sociales ocurridos durante la República y la mayor presencia de organizaciones de izquierda incitaban al ajuste de cuentas, que fue rápido, sin concesiones. Los últimos días de julio y los meses de agosto y septiembre de 1936 son los que arrojan las cifras más altas de asesinados en los lugares controlados desde el principio por los militares sublevados: del 50 al 70 por ciento del total de las víctimas durante la guerra se concentra en ese corto período, lo cual indica que no era sólo una represión de guerra, sino un exterminio «quirúrgico», de urgencia. Más del 90 por ciento de los casi 3000 asesinados en Navarra o en Zaragoza ocurrieron en 1936. Pero los porcentajes son muy similares en Córdoba, Granada, Sevilla, Badajoz o Huelva, las provincias, junto con Zaragoza, con más muertos en aquella oleada de terror veraniego.

Las víctimas eran detenidas en la calle o en sus casas, por ser «significados izquierdistas», por oponerse al «glorioso Movimiento Nacional», buscadas porque aparecían en los documentos confiscados en las sedes de las organizaciones políticas

y sindicales, señaladas por sus vecinos o marcadas por su irreligiosidad. Se las encerraba en cárceles o en los numerosos edificios habilitados como cárceles en los primeros días, hasta que se les sacaba para ser asesinadas por la noche, antes del amanecer. Las autoridades judiciales se presentaban en algunas ocasiones para proceder al levantamiento de cadáveres, pero lo normal en esos primeros momentos, antes de la creación de los tribunales militares, era que quedaran abandonados, muchas veces sin enterrar, allí donde caían abatidos, en las tapias de los cementerios, en las cunetas de las carreteras, cerca de los ríos, en pozos y minas abandonadas.

El alud de asesinados causado por aquel terror generaba todo tipo de anomalías. A miles de personas nunca se las registró, mientras otras muchas aparecían como «hombre» o «mujer», sin identificar, lo cual impide todavía a sus familiares y descendientes, ya en la democracia, muchos años después de la muerte de Franco, encontrar sus restos. No todos los muertos se enterraron en los cementerios, sino que se cavaban grandes fosas comunes, como en Lardero, cerca de Logroño, en los Pozos de Caudé, junto a Teruel, o en Víznar, a escasos kilómetros de Granada, donde encontró la muerte Federico García Lorca.

En las ciudades donde fracasó la sublevación, los militares que se habían levantado contra la República fueron tratados sin piedad. A ellos se les consideraba los primeros responsables de la violencia y la sangre que estaba esparciéndose por ciudades y campos de la geografía española. Casi un centenar de jefes y oficiales que se adhirieron a la sublevación en la guarnición de Barcelona fueron ejecutados entre mediados de agosto y febrero de 1937. Los ejemplos de actuaciones impunes contra militares presos tras su derrota adquirieron una inusitada crueldad en Madrid, donde en todas las «sacas», especialmente en las masivas de noviembre de 1936, se seleccionaba para su ejecución a miembros del Ejército. La escena de matar militares se repitió en Menorca, Almería, Málaga, Albacete, Guadalajara, Lérida, San Sebastián y otras ciudades donde la sublevación no pudo triunfar.

Se suponía que todos esos militares eran fascistas «probados» y a los fascistas «probados», como declaraba el periódico anarcosindicalista *Solidaridad Obrera* el 1 de agosto de 1936, había que asesinarlos. Los militares y, sobre todo, el clero constituyeron los blancos inmediatos de la violencia purificadora que presidió el verano de 1936 allí donde la derrota de la sublevación abrió las puertas a la revolución. Junto a ellos, la persecución alcanzó en esas primeras semanas a políticos, conservadores, propietarios, terratenientes, labradores, burgueses, comerciantes, trabajadores significados en las fábricas por sus ideas moderadas, técnicos y jefes de personal de las diferentes industrias, y católicos. Detrás de muchos de esos asesinatos estaban los milicianos armados, los militantes de partidos y sindicatos de izquierda y los múltiples comités de empresa, barrio o pueblo que se crearon al calor de la revolución.

Porque lo que quedaba de la España republicana tras el golpe de Estado de julio de 1936 era un hervidero de poderes. Un hervidero de poderes armados, de difícil

control, que trataban de llenar el vacío de poder dejado por la derrota de la sublevación militar en las principales ciudades españolas y en extensas zonas del mundo rural, en latifundios sin dueño y en cientos de pequeños pueblos sin amos. El Estado dejó de existir más allá de Madrid, si es que allí existía. Era el momento del poder de los comités, de quienes nunca lo habían tenido, del «pueblo en armas», como lo llamaban los anarquistas, al margen de ese Gobierno de Madrid, presidido por José Giral.

Muchas cosas y personas impedían al principio el control y favorecían el descontrol. Del derrumbe del Estado, de la desintegración de la Administración y del reparto de armas entre aquellos dispuestos a cogerlas surgió una oleada de igualitarismo militante, de milenarismo, una «revolución espontánea» que, según la visión de muchos testigos, habría colectivizado fábricas y tierras, suprimido los salarios y establecido el paraíso terrenal con el que hacía tiempo que el pueblo soñaba. Es la imagen, por ejemplo, que dejó para la posteridad George Orwell en su *Homenaje a Cataluña*, publicado por primera vez en inglés en 1938.

A George Orwell, recién llegado a Barcelona, el aspecto exterior que presentaba la ciudad le pareció «impresionante y abrumador»: «Era la primera vez que estaba en una ciudad en que la clase obrera ocupaba el poder». Los edificios estaban adornados con banderas rojas y negras; las iglesias saqueadas; las tiendas y los cafés colectivizados. Aparentemente, «las clases adineradas habían dejado de existir»: no se veía a gente «bien vestida», con corbatas y sombreros. El mono, o las «ropas muy sencillas propias de la clase trabajadora», habían desplazado al traje burgués[11].

En esos cambios en el «aspecto de Barcelona» se detuvo también Francisco Lacruz en la versión que desde el lado de los vencedores elaboró en 1943 sobre la revolución y el terror: «En esta ciudad, creada por el esfuerzo de una burguesía laboriosa, población excepcionalmente dotada para la vida cómoda, disciplinada y grata, todo se había convertido en sórdido y torvo. Una multitud proletaria, agitada por los más ruines sentimientos revanchistas, imponía a la gran masa absorta por el terror su sentido plebeyo de la vida». Lo bello, pulcro y refinado había sido proscrito «con rabia implacable». Lucir un traje, ir afeitado o usar perfume «era tanto como confesarse “fascista”, condenándose voluntariamente a morir».

Las mujeres tuvieron que prescindir del sombrero, de los bellos vestidos, de las joyas, «de los zapatos sutiles», y vestirse con «la ordinariez innata en ciertas mujeres de las capas inferiores de la sociedad». Los hombres, por su parte, «se esforzaban en presentarse como albañiles que acabasen de abandonar el trabajo». Se iba en mangas de camisa, «con las ropas más viejas del ajuar o a veces estropeadas ex profeso». Así era aquella Barcelona, donde la muchedumbre «sudorosa, harapienta y desaseada […] parecía ya la de una población moscovita»[12].

Exageraciones al margen, muy propias de las imágenes y propaganda divulgadas por los vencedores de la Guerra Civil, la marea revolucionaria del verano de 1936 arrastró con ella desde el principio una ola de terror. Porque para destruir todos esos

símbolos de jerarquía social en el vestido y en las costumbres, hubo que pasar por encima de los cadáveres de miles de personas, enemigos políticos y de clase, de militares y clero, de propietarios y trabajadores conservadores y católicos, de latifundistas y pequeños propietarios, de caciques y señoritos. Y para llegar a la colectivización de tierras y fábricas hubo que incautarse de los bienes de esos propietarios huidos, asesinados o en prisión. Un proceso que se repitió, con más o menos violencia, en las industrias de Barcelona, Madrid y Valencia, o en las tierras de Aragón, Jaén y Ciudad Real.

Antes de construir, había que eliminar de raíz «el mal social» y a sus principales causantes. En eso consistía la revolución para la mayoría de los dirigentes y militantes anarcosindicalistas, pero también para otros muchos socialistas o sindicalistas de la UGT: en la eliminación radical de los símbolos de poder; en el derrumbe del orden existente; en propagar por doquier una retórica agresiva que hablaba de sociedad sin clases, sin partidos, sin Estado. En los discursos, en las acciones, aparecían las herencias jacobinas, de los revolucionarios decimonónicos, de la revolución rusa, reflejadas, por ejemplo, en los «Comités de Salud Pública» que, como en Lérida o Málaga, se dedicaron en aquel verano de 1936 a la represión de la contrarrevolución.

La eliminación radical de todos esos representantes del poder encontró en el «paseo» la «práctica de justicia expeditiva» para saldar rencillas, saciar el odio de clase o clamar venganza. La descripción que de ese método nos ha dejado el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia del Gobierno republicano desde noviembre de 1936 a mayo de 1937, no deja lugar a dudas: «puesto que la sublevación militar había supuesto la rotura de todos los frenos sociales, porque fue realizada por las clases históricamente mantenedoras del orden social, los intentos de restablecer el equilibrio legal hicieron que el espíritu de justicia revirtiese a su origen más remoto y puro: el pueblo: *vox populi, suprema lex*. Y el pueblo, en tanto duró la anormalidad, creó y aplicó su ley y procedimiento, que era el "paseo"»[13].

Asaltos a prisiones, «paseos» y «sacas» fueron las principales manifestaciones del terror desatado por la tormenta revolucionaria del verano de 1936 en nombre del pueblo soberano. Mientras duró el calor estival, al igual que sucedía con el otro terror «caliente» incitado y ejecutado por militares, señoritos y propietarios, no se echaron en falta los procedimientos judiciales. El «paseo» era mucho más rápido. Y como ocurrió con la violencia en la zona controlada por los militares sublevados, la ejercida en el territorio republicano se concentró en los meses de agosto y septiembre, con la importante excepción de Madrid, donde varios miles de personas fueron asesinadas en noviembre de 1936, en el momento del primer asedio que la capital de España sufrió por parte de las tropas franquistas.

No todos querían derramar sangre y hubo algunas voces, de ilustres dirigentes republicanos, socialistas o anarquistas, que se alzaron desde el principio contra la masacre, algo muy raro entre las autoridades y la jerarquía de la Iglesia católica en el

otro bando. La derrota de la sublevación, sin embargo, soltó amarras, permitió una absoluta liberación de los yugos del pasado, hizo de partera de la ansiada revolución, de la hora esperada del juicio definitivo a los patronos, ricos y explotadores, cuestión esta última favorita de la propaganda y retórica más radicales. Sin reglas ni gobierno, sin mecanismos de coerción obligando a cumplir leyes, la «sed de justicia», la venganza y los odios de clase se extendieron con una fuerza devastadora para aniquilar el viejo orden.

Las iras de los militares sublevados y falangistas se centraron especialmente en las autoridades republicanas y en los diputados elegidos por la coalición del Frente Popular en febrero de 1936. Según el informe elaborado por la Secretaría del Congreso de los Diputados y publicado el 22 de agosto de 1938, 40 habían sido asesinados y 12 se hallaban presos o «desaparecidos» en el «territorio rebelde».

De los asesinados, 21 eran socialistas, 2 comunistas y el resto republicanos; 18 pertenecían a provincias andaluzas y 5 a Galicia, una tierra en la que los políticos de izquierda y nacionalistas fueron borrados del mapa. Como Ángel Casal, editor del Partido Galleguista, alcalde de Santiago de Compostela y vicepresidente de la Diputación de la Coruña en 1936. Había formado parte de la comisión que entregó el proyecto de estatuto de autonomía en el Congreso de los Diputados. Su cadáver apareció el 19 de agosto de ese año tirado en una cuneta.

Un día antes, según los indicios más creíbles, aunque la fecha no se conoce con exactitud, debió de morir asesinado el poeta Federico García Lorca, la víctima más conocida del terror militar y fascista. Tras el triunfo de la sublevación en Granada, García Lorca se escondió en la casa de la familia del poeta falangista Luis Rosales, pensando que allí podría estar a salvo. En la tarde del domingo 16 fue a buscarlo allí Ramón Ruiz Alonso, un derechista muy conocido en Granada, exdiputado de la CEDA. Esa misma mañana habían asesinado al cuñado del poeta, Manuel Fernández-Montesinos, exalcalde republicano de Granada, casado con Concha García Lorca.

Según Ian Gibson, cuando Ruiz Alonso llamó a la puerta de los Rosales en la calle Angulo, iba acompañado de dos compañeros de la CEDA: «Juan Luis Trescastro —conocido terrateniente y fanfarrón en la más pura línea machista del señorito andaluz— y Luis García Alix, secretario del partido en Granada». Llevaron a García Lorca al Gobierno Civil, en manos del comandante José Valdés Guzmán, quien desde la sublevación militar estaba limpiando a fondo Granada de «rojos»[14].

A García Lorca lo mataron con un maestro y dos banderilleros anarquistas, enterrados juntos en la zona de Víznar, a pocos kilómetros de Granada, donde los falangistas habían ordenado la apertura de fosas comunes en las que habían trabajado masones y «rojos» antes de ser asesinados por los voluntarios de la fascista «Escuadra Negra». Entre sus asesinos estaba Juan Luis Trescastro, ese «machista» y «fanfarrón» que decía estar harto de «maricones» y alardeaba después por Granada de haber «metido dos tiros en el culo» a García Lorca. Su certificado de defunción recurría a un eufemismo más de los muchos que se utilizaron en la zona franquista

para falsear la causa de la muerte: «a consecuencia de heridas producidas por hechos de guerra».

En la zona leal a la República, el más insigne de los asesinados fue José Antonio Primo de Rivera, el mártir de la cruzada, en cuyo honor, ya desde la guerra, pero sobre todo en la posguerra, las autoridades franquistas levantaron edificios, a la vez que se designaba con su nombre a cientos de calles, plazas y escuelas y se grababa en los muros de las iglesias la leyenda «José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!».

Nacido en 1903, cinco años después que García Lorca, era hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. En 1933, tras la subida al poder de Adolf Hitler, se interesó por el fascismo y fundó, después de asegurarse el respaldo político y financiero de la derecha tradicional, Falange Española, el partido que mejor incorporó la violencia a su retórica y más la practicó en la calle en la atmósfera cargada de la España de los años treinta.

En febrero de 1936 se presentó a las elecciones en la provincia de Cádiz y no salió elegido. Un mes después, tres falangistas intentaron asesinar a Luis Jiménez Asúa, catedrático de Derecho y diputado socialista. No lo consiguieron, pero mataron a su guardaespaldas. El 14 de marzo, José Antonio Primo de Rivera y los principales dirigentes falangistas fueron arrestados y el partido pasó a la clandestinidad.

El 5 de junio, junto con su hermano Miguel, fue trasladado a la cárcel de Alicante, posiblemente para evitar un intento de fuga y alejarlo de la capital, que era entonces el principal escenario de la violencia callejera falangista. En Alicante fracasó la sublevación militar y el 18 de noviembre, un Tribunal Popular lo condenó a muerte. Fue fusilado en la cárcel, en la madrugada del 20 de noviembre de 1936[15].

La Guerra Civil española, en definitiva, ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario y por la espantosa violencia que generó. Si tenemos en cuenta las investigaciones más rigurosas, elaboradas en los últimos años, hubo al menos 150 000 víctimas mortales de esa violencia durante la guerra, casi cien mil en la zona controlada por los militares sublevados y algo menos de sesenta mil en la republicana[16].

Durante los dos meses de verano que siguieron a la sublevación militar, el terror se extendió más allá de los límites de las organizaciones políticas, del aparato del Estado en la zona leal a la República, y del propio Ejército en el bando rebelde. Nuevos poderes ocuparon los espacios vacíos dejados por la dislocación del orden causada por el golpe militar. Poderes autónomos, o con bastante autonomía, como los escuadrones de falangistas o los comités revolucionarios, operaron en el territorio de castigo y justicia ocupado antes por el Estado, a la vez que ponían en marcha mecanismos extraordinarios de terror que no necesitaban en ese momento sanción o legitimación.

DEL TERROR «CALIENTE» AL TERROR «LEGAL»

A partir de noviembre de 1936, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Tras la frustrada ofensiva franquista sobre Madrid, nadie creía seriamente, por mucho que la propaganda dijera otra cosa, en un desenlace rápido de la guerra. Los frentes se estabilizaron y excepto en Madrid, donde se siguió librando durante semanas una batalla decisiva, los ataques se resolvían en pequeñas conquistas, afianzamientos de posiciones o acontecimientos de escasa dimensión militar. Desde la entrada en Toledo a finales de septiembre de 1936 a la conquista de Málaga a comienzos de febrero de 1937, las tropas de Franco no sumaron ninguna victoria, mientras que las todavía multicolores fuerzas leales a la República bastante hacían con evitarlo. En esos cuatro largos meses, los grupos paramilitares e «incontrolados» desaparecieron prácticamente del escenario y las milicias se sometieron definitivamente a la disciplina del Ejército, proceso este último que, obviamente, tardó más en consumarse en la zona republicana que en la rebelde.

La concentración del poder no resultó fácil, ni siquiera en el bando insurgente donde todo parecía destinado al mando supremo del general Franco. Pero había pruebas claras de que el terror se estaba controlando en los dos bandos «desde arriba»: los asesinatos debidos a «sacas» y «paseos» decrecieron considerablemente. El terror, como la atmósfera, se enfrió, inaugurando una fase de violencia «legal», pasada por los tribunales.

El enemigo seguía allí, quedaban muchos por matar, pero la necesidad de atender principalmente a la guerra, la concentración del poder y la disciplina en la retaguardia comenzaron a frenar los excesos. En el bando republicano, el gobierno y las organizaciones políticas y sindicales lograron parar de forma casi definitiva la matanza; en el de los franquistas el ritmo descendiente de la violencia fue menor y cada vez que conquistaban una ciudad, volvía el terror «caliente» de los asesinatos en masa y sin garantías.

El control del descontrol costó un tiempo en la zona republicana. Los primeros decretos de lo que se llamó entonces la «justicia popular» vieron la luz el 23 y el 25 de agosto de 1936, inmediatamente después del asesinato de ilustres derechistas y políticos en la cárcel Modelo de Madrid[17]. Aparecieron así los tribunales especiales «para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado». Los tribunales estarían formados por «tres funcionarios judiciales, que juzgarían como jueces de derecho, y catorce jurados que decidirían sobre los hechos de la causa». Esa «justicia de excepción» de la República incorporaba el «procedimiento sumarísimo» y diversos elementos de la jurisdicción militar sin necesidad de recurrir al «estado de guerra», que el gobierno republicano no declaró en todo su territorio leal hasta el 9 de enero de 1939[18].

El gobierno de la Generalitat promulgó el 24 y el 28 de agosto decretos muy similares por los que se creaban «jurados populares para la represión del fascismo». No fue sólo un fenómeno de Madrid o Barcelona: en casi todas las provincias de la zona republicana se constituyeron en los días siguiente los tribunales populares. Era

el paso, o así lo parecía, desde la «anormalidad» en la que el «pueblo», como decía García Oliver, «creó y aplicó su ley y su procedimiento», es decir, el «paseo», a la «normalidad», una etapa en la que «los elementos sospechosos debían ser entregados a los Tribunales populares y ser juzgados, con imparcialidad, con castigo de los culpables y puesta en inmediata libertad de los inocentes»[19].

La violencia «legal» se impuso definitivamente al terror «caliente» desde comienzos de 1937, aunque en la mayoría de las provincias la onda descendiente se había iniciado a finales del año anterior. Por varias razones. En primer lugar, porque la llegada de Largo Caballero al Gobierno el 4 de septiembre de 1936, acompañado de socialistas, comunistas y, a partir del 4 de noviembre, de anarquistas, involucró a todas esas organizaciones en la defensa de la responsabilidad y de la disciplina. Nada ilustra mejor ese cambio que el hecho de que fuera un «anarquista de acción» como García Oliver quien consolidara los tribunales populares o creara los campos de trabajo, en vez del tiro en la nuca, para los «presos fascistas». En segundo lugar, porque la mayoría de los comités revolucionarios y antifascistas creados al calor de la derrota de la sublevación fueron sustituidos por consejos municipales formados por acuerdos entre las diferentes organizaciones políticas del Frente Popular. Y por último, porque los grupos armados y milicias que pululaban por la retaguardia y los frentes fueron en esos mismos meses militarizados e incorporados al nuevo ejército de la República. Con poderes políticos y armados más fuertes y disciplinados, con la guerra en el centro del escenario, la tormenta revolucionaria se esfumó, quedando bloqueada la violencia de las «sacas» y «paseos».

El delito principal del que se acusaba a los procesados por los tribunales populares era el de rebelión militar y las personas juzgadas fueron militares y miembros de las fuerzas de seguridad, guardias civiles sobre todo; ciudadanos que tomaron las armas para apoyar la sublevación; y derechistas o afiliados a organizaciones católicas y monárquicas. El perfil de los ejecutados tras las sentencias de los tribunales populares de varias provincias era muy similar al de los que caían abatidos en los «paseos» y las «sacas», aunque apenas había eclesiásticos, a quienes se asesinó sobre todo en los primeros meses. Varios miles de personas pasaron por los diferentes tribunales populares de la zona republicana desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937, meses en los que se juzgó a la mayor parte de los acusados por esos motivos. En Barcelona fueron ejecutados 97 de los 427 procesados; y en Madrid, 45 de 566. Más duro fue el tribunal de la provincia de Valencia, que condenó a muerte al 43,82 por ciento de los 89 procesados, aunque sólo fueron ejecutadas finalmente 23 personas.

En la otra zona, todo parecía bajo el control de los militares, con Franco ejerciendo desde octubre de 1936 como máxima autoridad. Aunque si hacemos caso a las pruebas documentales, no era la justicia militar la que imperaba en la retaguardia. Durante los últimos meses de 1936 y los primeros de 1937 fueron muy pocas las víctimas mortales que tuvieron la oportunidad de pasar por consejos de guerra y

tribunales militares. Un año después de comenzada la guerra, imperaban todavía las «sacas» y «paseos» protagonizados por grupos civiles armados. La fase del terror «legal» tardó mucho más en aparecer que en la zona republicana y sólo a partir del otoño de 1937 logró imponerse al terror «caliente».

De las 186 víctimas de muerte violenta registradas durante 1937 en la ciudad de Zaragoza, sólo 47 fueron ejecutadas tras sentencias dictadas por consejos de guerra. Una notable «mejoría» respecto a los meses de 1936 que siguieron a la sublevación en los que sólo 32 de las 2578 víctimas de la represión se sentaron ante tribunales militares. En la provincia de Cáceres, menos de un centenar de personas fueron ejecutadas tras pasar por consejos de guerra hasta la primavera de 1937, mientras que más de mil habían sido «paseadas» y hasta arrojadas al Tajo desde lo más alto de los puentes.

Hubo, en realidad, un largo período, de seis a ocho meses, en que los militares no pusieron en marcha la maquinaria de los juicios sumarísimos. Para «regenerar» la Patria, y librarla de republicanos y rojos no hacían falta jueces o abrir diligencias e investigaciones.

Y si se abrían, tampoco eran necesarios muchos testimonios o imputaciones fundadas sobre algún crimen grave cometido por el acusado. Éstos eran, por ejemplo, los crímenes que, según el texto del consejo de guerra del 15 y 16 de febrero de 1937, había cometido Emili Darder, el exalcalde republicano de Palma de Mallorca: «Fue un elemento perturbador que azuzaba a los obreros contra los patronos. Pertenecía a Izquierda Republicana […]. Se le atribuye intervención en el movimiento soviético que se preparaba en Mallorca»[20].

Emili Darder había nacido en Palma en junio de 1895. Se doctoró en Medicina e ingresó en la Academia de Medicina y Cirugía de Palma. En 1933 accedió a la alcaldía de esa ciudad y en el momento de la sublevación militar estaba muy enfermo, como consecuencia de una angina de pecho que se le había detectado unos días antes.

El día 20 de julio lo detuvieron en su casa. Lo trasladaron al Hospital Provincial y después al Castillo de Bellver. Estuvo allí seis meses, incomunicado. La noche anterior a su ejecución, pudieron verlo en la enfermería su mujer, Miquela Rovira, y su hija Emilia. Según Georges Bernanos, en *Los grandes cementerios bajo la luna*, esa última noche las enfermeras mantuvieron su corazón, «que se estaba debilitando rápidamente», a base de inyecciones: «lo llevaron directamente del hospital al lugar del sacrificio»[21]. Fue ejecutado en la mañana del 24 de febrero de 1937 en el cementerio de la capital balear, junto con el exdiputado socialista Alexandre Jaume y el alcalde de Inca, Antoni Mateu. Darder, al contrario que Jaume, pidió y obtuvo «los auxilios de la Religión». El padre Anastasi, superior de los capuchinos, le tuvo que dar la comunión en una cuchara con agua.

«Nosotros hacemos la guerra porque nos la hacen», decía Manuel Azaña en un discurso en el Ayuntamiento de Valencia, entonces capital de la República, el 21 de enero de 1937[22]. Una guerra terrible que en apenas medio año había mezclado el

cruel terror de militares y falangistas con una subversión violentísima del orden social. Decenas de miles de personas habían sido asesinadas en los dos bandos. A otros muchos miles se les expulsó de sus puestos de trabajo, con «depuraciones» que se extenderían por la administración y la enseñanza. Los militares rebeldes y sus aliados, los que habían perdido los puestos políticos en las elecciones de febrero de 1936, tuvieron que emplearse a fondo en esa limpieza, cortando en mil pedazos las redes sociales que republicanos, intelectuales, socialistas y libertarios habían establecido en pueblos y ciudades, en medios periodísticos y de difusión cultural, en casas del pueblo y ateneos, en asociaciones y sindicatos.

Muy pronto quedó claro que ese camino que llevaba de la sublevación a la guerra, de las tensiones sociales al exterminio del contrario, iba a tener repercusiones de largo alcance. En Tenerife, los enormes almacenes de la compañía inglesa Fyffes pasaron a tener presos republicanos y sindicalistas en vez de fruta. Desde ellos, los «patrulleros del amanacer» se los llevaban para arrojarlos al mar. En León, el edificio de San Marcos, antigua hospedería y joya del plateresco, era utilizado como cárcel por los militares rebeldes.

Tendrá que llegar de nuevo la convivencia, proclamaba Azaña en la Universidad de Valencia unos meses después, el 18 de julio de 1937: «tenemos que habituarnos otra vez unos y otros a la idea, que podrá ser tremenda, pero que es inexcusable, de que los veinticuatro millones de españoles, por mucho que se maten unos con otros, siempre quedarán bastantes, y los que queden tienen necesidad y obligación de seguir viviendo juntos para que la nación no perezca»[23].

Quedaba todavía espacio para el optimismo y los sueños, algo difícil de creer después de lo que había pasado. O quizás eran cosas que Azaña, ese maestro de la palabra, quería transmitir como muestra de su firme apuesta por la paz. Pese a que algunas batallas estaban ya perdidas y lo estarían durante décadas. La de la convivencia, por ejemplo. ¿Qué podía hacer esa palabra en medio de tanta incitación a la muerte?

La apelación a la violencia y al exterminio del contrario fueron valores duraderos en la dictadura que salió de la Guerra Civil y que iba a prolongarse durante casi cuatro décadas. Ya durante la guerra, la Iglesia católica, al convertir un conflicto armado civil en cruzada religiosa, al unir la espada y la cruz, legitimó el derecho a la rebelión de los militares y justificó la represión que habían emprendido. La entrada en escena de lo sagrado, lejos de mitigar la violencia, la incrementó, la bendijo por un lado y atizó todavía más la ira popular contra el clero que había estallado en el mismo intento de la derrota del levantamiento militar.

2
Guerra santa y odio anticlerical

El catolicismo era la única religión existente en España, identificada con el conservadurismo político y el orden social. Pese a las revoluciones liberales del siglo XIX, el Estado confesional había permanecido intacto. La Monarquía borbónica, desde 1875, había abierto a la Iglesia católica nuevos caminos de poder social e influencia y la aristocracia terrateniente y las buenas familias de la burguesía dieron nuevos impulsos al renacimiento católico con numerosas donaciones de edificios y rentas a las congregaciones religiosas.

Las claves de la disputa

La Iglesia católica era para el Papa y sus obispos la única fuente de verdad absoluta. El catolicismo se veía a sí mismo como la religión histórica de los españoles. Depositaria de las mejores virtudes, sociedad perfecta, en estrecho matrimonio con el Estado, la Iglesia estaba segura. Porque en pleno siglo XX, España era el ejemplo por excelencia de una sociedad con una «única religión dominante y coherente», una religión dirigida y seguida por gente, obispos, religiosos y católicos de a pie, que consideraban que la preservación total del orden social era irrenunciable, unidos como iban el orden y la religión en la historia de España.

Frente a ese constante poder y presencia de la Iglesia había emergido, no obstante, una contratradición de crítica, hostilidad y oposición. El anticlericalismo, presente ya en el siglo XIX, con intelectuales liberales y la izquierda burguesa dispuestos a reducir el poder del clero en el Estado y en la sociedad, entró en el siglo XX en una nueva fase más radical a la que se sumaron los militantes obreros. Y emergió así, empezando por Barcelona y siguiendo por otras ciudades españolas, una red de ateneos, periódicos, escuelas laicas y diferentes manifestaciones de una cultura popular, básicamente antioligárquica y anticlerical, donde el republicanismo y el obrerismo organizado —anarquista o socialista— se daban la mano. El objetivo,

según Joan Connelly Ullman, ya no era sólo controlar o reducir la influencia clerical, sino «eliminar a la Iglesia como poder público, como rama de gobierno, e incluso como fuerza sociocultural en la sociedad»[1].

La Iglesia resistió con fuerza esos vientos impetuosos de modernización y de secularización. Y levantó un sólido dique frente a los individuos que disentían con sus opiniones y estilo de vida de ese orden que ella bendecía y amparaba. Así se forjó la historia de un resentimiento constante entre clericalismo y anticlericalismo, orden y cambio, reacción y revolución que, agudizado en los años republicanos, acabó en 1939, tras una sangrienta batalla, con el triunfo violento y duradero del clericalismo.

Para la Iglesia y la mayoría de los católicos españoles, la denominada «cuestión social» era a comienzos del siglo XX un asunto secundario. Entre ellos dominaban todavía las concepciones tradicionales y la mentalidad benéfico-caritativa propia del Antiguo Régimen. De ahí que la recepción de la *Rerum Novarum*, la encíclica promulgada por León XIII en 1891, fuera en España débil y tardía. Y de ahí que a principios del siglo XX todavía dominaran Círculos Católicos de Obreros por encima de otros tipos de asociaciones como las cooperativas, las sociedades de socorros mutuos, las cajas de crédito rural y, sobre todo, los sindicatos.

Las autoridades, los medios políticos más conservadores y la Iglesia confiaban en «el buen pueblo español, escasamente contaminado por las propuestas socialistas»[2]. En un Estado confesional, donde la Iglesia y el poder político estaban tan estrechamente unidos, no había por qué temer la apostasía de las masas. O al menos eso se pensaba. Y se pensó así mientras mantuvo el monopolio de la educación, mientras las iniciativas benéficas recibían el apoyo moral y financiero de las buenas gentes de la sociedad, mientras los católicos, en suma, tuvieron una presencia notable en los primeros esbozos de proyectos sociales.

Pero la industrialización, el crecimiento urbano y la agudización de los conflictos de clase cambiaron sustancialmente las cosas durante las tres primeras décadas del siglo XX. Como observaron algunos comentaristas católicos preocupados por las consecuencias de esos cambios, los pobres urbanos desconfiaban profundamente del catolicismo, siempre al lado de los ricos y los propietarios, y la Iglesia era considerada como un enemigo de clase.

En vísperas de la República, si hacemos caso a esas fuentes, los proletarios urbanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, o de las cuencas mineras de Asturias y Vizcaya, rara vez entraban en una iglesia e ignoraban las doctrinas y los ritos católicos. Muchos curas de las comarcas latifundistas andaluzas y extremeñas llamaban a menudo la atención sobre la hostilidad creciente que hacia ellos y la Iglesia mostraban muchos jornaleros «contaminados» por la propaganda socialista y anarquista. Desde el punto de vista de la práctica religiosa y del papel de la religión en la vida cotidiana, había una gran diferencia entre esas zonas «descatolizadas» o no conquistadas por la Iglesia y el mundo rural del norte. En Castilla la Vieja, Aragón y en las provincias vascas ir a la iglesia formaba parte de la rutina semanal y suponía

un quehacer diario para muchas mujeres. Casi todo el mundo tenía en esas regiones algún pariente religioso, de allí procedían la mayor parte de los curas, frailes y monjas que había en España y a los barrios acomodados de esas zonas iban a parar casi todos los recursos. Mientras que en la diócesis de Vitoria, por ejemplo, había por esos años más de dos mil sacerdotes para atender a la población, en la de Sevilla, muchísimo mayor, no llegaban a setecientos.

El abismo entre esos dos mundos culturales antagónicos, de católicos practicantes y de anticlericales convencidos, se ensanchó con la proclamación de la Segunda República y cogió en medio a un amplio número de españoles que se habían mostrado hasta entonces indiferentes ante esa batalla. Todas las señales de alarma se dispararon. Lluís Carreras y Antonio Vilaplana, dos sacerdotes colaboradores del cardenal Vidal i Barraquer, lo veían muy claro en el informe que el 1 de noviembre de 1931 enviaban a la Secretaría de Estado del Vaticano: bajo la «grandeza aparente» de la Iglesia durante la Monarquía, «España se empobrecía religiosamente», con las elites ilustradas y la multitud alejadas de la religión, necesitada la nación de una «restauración social cristiana»[3].

Las cláusulas más anticlericales de la Constitución republicana, aprobadas en el parlamento en los últimos meses de 1931, declaraban la no confesionalidad del Estado, eliminaban la financiación del clero, introducían el matrimonio civil y el divorcio y, lo más doloroso para la Iglesia, prohibían el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas.

Además de esas importantes cuestiones que la legislación republicana situó en primer plano, había también otros asuntos, aparentemente menores, que no pueden despreciarse si se quiere profundizar en las violentas reacciones clericales y anticlericales que se manifestaron en los dos bandos durante la Guerra Civil.

Con la llegada de la República salió también a la luz una enconada lucha, de fuerte carga emocional, por los símbolos religiosos. La *Marcha real*, himno nacional español, que durante la Monarquía se escuchaba siempre en la misa en el momento de la consagración, pasó a considerarse una de las señas de identidad de la reacción, una provocación, igual que las procesiones. La retirada de los crucifijos en las escuelas provocó lloros en muchos pueblos del norte de España. Otros protestaron por la supresión de las procesiones. Así de estrecha era la identificación entre el orden y la religión, la Monarquía y la política autoritaria de derechas.

Se echó la culpa a la República de perseguir obsesivamente a la Iglesia y a los católicos cuando, en realidad, el conflicto era de largo alcance y hundía sus raíces en las décadas anteriores. No es que España hubiera dejado de ser católica, por emplear la gráfica expresión de Manuel Azaña, con la que quería decir que la Iglesia ya no orientaba la cultura española, que hacía tiempo que había dado la espalda a las clases trabajadoras[4]. Es que había una España muy católica, otra no tanto y otra muy anticatólica. Había más catolicismo en el norte que en el sur, en los propietarios que en los desposeídos, en las mujeres que en los hombres. La mayoría de los católicos

eran antisocialistas y gente de orden. A la izquierda, republicana u obrera, se la asociaba con el anticlericalismo. Nada tiene de extraño que la proclamación de la República trajera días de fiesta para unos y de luto para otros.

Tras unos meses de desorientación, sin organizar, el catolicismo político irrumpió como un vendaval en el escenario republicano. Como ha señalado Santos Juliá, los fundadores de la República, con Manuel Azaña a la cabeza, nunca lo contemplaron en su justa medida, lo despreciaron como una reacción de esa Iglesia que olía a rancio, a Monarquía destronada, como fuerza marginal que nada podía hacer frente a ese régimen sostenido por el pueblo. Ocurrió, sin embargo, lo contrario: en dos años el catolicismo arraigó como un movimiento político de masas capaz de convertirse en árbitro del futuro de la República. Primero, a través de elecciones libres; después, con la fuerza de las armas[5].

La jerarquía de la Iglesia católica no se limitó, sin embargo, a amparar ese movimiento político o a presionar a las autoridades republicanas. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 17 de mayo de 1933, que prohibía a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza, causó en ella una auténtica conmoción. Los obispos, dirigidos ya desde abril de 1933 por el integrista Isidro Gomá, reaccionaron con una «Declaración del Episcopado» en la que sentían «el duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia», reafirmaban el derecho superior e inalienable de la Iglesia a crear y dirigir centros de enseñanza, a la vez que rechazaban «las escuelas acatólicas, neutras o mixtas». El 3 de junio, al día siguiente de que la Ley fuera sancionada por Alcalá Zamora, presidente de la República, el Vaticano daba a conocer una carta encíclica de Pío XI, *Dilectissima nobis*, dedicada exclusivamente a esa Ley que atentaba «contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia».

Desde el lado del anticlericalismo, su versión más radical y destructiva tuvo también la oportunidad de manifestarse. En el ensayo revolucionario de octubre de 1934 en Asturias, 34 seminaristas y sacerdotes fueron asesinados, pasando de la persecución legislativa del primer bienio a la destrucción física de los representantes eclesiásticos, algo que no sucedía en España desde las matanzas de 1834-1835 en Madrid y Barcelona. En Asturias volvió a aparecer además el fuego purificador: 58 iglesias, el palacio episcopal, el Seminario con su espléndida biblioteca, y la Cámara Santa de la catedral fueron quemados o dinamitados.

La represión llevada a cabo por el Ejército y la Guardia Civil fue durísima, de escarmiento ejemplar, y miles de militantes socialistas y anarcosindicalistas llenaron las cárceles de toda España. Pero la Iglesia y la prensa católica se dedicaron a recordar las atrocidades sufridas por sus mártires, apelando al castigo y a la represión como únicos remedios contra la revolución. Esa ceguera de la Iglesia en el terreno social es lo que lamentaba el canónigo Maximiliano Arboleya, buen conocedor del mundo obrero asturiano, en una carta que le enviaba a su amigo zaragozano Severino Aznar tras la tormenta de «odio y dinamita»: «Nadie, absolutamente nadie, se para a

preguntar si este atroz movimiento criminal revolucionario de cerca de 50 000 hombres no tiene más explicación que la consabida malsana propaganda socialista; nadie piensa en que también puede haber tremendas responsabilidades por parte nuestra»[6].

Excepto en los medios rurales del norte de España, ese catolicismo social que abanderaban gentes como Maximiliano Arboleya o Severino Aznar había abierto muy pocos surcos. Para los mineros y pobladores de los suburbios industriales de las grandes ciudades, la Iglesia católica aparecía identificada con el capitalismo «opresor» y los sindicatos católicos tenían como única finalidad la defensa de la Iglesia y del capitalismo: «Guste o no», reflexionaba Arboleya, eso es lo que pensaban «casi todos nuestros trabajadores».

Cambiar esa imagen, atraer a todos esos hijos díscolos al redil de la Iglesia era una labor «ardua, costosa, de grandes dificultades, de larga duración, acaso de dolorosas rectificaciones». Algo que parecía ya inalcanzable, imposible, cuando empezó aquel año maldito de 1936, cuando los resultados electorales daban al traste con cualquier lejana esperanza. Las posiciones catastrofistas se engulleron a los pocos Arboleyas que habitaban la geografía española, a los católicos vascos como Manuel Irujo o José Antonio Aguirre y a los sectores renovadores de ese catolicismo catalán que encabezaba el cardenal Vidal i Barraquer. Ni siquiera la Lliga Catalana de Francesc Cambó se libró de esa imagen ultracatólica, etiquetada por muchos, según Borja de Riquer, como «el partit dels rics i dels capellans»[7]. Imposible esa «recatolización» pacífica, a través de los sindicatos y de la acción social de la Iglesia, se pasó en unos meses a la «recatolización» violenta con la guerra santa y patriótica.

Y hacia ella se dirigieron los preparativos desde el día siguiente del triunfo electoral de la coalición del Frente Popular. El 20 de febrero ya podía leerse en *El Pensamiento Alavés* «que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada». La prensa católica y de extrema derecha incitaba a la rebelión frente a tanto desorden. Ya en 1934, el canónigo magistral de Salamanca Aniceto Castro Albarrán había publicado *El derecho a la rebeldía*, el de una rebelión en forma de cruzada patriótica y religiosa contra la República atea.

En definitiva, la confrontación entre la Iglesia y la República, entre el clericalismo y el anticlericalismo, dividió a la sociedad española de los años treinta tanto como la reforma agraria o el más importante de los conflictos sociales. Establecida oficialmente como Iglesia del Estado, la institución eclesiástica había hecho durante la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera un generoso uso de su monopolio de la enseñanza, de su control sobre la vida de los ciudadanos, a los que predicaba unas doctrinas históricamente conectadas con la cultura más conservadora: obediencia a la autoridad, redención a través del sufrimiento y confianza en la recompensa en el cielo.

Con la proclamación de la República, la Iglesia perdió, o sintió que perdía, una

buena parte de su posición tradicional. El privilegio dejaba paso a lo que la jerarquía eclesiástica y muchos católicos consideraban una persecución abierta. Aumentaron las dificultades de la Iglesia española para arraigar entre los trabajadores urbanos y el proletariado rural. Se hizo todavía más patente el «fracaso» de la Iglesia y de sus «ministros» para comprender los problemas sociales, preocupados sólo por el «reino de lo sacro» y la defensa de la fe. Eso es lo que un régimen reformista y de libertades como el republicano sacó a la luz, además de la persecución legislativa, el anticlericalismo popular y la violencia esporádica. La Iglesia se resistió a perder todo eso, que era un poco morir, y se preparó para el combate contra esa multitud de españoles a los que consideraba sus enemigos, que consideraban a ella de verdad su enemiga. Y el catolicismo, acostumbrado a ser la religión del *statu quo*, pasó a la ofensiva, se convirtió, en expresión de Bruce Lincoln, en «una religión de la contrarrevolución»[8].

Cuando un importante sector del Ejército tomó sus armas contra la República en julio de 1936, la mayoría del clero y de los católicos se apresuraron a apoyarlo, a darle su bendición como defensores de la civilización cristiana frente al comunismo y el ateísmo. Ya se lo había dicho a sus fieles Manuel Irurita, el obispo integrista de Barcelona, en una carta pastoral el 16 de abril de 1931: «sois ministros de un Rey que no puede ser destronado, que no subió al trono por votos de los hombres, sino por derecho propio, por título de herencia y de conquista»[9].

Ante la imposibilidad de que un rey terrenal rescatara a su pueblo «de aquella situación oprobiosa», del pecado, tendría que llegar un «Dios Redentor» que trajera a la Patria «días de gloria y esplendor». Así lo pedían todos los católicos, fundidos ya en la primavera de 1936 en una misma idea: *Adveniat Regnum Tuum*[10].

La Guerra Civil como cruzada religiosa

La sublevación no se hizo en nombre de la religión. Los militares que la concibieron y la llevaron a cabo estaban más preocupados por otras cosas: por salvar el orden, la Patria, decían ellos, por arrojar a los infiernos al liberalismo, al republicanismo y a las ideologías socialistas y revolucionarias que servían de norte y guía a amplios sectores de trabajadores urbanos y rurales. Pero la Iglesia y la mayoría de los católicos pusieron desde el principio todos sus medios, que no eran pocos, al servicio de esa causa. Y lo hicieron para defender la religión, aunque también a ese orden, a esa Patria que podía liberarles del anticlericalismo y restablecer todos sus privilegios. Ni los militares tuvieron que pedir a la Iglesia su adhesión, que la ofreció gustosa, ni la Iglesia tuvo que dejar pasar el tiempo para decidirse. Unos porque querían el orden y otros porque decían defender la fe, todos se dieron cuenta de los beneficios de la entrada de lo sagrado en escena.

La violencia anticlerical que se desató desde el primer momento donde el golpe

fracasó corrió paralela al fervor y entusiasmo que mostraron los clérigos allá donde triunfó. No se trataba de arrebatos de ira insólitos o inexplicables. Fue el golpe de Estado el que enterró las soluciones políticas y dejó paso a los procedimientos armados.

Tres cosas espero demostrar en este apartado. En primer lugar, que la Iglesia se sintió encantada con que fueran las armas las que aseguraran el «orden material», liquidaran a los infieles y le devolvieran la «libertad». En segundo lugar, que la Iglesia, para justificar su implicación, necesitó mucha retórica, la construcción de varios mitos y el constante recuerdo del martirio sufrido por el clero. Rastrearé, por último, la eficaz idealización que la Iglesia hizo de la figura de Franco, proverbial para su consolidación como jefe supremo de la España rebelde y para la forja de su autoridad como futuro dictador.

La sublevación fue «providencial», escribía el cardenal Isidro Gomá, primado de los obispos españoles, en el «Informe acerca del levantamiento cívico-militar» que envió al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli, el 13 de agosto de 1936. «Providencial», porque «es cosa comprobada, por documentos que obran en poder de los insurgentes, que el 20 de Julio último debía estallar el movimiento comunista»[11].

Gomá repitió la misma idea, con argumentos más sofisticados, en la Carta colectiva de los obispos firmada en julio de 1937, justamente un año después del inicio del asalto armado contra la República. La guerra era «como un plebiscito armado». La Iglesia, por su reconocido «espíritu de paz», no la había querido. Pero ante la grave amenaza de ser suprimida, «no podía ser indiferente en la lucha»[12].

Otro obispo, Enrique Pla y Deniel, titular de la diócesis castellana de Salamanca, que se iba a convertir en el ideólogo de la cruzada, apologeta de una guerra «necesaria», publicó su famosa carta pastoral «Las dos ciudades» el 30 de septiembre de 1936, cuando el general Franco estaba a punto de ser investido por sus compañeros sublevados con poderes absolutos. Pla y Deniel definía la guerra española como el combate entre «dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la tierra»: a un lado, la ciudad terrenal de los «sin Dios»; al otro, «la ciudad celeste de los hijos de Dios». No era, por lo tanto, una guerra civil, sino una «cruzada por la religión, por la patria y por la civilización»[13].

«Plebiscito armado» y «cruzada». Había otras formas de definir aquello, pero esas dos fueron las más queridas para los eclesiásticos. Los primeros obispos en divulgar esa definición fueron aquellos que se sentían más seguros al lado de los militares rebeldes, fundamentalmente porque el triunfo del golpe en la zona cubierta por sus diócesis había resultado contundente. Son las diócesis de casi todo el norte de España, desde Pamplona y Zaragoza a Galicia, pasando por Burgos, Valladolid, Salamanca y Zamora. Treinta y dos sedes de las 61 diócesis que había entonces en España estaban ya en la segunda mitad de agosto en zona rebelde. Según los datos

aportados por Alfonso Álvarez Bolado a partir de los Boletines Eclesiásticos, «en no menos de 11 diócesis […] y a través de 18 intervenciones, los obispos se han definido en forma absolutamente clara antes de que hable el Papa el 14 de septiembre». Tres de ellos, además, el obispo de Pamplona y los arzobispos de Zaragoza y Santiago de Compostela, ya habían aplicado antes de finales de agosto la categoría de «cruzada religiosa» a la guerra civil.

Casi todas esas declaraciones ofrecían un planteamiento sustancialmente idéntico: se alinean sin rubor con el golpe militar, que celebran, con las masas católicas, como una liberación; piden la adhesión a él frente al «laicismo-judío-masónico-soviético», expresión ya utilizada por el obispo de León José Álvarez Miranda; y no reconocen otra resolución del conflicto que no sea la rotunda victoria de «nuestro glorioso ejército» sobre «los enemigos de Dios y de España»[14].

Embebidos como estaban de esa atmósfera inclemente que extendió la sublevación militar, la mayoría de los eclesiásticos españoles nunca quisieron saber nada de mediación o perdón. El más mínimo rumor sobre esa maldita palabra, mediación, y ya se ponían en guardia. Así se lo decía el padre provincial de León de la Compañía de Jesús, Antonio Encinas, al Padre General W. Ledóchowski, en una carta que le escribió desde Hendaya el 1 de septiembre de 1936 y en la que le comentaba los rumores que corrían por la prensa francesa sobre una posible intervención del Papa para que cesara la guerra. Sería un auténtico error porque «los católicos ven en esta guerra una verdadera cruzada religiosa contra el ateísmo, y la juzgan totalmente inevitable: o se vence en ella o el catolicismo desaparece de España». «Desagrado» y «desilusión» es lo que sentirían todos esos católicos que «ofrecen haciendas y vidas, sin límites, para la campaña». Y perdería el Papa «mucho de su autoridad». La mayoría se quedarían con la impresión «de que hablaba de las cosas de España sin saber lo que aquí pasa»[15].

El padre Ledóchowski pasó copia de esa carta al cardenal Pacelli, que estaba ya enterado de lo que sucedía en España por el largo informe que le había enviado el cardenal Gomá dos semanas antes. Gomá pensaba en un triunfo seguro, aunque no inmediato, del movimiento militar, algo que compartía con casi todos hasta que la batalla de Madrid en noviembre de 1936 les hizo concebir una guerra más larga: «si triunfa, como se espera […] es indudable que en plazo relativamente breve quedaría asegurado el orden material fuertemente, y se iniciaría una era de franca libertad para la Iglesia»[16].

Antes de que la jerarquía de la Iglesia católica española convirtiera oficialmente la guerra en cruzada, algo que empezó a manifestarse claramente en la segunda quincena de agosto, masas de católicos, grupos conservadores menos católicos y fascistas nada católicos ya habían convertido el mismo acontecimiento del asalto al poder en un «bellum sacrum et justum», en una guerra «necesaria» contra los enemigos de España, en favor del centralismo y del autoritarismo, por la conservación del orden socioeconómico, sin reformas, contra las masas no

propietarias del campo y de la ciudad. Ahí estaba «el verdadero y tradicional pueblo español», como le decía Gomá a Pacelli: unos se movían «por el ideal religioso, al ver profundamente herida su conciencia católica por las leyes sectarias y laicizantes y por las desenfrenadas persecuciones»; otros, «por ver amenazados sus intereses materiales»; muchos, «por el restablecimiento del orden material profundamente perturbado»; y no faltaban quienes, añadía Gomá, actuaban movidos «por el sentimiento de unidad nacional amenazado por las tendencias separatistas de algunas regiones».

Lo denominaron cruzada, cuando en realidad lo que había detrás de ése bando «nacional» era una amplia «coalición reaccionaria», autoritaria, cuyos componentes se empeñaron en asaltar el poder con el brazo ejecutor del Ejército, para destruir a los «enemigos» internos y externos, para defender el orden social de los propietarios y crear una sociedad que de entrada llamaban «nueva», aunque después se pudo comprobar que no lo era tanto.

Con la República establecida en España, con su proyecto reformista puesto en marcha, con el grado de movilización social, cultural y político que había alcanzado la sociedad española, lo de julio de 1936 no podía ser una «militarada» o un pronunciamiento clásico. La solución autoritaria requería masas. Y nadie mejor que la Iglesia y ese movimiento católico que apadrinaba para proporcionarlas, para «unificar» a todas esas diferentes fuerzas. El catolicismo era el punto de unión ideal para aglutinarlas y favoreció el proceso de convergencia de todos esos grupos e intereses reaccionarios. Proporcionó toda una liturgia de reclutamiento, especialmente en la Vieja Castilla, Navarra y Álava, una liturgia barroca político-religiosa llena de gestos, creencias y fervor.

El éxito de esa movilización religiosa, de esa liturgia que creaba adhesiones de las masas en las diócesis de la España «liberada», animó a los militares a adornar sus discursos con referencias a Dios y a la religión, ausentes en las proclamas del golpe militar y en las declaraciones de los días posteriores. Les convenció de lo importante que era la vinculación emocional, además de destruir y aniquilar al enemigo, en un momento en el que sabían lo que no querían pero todavía carecían de un proyecto político claro. La unión entre la «Religión y el Patriotismo», las «virtudes de la Raza», reforzaba la unidad nacional y daba legitimidad al exterminio que habían emprendido en aquel verano de 1936.

Esa identificación del clero y de las masas católicas con los militares sublevados se manifestó desde los primeros momentos de la guerra en rogativas procesionales, en «reposición» y «regreso» de los crucifijos a las escuelas, prohibidos como símbolos religiosos por la República. Lo que se hacía ahora era abolir la legislación republicana y restaurar la España tradicional, algo que suscitaba adhesiones y fervores.

Los símbolos republicanos, anarquistas, socialistas y laicos se derrumbaban ante el empuje unido de la milicia y la religión. En Pamplona, una de las primeras cosas

que los carlistas hicieron tras la sublevación fue romper a martillazos las placas que contenían los nombres de ilustres socialistas y republicanos en calles y plazas. Viejos hábitos de la religiosidad popular fueron recuperados. Volvieron las fiestas religiosas al calendario oficial y comenzaron a celebrarse otras, «nacionales», que acompañaron posteriormente a la dictadura de Franco hasta su muerte.

En definitiva, la lectura de la guerra en clave de cruzada le llegó a la jerarquía eclesiástica desde los frentes, desde las manifestaciones populares de fervor religioso que inundaron la geografía de la España sublevada contra la República. Las autoridades eclesiásticas, desde sus refugios y palacios episcopales, captaron ese espíritu de rebelión religiosa y lo forraron de razón y legitimidad. Hablaron después de que otros actuaran, y eso les sirvió para reforzar todavía más la justicia de su causa, la impresión de que sólo entraron en escena cuando la violencia anticlerical y revolucionaria no les dejó otra opción. Ni habían participado en la sublevación ni habían empujado a nadie a la guerra. Pero ahí estaban, obligados por la decadencia material y espiritual en que «los rojos» estaban dejando a la Patria. Sabían que ése era el mejor planteamiento para legitimar de golpe la sublevación militar, es decir, el derecho a la rebelión, y la guerra exterminadora que la siguió.

La unión entre la espada y la cruz, la religión y el «movimiento cívico-militar» es un tema recurrente en todas las instrucciones, circulares, cartas y exhortaciones pastorales que los obispos difundieron durante agosto de 1936. Antes de acabar ese mes, tres obispos ya habían aplicado explícitamente la categoría de «cruzada religiosa» a la guerra. Lo hizo Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, el 23 de agosto. Lo repitió tres días más tarde Rigoberto Domenech, arzobispo de Zaragoza. Y lo dejó para la posteridad de forma tajante Tomás Muniz Pablos, arzobispo de Santiago, el 31 de agosto: la guerra «levantada» contra los enemigos de España es «patriótica, sí, muy patriótica, pero fundamentalmente una Cruzada religiosa, del mismo tipo que las Cruzadas de la Edad Media, pues ahora como entonces se lucha por la fe de Cristo y por la libertad de los pueblos. ¡Dios lo quiere! ¡Santiago y cierra España!»[17].

Por los impulsos que la animaron y por su trascendencia, la cruzada de 1936-1939 , insistía el arzobispo de Santiago, era igual que aquella otra que «fundió en los mismos moldes a las razas ibéricas», desde Covadonga y «las andanzas del Cid» al «epílogo» de la batalla de Lepanto, cuando «pudo Europa sentirse definitivamente libre de la barbarie mahometana y asiática». Toda la historia de España había sido una cruzada. Lo decían los obispos y lo dijo también en Sevilla el 15 de agosto el monárquico y ultracatólico José María Pemán: «La misión providencial e histórica de España ha sido siempre ésta: redimir al mundo civilizado de todos sus peligros, expulsar moros, detener turcos, bautizar indios…»[18].

Si esa idea recorría el pensamiento eclesiástico y tradicionalista español, si había sido revivida en la lucha contra el francés invasor en la llamada guerra de la Independencia del siglo XIX, ¿cómo no iba a aparecer en aquellos momentos

«gravísimos» de 1936? El general Emilio Mola, poco dado a construcciones teológicas, fue uno de los primeros militares en captar los beneficios que podía tener la entrada de lo sagrado en escena, las ventajas de proponer principios superiores como guía de un conflicto político y de clases. La cita es sustanciosa y está sacada de su alocución por Radio Castilla el 15 de agosto de 1936: «Se nos pregunta […] que adónde vamos. Es fácil, y ya lo hemos repetido muchas veces. A imponer el orden, a dar pan y trabajo a todos los españoles y a hacer la justicia por igual. Y luego, sobre las ruinas que el Frente Popular dejó —sangre, fango y lágrimas—, edificar un Estado grande, fuerte y poderoso que ha de tener por galardón y remate allá en la altura una Cruz […] símbolo de nuestra religión y de nuestra Fe, lo único que ha quedado a salvo entre tanta barbarie»[19].

El 1 de octubre de 1936 el general Francisco Franco fue nombrado en Salamanca máxima autoridad militar y política de la zona rebelde, en una ceremonia en la que Miguel Cabanellas, en presencia de diplomáticos de Italia, Alemania y Portugal, le entregó el poder en nombre de la Junta de Defensa que presidía desde el 24 de julio y que fue disuelta ese día. Franco adoptó el título de «Caudillo», que le conectaba con los guerreros medievales. A partir de ese momento, Franco fue tratado por la jerarquía de la Iglesia católica como un santo, el salvador de España y de la cristiandad. El cardenal Gomá le envió un telegrama de felicitación por su elección de «Jefe de Gobierno del Estado Español» y Franco le contestó que, al asumir esa Jefatura «con todas sus responsabilidades, no podía recibir mejor auxilio que la bendición de Vuestra Eminencia»[20].

Sin tapujos ni rodeos. Franco cuidaba ya por esas fechas de pregonar su religiosidad, había captado, como la mayoría de sus compañeros de armas, lo importante que era meter la religión en sus declaraciones públicas y fundirse con el «pueblo» en solemnes actos religiosos. Una vez establecido como Jefe de Estado, cuenta Paul Preston, sus propagandistas moldearon una imagen de «gran cruzado católico» y su religiosidad pública experimentó una notable transformación. Desde el 4 de octubre de 1936 hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975, Franco tuvo un capellán privado, el padre José María Bulart. Oía misa todos los días y, cuando podía, se juntaba por la tarde con su señora, doña Carmen Polo y Martínez Valdés, a rezar el rosario. En fin, que aquel hombre era un «cristiano ejemplar», un «bonísimo católico», decía Gomá, «que no concibe el Estado español fuera de sus líneas tradicionales de catolicismo en todos los órdenes»[21].

Obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la «ciudad terrenal» y Franco acabó creyendo que, efectivamente, tenía una relación especial con la divina providencia. Gomá se derretía en halagos cada vez que mencionaba su nombre y Pla y Deniel le cedió su palacio episcopal en Salamanca para que lo utilizara como centro de operaciones, el «cuartel general» como se le conoció por toda la España cristiana. Allí, rodeado de la guardia mora, le rendían pleitesía los humanos. Porque él era como un rey de la edad de oro

de la Monarquía española, entrando y saliendo de las iglesias bajo palio. Franco necesitaba el apoyo y la bendición de la Iglesia católica. Para que lo reconocieran todos los católicos y gentes de orden del mundo, con el Papa a la cabeza. Para llevar a buen fin una guerra de exterminio y pasar como un santo. Caudillo y santo. Que estuviera tranquila la Iglesia, que él sabría pagar tanta gratitud. Ya se lo decía Gomá al cardenal Pacelli el 9 de noviembre de 1936, cuando Franco sólo llevaba un mes de Jefe supremo: «He hablado largamente con el Jefe de Estado […] Las impresiones son francamente favorables […] Hay el propósito de respetar la libertad de la Iglesia, de fomentar los intereses de la religión católica, de invitar a la Santa Sede a un Concordato, de atender a las necesidades temporales de la Iglesia y de sus ministros, de defender la enseñanza y darle un sentido francamente cristiano en todos sus grados»[22].

Franco y Gomá, los obispos y Franco tan unidos y, sin embargo, en una parte de la prensa católica del mundo y en algunos círculos católicos europeos se dudaba de «la justicia» de la causa que los había hermanado. Sobre todo después de que la ofensiva del general Mola en el norte dejara como huella crueles y masivos bombardeos para romper la moral de la población civil y destruir las comunicaciones terrestres. Empezó la Legión Cóndor con Durango el 31 de marzo de 1937. Ciento veintisiete civiles resultaron muertos durante el bombardeo y otros tantos murieron como consecuencia de las heridas recibidas. Entre las víctimas se encontraban catorce monjas y dos sacerdotes, uno de los cuales, el padre Morilla, estaba celebrando misa.

Más cruel todavía, de auténtico terror de masas, fue el bombardeo de Gernika el 26 de abril organizado por el jefe de la Legión Cóndor, el coronel Wolfram von Richthofen, tras varias consultas con el entonces coronel Juan Vigón, jefe del estado mayor de Mola. Gernika era un símbolo de identidad vasca y Vigón y Mola lo sabían. Aquel lunes 26 de abril era día de mercado en Gernika. Entre habitantes, refugiados y campesinos que acudieron al mercado había en la antigua capital de los vascos unas diez mil personas. La ciudad no tenía defensas antiaéreas. Fue atacada a mitad de tarde durante tres horas por la Legión Cóndor y por la italiana Aviazione Legionaria bajo el mando del general Richthofen. El gobierno de Euzkadi estimó que las víctimas mortales pasaban de las mil quinientas y que un millar de personas más habrían sido heridas en el bombardeo, aunque el número de muertos, que no se sabe con exactitud, no debió de llegar a quinientos.

Los servicios de prensa y propaganda de Franco negaron al principio que hubiera ocurrido un bombardeo en Gernika. Cuando esa posición se hizo insostenible, atribuyeron la destrucción de Gernika a los propios vascos, un falso cuento mantenido durante toda la dictadura. Pero había testigos, entre ellos cuatro periodistas y el sacerdote vasco Alberto Onaindía. Dos días después del bombardeo, George Steer, corresponsal de *The Times*, publicó en su periódico y en *The New York Times* un relato de la matanza que daría la vuelta al mundo. Todos podían saber ya que Gernika había sido destruido por bombas explosivas e incendiarias. Lo que han dicho

algunos historiadores después, salvo los franquistas, también está claro: la iniciativa salió del estado mayor de Mola y los alemanes la pusieron en marcha. Gracias a Pablo Picasso, además, Gernika se convirtió en el símbolo de las atrocidades de la guerra[23].

Bombas explosivas sobre una indefensa población civil. La masacre parecía confirmar lo que unos pocos intelectuales católicos estaban ya difundiendo en el extranjero: que en la España cristiana de Franco se asesinaba sin piedad. Franco, preocupado por las repercusiones que esas informaciones pudieran tener en algunas cancillerías europeas, llamó personalmente al cardenal Isidro Gomá a una entrevista, que se celebró el 10 de mayo de 1937. Franco le pidió, según la versión del propio Gomá, que «el Episcopado español […] publique un escrito que, dirigido al Episcopado de todo el mundo, con ruego de que procure su reproducción en la prensa católica, pueda llegar a poner la verdad en su punto, haciendo a un mismo tiempo obra patriótica y de depuración histórica, que podría redundar en gran bien para la causa católica de todo el mundo».

Gomá se dio buena prisa en satisfacer la petición de Franco. El 15 de mayo envió una carta «reservada» a todos los obispos explicándoles el ruego de Franco. Todos respondieron afirmativamente, menos Vidal i Barraquer que en su carta del 30 de mayo insistía en que un «Documento colectivo» no era la manera más «eficaz, oportuna y discreta», aunque estaba de acuerdo en que urgía «hacer una intensa propaganda a favor de nuestra desgraciada España, en particular en lo referente a la persecución religiosa». Vidal era partidario de escribir «cartas particulares» a cardenales y obispos extranjeros. Le molestaba, en clara alusión a Franco, «aceptar sugerencias de personas extrañas a la Jerarquía en asuntos de su incumbencia», es decir, que la Iglesia, en vez de evitar el «partidismo político», apareciera tan manchada con la causa de los militares rebeldes[24].

La «Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero» estaba fechada el 1 de julio de 1937, pero fue enviada a los obispos tres semanas después, con el ruego de que no la divulgaran hasta que comenzara su difusión en el extranjero. La firmaron 43 obispos y 5 vicarios capitulares. Gomá envió por esas fechas dos ejemplares a Franco indicándole, como si Franco fuera ajeno a esa idea, que se había escrito «a fin de que la verdad de la vida de España en estos últimos años sea conocida y, especialmente, lo que representa para nuestra querida Patria y para la civilización de occidente el Movimiento Nacional».

Nada nuevo, desde el punto de vista doctrinal, había en esa Carta que no hubiera sido ya dicho por obispos, sacerdotes y religiosos en los doce meses que habían pasado desde la sublevación militar. Pero la resonancia internacional fue tan grande, editada inmediatamente en francés, italiano e inglés, que muchos tragaron para siempre la versión maniquea y manipuladora que la Iglesia transmitió de aquel «plebiscito armado»: que el Movimiento Nacional encarnaba las virtudes de la mejor tradición cristiana y el Gobierno republicano todos los vicios inherentes al

comunismo ruso. Además de insistir en el bulo de que el «alzamiento militar» había frenado una revolución comunista planeada a fecha fija y de ofrecer la típica apología del orden, tranquilidad y justicia que reinaban en el territorio «nacional», los obispos incorporaban un asunto de capital importancia, que todavía hoy es la posición oficial de la jerarquía: la Iglesia fue «víctima inocente, pacífica, indefensa» de esa guerra y «antes de perecer totalmente en manos del comunismo», apoyó a la causa que garantizaba «los principios fundamentales de la sociedad». La Iglesia era «bienhechora del pueblo» y no «agresora». Los agresores eran los otros, los que habían provocado esa revolución «comunista», «antiespañola» y «anticristiana»[25].

La Carta colectiva consiguió la adhesión de los episcopados de treinta y dos países y de unos novecientos obispos. «Debemos felicitarnos de haber contribuido con dicho Documento a disipar los equívocos y a poner en buena luz los hechos e ideas que con la guerra actual se ventilan en España», le escribía Gomá a Pacelli el 12 de octubre de 1937. El respaldo sin contemplaciones al bando rebelde sirvió de argumento definitivo para los católicos y gentes de orden del mundo entero. Fundamentalmente porque iba acompañado de un descarado silencio acerca de la violencia exterminadora que los militares habían puesto en marcha desde el primer momento de la sublevación. La Carta demonizaba al enemigo, al que sólo movía la voluntad de persecución religiosa, y codificaba definitivamente el apadrinamiento de la guerra como cruzada santa y justa contra la disgregación patriótica-religiosa realizada por el comunismo.

Franco y la Iglesia católica salieron notablemente reforzados. La conversión de la guerra en un conflicto puramente religioso, en el que quedaban al margen los aspectos políticos y sociales, justificó la violencia ya consumada y legitimó a Franco para seguir matando. La Iglesia, compañera de viaje de los militares rebeldes desde la primera estación, tomaba posiciones de primera en el tren que conducía a la victoria. El entonces director de Propaganda, Javier Conde, le transmitió al jesuita Constantino Bayle, redactor de *Razón y Fe* y hombre de confianza de Gomá, lo satisfechos que estaban en los círculos políticos y militares franquistas con aquel milagroso documento: «Diga Ud. al señor Cardenal que se lo digo yo, práctico en estos menesteres: que más ha logrado él con la Carta Colectiva que los demás con todos nuestros afanes»[26].

Cuando apareció esa «Carta colectiva», varias decenas de miles de «rojos» habían sido ya asesinados. La mayoría del clero, con los obispos a la cabeza, no sólo silenció esa ola de terror, sino que la aprobó e incluso colaboró «en cuerpo y alma» en la represión. Era la justicia de Dios, implacable y necesaria, que derramaba abundantemente la sangre de los «sin Dios» para lograr la supervivencia de la Iglesia, de la institución representante de Dios en la Tierra, el mantenimiento del orden tradicional y la «unidad de la Patria».

Los obispos y la mayor parte del clero fueron cómplices de ese terror militar y falangista, que no necesitaba en la mayoría de las ocasiones de procedimientos ni

garantías previas. Lo silenciaban, lo aprobaban y lo aplaudían públicamente. Capellanes de las cárceles y del Ejército; religiosos y curas rurales. Estaban tan entusiasmados con el resurgimiento religioso de España que no oían los gritos de las torturas, los disparos al alba, los gemidos de las viudas. Los curas delataban a los rojos, les negaban certificados de buena conducta para que los militares los castigaran.

Administrar los últimos sacramentos a los que iban a ser asesinados se convirtió en una de las principales preocupaciones del clero católico. La cuestión no residía en salvar sus cuerpos, que merecían, según el clero, ese final, sino en poder salvar al menos sus almas. El rito de la muerte fue descrito con precisión por Gumersindo de Estella, el padre capuchino que se encargó de la asistencia espiritual a los reos en la cárcel de Zaragoza durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra[27].

La capilla de la cárcel de Torrero de Zaragoza era un local destinado a «sala de jueces», donde, los días en que había ejecuciones, se improvisaba un altar con lo necesario para la misa. Un retrato de Franco presidía la ceremonia hasta que a mediados de 1938 Gumersindo de Estella consiguió que fuera retirado, tras haber señalado insistentemente a las autoridades que «la presencia de Franco en la Capilla y en su altar como santo, crispaba los nervios de los reos y les causaba feroz indignación porque sabían que las sentencias de muerte eran firmadas por él».

Entraban los presos en capilla alrededor de las cinco de la mañana. El sacerdote contaba con una hora «para la preparación espiritual de los reos», tiempo que a don Gumersindo le parecía corto, especialmente cuando eran varios los que iban a ser ejecutados. Hablaba con ellos, les preguntaba por sus familias, por la causa de la muerte y sobre todo si practicaban la religión. Algunos aceptaban la confesión y la comunión «con recogimiento envidiable». A otros había que convencerles de la necesidad de «buscar consuelo en lo sobrenatural». Había quienes, por último, no admitían diálogo o se negaban a recibir auxilio espiritual. «No señor, no me invite a practicar la religión», le dijo un reo el 11 de junio de 1938. «Las derechas están matando en nombre de la Religión y hacen la guerra en nombre de la Religión. Y una Religión que les inspira tanta crueldad, no la quiero».

A las seis de la mañana los guardias civiles comenzaban «la faena» de atarles las manos. De la cárcel se trasladaban a las tapias del cementerio en una camioneta. Durante el corto recorrido, continuaban sin cesar los «ayes lastimosos» que el sacerdote trataba de calmar dándoles a besar el crucifijo. Les acompañaba hasta que eran colocados en fila mirando la tapia. Tras caer derribados por los tiros del pelotón de fusilamiento, les daba la absolución y la extremaunción, antes de que el teniente de turno se acercara y les descargara «dos o tres tiros de pistola en la cabeza»[28].

Especial virulencia tuvo la ofensiva clerical y católica contra los maestros. El clero no dudó en achacar todos los males de la sociedad moderna a la «labor disolvente» de intelectuales y maestros. Los veían como rivales, que competían por la clientela y que trataban de quitar a la Iglesia el monopolio y la administración de los

valores éticos. Los ataques de la jerarquía y de los jesuitas se centraron desde comienzos del siglo XX en la Institución Libre de Enseñanza, que se llevaba a las elites cultas y mostraba un notable éxito en lo que los jesuitas se habían marcado como objetivo, influir en la formación de la cultura nacional a través de la educación de la elite. Para los curas rurales y sacerdotes de los barrios obreros, los maestros, cuando eran laicos y anticlericales, competían por ofrecer a la comunidad servicios similares a los de ellos: legitimar el poder civil en vez del religioso; hacer de guardianes de los valores éticos y cívicos; influir en las nuevas generaciones. La jerarquía de la Iglesia y los jesuitas desde arriba y los sacerdotes y religiosos desde abajo crearon una «mentalidad católica» que se sintió acosada por lo forastero y lo moderno. La Segunda República fue para ellos el momento culminante de ese asedio. En la «guerra santa» y en la posguerra, amparados ya sin trabas por la dictadura exterminadora de lo forastero, saldaron cuentas.

Aquellos intelectuales y maestros que más se habían identificado con las ideas liberales, republicanas, anarquizantes o socialistas, que más habían batallado contra la enseñanza religiosa, que se habían propuesto «sovietizar» la escuela, lo iban a pagar caro. Entre la guerra y la posguerra, más de cincuenta mil maestros fueron sometidos a expedientes de depuración.

Amigos y defensores de los asesinos en un bando y mártires en el otro. Ésa fue la doble faz del clero español durante la Guerra Civil. La jerarquía eclesiástica, los sacerdotes diocesanos y los religiosos de las diversas órdenes no necesitaron hacer equilibrios para legitimar desde el principio la violencia organizada y ejecutada por los sublevados. Pero la reacción anticlerical que desencadenó el golpe militar allí donde fue derrotado contribuyó todavía más a que prestaran todos sus servicios ideológicos y propagandísticos al ejército rebelde, a que persiguieran al infiel hasta la tumba, a que secundaran con más ahínco la paz incivil que siguió a la guerra.

«Los hijos de Caín[29]»

Porque una cosa parece indiscutible, confirmada por todas las investigaciones: el clero y las cosas sagradas constituyeron el primer objetivo de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de los sublevados y de quienes protagonizaron la «limpieza» emprendida en el verano de 1936. No hubo que esperar órdenes de nadie para lanzarse a la acción. Algunos carmelitas fueron asesinados ya el 20 de julio en Barcelona en el mismo instante en que el regimiento de Caballería sublevado, que se había encerrado en su convento, era derrotado. Cerca de allí, en Igualada, el primer acto violento que se produjo fue la quema del convento de los frailes capuchinos. Las mismas escenas se sucedieron en muchos pueblos y ciudades de España, incluso en aquellos lugares donde la represión contra los «elementos de orden» adquirió mayor intensidad en la segunda quincena de agosto y primeros días de septiembre. En

Murcia, que no se destacó por la arremetida violenta contra el clero, la mayoría de los conventos fueron asaltados en esos doce días finales de julio. Y el 90 por ciento del millar de eclesiásticos asesinados en Madrid cayeron en los dos primeros meses, bastante antes de las «sacas» masivas de noviembre.

El castigo fue de dimensiones ingentes, devastador, en aquellas comarcas donde la derrota del golpe militar abrió un proceso revolucionario súbito y destructor. No hay que dar muchas vueltas para hacer balance: más de 6800 eclesiásticos, del clero secular y regular, fueron asesinados; una buena parte de las iglesias, ermitas y santuarios fueron incendiados o sufrieron saqueos y profanaciones, con sus objetos de arte y culto destruidos total o parcialmente. Tampoco se libraron de la acción anticlerical los cementerios y lugares de enterramiento, donde abundaron la profanación de tumbas de sacerdotes y la exhumación de restos óseos de frailes y monjas.

Quemar una iglesia o matar a un eclesiástico es lo primero que se hizo tras la derrota de la sublevación en muchos pueblos y ciudades. Sobre todo en Cataluña, donde cayó más de un tercio del clero pasado por las armas en la España republicana. Al clero se le asesinaba sin necesidad de pasar por juicios o tribunales. Si hay un terror «caliente», ése es el que se le aplicó al clero, al que rara vez se le encarcelaba. Por la cárcel Modelo de Barcelona sólo pasaron 240 religiosos durante toda la guerra, el 1,8 por ciento del total de los reclusos, y hasta finales de 1936 habían ingresado únicamente 46. Claro que, bajo esas circunstancias, la cárcel era un «privilegio» para ellos y, por supuesto, el lugar más seguro. Y nada de extraño tiene que hubiera algún cura que no quisiera abandonarla, como Josep Ribas Ventura, de sesenta y un años, al que habían encarcelado el 19 de agosto de 1936 y que se negó a salir cuando el comisario general de Orden Público ordenó su libertad en abril de 1937[30].

«Acción directa» pura y dura. Eso es lo que necesitaba el clero. Lo declaraba públicamente Andreu Nin, destacado dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), a comienzos de agosto de 1936. Nin, que varios meses después sería secuestrado y asesinado por los servicios secretos comunistas, pensaba y decía lo mismo que otros muchos revolucionarios, republicanos de izquierda y dirigentes sindicales: que la legislación anticlerical de la República «burguesa» no había solucionado el «problema» de la Iglesia. Había tenido que resolverlo la clase obrera en la explosión revolucionaria activada por el golpe militar. Y lo habían resuelto los trabajadores y los revolucionarios como ellos sabían, «yendo a la raíz», no dejando una iglesia en pie, suprimiendo «los sacerdotes, las iglesias y el culto»[31].

Lo que hicieron los revolucionarios y sus dirigentes con el clero en el verano de 1936 era, por fin, y de eso no había duda, lo que muchos decían que iban a hacer desde comienzos de siglo, cuando intelectuales de izquierda, políticos entonces radicales como Alejandro Lerroux y militantes obreros, situaron a la Iglesia y a sus representantes como máximos enemigos de la libertad, del pueblo y del progreso, un honor que en la retórica revolucionaria obrera estaba reservado hasta ese momento al

capital y al Estado. Todos prometieron que la revolución traería consigo, entre otras muchas cosas, «la tea purificadora» para los edificios religiosos y los «parásitos» de sotana. Y cuando llegó de verdad la hora, lo pusieron en práctica.

No fueron los revolucionarios quienes desataron la revolución. Tampoco fue esa revolución el resultado directo de la intensificación de la lucha de clases. Fue causada, se sabe bien, por un golpe militar frustrado, por un acontecimiento provocado desde fuera. Una vez desencadenada, sin embargo, el clero apareció como un objetivo fácilmente identificable. Se liquidaban heridas abiertas por los conflictos de clase, por las luchas sociales y sus represiones sangrientas, tan habituales en aquella España de la Monarquía o de la República, pero se disparaba también, y con puntería, al clero. Y a la venganza de esos revolucionarios, es verdad, se sumó la de muchos oportunistas, delincuentes y gorrones, que nunca habían luchado por traer esa revolución, confundidos todos en ese «pueblo-proletariado en armas». Pero, por muy tranquilizador que eso resulte, no cambia la historia.

A la Iglesia se la perseguía por muchos motivos y en ese terreno hay que tener en cuenta la opinión de sus detractores y perseguidores, aunque lo que declaren expresamente no siempre coincida con sus motivaciones profundas. José Álvarez Junco argumenta que la crítica anticlerical, prolija, reiterativa, llena de matices, «más que a un análisis del poder social de la Iglesia y sus consecuencias, lleva a reproches fundamentalmente éticos». Existía, por supuesto, entre la Iglesia y el anticlericalismo una dura batalla sobre temas fundamentales relacionados con la organización de la sociedad y del Estado. Pero las que originaban manifestaciones y contra-manifestaciones, quema de conventos y violencia contra el clero eran cuestiones «más simbólicas y culturales», de fuerte atracción popular[32].

Se acusaba al clero católico de «traición al Evangelio», de «fariseísmo», de abandono de los rasgos originarios de fraternidad y pobreza, un asunto recurrente en la prensa anarquista que Gerald Brenan elevó a la categoría de explicación. La violencia anticlerical sería para el antropólogo británico la expresión de una «profunda religiosidad», de un pueblo «intensamente religioso que siente que ha sido abandonado y engañado». Lo pensaba también así Gumersindo de Estella, el capellán de la cárcel de Zaragoza, y los pocos católicos que percibieron que el anticlericalismo no era sólo expresión de la «furia popular» manipulada por políticos demagogos y revolucionarios. «Siempre mantuve que en el fondo eso de quemar las iglesias era un acto de fe», le declaró a Ronald Fraser uno de esos católicos, Maurici Serrahima, abogado y miembro destacado de Unió Democràtica, que brindó refugio a once capuchinos del convento de Sarriá y ayudó a sacar del país al cardenal de Tarragona Francesc Vidal i Barraquer. «Es decir, un acto de protesta porque la Iglesia, a ojos del pueblo, no era lo que debía ser. El desengaño de alguien que cree y ama y es traicionado. Surge de la idea de que la Iglesia debería estar al lado de los pobres y no lo está, como en verdad no lo había estado durante muchos años, exceptuando algunos de sus miembros. Una protesta contra la sumisión de la Iglesia a las clases

acomodadas.»[33]

Desde el joven Lerroux al obrero anarquista, pasando por las publicaciones anticlericales más corrosivas como *El Motín* de principios de siglo, o *La Traca* en el período republicano, compartían la idea de que el clero tenía un ansia insaciable de poder y dinero. El clero en general y los jesuitas en particular, muy ricos y con escasos reparos morales. Poseían todo y su codicia siempre les pedía más. Lo escribió Alejandro Lerroux en 1907: «Se apoderan de las herencias, se procuran donaciones piadosas, catequizan a las hijas de las familias ricas y las hunden en sus monasterios»[34].

A los clérigos se les representaba siempre en los grabados de ésa prensa anticlerical gordos y lustrosos, rodeados de sacos de dinero que esconden mientras piden limosna. Y ya en la guerra civil, en la arremetida anticlerical del verano de 1936, los mismos milicianos y grupos armados que se llevaban a los obispos para asesinarlos, asaltaban sus palacios episcopales en busca de las grandes fortunas que se suponía tenían en ellos ocultas. Varios millones de pesetas se habrían encontrado, por ejemplo, en el asalto al palacio episcopal de Jaén, según aireó la prensa socialista madrileña. El obispo, Manuel Basulto Jiménez, fue asesinado unos días después[35].

Pero el tema preferido de los periódicos y revistas anticlericales, según ha demostrado también Álvarez Junco, era la vida sexual de los clérigos, a quienes se atribuye una conducta «antinatural», unas veces por defecto, que les lleva a todo tipo de «aberraciones», o la mayoría de ellas por exceso. «De manera abusiva los periódicos republicanos u obreros reproducen historias, chistes o grabados sobre curas que viven maritalmente con sus amas y tienen hijos con ellas, confesores que acarician lascivamente a las devotas, capellanes que gozan de una vida orgiástica en conventos de monjas». Y la introducción de ese elemento «antinatural» permite contemplar al clero como un grupo social «maldito», un secta frente a la cual se puede actuar porque es algo ajeno a la colectividad, diferente al resto de los mortales, con esas sotanas negras, símbolos externos de su «negro proceder»[36].

La cosa podrá sorprender hoy a muchos, de difícil comprensión si sólo se interpreta el anticlericalismo como un ataque al poder político e influencia social del clero. La historia dice, sin embargo, que en los asaltos a los conventos durante la Semana Trágica y casi treinta años después, durante la Guerra Civil, la muchedumbre mostraba una morbosa curiosidad por las tumbas de frailes y monjas, donde seguro que ocultaban, según se suponía, fetos o sofisticados artilugios pornográficos. No era normal estar encerrados allí en un convento y de ellos podría esperarse todo.

La vida conventual, explica la historiadora británica Frances Lannon, «constituía un escándalo y una provocación para un gran número de gentes situadas en la izquierda política, y que vivían al margen del universo cultural católico». La virginidad de por vida, libremente escogida, era un fenómeno peculiar del catolicismo, tanto para las mujeres como para los hombres, aunque muchas más mujeres que hombres elegían ese camino. Pese a que las cifras de las diferentes

fuentes no coinciden, había en España en 1931 unos 115 000 clérigos, en una población que no llegaba a los 23 millones. De ellos, casi 60 000 eran religiosas, 35 000 sacerdotes diocesanos y 15 000 religiosos. En cualquier caso, el número de monjas era tres veces superior al de religiosos y superior también a la suma de religiosos y sacerdotes diocesanos.

La hostilidad hacia las monjas se plasmaba en el mismo terreno que la crítica al clero en general, empezando por el control de la enseñanza como poderoso instrumento de reproducción cultural del catolicismo, pero se subrayaba todavía más en ellas ese elemento «antinatural» de renuncia al sexo y a la maternidad. Pero, al contrario de lo que pasaba con los hombres, que parecían tener la capacidad de elegir libremente, en el caso de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes matiza Lannon, «persistía la sospecha […] de que adoptaban esta opción antinatural bajo coacción, y esto se expresaba en la cultura tanto literaria como popular».

Tenía que haber algo de engaño y coacción para que jovencitas de catorce o quince años entrasen como prenovicias en los conventos. Ése era el mensaje de *Electra*, la pieza teatral de Benito Pérez Galdós, cuya representación provocó importantes manifestaciones en algunas ciudades españolas en 1901. *Electra* estaba basada además en un caso legal contemporáneo en el que los padres de una joven que había entrado en un convento denunciaban que no podía tratarse de una elección libre. Y sintonizaba perfectamente con la noción popular de que el celibato no era normal. De ahí también el éxito del famoso artículo de Lerroux escrito unos años después, en 1906, en el que, según la interpretación de Álvarez Junco, «señalaba genialmente a sus huestes el más alto objetivo del inconsciente machista católico: la violación de las novicias». Por repetir su famosa frase: «alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres»[37].

El ritual de desenterrar cuerpos de monjas se repitió abundantemente en las jornadas de violencia anticlerical y revolucionaria del verano de 1936. Pero el número de monjas asesinadas es infinitamente menor que el de frailes y sacerdotes. Y pese a todos los tópicos e imágenes convencionales sobre el asunto, la incitación a violar monjas que Lerroux había hecho treinta años antes no tuvo en 1936 seguidores.

Vayamos con los números. Según el estudio que el obispo Antonio Montero Moreno publicó en 1961, principal referente de autoridad por lo que respecta a las cifras, fueron asesinadas en toda España 283 monjas. Muchas, si de lo que se trata es de argumentar que no hubiera tenido que haber ninguna que sufriera ese martirio. Pero muy pocas si se compara con los 4184 sacerdotes diocesanos y los 2365 religiosos que corrieron esa fatal suerte. Y como reconoce Montero, que baja la cifra total de monjas para aquel año a «unas 45 000», más de la mitad quedaron en «zona roja». No era pues por falta de posibles víctimas[38].

Hay datos curiosos y sorprendentes en todo ese asunto. Por ejemplo, en las zonas de dominio anarquista dejaron casi siempre vivas a las monjas, aunque se las obliga a abandonar los conventos y los hábitos, destinándolas a la asistencia social o a la

servidumbre. El caso de la diócesis de Barbastro, tierra de paso de las milicias anarquistas procedentes de Cataluña, es harto elocuente. De los 140 curas incardinados en esa diócesis, 123 (nada menos que el 87,8 por ciento) fueron asesinados. Igual destino sufrieron 51 claretianos, 18 benedictinos y 9 escolapios, cifras que colocan a la diócesis de Barbastro como la más castigada de España si se pone en relación el clero incardinado con el asesinado. A ninguna religiosa se le infligió el mismo castigo.

En Cataluña, donde tanto abundaron las matanzas colectivas de frailes, asesinaron sólo a 50 religiosas. Para encontrar a monjas asesinadas en grupos hay que viajar al País Valenciano y sobre todo a Madrid, y en ambos casos los asesinatos en masa ocurrieron en noviembre de 1936, cuando en el resto de la España republicana había ya cesado el terror «caliente» contra el clero. La matanza más numerosa, según la investigación de Antonio Montero, ocurrió en la madrugada del 10 de noviembre de 1936, cuando 23 religiosas adoratrices fueron fusiladas junto a las tapias del cementerio madrileño del Este.

Da la impresión, por lo tanto, de que había razones específicas para respetar más la vida de las monjas que la de los frailes o curas. Estaría, en primer lugar, esa sospecha de que las mujeres jóvenes ingresaban en los conventos bajo coacción, presionadas por los confesores, hombres, jesuitas decía Lerroux, que en verdad eran quienes tenían la capacidad de manejar el poder político y conectar con los grupos oligárquicos de influencia económica y social. En el «imaginario colectivo» anticlerical, y en la realidad, las monjas estaban menos politizadas que los clérigos varones. Ellas no eran «culpables»; los curas y frailes, sí.

La sociedad española del primer tercio del siglo XX ofrecía muy pocas oportunidades a las mujeres en el plano profesional y familiar y las órdenes religiosas acabaron siendo también, pese a sus restricciones sexuales y sociales, una alternativa a la marginación en la vida diaria. El crecimiento mayor en las congregaciones femeninas respecto a las masculinas se concentraba además, como indica Frances Lannon, «en las comunidades activas más que en las contemplativas, de manera que la Iglesia podía apelar a miles de monjas que eran profesoras, enfermeras y trabajadoras sociales, para formar parte de sus redes en la sociedad española». No parece casualidad carente de significado que las Hermanitas de los Pobres salieran ilesas de la persecución y que lo que se criticaba de las monjas en las publicaciones anticlericales era que quitaran esa labor social, asistencial y educativa a mujeres obreras «normales», que sí sabían «lo que es cariño de madre»[39].

Liberar a las monjas, matar a los curas y frailes y prender fuego a todos los edificios religiosos. Eso es lo que se hizo en el verano de 1936, cuando la explosión revolucionaria puso en representación única y definitiva lo que en oleadas anticlericales anteriores se había ensayado.

El fuego como símbolo de destrucción de lo viejo y de purificación, obligada estación de paso a la nueva vida. En Manzanares (Ciudad Real), mientras se destruían

las imágenes y retablos de la iglesia parroquial, «numerosas personas» ayudaban a transportar líquidos inflamables, en cubos, latas y recipientes diversos. Regaron los muros del edificio y la escalera de la torre, para prenderle fuego a continuación «rompiendo a balazos los cristales de las ventanas superiores para favorecer el tiro»[40]. En la población turolense de Híjar, según escribía el 6 de agosto el corresponsal de *Solidaridad Obrera*: «Las iglesias ardían. Después se hizo un gran montón con todos los documentos del Archivo Municipal, y aún están ardiendo y hay para días. El Registro de la Propiedad ardió también íntegramente. La bandera roja y negra flamea gloriosa presenciando estas cosas tan buenas». Y cosa buena era borrar el pasado, los símbolos del orden. Por eso, junto a los objetos religiosos, se llevaban a la hoguera los documentos del archivo municipal, del juzgado, las actas notariales y de propiedad. Y junto a curas, se asesinaba en los pueblos a propietarios y cargos políticos, representantes del «capital, Estado y religión», los tres poderes que, según reiteraba la prensa anarquista, sometían al pueblo.

La ofensiva anticlerical que se propagó por los pueblos de la mitad oriental de Aragón por donde pasaban las milicias fue de las sonadas y dejó numerosas huellas, todavía presentes. Los milicianos, junto con vecinos del lugar, recogían de las casas las imágenes y los objetos de culto religioso. Entraban en la iglesia con caballerías, tiraban los santos al suelo y los arrastraban hasta la plaza. Allí los apilaban —«los santos encima de las santas»— al lado de otros objetos de culto, junto a los documentos municipales y eclesiásticos, a los registros de propiedad, religión y orden inextricablemente unidos, y al atardecer, según la descripción del rito que la antropóloga norteamericana Susan Harding ha realizado de la población oscense de Ibieca, «prendían fuego al montón».

Todas las iglesias cerraron al culto, convertidas en mercado de abastos, almacenes, albergues de milicianos, cárceles, salones de baile, comedores públicos o garajes. Las casas parroquiales fueron utilizadas como vivienda de políticos y militares, centros culturales u oficinas de los comités revolucionarios. En Benabarre (Huesca), la iglesia del convento de las monjas dominicas la convirtieron en cuadra de animales[41].

El «martirio de las cosas» descubre, según la interpretación de Montero Moreno, «una saña contra el mundo religioso mucho más significativa que si los aniquilados son hombres de carne y hueso». La cosas eran más «inocentes» que las personas. De ahí el «ensañamiento» obsesivo con los objetos sagrados[42].

Hay, sin embargo, otras interpretaciones. El antropólogo Bruce Lincoln sostiene, por el contrario, que un acto de iconoclastia nunca es un intento de destruir el poder sagrado de un icono, «puesto que los iconoclastas actúan convencidos de que no tiene ninguno. Su intención es, más bien, demostrar a todos los observadores, sean éstos iconoclastas, iconolatras o neutrales, la *impotencia* del icono, al mismo tiempo que tratan de hacer ostensible un poder intelectual, político y/o material superior al de los iconolatras». Quienes veneran esas imágenes se sienten deshonrados, perciben la

quiebra de sus más preciadas creencias y, de paso, «la impotencia frente al asalto de los enemigos»[43].

Los extranjeros que, procedentes de países más avanzados y de religión protestante, fueron testigos de esa iconoclastia estaban impresionados por el espectáculo tan exótico y colorista, especialmente si eran turistas revolucionarios de paso por el paraíso terrenal levantado por los obreros y campesinos españoles. La australiana Mary Low, que como George Orwell, Franz Borkenau, Agustín Souchy y tantos otros llegó a Barcelona y pasó por tierras aragonesas, se enroló como miliciana en la columna «Lenin» del POUM, llamada después 29.ª División, que dirigía José Rovira. En esas comarcas del Alto Aragón pudo comprobar que había muchos campesinos que nada sabían de política pero que tenían claro que la culpa de todos los males la tenían la Iglesia y los santos. Por eso los quemaban: «Utilizábamos las estatuas de madera pintada de los santos para encender el fuego con el que cocinábamos. Los habían arrojado en la plaza cuando la iglesia fue quemada. Había escasez de madera, así que un día astillábamos a Santa Eduvigis virgen y mártir, y al día siguiente a Antonio de Padua…»[44].

Espectacular fue también la mofa carnavalesca de la parafernalia eclesiástica. En Ciudad Real, según la «Causa General», hubo «fingimiento de bodas, con todas las prostitutas de esta capital […] y de procesiones con todos los ornamentos sagrados». En Alcañiz, una localidad de la provincia de Teruel célebre por sus procesiones de Semana Santa, algunos individuos parodiaron la del Santo Entierro: se pusieron los ornamentos, metieron a un hombre en el Santo Sepulcro y lo llevaron en procesión por las calles. Cerca de allí, en Híjar, otro lugar de procesiones, un individuo revestido con el manto de Jesús el Nazareno se paseó por las calles acompañado por otros que portaban traje talar. En Calanda, la población turolense que había visto nacer al cineasta Luis Buñuel, vecinos «distinguidos» fueron obligados a conducir entre burlas una imagen de la Virgen del Pilar hasta la plaza de toros para destruirla allí. Y en Ciempozuelos (Madrid), el 13 de septiembre de 1936, fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, se obligó a ciudadanos derechistas a portar a la patrona en procesión, mientras los anticlericales los acompañaban vestidos con ropas litúrgicas y entre cantos soeces y blasfemias.

La blasfemia, según muchos testigos, se convirtió en una especie de salvoconducto en la zona republicana. Quien no blasfemaba se convertía en sospechoso y, como reflejan esos testimonios aducidos por Montero Moreno y otros autores de martirologios, los clérigos y católicos sufrían en todas partes golpes y torturas por negarse a proferir blasfemias. El caso es que en una zona los curas querían confesar a toda costa a los rojos y obligarles a gritar «¡Viva Cristo Rey!» antes de morir y en la otra quienes mataban a los curas les obligaban a blasfemar, a sumergirse en el último soplo de vida en la apostasía. Así de religiosa, por exceso o por defecto, resultó aquella contienda.

Durante unos meses se vivió el sueño, o la pesadilla, de una sociedad laica, al

margen de la Iglesia católica, con sus propias costumbres, calendarios y ritos, un asunto que, según Julio de la Cueva, «había sido objeto de los esfuerzos de republicanos radicales, socialistas y anarquistas desde varias décadas atrás». «Casábamos y divorciábamos sin exigir más aportación de documentos que lo absolutamente indispensable», dejó escrito el anticlerical Eduardo Barriobero, diputado federal en las Cortes Constituyentes de la República y que había sido nombrado Abogado Jefe de la Oficina Jurídica creada por la Generalitat el 28 de agosto de 1936[45].

Calles, pueblos, lugares geográficos y nombres de personas que incluían alguna alusión divina o sagrada cambiaban sus denominaciones por otras adaptadas a los nuevos tiempos de la revolución. Todo lo que habían intentado los republicanos y socialistas que crearon la Constitución republicana de 1931, para modernizar, según ellos, el Estado y la sociedad española, se ponía ahora en práctica sin frenos ni restricciones.

El conflicto de largo alcance entre la Iglesia y los proyectos secularizadores lo resolvieron las armas a partir de una sublevación militar que dividió a España en dos bandos, identificados, para la historia que aquí interesa, por la defensa de la Iglesia y de la religión católica o por la hostilidad hacia ellas. Tres cosas sustanciales cambiaron de repente con esa sustitución de los medios políticos por los procedimientos armados, las tres a la vez, sin que pueda decirse que una provocara a la otra. La primera es que la Iglesia se sintió salvada con la sublevación y por eso ofreció sus manos y su bendición a los golpistas desde el primer disparo. La segunda, que la violencia anticlerical, de unas dimensiones sin precedentes ni parangón histórico en los países del entorno, endureció las posiciones de la jerarquía de la Iglesia y de los católicos, reafirmó su ardor guerrero y patriótico y bloqueó cualquier posibilidad de piedad o perdón. Por último, esa necesidad de «recatolizar» por las armas mostró el fracaso histórico de la Iglesia para atraerse a amplias capas de pobres rurales y urbanos, que la identificaron con el sistema imperante de relaciones de clase y de propiedad.

La Iglesia sufrió una brutal persecución como consecuencia de todo ello, pero lo hizo pagar con creces. El derrumbe del Estado, el caos administrativo y el reparto de armas entre aquellos dispuestos a cogerlas inauguró tiempos de desorden, sin reglas ni gobierno, una auténtica convulsión milenarista e igualitaria. Los proletarios imponían su «sentido plebeyo de la vida», los burgueses tenían que vestirse de obreros, los campesinos tomaban las tierras, los delincuentes hacían de policías. Y la «furia popular» personalizó en el clero la responsabilidad por todas las penas pasadas. La Iglesia, en palabras de Frances Lannon, «tuvo que pagar un precio cruel por su identificación con un sistema de relaciones de clase y de propiedad que ella no había creado»[46].

Trece obispos cayeron víctimas de la violencia anticlerical durante la Guerra Civil. Nueve de ellos fueron asesinados en agosto de 1936, mes de la muerte también

para los clérigos. Sólo el obispo de Barcelona y el administrador apostólico de Orihuela sobrevivieron unos meses al terror «caliente» de aquel fatídico verano de 1936. El de Teruel, Anselmo Polanco, fue el último en caer, a dos meses escasos de la victoria final del ejército de Franco.

Todos los martirologios repiten lo mismo, para que no quede duda alguna y puedan ser considerados auténticos mártires de la persecución religiosa. Murieron dando vivas a España y a Cristo Rey. Pudieron escapar y no quisieron. Sus cuerpos fueron sometidos a múltiples vejaciones y mutilaciones. Cuando caían abatidos con otros clérigos o católicos, ellos mismos se encargaban de dar la absolución a quienes les acompañaban.

Veintiocho de las 60 diócesis que había en España quedaron en zona republicana desde el verano de 1936. En diez de ellas los revolucionarios encontraron muy pronto al obispo y lo asesinaron. Algunos obispos pudieron salvar la vida porque no estaban en el momento de la sublevación en la ciudad donde se encontraba la sede episcopal. Ése fue el caso de Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, pero sobre todo del cardenal primado Isidro Gomá y Tomás. Es casi seguro que de haber estado en Toledo, el cardenal Gomá, dada su relevancia y declarada significación antirrepublicana, hubiera sido asesinado.

Pero hubo otros obispos que pudieron salvar sus vidas por la mediación e intervención de las autoridades republicanas. Ocurrió sobre todo en Cataluña. Con Félix Bilbao, obispo de Tortosa, y Francisco Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona, conducidos por representantes de la Generalitat al puerto de Barcelona en el que embarcaron el 30 de julio hacia Italia. A José Cartañá, obispo de Gerona, lo salvó la protección del Conseller de Cultura, Ventura Gassol, gracias al cual, a través de Francia, llegó a Pamplona. El de Vic, el mallorquín Juan Perelló, consiguió camuflarse en un barco y huir a Génova, para pasarse en marzo de 1937 a Mallorca. Justino Guitart, obispo de Urgell, pudo escapar con facilidad a Andorra, territorio del que era Príncipe Soberano. Fallaron, sin embargo, las gestiones para salvar a Manuel Borrás Farré, obispo auxiliar de Tarragona, asesinado cerca de Montblanc el 12 de agosto de 1936.

En Menorca, según Montero Moreno, «la ceguera y la avanzada edad del obispo, doctor Torres i Ribas, contuvieron a las hordas y le fue permitida la residencia en el palacio episcopal hasta bien entrado octubre del 36. El 21 de este mes fue trasladado al Hospital Municipal en calidad de asilado, y allí permaneció hasta su muerte, el 1 de enero de 1939». Tenía 92 años. Muy cerca de allí, en Ibiza, el obispo Antonio Cardona Riera estuvo escondido el largo mes en que las milicias del capitán Bayo tuvieron controlada la isla. De película de aventuras fue lo del obispo de Cartagena Miguel de los Santos Díaz de Gómara, quien huyó desde Alicante disfrazado de marino alemán.

De una muerte segura libraron los nacionalistas vascos a José Eguino y Trecu, obispo de Santander, quien había estado detenido en el buque prisión *Alfonso Pérez*,

asaltado tras el bombardeo franquista de la capital cántabra del 27 de diciembre de 1936 por una «multitud enfurecida» que se llevó por delante a 156 presos, 13 de ellos eclesiásticos. Y caso particular fue también el de Remigio Gandásegui, arzobispo de Valladolid, que pudo salir de Guipúzcoa por mediación del PNV y aterrizar en su sede episcopal sano y salvo, rodeado de militares y falangistas a los que cumplimentar, abrazando al general Mola y agradeciendo su suerte con dinero para la causa[47].

Toda esa violencia anticlerical no representaba tanto un ataque a la religión como a una específica institución religiosa, la Iglesia católica, estrechamente ligada según se suponía a los ricos y poderosos. Y no es que la mayoría de esos miles de eclesiásticos asesinados, curas y frailes, fueran ricos, que no lo eran y no era eso lo que importaba. Pero predicaban la pobreza y ambicionaban la riqueza. Hablaban del cielo y en la práctica sólo se preocupaban por los valores mundanos. Eran una plaga, decía la prensa republicana y obrera, la desgracia nacional que impedía al pueblo avanzar. Una crítica, como hemos tratado de demostrar, cargada de simbolismos, ingredientes culturales y reproches éticos. Sin ellos, resulta muy difícil explicar el trasfondo de aquella matanza.

Habrá quienes acudan al tópico socorrido de la responsabilidad anarquista, aunque esa violencia anticlerical adquirió buena dosis de desmesura en muchas zonas donde dominaban socialistas, comunistas o republicanos. Los arrebatos contra el clero fueron especialmente intensos en el País Valenciano, sobre todo en las comarcas del interior de Valencia y Castellón, pero tampoco se quedaron a la zaga en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Málaga o Jaén. En esta última ciudad, ya el 20 de julio de 1936 algunos hombres de las recién creadas milicias populares asaltaron el convento de la Merced, lo saquearon y asesinaron a cuatro religiosos. En realidad, salvo en el País Vasco, donde sólo fueron asesinados 45 clérigos, llevar una sotana se convirtió en símbolo de implacable persecución en toda la zona republicana, con porcentajes menores en Murcia, Albacete, Badajoz y Santander[48].

La religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la batalla que sobre temas fundamentales relacionados con la organización de la sociedad y del Estado se estaba librando en territorio español. La religión fue desde el principio muy útil porque, como dice Bruce Lincoln, «demostró ser el único elemento que generaba de manera sistemática una corriente de simpatía internacional en favor de la causa nacionalista del general Franco». El anticlericalismo violento que estalló con la sublevación militar no aportó, sin embargo, beneficio alguno a la causa republicana. El incendio público de imaginería y culto religioso, la utilización de iglesias como establos y almacenes, la fundición de campanas para munición, la supresión de actos religiosos, la exhumación de frailes y monjas, y el asesinato del clero regular y secular fueron narrados y difundidos, en España y más allá de los Pirineos y de los mares, con todo lujo de detalles, ilustrados a menudo con fotografías macabras y espeluznantes, constituyendo el símbolo por excelencia del «terror rojo».

La Guerra Civil adquirió así una dimensión religiosa que condenó al anticlericalismo a pasar a la historia como una ideología y práctica negativas y no como un importante fenómeno de la historia cultural, con su visión particular de la verdad, de la sociedad y de la libertad humanas. Todos los partidarios de la República derrotada se vieron obligados a ponerse a la defensiva en el tema religioso, aunque sabían lo importante que había sido la batalla por la enseñanza, por la creación de una burocracia laica y por someter a las órdenes religiosas a la legislación de asociaciones civiles. Todo se lo engulló el saldo mortal que el anticlericalismo había dejado, los 6832 clérigos asesinados. De modo que, desde la guerra, aclara el mismo Lincoln, «incluso los historiadores liberales más favorables a la República se han visto forzados a reconocer la existencia de tales acontecimientos y a describirlos como un lamentable exceso perpetrado por fanáticos incontrolados en medio de la tensión de la crisis»[49].

El anticlericalismo sirvió también para que los vencedores ajustaran cuentas con los vencidos, recordándoles durante décadas los efectos devastadores de la matanza del clero y de la destrucción de lo sagrado. Después de la guerra, las iglesias y la geografía española se llenaron de memoria de los vencedores, de placas conmemorativas de los «caídos por Dios y la Patria», mientras se pasaba un tupido velo por la «limpieza» que en nombre de Dios habían emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien. La conmoción dejada por el anticlericalismo tapó el exterminio religioso y sentó la idea falsa de que la Iglesia sólo apoyó a los militares rebeldes cuando se vio acosada por esa violencia persecutoria.

Ya lo había dicho Rigoberto Doménech, arzobispo de Zaragoza, a comienzos de agosto de 1936: «La violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la Patria y la Religión»[50]. El hecho de que esa violencia se ejecutara en nombre de valores tan superiores como la Patria y la Religión, con mayúsculas, facilitaba mucho las cosas, comparada con esa otra violencia «en servicio de la anarquía». Además, si lo que se defendía resultaba tan importante y decisivo como la supervivencia de la Iglesia, de la sociedad perfecta, de la institución representante de Dios en la Tierra, el derramamiento de sangre de los «sin Dios», de los «hijos de Caín», era justo y legítimo, consecuencia de una «guerra santa de reconquista espiritual» que exigía ese baño de sangre para arrancar de raíz lo imperfecto.

Los estragos ocasionados por la persecución anticlerical, la constatación de los sacrilegios y asesinatos del clero cometidos por los «rojos», multiplicaron el impacto emocional que causaba el recuerdo constante de los mártires asesinados. El ritual y la mitología montados en torno a esos mártires le dio a la Iglesia todavía más poder y presencia entre quienes iban a ser los vencedores de la guerra, anuló cualquier atisbo de sensibilidad hacia los vencidos y atizó las pasiones vengativas del clero, que no cesaron durante largos años.

Resulta imposible, por lo tanto, y de ahí el importante espacio que le hemos

dedicado, pasar por alto la dimensión religiosa de la Guerra Civil española, una guerra «santa y justa» por un lado, y de arrebato airado contra el clero por otro, que ha dejado importantes huellas en los recuerdos y memorias de los españoles.

3
Una guerra internacional en suelo español

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA se manifestó en un violento combate político sobre los principios básicos en torno a los cuales debía organizarse la sociedad y el Estado. Para los españoles ha pasado a la historia por la tremenda violencia que generó, pero, pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la Guerra Civil española debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países. Porque la guerra en España reforzó las tendencias maniqueas de esa época, la creencia, como apunta Piers Brendon, «de que el mundo era el escenario de un duelo cósmico entre el bien y el mal»[1].

En el escenario internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo, España era, hasta julio de 1936, un país marginal, secundario. Todo cambió, sin embargo, a partir de la sublevación militar de ese mes. En unas pocas semanas, el conflicto español recién iniciado se situó en el centro de las preocupaciones de las principales potencias, dividió profundamente a la opinión pública, generó pasiones y España pasó a ser el símbolo de los combates entre fascismo, democracia y comunismo.

Lo que era en su origen un conflicto entre ciudadanos de un mismo país derivó muy pronto en una guerra con actores internacionales. La situación internacional era en ese momento muy poco propicia para la República, y para una paz negociada, y eso marcó de forma decisiva la duración, curso y desenlace de la Guerra Civil española. La Depresión había alimentado el extremismo y minado la fe en el liberalismo y la democracia. Además, la subida al poder de Hitler y los nazis en Alemania y la política de rearme emprendida por los principales países europeos desde comienzos de esa década crearon un clima de incertidumbre y crisis que redujo la seguridad internacional.

EL ACOSO A LA REPÚBLICA

El Gobierno legal de la República no iba a tener muchos defensores en las cancillerías diplomáticas de los países europeos occidentales, empezando por Whitehall. Alarmados por la revolución social que estallaba en las ciudades supuestamente bajo control del Gobierno republicano y por el riesgo del avance del comunismo, los conservadores británicos, entonces en el poder con Stanley Baldwin, vieron desde el principio la Guerra Civil española como una cuestión de «Rebel versus Rabble». La expresión la acusó *Sir* Henry Chilton, embajador británico en Madrid, a quien la sublevación militar le cogió en San Sebastián y de allí pasó a la ciudad francesa fronteriza de Hendaya, donde se quedaría ya el resto de la guerra. Chilton, como otros de sus colegas, pensaba que los militares rebeldes, con el general Franco a la cabeza, estaban defendiendo sus intereses, los de «nuestra clase», y temían que una victoria republicana volviera a España «roja»[2].

Los componentes básicos de esa dimensión internacional de la Guerra Civil española son bien conocidos gracias a las investigaciones de un notable grupo de historiadores. Desde la subida al poder de Adolf Hitler a comienzos de 1933, los gobernantes británicos y franceses pusieron en marcha la llamada «política de apaciguamiento», consistente en evitar una nueva guerra a costa de aceptar las demandas revisionistas de las dictaduras fascistas, siempre y cuando no se pusieran en peligro los intereses de Francia y Gran Bretaña. Según Enrique Moradiellos, la respuesta de esos dos países «ante el estallido de la Guerra Civil española y sus implicaciones internacionales se subordinaron en todo momento a los objetivos básicos de esa política de apaciguamiento general»[3]. Por el contrario, según Ángel Viñas, «el apoyo del Tercer Reich fue un elemento absolutamente esencial para que el golpe militar de 1936 se configurara como Guerra Civil y para que se desarrollara como tal»[4].

Una victoria de los militares sublevados que restableciera el orden y anulara los experimentos revolucionarios tenía para Gran Bretaña muchas más ventajas que el triunfo del Gobierno republicano. De ahí que los británicos, basándose en la propuesta francesa, defendieran desde el principio abstenerse del apoyo a los dos bandos en lucha y profundizar en la política de no intervención.

Ya el 1 de agosto de 1936 el Gobierno francés de Léon Blum había planteado a británicos, italianos y alemanes un acuerdo de no intervención en los asuntos españoles. Esa posición, transmitida por el ministro francés de Asuntos Exteriores, el radical Ivon Delbos, se impuso con fuerza a partir de entonces. Los jefes del Estado Mayor francés consideraron además como objetivo principal evitar una intervención que enemistara a Francia con Italia y complicara la paz en el Mediterráneo. La propuesta de Francia incluía también la prohibición de envío y venta de armas a republicanos y sublevados. El 13 de agosto, el Gobierno galo cerró la frontera de los Pirineos.

La reacción del Gobierno de Baldwin ante la propuesta francesa fue inmediata,

porque se adaptaba perfectamente a la política defendida entonces por los círculos diplomáticos de Gran Bretaña. El embajador británico en París, *Sir* George Clerk, le advirtió a Delbos, en una entrevista a comienzos de agosto, que detrás del «gobierno de Madrid» se escondían «los elementos anarquistas más extremistas» y le solicitó que, mientras se hacía efectivo el acuerdo de no intervención, no se efectuaran suministros de armamento ni material militar con destino a España[5].

El embajador británico no ocultaba sus simpatías hacia los militares sublevados, «los únicos capaces de derrotar la anarquía y la influencia soviética», y tampoco las ocultaban el ministro de Asuntos Exteriores Anthony Eden y sobre todo el embajador en España, *Sir* Henry Chilton, quien en vez de regresar a Madrid, permaneció en Hendaya esperando a que los rebeldes ganaran pronto la guerra. Luis Bolín, corresponsal del periódico monárquico *ABC* en Londres, nombrado por el general Franco su nuevo jefe de prensa, y el duque de Alba, duque también de Berwick, influían en los círculos exquisitos de la política británica contándoles las «atrocidades de los rojos». Y la base naval de Gibraltar «estaba atestada de refugiados partidarios de los nacionales»[6].

El peligro comunista parecía estar en España y algunas autoridades británicas no tenían ningún reparo en divulgarlo. El cónsul general en Barcelona, Norma King, comunicó en un telegrama al Foreign Office a finales de julio que las compañías británicas estaban siendo colectivizadas por los anarquistas y que si el Gobierno republicano era capaz de aplastar la rebelión militar, «España se precipitaría en el caos de alguna forma de bolchevismo»[7].

En general, los círculos diplomáticos aristocráticos y burgueses y la jerarquía de la Iglesia anglicana, con la excepción del obispo de Cork, apoyaban a los militares rebeldes, mientras que el Partido Laborista, los sindicatos y muchos intelectuales se inclinaban por la causa republicana. La sociedad británica experimentó, como mostró hace tiempo el estudio de K. W. Watkins, una «profunda» división interna en torno a los acontecimientos en España, muy condicionada también por «una situación europea amenazante»[8].

La posición de Washington, en sintonía con la del Reino Unido, consistió desde el principio, como lo transmitió Cordell Hull, secretario de Estado, a Claude Bowers, embajador en España, «en abstenernos escrupulosamente de cualquier interferencia en la infortunada situación española»[9]. Esa política de Estados Unidos y Gran Bretaña, plasmada en lo que Douglas Little llama «la neutralidad benévola», ponía en el mismo plano a un Gobierno legal y a un grupo de militares rebeldes.

Antes de finales de agosto de 1936, todos los gobiernos europeos, excepto el de Suiza, neutral por mandato constitucional, habían suscrito oficialmente el Acuerdo de No Intervención en España. Francia y Gran Bretaña lo firmaron el 15 de agosto; Italia el 21; la Unión Soviética el 23; y Alemania el 24. En él, tras deplorar «los trágicos acontecimientos de que España es teatro», decidían «abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país» y prohibían

«la exportación […] reexportación y tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra»[10]. Para vigilar la aplicación de ese acuerdo se constituyó el 9 de septiembre en Londres un Comité de No Intervención, presidido por Lord Plymouth, subsecretario parlamentario del Foreing Office y un Subcomité compuesto por los delegados de los países fronterizos con España y con los principales productores de armas, entre los que estaban Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y la Unión Soviética.

Aunque firmaron el Acuerdo, Hitler, Mussolini y el dictador de Portugal Oliveira Salazar, porque querían mantener buena relación con Gran Bretaña y Francia, no tenían ninguna intención de respetarlo, lo burlaron sistemáticamente y continuaron enviando a Franco armas, municiones y apoyo logístico. Antes de finalizar agosto, Franco había recibido 48 aviones de combate procedentes de Italia y 41 de Alemania[11]. Para la Alemania nazi y la Italia fascista, la intervención en la Guerra Civil española significó el inicio y la consolidación de una nueva alianza diplomática que, a través del establecimiento del «Eje Roma-Berlín», sellado formalmente en octubre de 1936, tendría importantes repercusiones en la futura política internacional. Que Alemania e Italia no iban a respetar el acuerdo suscrito ya quedó claro el 28 de agosto de 1936 cuando el almirante Wilhelm Cannaris y el general Mario Roatta, jefes de los servicios secretos militares de ambos países, decidieron en una reunión en Roma «proseguir [a pesar del embargo de armas] los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco», al único que se remitiría «ayuda material»[12].

En la práctica, por lo tanto, el sabotaje ítalo-germano y la débil respuesta ante él de Francia y Gran Bretaña determinaron el fracaso de la política de no intervención y dejaron a la República en clara desventaja respecto a los militares sublevados contra ella. Y eso que Léon Blum, el jefe del Gobierno francés, al comprobar la continuidad de la intervención nazi y fascista toleró en algunos momentos el contrabando, a través de la frontera de los Pirineos, de armas compradas por la República en diversos países. A partir de julio de 1938, Francia cerró definitivamente la frontera y dejó a la República, en sus últimos meses de guerra, antes de la derrota final, sola ante el asedio fascista[13].

Aunque la propaganda nazi y fascista trató de mostrar la naturaleza ideológica de la intervención, el anticomunismo, las razones para intervenir del Führer y del Duce tuvieron que ver mucho con la estrategia militar y con su política de alianzas. Hitler consideró, como ya probaron hace tiempo las investigaciones de Ángel Viñas, que la ayuda a Franco favorecía los intereses de su política exterior, en la medida en que se podía sustituir un régimen democrático y profrancés por otro afín al Tercer Reich. En el caso de Mussolini, había un cálculo muy claro de que la victoria de Franco debilitaría la posición militar de Francia y permitiría a Italia desarrollar con menos problemas sus planes expansionistas en el Mediterráneo.

Para Hitler, la derrota de Francia, objetivo primordial para llevar a cabo sus

ambiciones expansionistas en Europa central y del este, sería mucho más fácil con una España dominada por militares anticomunistas. Una victoria republicana, por el contrario, reforzaría los vínculos de España con Francia y la Unión Soviética, las dos potencias que al oeste y el este se oponían a las ansias imperialistas del Tercer Reich. Además, los nazis utilizaron el suelo español como campo de pruebas, tal y como declaró Herman Goering, ministro nazi de Aviación, ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg: «pude someter a prueba mi joven aviación […] cazas, bombarderos y cañones antiaéreos, y así tuve la posibilidad de comprobar si el material había sido desarrollado de acuerdo con sus fines»[14].

Mientras la diplomacia internacional movía sus fichas para pactar la no intervención en la guerra de España, la Segunda República se había quedado prácticamente sin cuerpo diplomático. Como consecuencia de la sublevación militar de julio de 1936, la mayoría de los funcionarios de las embajadas y consulados españoles en los principales países europeos desertaron y otros que oficialmente no lo hicieron estaban en realidad al servicio de los militares rebeldes. Los embajadores en Roma, Berlín, París y Washington dimitieron en las primeras semanas y de la amplia representación que tenía la República en Gran Bretaña sólo permanecieron leales a ella el cónsul general en Londres, el agregado comercial y el cónsul en Southampton[15].

El socialista Julio Álvarez del Vayo, ministro de Estado del Gobierno de Francisco Largo Caballero, formado el 4 de septiembre de 1936, calculó que el 90 por ciento del cuerpo diplomático y consular había abandonado sus puestos. Bajo esas condiciones, con la imperiosa necesidad de reconstruir su cuerpo diplomático, a la República le resultó muy difícil lograr apoyos exteriores. Para sustituir a los diplomáticos desafectos, utilizó a prestigiosos intelectuales y profesores universitarios, casi todos procedentes del Partido Socialista: el jurista Fernando de los Ríos, que ya había sido ministro de la República desde abril de 1931 hasta septiembre de 1933, fue embajador en Washington; el doctor Marcelino Pascua en Moscú; el periodista Luis Araquistain en París; y Pablo de Azcárate, el único que tenía de verdad experiencia en la diplomatura internacional, se hizo cargo de la embajada en Londres.

Para crear su cuerpo diplomático, por el contrario, los militares rebeldes pudieron contar con ilustres miembros de la aristocracia y de los círculos diplomáticos y financieros, muy bien relacionados con los selectos grupos de la diplomacia internacional, como el duque de Alba y Juan de la Cierva en Londres, José María Quiñones de León en París y el marqués del Portago y el barón de la Torre en Berlín. El 4 de agosto de 1936, José Yanguas Messía, exministro de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, recién nombrado director del Gabinete Diplomático de la Junta de Defensa Nacional de Burgos, informaba a las autoridades militares de que «el tono general de la situación diplomática es favorable a nuestro movimiento […] porque en el mundo entero están hoy en plena lozanía los ímpetus arrolladores de los Estados

totalitarios» y pronosticaba que «la toma de Madrid» sería «determinante para que se reconozca oficialmente la legitimidad absoluta de nuestro movimiento»[16].

El pronóstico de los militares rebeldes sobre una rápida «toma de Madrid» no se cumplió porque, entre otras razones, cuando se produjo la batalla que parecía definitiva, en el otoño de 1936, los primeros envíos de ayuda militar soviética a la República cambiaron el rumbo de continuas victorias rebeldes y derrotas republicanas que se habían establecido desde el principio de la contienda. Los primeros barcos soviéticos cargados de armas pesadas llegaron al puerto de Cartagena el 4 y 15 de octubre. Las tropas del general Franco, jefe ya de los rebeldes desde el 1 de ese mes, se acercaban imparables a Madrid. Los italianos y alemanes habían logrado consolidar el sistema de apoyo militar a los rebeldes, mientras que Gran Bretaña y Francia observaban estrictamente el acuerdo de no intervención. Todo, en el plano internacional, resultaba favorable para los militares insurgentes. Las cosas cambiaron cuando Stalin decidió intervenir en la contienda. Habían pasado más de dos meses desde su estallido.

Armas para la República

Cuando comenzó la guerra, en julio de 1936, la Unión Soviética ni siquiera tenía embajador en España, pese a que la República había establecido por primera vez relaciones diplomáticas con el régimen soviético tres años antes. Para Stalin y la política exterior soviética, el estallido de un conflicto armado en España creaba una importante disyuntiva. No le interesaba dejar a la República abandonada, algo que fortalecería la posición de la Alemania nazi, pero tampoco quería ir en contra de la política marcada por las potencias democráticas, a quienes necesitaba para frenar a Hitler. Stalin creía al principio que la guerra podía limitarse a un conflicto entre españoles y que si se podía evitar la intervención fascista, la República podría sobrevivir.

Por eso, y dado que la Guerra Civil española no proporcionaba de entrada ninguna ventaja a los intereses de la Unión Soviética, el Gobierno de Stalin, a través de su comisario de Asuntos Exteriores, Maxim Litvinov, suscribió el 22 de agosto el Acuerdo de No Intervención. Unos días después, declaró oficialmente que no apoyaría con armas a la República española y nombró a Marcel Rosenberg embajador en Madrid. En las instrucciones que le dio el Kremlin se especificaba que «no era posible» ayudar a la República con material bélico, y que «nuestro apoyo proporcionaría a Alemania e Italia el pretexto para organizar una invasión abierta y un abastecimiento de tal volumen que nos sería imposible igualarlo». No obstante, como se decía en las mismas instrucciones, «si se probara que pese a la declaración de no intervención se sigue prestando apoyo a los sublevados, entonces podríamos cambiar nuestra decisión»[17].

Los indicios y las pruebas de que Hitler y Mussolini seguían ayudando a los militares sublevados alarmaron a Stalin. Si la República era derrotada rápidamente, la posición estratégica francesa frente a Alemania quedaría muy debilitada y el aumento del poder nazi y fascista tendría también repercusiones negativas para la Unión Soviética. Stalin preparó el camino. Advirtió al Comité de No Intervención que se vería obligado a incumplir los acuerdos si Alemania e Italia seguían haciendo lo mismo y calculó los posibles costes de la ayuda para que el Gobierno británico no la percibiera como un apoyo a la revolución que se había propagado por toda la zona republicana y los nazis no la tomaran como una intervención abierta.

En octubre llegaron los primeros envíos de armas a España. La Unión Soviética comenzó a hacer lo mismo que estaban haciendo Italia, Alemania y Portugal: incumplir los acuerdos de no intervención, sin abandonar oficialmente esa política. A partir de ese momento, la ayuda militar soviética a la República, pagada con las reservas de oro del Banco de España, no cesó hasta el final de la guerra y fue importantísima para sostener la causa republicana frente al ejército de Franco y el apoyo de Hitler y Mussolini. Además del material bélico, con una aportación muy sustancial de aviones y carros de combate, cifrada aproximadamente en 700 y 400 unidades respectivamente, la URSS envió alimentos, combustible, ropa y un número considerable, alrededor de dos mil personas en total, de pilotos, técnicos, asesores y funcionarios de la policía secreta, el NKVD, bajo el mando de Alexander Orlov. El pueblo soviético aportó millones de rublos para comprar ropa y alimentos, generando una movilización humanitaria extranjera sin precedentes en la historia[18].

Para comprar armas y financiar la guerra, la República contaba con las reservas metálicas del Banco de España que, tal y como manifestó el dirigente socialista Indalecio Prieto, apenas iniciada la contienda, pertenecían al Gobierno legítimo español, el único que podía disponer de ellas. Ese dinero fue vital para mantener una guerra de casi tres años contra los militares rebeldes y el apoyo de sus aliados nazis y fascistas. «Sin oro», afirma Pablo Martín Aceña, «el régimen se hubiera desplomado en cuestión de semanas». Por eso, además de en los campos de batalla y en las cancillerías, la Guerra Civil española se combatió también «en los solemnes despachos de los ministros de Hacienda y de los gobernadores de los bancos centrales»[19].

Las reservas metálicas del Banco de España se encontraban almacenadas en los sótanos de su edificio principal en la plaza de la Cibeles. El tesoro ascendía a 707 toneladas en lingotes y monedas, con un valor entonces de 805 millones de dólares. Era uno de los banco más ricos del mundo y una buena parte de esas monedas, depositadas sobre todo en dólares, estaban allí desde la Primera Guerra Mundial, en unos años en los que el crecimiento económico originado por la neutralidad española permitió abundantes compras de oro en el mercado internacional.

A finales de agosto de 1936, las tropas del ejército de África acechaban ya Madrid y el Gobierno de la República tuvo que tomar una decisión sobre qué hacer con las

reservas de oro[20]. El 12 de septiembre, a propuesta del socialista Juan Negrín, nuevo ministro de Hacienda del Gobierno que presidía Francisco Largo Caballero, decidió sacar de la capital las reservas de oro del Banco de España, para evitar que cayeran en manos de los enemigos de la República. Negrín le comunicó a Luis Nicolau d'Olwer, gobernador del Banco de España, que el oro iba a trasladarse a la Base Naval de Cartagena, al sureste de la Península, en el litoral Mediterráneo.

Los consejeros del Banco de España se mostraron muy críticos con esa medida y los pocos que supuestamente quedaban leales a la República desertaron. El único que permaneció en su puesto, Lorenzo Martínez Fresneda, representante de los accionistas privados, «no desaprovechó ninguna oportunidad», según Martín Aceña, «para filtrar las deliberaciones secretas» a los colegas que se habían pasado al bando insurgente. Porque, a la vez que se tomaba esa decisión de trasladar el oro a Cartagena, en Burgos se reunía el «Consejo del Banco de España nacional y todos sus consejeros se propusieron a partir de ese momento evitar que la República empleara el oro para defender su causa»[21].

El oro, sin embargo, no estuvo mucho tiempo en Cartagena. La política de no intervención se aplicó a la República desde el primer momento, pero las democracias occidentales no hacían nada por impedir el suministro de ayuda al ejército rebelde. Así las cosas, en medio de esa desesperada situación militar de la República, Arthur Stashevski, comisario político de la Unión Soviética, ofreció a Negrín hacerse cargo del oro a cambio de asegurar el envío permanente de armas. Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno español, aceptó ese ofrecimiento y decidió, según le comunicaba al embajador soviético en Madrid, Marcel Rosenberg, enviar el oro a la Unión Soviética y depositarlo en el Comisariado de Finanzas del Pueblo de ese país. Unos días después, marineros españoles y tanquistas rusos embarcaron en cuatro navíos mercantes 7800 cajas con 510 toneladas de oro. Los navíos salieron de la Base Naval de Cartagena el 25 de octubre, con destino al puerto de Odessa. Desde esa localidad del mar Negro, el oro fue transportado en tren a Moscú, a donde llegó a comienzos de noviembre.

Los gobernantes republicanos siempre defendieron que, debido a la falsa política de no intervención impuesta por las democracias, no les quedó otra opción que confiar en la Unión Soviética. Los historiadores han debatido en los últimos años sobre la oportunidad y acierto de aquella crucial decisión. Paul Preston, siguiendo a Ángel Viñas, cree que «los círculos bancarios de Inglaterra y Francia ya habían mostrado su hostilidad hacia la República, congelando algunos activos españoles, bloqueando prácticamente el crédito y obstaculizando de forma sistemática las transacciones financieras». La Unión Soviética era la única que garantizaba armamento y alimento a cambio de oro. Pablo Martín Aceña señala, por el contrario, que esa decisión se adoptó con precipitación y que las otras alternativas que había, como Francia o Estados Unidos, «no se exploraron seriamente»[22].

De lo que no hay duda, después del exhaustivo estudio que hizo Ángel Viñas hace

ya años, es que las divisas generadas por las ventas del oro fueron gastadas en su totalidad en compras de material bélico. Como resultado de esas operaciones, las autoridades republicanas consiguieron 714 millones de dólares, que fue el coste financiero de la Guerra Civil para la República. Pero el minucioso estudio de Gerald Howson demuestra que muchos de los fusiles vendidos eran de diseño de antes de la Primera Guerra Mundial y otros estaban muy desgastados. Los emisarios de la República tenían que negociar con los traficantes del libre comercio de armas y adquirir equipos obsoletos por los que pagaban mucho más del coste real. Franco, por el contrario, tuvo siempre a su disposición un suministro continuo y directo de armas de alta tecnología proporcionado por Alemania e Italia[23].

El coste económico de la guerra en el bando franquista fue muy similar, entre 694 y 716 millones de dólares, pero el bando de Franco tuvo que sufragarlos sobre todo con créditos, porque no tenía oro. Y si atendemos a los mejores estudios sobre ese tema, el jefe de los militares rebeldes no encontró dificultades para financiar su guerra. Fue Hermman Goering, el lugarteniente de Hitler, quien primero diseñó la estrategia para obtener beneficios económicos, alimentos, materias primas y minerales a cambio del suministro de armas a los militares rebeldes, para lo que se crearon sociedades de control del comercio bilateral hispano-alemán.

La mayor ayuda que alemanes e italianos proporcionaron a Franco se estableció, no obstante, en forma de créditos: entre 413 y 456 millones de dólares en el caso italiano y cerca de 240 millones en el alemán. Las autoridades franquistas se endeudaron con las potencias del Eje y lo compensaron aumentando de manera progresiva sus exportaciones hacia esos dos países. Alemania e Italia se convirtieron en los primeros clientes de España, en detrimento de Gran Bretaña y Francia. Cuando acabó la Guerra Civil, Alemania era el primer cliente y proveedor del mercado español.

Las investigaciones de Robert Whealey sobre la financiación de la guerra por parte de Franco aportaron también datos concluyentes. A los militares rebeldes no sólo les ayudaron las potencias del Eje sino que algunos de los mayores capitalistas y hombres de negocios de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos apoyaron su causa desde el principio porque veían a los republicanos españoles, pese a que decían combatir por la democracia, como socialistas, anarquistas y comunistas. Eso es lo que hizo la compañía británica de las minas de Río Tinto, la empresa de minas más importante de España, que cooperó con las autoridades militares rebeldes desde agosto de 1936 hasta el final de la guerra vendiendo el mineral a las sociedades financieras de control del comercio bilateral hispano-alemán.

Tampoco fue menor la contribución de las empresas de petróleo anglo-americanas Texaco, Shell y otras, que obtuvieron enormes beneficios, unos veinte millones de dólares, de la venta del petróleo a Franco durante toda la guerra. Sin ese petróleo, la maquinaria de guerra del ejército de Franco no hubiera funcionado, pues Italia y Alemania, como España, dependían del petróleo anglo-americano para sus

suministros. Franco recibió 3 500 000 toneladas de petróleo a crédito, más del doble de las importaciones que consiguió la República, y además algunos de esos magnates del petróleo entorpecieron el comercio hacia la República y bloquearon los créditos a su sistema bancario[24].

El apoyo económico a Franco le llegó también de los hombres más ricos del capitalismo español, que pusieron sus fortunas a disposición de los militares rebeldes para aniquilar a los «rojos». Juan March, que se había situado al frente de la batalla contra la República desde el día de su proclamación en abril de 1931, aportó 15 millones de libras esterlinas. Alfonso XIII, que desde su exilio favoreció también desde el principio la causa rebelde, «su primer soldado soy yo», le dijo a los generales Mola y Franco, donó 10 millones de dólares, una parte del dinero que había conseguido transferir al extranjero tras su caída[25]. Una «suscripción nacional» entregó además a los militares, de forma voluntaria o con coacciones, joyas y monedas de oro. Las listas de algunos de los principales benefactores se publicaban en la prensa, lo cual animaba a otros a hacerlo para no ser denunciados de «desafectos».

En los últimos años de la dictadura de Franco, algunos historiadores militares y adictos al régimen trataron de demostrar que los republicanos y los militares rebeldes habían recibido la misma cantidad de material, que la participación extranjera no fue decisiva para inclinar la balanza a favor de Franco y que eso de que la no intervención había perjudicado a los republicanos era un invento de los comunistas y de la izquierda internacional que sentía simpatía hacia la República. En palabras de uno de sus mejores representantes: «La intervención extranjera, invocada y conseguida simultáneamente por cada uno de los bandos, resultó relativamente contrapesada […] Atribuir la derrota de la España republicana a falta de medios es prolongar históricamente las excusas de la ineptitud y el derroche republicano»[26].

Frente a esos argumentos, que no suelen ir acompañados de pruebas documentales, los mejores expertos sobre la financiación de la guerra y su dimensión internacional, historiadores como Ángel Viñas, Enrique Moradiellos, Gerald Howson o Pablo Martín Aceña, han destacado el desequilibrio a favor de la causa franquista de suministros de material bélico, pero también de asistencia logística, diplomática y financiera. Al margen de las interpretaciones canónicas de un lado o de otro, estos historiadores subrayan la trascendencia de la intervención extranjera en el curso y desenlace de la guerra. La intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista y la retracción, en el mejor de los casos, de las democracias occidentales condicionaron de forma muy importante, si no decisiva, la evolución y duración del conflicto y su resultado final.

«Italia y Alemania hicieron mucho por España en 1936… Sin la ayuda de ambos países no existiría Franco hoy», le dijo Adolf Hitler a Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Benito Mussolini, en septiembre de 1940[27]. Hitler manifestó un juicio similar en sus «charlas de sobremesa» durante la Segunda Guerra

Mundial y antes, en vísperas del final de la Guerra Civil, el embajador alemán en España había explicado, en uno de sus informes remitido a Berlín, que «la decisiva victoria de Franco reside en la mejor moral de las tropas que luchan por la causa nacionalista, así como en su gran superioridad en el aire y en su mejor artillería y otro material de guerra»[28]. No parece una casualidad carente de significado que el agregado militar británico en España, poco sospechoso de simpatía por la causa republicana, insistiera también en «la persistente superioridad material de las fuerzas tradicionalistas en tierra y en el aire […] La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia [a la República] nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania [a Franco]»[29].

Pero a España no sólo llegaron armas y material de guerra. Llegaron también muchos voluntarios extranjeros, reclutados y organizados en las Brigadas Internacionales por la Internacional Comunista, que percibió muy claramente el impacto de la Guerra Civil española en el mundo y el deseo de muchos antifascistas de participar en esa lucha. Frente a la intervención soviética y a las Brigadas Internacionales, los nazis y fascistas incrementaron el apoyo material al ejército de Franco y enviaron asimismo miles de militares profesionales y combatientes voluntarios. La guerra no era sólo un asunto interno español. Se internacionalizó y con ello ganó en brutalidad y destrucción. Porque el territorio español se convirtió en campo de pruebas del nuevo armamento que estaba desarrollándose en esos años de rearme, previos a una gran guerra que se anunciaba.

Jason Gurney, un británico que dejó su país para luchar con la República, escribió en sus memorias sobre la Guerra Civil, *Crusade in Spain*, que para él «y para un buen número de gente como yo, se convirtió en el gran símbolo de la lucha entre democracia y fascismo en el mundo»[30].

No era sólo un combate entre fascismo y democracia. Había más, porque dentro de esa guerra en suelo español hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. En la Guerra Civil española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo[31]. Por eso tanta gente de diferentes países, obreros, intelectuales y escritores, se sintió emocionalmente comprometida con el conflicto.

SOLDADOS DE BATALLAS IDEOLÓGICAS

La decisión de organizar el envío de voluntarios a luchar en la Guerra Civil española la adoptó el 18 de septiembre de 1936 el Secretariado de la Internacional Comunista. El centro de reclutamiento fue París y de los aspectos organizativos se encargaron dirigentes del Partido Comunista Francés, con André Marty a la cabeza, y otros destacados agentes de la Comintern como Luigi Longo («Gallo») o Josip Broz («Tito»). Había muchos estalinistas, sobre todo en sus cuadros organizativos, pero miles de brigadistas no lo eran.

Llegaron a España a partir de octubre, desde Polonia, Italia, Alemania y otros países dominados por dictaduras y fascismos, aunque fue Francia quien aportó el mayor número de brigadistas. Los de Norteamérica llegaron más tarde, a finales de año, y el batallón Lincoln, el que forjó algunas de las leyendas más difundidas por escritores e intelectuales, no entró en acción hasta la batalla del Jarama, en febrero de 1937. Antes que ellos, varios cientos de izquierdistas a los que sorprendió el golpe militar en Barcelona, donde asistían a la Olimpiada Popular, también llamada antifascista, organizada como alternativa a los Juegos Olímpicos que se celebraban entonces en Berlín, ya se habían incorporado a las milicias anarquistas y socialistas.

Las cifras de brigadistas varían según las fuentes, desde los 100 000 que daban los franquistas para hinchar su influencia y el peso comunista internacional, a los 40 000 a los que se refería el estudio ya clásico sobre la Guerra Civil de Hugh Thomas. Uno de los análisis más recientes y exhaustivos sobre las Brigadas Internacionales, el de Michel Lefebvre y Rémi Skoutelsky, proporciona una cifra cercana a 35 000, aceptada hoy por bastantes historiadores, aunque nunca hubo más de 20 000 combatientes a la vez y en 1938 el número se había reducido ostensiblemente[32]. Unos 10 000 murieron en combate y, por países, llegaron a España de más de cincuenta: Francia aportó casi 9000 brigadistas, hubo 2000 alemanes, un millar de austriacos, otros 2000 británicos y los norteamericanos sumaron casi 2500, mientras que los portugueses no llegaron a 150.

Muchos de esos voluntarios que lucharon en el bando de la República se encontraban en paro, pero otros muchos dejaron sus trabajos. Había también aventureros en busca de emociones, intelectuales y profesionales de clases medias, que son los que después narraron en libros sus experiencias. La mayoría, no obstante, tenía claro que el fascismo era una amenaza internacional y España era el lugar apropiado para combatirlo. Así se lo decía un trabajador inglés, ni poeta ni intelectual, en una carta a su hija, reproducida por Watkins en su estudio sobre la división que la Guerra Civil española ocasionó en la sociedad británica: «Quiero explicarte por qué dejé Inglaterra. Te habrás enterado de la guerra que hay aquí. De todos los países del mundo, gente obrera como yo han venido a España a parar al fascismo. Así, aunque estoy a miles de millas de ti, estoy luchando para protegerte a ti y a todos los niños de Inglaterra, así como a la gente de todo el mundo»[33].

Esos obreros manuales, el 80 por ciento de los brigadistas procedentes de Gran Bretaña lo eran, se habían sentido atraídos por el Partido Comunista, que les daba

amparo y una doctrina fuerte a la que agarrarse. Era también el momento en el que en París confluyeron un montón de exiliados de la Europa oriental, central y balcánica, huidos de la represión fascista y policial. Desde allí pasaban por Barcelona y Valencia, hasta llegar a Albacete, base principal de los combatientes, donde les arengaba André Marty, el jefe de las Brigadas Internacionales.

Extranjeros fueron también muchos de los que lucharon en las tropas del ejército de Franco. Llegaron, como los brigadistas, desde muy diferentes lugares. Voluntarios no había muchos, porque la mayoría de los que lucharon, sobre todo alemanes e italianos, eran soldados regulares, bien preparados, a los que se les proporcionaba una paga en su país de origen. De los voluntarios genuinos, entre mil y mil quinientos, destacaron los católicos irlandeses, mandados por el general Eoin O'Duffy, que compartían la idea de cruzada apadrinada por la Iglesia católica española y el Papa Pío XI desde el Vaticano. Llevaban diversos emblemas religiosos, rosarios, imágenes del *Agnus Dei* y sagrados corazones de Jesús, como los carlistas españoles, y abandonaban Irlanda, según recordaba el propio O'Duffy, «para librar el combate de la cristiandad contra el comunismo». Sólo combatieron en la batalla del Jarama, en febrero de 1937, donde, dada su inexperiencia militar, no salieron muy airosos y unos meses después volvieron a su patria[34].

Además de esos «camisas azules» irlandeses, hubo en las tropas de Franco rusos blancos curtidos en la lucha contra los bolcheviques, un grupo variado de fascistas y antisemitas procedentes de la Europa oriental y unos trescientos franceses de la ultraderechista *Croix de Feu* que constituyeron el batallón Juana de Arco. No eran, sin embargo, voluntarios, aunque desde el bando de Franco siempre les presentaron como tales, los cerca de diez mil «Viriatos» alistados y pagados en Portugal. Con todos esos nuevos efectivos y la recluta intensiva de hombres de las tribus del Rif para el ejército de África, las tropas de Franco sumaban ya unos 200 000 hombres a finales de 1936.

Y faltaba todavía el mayor contingente de extranjeros, las decenas de miles de soldados que Alemania e Italia enviaron a luchar al lado de los militares rebeldes. Coincidiendo con la gran ofensiva de Franco sobre Madrid, Hitler decidió la creación de una unidad aérea que se integraría, como cuerpo autónomo de combate, con sus propios jefes y oficiales, en las filas franquistas. Se llamó Legión Cóndor, llegó a España por vía marítima a mediados de noviembre y estuvo bajo el mando del general Hugo von Sperle y después del coronel y barón Wolfram von Richthofen, oficiales ambos de la Luftwaffe. Su fuerza constaba de unos 140 aviones distribuidos en cuatro escuadrillas de cazas formados por Heinkel 51 biplanos y otras cuatro de bombardeos Junker 52, apoyadas por un batallón de 48 tanques y otro de 60 cañones antiaéreos.

El número total de combatientes en la Legión Cóndor ascendió durante toda la guerra, según la investigación de Raymond L. Proctor, a 19 000 hombres, contando pilotos, tanquistas y artilleros, aunque nunca hubo más de 5500 a la vez, puesto que

se les reemplazaba frecuentemente para que adquiriera experiencia el mayor número de soldados posible. La Guerra Civil española se convirtió así en campo de pruebas de la Luftwaffe, un ensayo de los aviones de bombardeo y caza que se utilizarían poco tiempo después en la Segunda Guerra Mundial. La Legión Cóndor participó en casi todas las operaciones militares desarrolladas durante la Guerra Civil y 371 de sus miembros perdieron la vida en combate[35].

Mucho más numerosa fue la aportación italiana, que comenzó a llegar a España en diciembre de 1936 y en enero de 1937, tras el pacto secreto de amistad firmado por Franco y Mussolini el 28 de noviembre. Hasta ese momento, los italianos que pilotaban los Savoia 81 y los cazas Fiat habían luchado en la Legión Extranjera. A partir de ese pacto, Mussolini organizó el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), al mando primero del general Mario Roatta hasta el desastre de Guadalajara en marzo de 1937 y después de los generales Ettore Bastico, Mario Berti y Gastone Gambara. El CTV constaba de modo permanente de 40 000 soldados y su número total ascendió, según las cifras publicada por John Coverdale, a 72 775 hombres: 43 129 del ejército y 29 646 de la milicia fascista. Llegaron también 5699 hombres más de la «Aviazione Legionaria», lo que eleva la cifra total de combatientes italianos a 78 474, muy superior a la participación alemana y a la de las Brigadas Internacionales[36].

Esos fascistas, además, estuvieron más tiempo en suelo español, hasta el final de la guerra y la victoria del ejército de Franco, mientras que los miembros de las Brigadas Internacionales habían dejado las armas antes. El 21 de septiembre de 1938, Juan Negrín, presidente del Gobierno de la República, anunció en Ginebra, ante la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, la retirada inmediata y sin condiciones de todos los combatientes no españoles en el Ejército republicano, con la esperanza de que el bando franquista hiciera lo mismo. Quedaban entonces en España aproximadamente un tercio de todos los que habían llegado para luchar contra el fascismo y el 28 de octubre, un mes después de su retirada del frente, las Brigadas Internacionales desfilaron en Barcelona ante más de 250 000 personas. Presidieron la ceremonia de despedida Manuel Azaña, Juan Negrín, Lluís Companys y los generales Rojo y Riquelme. «Podéis marchar orgullosos. Vosotros sois la historia […] Vosotros sois el heroico ejemplo de la solidaridad y universalidad de la democracia», les dijo la dirigente comunista Dolores Ibárruri, «La Pasionaria». «No os olvidaremos, y cuando en el olivo de la paz vuelvan a brotar de nuevo las hojas, mezcladas con los laureles de la victoria de la República española, ¡volved!»[37]

No volvieron porque la República fue derrotada pocos meses después y muchos de ellos además, cerca de 10 000, ya habían muerto en suelo español y otros 7000 desaparecieron. A algunos les quedó un sabor a mezcla agridulce de heroicidad antifascista y desencanto con lo que había visto: «Nos engañamos a nosotros mismos y fuimos engañados por otros», escribió Jason Gurney[38].

Pero era difícil olvidar la guerra y las batallas ideológicas vividas en España, el contraste tan llamativo con lo que estaba pasando en las democracias, como

Inglaterra, donde la gente dormía «un sueño profundo». O eso le parecía a George Orwell, cuando llegó allí, a finales de la primavera de 1937, tras pasar seis meses de guerra y revolución en Cataluña y en el frente de Aragón. Lejos ya «de las bombas y de las ametralladoras, de las colas para comprar comida, de la propaganda y de las intrigas», en Londres encontró «los carteles anunciando partidos de *cricket* y bodas reales, los hombres con sombrero hongo, las palomas de la Plaza de Trafalgar, los autobuses rojos, los policías azules […] todos durmiendo el profundo, profundo sueño de Inglaterra, del que a veces temo que no vamos a despertar hasta que nos sacuda el estrépito de las bombas»[39].

Por las mismas fechas en que las Brigadas Internacionales abandonaban España, Mussolini retiró a 10 000 combatientes «como gesto de buena voluntad» hacia el Comité de No Intervención, sólo una cuarta parte de los que luchaban todavía entonces al lado del ejército de Franco. Los despidieron en Cádiz los generales Queipo de Llano y Millán Astray y fueron recibidos en Nápoles por el rey Víctor Manuel III. Los últimos efectivos de la Legión Cóndor fueron trasladados a Alemania por buques transatlánticos después del desfile de la victoria que tuvo lugar en Madrid el 19 de mayo de 1939. En el puerto de Hamburgo los recibió Hermann Goering, ministro del Aire de la Alemania nazi.

Después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, ninguna guerra civil podía ser ya sólo «interna». Cuando empezó la Guerra Civil española, los poderes democráticos estaban intentando «apaciguar» a toda costa a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses.

4
La República en guerra

LA SUBLEVACIÓN MILITAR de julio de 1936 obligó a la República, un régimen democrático y constitucional, a combatir en una guerra que ella no inició. Lo que siguió a ese golpe militar, además, fue el estallido de una revolución social que el Estado republicano, al perder una buena parte de su fuerza y soberanía, tampoco pudo impedir. Un proceso revolucionario iniciado de forma súbita, violenta, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados, de la Iglesia, del Ejército, de los ricos, pero también de las autoridades republicanas que querían mantener la legalidad.

Hasta que fue derrotada, el 1 de abril de 1939, la República pasó por tres diferentes etapas, con tres presidentes de Gobierno. La primera, presidida por el republicano José Giral (1879-1962), estuvo marcada por la resistencia a la sublevación militar y la revolución. Como Giral no representaba a los nuevos poderes revolucionarios y sindicales que emergieron en el verano de 1936, tuvo que dimitir y dejar paso al dirigente obrero y socialista Francisco Largo Caballero (1869-1946), quien inició, con la colaboración de todas las fuerzas políticas y sindicales, la reconstrucción del Estado, la creación de un ejército regular y el control de la revolución. Tras los graves sucesos de mayo de 1937, dejó paso a Juan Negrín (1892-1956), diputado socialista y catedrático de universidad, que se propuso como uno de sus principales objetivos cambiar la política de no intervención de las potencias democráticas. Los tres presidentes murieron en el exilio: Giral en México y Largo Caballero y Negrín en París.

GUERRA Y REVOLUCIÓN

Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. Es muy probable que sin ese golpe, y sin ese colapso de los mecanismos de coerción del Estado, la apertura del proceso revolucionario nunca se hubiera producido. Por supuesto, si hubiera habido

unanimidad a favor de la sublevación en las fuerzas armadas, cualquier resistencia hubiera sido vencida fácilmente. Las milicias sindicales, incluso armadas, no hubieran podido hacer nada frente a un ejército unido. Las organizaciones revolucionarias tenían capacidad para minar y desestabilizar a la República, pero no para echarla abajo y sustituirla. En el Ejército español de julio 1936, por otro lado, apenas había conexiones con las propuestas revolucionarias, mientras que un buen número de jefes y oficiales mostraba claras simpatías por la causa autoritaria y contrarrevolucionaria.

Las calles de esas ciudades donde el golpe fracasó se llenaron de hombres y mujeres armados, nuevos actores de la historia, muchos de los cuales se habían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado que ahora se tambaleaba. No estaban allí exactamente para defender a la República, a la que ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la revolución. Adonde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. La política daba paso a las armas.

Era la hora de los anarquistas, que hasta ese momento habían mantenido relaciones muy difíciles y tensas, de enfrentamiento abierto en algunos momentos, con el régimen republicano. Tenemos numerosas pruebas documentales de esa fiesta revolucionaria, filmada por los propios anarquistas, de cómo empezó todo en Barcelona, la ciudad revolucionaria y libertaria por excelencia, para extenderse después a otros lugares, a los campos de Aragón, a los frentes de batalla. Una revolución que llegaba a los medios de producción y a los bienes de consumo, con imágenes históricas como la del Hotel Ritz de Barcelona, ejemplo por excelencia del lujo burgués, convertido en comedor popular[1].

El primer símbolo de ese nuevo poder de los anarquistas fueron las milicias, «el pueblo en armas», columnas armadas formadas por obreros, campesinos y residuos de unidades del Ejército y de las fuerzas de seguridad no sublevadas. Las milicias dominaron en aquellos primeros meses de la guerra, antes de convertirse en unidades regulares del Ejército de la República, extensos territorios, crearon comités revolucionarios por los pueblos donde pasaban, los sustitutos de los viejos ayuntamientos, ajustaron cuentas con la gente de orden, con los derechistas y el clero, y propagaron la revolución expropiadora y colectivista. Todos los máximos dirigentes de esas columnas anarquistas (Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz, Antonio Ortiz, Gregorio Jover o Cipriano Mera) eran «hombres de acción», miembros de los principales grupos anarquistas de la FAI, la organización creada en 1927 para salvaguardar la pureza de las ideas anarquistas en el seno de la CNT.

Nadie representó mejor la fuerza y fama de los anarquistas en esos meses dorados de la revolución que Buenaventura Durruti, nacido en 1896 en León, obrero, aventurero en Francia y Latinoamérica, que pasó largos períodos en la cárcel durante la Segunda República y que estuvo en primera línea de fuego en las jornadas del 19 y 20 de julio de 1936, cuando salieron derrotados los militares sublevados en

Barcelona[2].

Lideró las milicias que partieron desde Barcelona hacia Aragón para «arrancarlo al fascismo» y posteriormente fue con su columna al Madrid sitiado por los franquistas, donde murió, en circunstancias todavía no aclaradas, en el sector de la Ciudad Universitaria el 20 de noviembre de 1936. Como murió en la ciudad que el Gobierno republicano acababa de abandonar, con los nuevos ministros anarquistas incluidos, para trasladarse a Valencia, la leyenda de Durruti se agrandó: era la prueba definitiva de su fortaleza frente a quienes, pese a ser anarquistas, se habían enzarzado en el juego de la política. Con ese Durruti mártir, sacrificado en la lucha contra el fascismo, murió, como repitieron muchos anarquistas después, lo mejor y más puro de la revolución española. En realidad, poco había aportado Durruti a la historia, teoría y práctica, del anarcosindicalismo español. Pero el mito siempre se ha impuesto a la realidad.

Sus frases y declaraciones, realizadas algunas de ellas a los corresponsales de prensa extranjeros, parecían recoger el espíritu espontáneo de la revolución puesta en marcha por los anarquistas. Un bando firmado por el propio Durruti en la localidad aragonesa de Bujaraloz, el 11 de agosto de 1936, apenas tres semanas después de la sublevación militar, abolía la propiedad privada de «la tierra de los terratenientes», declaraba propiedad del pueblo, bajo control del comité revolucionario, «todos los útiles de labranza, tractores, máquinas trilladoras, etc., de los propietarios fascistas», y exigía a sus habitantes, por ser «la lucha armada de las milicias antifascistas la salvaguarda de los intereses del pueblo trabajador», su apoyo «entusiasta e incondicional, tanto material como moral»[3].

Las colectivizaciones de las tierras incautadas por las milicias y el dominio ejercido por anarquistas y socialistas en muchos municipios de la España republicana en los primeros meses de la Guerra Civil fueron en verdad un asalto directo a las relaciones de propiedad, a la autoridad y al poder establecido. Mitos y tópicos al margen, la abolición del trabajo asalariado, de la propiedad privada de los medios de producción y del dinero, la discusión en asambleas populares del funcionamiento de ese nuevo sistema de producción y consumo, son fenómenos que ilustran suficientemente la inversión del orden social en los primeros instantes de aquel proceso revolucionario.

Esa inversión del orden fue también un fenómeno genuino de la revolución en Barcelona, con la colectivización y el control obrero de la industria. Aunque con rasgos y protagonistas diferentes a los de la sociedad rural, su recuerdo provoca idéntica ambivalencia: transformación destructiva y radical para unos; demostración, para otros, de la capacidad creadora de los trabajadores en fábricas sin dueños. Autogestión obrera o imposición de los postulados de un minoría dirigente[4].

La revolución y la guerra contra el fascismo generaron también un nuevo discurso y una imagen diferente de la mujer. La cultura patriarcal gozó de un fuerte arraigo en la España anterior a la proclamación de la Segunda República. Según ese discurso

tradicional, el hombre era un individuo superior, sostén económico de la familia, mientras que la mujer estaba predestinada por la naturaleza y la biología a la maternidad y a la dedicación a la familia y al hogar.

Esa imagen de la mujer como «perfecta casada» y «ángel de la casa» dio paso, en el fervor revolucionario de las primeras semanas, a la figura de la miliciana, activa y beligerante heroína, fuerte y valiente, descrita gráficamente en numerosos carteles como una joven atractiva, con mono azul, fusil al hombro, marchando con paso decidido hacia el frente a la caza del «enemigo fascista». Si para los hombres, el rechazo del «traje burgués» era un signo de identificación política, como ya observara George Orwell, para las mujeres, según la historiadora Mary Nash, «llevar un pantalón o un mono adquirió un significado más profundo, dado que las mujeres nunca habían adoptado antes ese atuendo masculino», que desafiaba la tradicional apariencia femenina.

En realidad, esa imagen de la heroína miliciana formaba parte del espíritu de aventura revolucionaria presente en el verano de 1936, pero desapareció muy pronto y fue sustituida por la consigna «hombres al frente, mujeres a la retaguardia», más acorde con el papel diferente que a ambos géneros se les asignaba en el esfuerzo bélico: los primeros, ocupados en la tarea de combatir en las trincheras y las segundas en servicios de apoyo y auxilio en la retaguardia. Tras la sacudida revolucionaria, la exaltación de la maternidad y del derecho de las madres a defender a sus hijos de la brutalidad del fascismo constituían una forma mucho más poderosa de movilización femenina.

Desde septiembre de 1936, con el socialista Largo Caballero ya de presidente de Gobierno, comenzó a implantarse una política que obligaba a las mujeres a abandonar el frente. A finales de ese año, los pósters y propaganda con milicianas habían desaparecido y aquellas heroínas con mono azul eran ya historia. Que se sepa, ninguna de las organizaciones femeninas, ni siquiera la más radical, la anarquista Mujeres Libres, resistió públicamente las decisiones, tomadas por hombres, que imponían a la mujer el abandono del combate armado. Todas esas organizaciones vieron la integración de la fuerza de trabajo femenina en la producción de la retaguardia «como un ingrediente esencial para ganar la guerra»[5].

Y es que la revolución, por muy festiva, destructiva y radical que se manifestara en el verano de 1936, ocurría en el marco de una guerra civil, donde se luchaba contra un ejército bien organizado y auxiliado además desde el principio por las potencias fascistas. El dilema que algunos planteaban sobre si había que hacer la revolución antes que la guerra, o aplazarla hasta la derrota de los militares rebeldes, tenía poco que ver con la realidad porque, como advertía Helmut Rudiger, delegado de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en España, «si se pierde la guerra se pierde todo, y para medio siglo o más tiempo ya no habrá ninguna discusión más sobre el problema de la revolución»[6].

La España republicana, la que surgió de la resistencia al golpe de Estado, la que

acogió la revolución y la guerra contra el ejército de los sublevados, la componían en esos primeros meses un conjunto de poderes armados y fragmentados de difícil control. En Cataluña se había formado el 21 de julio el Comité Central de Milicias Antifascistas, donde, pese a que estaban representadas todas las organizaciones políticas de izquierda, los anarquistas, liderados por Joan García Oliver y Diego Abad de Santillán, trataban de imponer su ley. En el País Valenciano apareció también muy pronto, desde comienzos de agosto, el Comité Ejecutivo Popular. En Málaga y Lérida, había un Comité de Salud Pública. En Santander, Gijón y Jaén, Comités provinciales de Frente Popular. En Vizcaya, en su capital, Bilbao, una Junta de Defensa. Y en Madrid, además de un Comité Nacional del Frente Popular que organizaba milicias y la vida de la ciudad, estaba el Gobierno de la República, presidido por José Giral, que formado sólo por republicanos de izquierda no podía representar a esa amalgama de comités, milicias y patrullas de control donde socialistas y anarquistas, sindicalistas de la UGT y de la CNT, dirigían la revolución, la que destruía y mataba y la que intentaba levantar algo nuevo de aquella oleada de violencia política.

Con tantos centros de poder compitiendo, además, era muy difícil avanzar en el camino correcto para crear una economía unificada y un Ejército eficaz, dos elementos fundamentales para combatir contra los militares rebeldes[7]. Resultaba también imprescindible que de esa revolución y hervidero de poderes saliera un orden público capaz de dirigir la guerra y controlar la retaguardia. A la República le comenzó a ir muy mal, como ya hemos visto, en el escenario internacional y perdía continuamente terreno en los campos de batalla.

Efectivamente, desde que se habían comenzado a estabilizar los frentes, a comienzos de agosto de 1936, hubo pérdidas republicanas y avances de los militares rebeldes. El avance desde el sur de Andalucía de las tropas procedentes de África le proporcionó a los militares sublevados el dominio de Extremadura y de algunas zonas de Castilla-La Mancha. Durante los quince primeros días de agosto, regulares y legionarios dejaron huellas de la guerra y de la violencia política en ciudades y pueblos de la provincia de Badajoz, como Almendralejo, Mérida y Zafra, donde fueron asesinados miles de republicanos y socialistas.

El 14 de ese mes, las tropas del entonces teniente coronel Juan Yagüe tomaron la ciudad de Badajoz, mostrando, para que todo el mundo se enterara, que el éxito en el frente de guerra pasaba por no dejar posibles enemigos en la retaguardia. Cientos de prisioneros fueron llevados a la plaza de toros donde, en palabras del dirigente socialista Julián Zugazagoitia, «atraillados como perros de caza, eran empujados al ruedo para blanco de las ametralladoras, que, bien emplazadas, los destruían con ráfagas implacables»[8]. Una matanza así merecía la respuesta desafiante que Yagüe le dio al periodista del *New York Herald*, John T. Whitaker: «Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Iba a llevar a cuatro mil prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar a contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia

y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?»[9].

Tenía razón Yagüe. Nunca más Badajoz fue republicana. También la dictadura de Antonio Oliveira Salazar le echó una mano. Como ya había sucedido anteriormente en otros pueblos extremeños, bastantes personas huyeron hacia Portugal tras la toma de la ciudad. La policía salazarista no les permitió la entrada o los entregó a los militares rebeldes. Un buen número de ellos fueron ejecutados el 20 de agosto, una semana después de la matanza en la plaza de toros. De esa forma fueron a la tumba, por ejemplo, el alcalde Sinforiano Madroñero y Nicolás de Pablo, elegido diputado a Cortes por el PSOE en las elecciones de febrero de 1936.

Tras la captura de Badajoz, la columna de Yagüe continuó su avance rápido hacia Madrid. El 3 de septiembre llegaron a Talavera, un pueblo de la provincia de Toledo, a poco más de cien kilómetros de la capital. Ese mismo día, en el norte, donde el general Emilio Mola había iniciado un ataque sobre Guipúzcoa, cayó Irún, al lado de la frontera con Francia. El 12 le tocó el turno a San Sebastián. La conquista de la provincia de Guipúzcoa supuso una importante victoria para los planes del ejército insurgente, que unía ahora una parte de España desde el norte hasta el sur, a través de Castilla, a la vez que dejaban a Vizcaya, Cantabria y Asturias aisladas, sin comunicación con el resto de la zona republicana salvo por mar y por aire.

Cuando San Sebastián fue conquistada por los militares rebeldes, José Giral ya no era el presidente del Gobierno de la República. Había hecho lo que había podido y si se tiene en cuenta que sólo estuvo un mes y medio en el puesto, lo que hizo no fue poco. Pidió ayuda a Francia y la URSS para derrotar a la rebelión militar, inició el uso de las reservas de oro del Banco de España para financiar la guerra, destituyó a los funcionarios sospechosos de apoyar a la sublevación y dictó las primeras medidas para controlar la violencia indiscriminada en la retaguardia.

Pero nada de eso bastaba y los obstáculos a los que se enfrentaba parecían insuperables. «El Gobierno republicano está muerto. No tiene autoridad ni competencia, ni decisión para hacer la guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria», le había escrito el 24 de agosto Luis Araquistain, el ideólogo de la izquierda socialista, a Francisco Largo Caballero. Giral, con los militares rebeldes ya a las puertas de Madrid, pensó de verdad que le faltaba autoridad y apoyo y decidió «entregar a S. E. el Presidente de la República los poderes que de él recibió y con ellos la dimisión de todos los ministros», para que les pudiera sustituir un gobierno que representara «a todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales u obreras de reconocida influencia en la masa del pueblo español»[10]. Era la hora de los sindicatos y de Largo Caballero, el líder indiscutible de la UGT.

Acababa el verano. En apenas dos meses, desde el golpe de Estado que había provocado la Guerra Civil, las ansias de purificación revolucionaria y contrarrevolucionaria se habían llevado a mejor vida a decenas de miles de ciudadanos. En términos militares, el fervor revolucionario de las organizaciones

sindicales cosechó pocos beneficios y muchos reveses para la causa republicana. Esos triunfos militares fueron rematados en el bando rebelde con la concentración del poder político y militar en la persona del general Francisco Franco. Un general en la España rebelde y un líder sindical en la República, dos formas muy diferentes de hacer frente a la guerra.

Un líder sindical en el Gobierno

Porque el de Largo Caballero fue el primer y único Gobierno de la historia de España presidido por un dirigente obrero. El 4 de septiembre de 1936, el ya veterano socialista, nacido en 1869, quien se había negado a que su compañero de partido, Indalecio Prieto, formara un gobierno republicano y socialista en mayo de ese año y que tampoco había querido asumir esa responsabilidad tras el golpe de Estado de julio, aceptó por fin presidir «un gobierno de coalición», en el que él mismo sería también ministro de la Guerra.

Era un Gobierno con socialistas y republicanos, en el que ya estaban dos de los personajes que más iban a influir en la política de la República durante la guerra: Indalecio Prieto y, sobre todo, Juan Negrín. Además, Largo Caballero había puesto como condición para aceptar el cargo que entraran en el Gobierno, por primera vez en la historia de un país de Europa occidental, los comunistas y así se hizo, con Jesús Hernández en Instrucción Pública y Vicente Uribe en Agricultura. Pactó, por último, con José Antonio Aguirre, el dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el apoyo de los nacionalistas vascos a cambio de la rápida aprobación de un Estatuto de Autonomía para Euskadi y, unos días después, Manuel de Irujo se sumó a ese Gobierno de coalición como ministro sin cartera.

Esa solución de un Gobierno presidido por un líder sindical y con comunistas dentro no parecía gustar a algunos personajes de peso en la política republicana, pero a otros, dado el momento tan excepcional, les parecía la única disponible para hacer frente al hundimiento de los republicanos, para ganar la guerra y garantizar al mismo tiempo las conquistas revolucionarias[11]. La participación en él de José Giral, el anterior presidente, y de otros republicanos que habían estado en su Gobierno, parecía confirmar el mantenimiento de la legalidad republicana. No era, por supuesto, una conquista revolucionaria del poder, sino una transmisión de poderes desde uno, sólo republicano, que nada podía dirigir, a otro al que se incorporaban todas las fuerzas políticas, incluidos nacionalistas vascos y catalanes, lo que le convertía en un Gobierno de «unidad nacional», el mejor de los disponibles en aquel momento.

Faltaba la CNT, a la que Largo Caballero ofreció al principio un ministerio sin cartera, muy poco para lo que la organización anarcosindicalista consideraba su verdadera fuerza, en el frente con las milicias y en la retaguardia con su revolución. Los anarquistas ya habían dado el paso de entrar en el gobierno autónomo de la

Generalitat de Cataluña, el 26 de septiembre, y sus principales dirigentes pasaron el mes de octubre en tratar de convencerse entre ellos y de convencer a los militantes de que entrar en el Gobierno de la República era necesario y, como dijo su entonces secretario nacional, Horacio Martínez Prieto, la única alternativa que les quedaba. El «regateo» entre éste y Largo Caballero para determinar el número exacto de ministros ocupó los últimos días de la negociación. Al final fueron cuatro, aunque Largo Caballero sostuvo en sus recuerdos que le habían solicitado seis[12].

El 4 de noviembre de 1936 cuatro dirigentes de la CNT entraron en el Gobierno de la República en guerra. Era un «hecho trascendental», como afirmaba ese mismo día *Solidaridad Obrera*, el principal órgano de expresión de la CNT, porque los anarquistas nunca habían confiado en los poderes de la acción gubernamental y porque era la primera vez que eso ocurría en la historia mundial. Anarquistas en el gobierno de una nación: un hecho extraordinario e irrepetible. Además, entre los cuatro anarquistas, estaba Federica Montseny, la primera mujer ministra en la historia de España y que ocupó además un nuevo Ministerio, el de Sanidad.

Pocos hombres ilustres del anarquismo español se negaron entonces a dar ese paso y las resistencias de la «base», de esa base sindical a la que siempre se le supone revolucionaria frente a los dirigentes reformistas, fueron también mínimas. El verano, sangriento pero mítico verano de 1936, ya había pasado. Anarquistas radicales y sindicalistas moderados, que se habían enfrentado y escindido en los primeros años republicanos, estaban ahora juntos, esforzándose por obtener los apoyos necesarios para poner en marcha sus nuevas convicciones políticas. Se trataba de no dejar los mecanismos del poder político y armado en manos de las restantes organizaciones políticas, una vez que quedó claro que lo que sucedía en España era una guerra y no una fiesta revolucionaria.

La oportunidad de acceder al Gobierno no llegó, sin embargo, en el mejor momento. Las tropas del ejército de Franco estaban a las puertas de Madrid, donde se iba a librar la batalla más decisiva de la primera fase de la Guerra Civil. El general Franco, jefe ya único de los militares sublevados desde el 1 de octubre de 1936, ordenó concentrar todos los medios de combate para conquistar la capital de la República, con el ejército de África a la cabeza, reforzado por escuadrillas de aviones alemanes e italianos.

El Gobierno republicano se mostró incapaz de organizar con eficacia la defensa de la capital. El 6 de noviembre, en el primer Consejo de Ministros en el que participaban los anarquistas, se decidió por unanimidad la salida del Gobierno de Madrid y su traslado a Valencia. Una salida precipitada, mantenida en sigilo, sobre la que no se dio explicación pública alguna. Aquello apareció ante la opinión pública como una huida y un abandono[13].

Antes de salir para Valencia, Largo Caballero ordenó la creación de una Junta de Defensa que, bajo la presidencia del general José Miaja, desempeñó la autoridad en ese Madrid sitiado desde ese día hasta finales de abril de 1937. Parecía que la toma de

la capital por el ejército de Franco era cuestión de días, pero, pese a la confusión y el desorden que se adueñaron esos días de la ciudad, con matanzas de presos derechistas, militares y clero, Madrid no cayó en manos de las tropas rebeldes.

El general Miaja y el entonces teniente coronel Vicente Rojo, su jefe de Estado Mayor y que iba a convertirse en el militar más importante del ejército republicano, organizaron la defensa con todas las fuerzas disponibles, entre las que pudieron contar por primera vez en la guerra con la participación de las Brigadas Internacionales. Pudo llegar también a tiempo la ayuda militar soviética pagada ya con el envío de las reservas de oro. Y toda la población, soliviantada por los bombardeos y cañoneos constantes de los militares franquistas, contribuyó a detener el empuje de los atacantes. Muchos percibieron aquello como una batalla decisiva entre el fascismo internacional, por un lado, y el comunismo y la democracia, por otro. Fue también la primera gran batalla filmada de la Guerra Civil española, con imágenes de los bombardeos a una población indefensa, mujeres y niños que aparecían muertos entre los escombros, que dieron la vuelta al mundo.

Ya desde Valencia, Largo Caballero, en esos meses que estuvo en el poder, y con la colaboración de todas las fuerzas políticas y sindicales que luchaban en el bando republicano, presidió la reconstrucción del Estado, la militarización de las milicias y creación del Ejército Popular de la República, el control y enfriamiento de la revolución y la centralización del poder, teniendo que enfrentarse, como haría su sucesor Juan Negrín, a los desafíos regionales y nacionalistas.

La conversión de las milicias en un ejército con mando militar centralizado, capaz de enfrentarse al ejército del general Franco, fue uno de los objetivos primordiales de Largo Caballero nada más asumir el cargo de jefe de Gobierno y ministro de la Guerra, tarea difícil porque «la sublevación militar había quebrantado la unidad del Ejército y el mando republicano tenía que comenzar casi de la nada»[14]. La militarización creó un debate intenso entre los anarquistas, en el que los principales dirigentes trataron de convencer a la mayoría de los militantes de que las milicias, eso que llamaban «el pueblo en armas», resultaban ineficaces para una guerra de largo alcance frente a un enemigo potente. «La vida sindical se basa en acuerdos de asambleas generales; la guerra en mandar y obedecer», sentenció Helmut Rudiger, el delegado de la AIT en España, con la excepcional lucidez con la que captó aquellos acontecimientos[15].

En los primeros meses de 1937, la mayoría de los milicianos del frente de Aragón, escenario de las escasas resistencias que hubo, se incorporó al nuevo ejército. Hubo deserciones en varias columnas, como en la de Durruti, y unos 400 hombres de la de «Hierro», la más radicalmente enfrentada a esa medida, la abandonaron cuando en marzo de 1937 fue militarizada y convertida en la brigada 83. Muchos de esos desertores y disidentes esgrimieron sus armas en las calles de Barcelona en mayo de 1937. Fueron derrotados, aunque el grave problema de orden y disciplina que crearon a la República dejó huellas y alimentó más el contraste entre la

desunión en el bando republicano y la unidad bajo un único jefe en el franquista.

Tampoco fue nada sencillo la reconstrucción del poder central. Porque aunque el Gobierno de Largo Caballero limitó el poder de los comités revolucionarios, no pudo evitar que Cataluña y lo que quedaba de Euskadi incrementaran su autonomía y que se consolidaran en otros sitios poderes regionales. En Cataluña, el Gobierno de la Generalitat tuvo plena autonomía política y económica y, hasta mayo de 1937, ejerció el poder absoluto de la policía y del orden público. Adquirió especial notoriedad el Consejo de Aragón, creado por las columnas anarquistas en ese frente en octubre de 1936 y que contó con sus propios órganos de policía, controló la economía colectivizada y administró justicia. Todo un desafío para el Gobierno republicano hasta que lo disolvió por decreto, y con la ayuda de la fuerza militar, en agosto de 1937.

El País Vasco, reducido su territorio prácticamente a la provincia de Vizcaya, tuvo desde el 1 de octubre de 1936 un Estatuto de Autonomía, aprobado por las Cortes de la República, y un Gobierno casi con plena soberanía. Presidido por el líder del PNV, José Antonio Aguirre, ese Gobierno creó el ejército de operaciones de Euskadi, punto de constante fricción con el Gobierno de la República, un nuevo cuerpo de policía, controló la economía, la justicia y decretó un amplio abanico de políticas sociales y de asistencia. Duró sólo ocho meses, hasta la caída de Bilbao el 19 de junio de 1937.

Uno de los grandes logros de la etapa de Gobierno de Largo Caballero, sobre todo desde comienzos de 1937, fue que desapareció casi por completo el terror caliente, brutal y sin garantías de los primeros meses de la guerra. La revolución cedió el paso a la guerra, y el control de la retaguardia, con poderes políticos y armados más fuertes y disciplinados, sustituyó a la violencia de las «sacas» y «paseos» por la justicia de los tribunales populares.

La creación de un ejército regular, el control de la retaguardia y la reconstrucción del Estado se abordaron, no obstante, en medio de fuertes disputas y tensiones políticas entre las fuerzas que configuraban la coalición del Gobierno. Los comunistas, que presionaban sin éxito a Largo Caballero para que uniera al PSOE y al PCE en un gran partido marxista, como habían hecho los jóvenes de ambas organizaciones justo antes de la guerra con las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), comenzaron a protestar, en público y en privado, contra la ineficacia del Gobierno para controlar los poderes regionales y contra la forma de dirigir la guerra. Las críticas subieron de tono a partir de la conquista de Málaga, el 8 de febrero de 1937, por las tropas de Franco, apoyadas por trece batallones italianos al mando del general Mario Roatta.

El Partido Comunista, una organización pequeña y poco influyente antes del estallido de la Guerra Civil, había comenzado a crecer de forma considerable a partir de la defensa de Madrid en noviembre de 1936. El crecimiento y prestigio que adquirió fueron estrechamente unidos a la presencia de las Brigadas Internacionales, a la disciplina que sus líderes fueron capaces de imprimir en la dirección de la guerra

y, sobre todo, a la ayuda de la Unión Soviética. Su poder estaba también muy vinculado al nuevo ejército de la República, donde sus militantes mandaban la mayoría de las divisiones que se creaban. Es exagerado decir que los comunistas tenían la hegemonía en ese ejército, como sostuvieron las fuentes franquistas y algunos historiadores han repetido, pero sí que es cierto que, con la penetración en los puestos de mando fundamentales, especialmente en el frente del Centro, cogieron las riendas de la nueva estructura militar. Y de allí saltaron a una mayor presencia y control de la política, en un proceso paralelo al declive de la revolución y de los anarquistas.

Los comunistas, y también Manuel Azaña, el presidente de la República, querían que los anarquistas desaparecieran del Gobierno. Acusaron a Largo Caballero de ser el responsable último de la caída de Málaga y la Comintern presionó para echarlo del Ministerio de la Guerra, aunque continuara siendo el presidente del Gobierno[16]. Al mismo tiempo, los socialistas de la fracción de Indalecio Prieto, que controlaban el comité nacional del PSOE y querían también eliminar del Ejecutivo a las organizaciones sindicales, a la UGT y a la CNT, transmitieron a Manuel Azaña a mediados de marzo la necesidad de sustituir a Largo Caballero como ministro de Guerra. Era la lucha entre partidos y sindicatos, que iba a resolverse muy pronto a favor de los primeros.

Y comenzó a resolverse en Barcelona, una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución anarcosindicalista. En la capital de Cataluña confluían unas características sociales y políticas muy singulares que posibilitaban tensiones desde varios frentes: un gobierno autónomo con notable presencia de los republicanos nacionalistas de izquierda, un poderoso movimiento anarquista, un partido comunista, el PSUC, creado en el inicio de la guerra, que controlaba a la UGT, y un minúsculo partido revolucionario, el POUM, enemistado a muerte con los comunistas. En su economía pesaba mucho la producción industrial, colectivizada en su mayor parte por la CNT, objeto de pugna con la UGT y la Generalitat. Y contaba además con una alta densidad de población, con decenas de miles de refugiados procedentes de otras regiones de España en poder de los franquistas, que complicaban el normal abastecimiento de los productos básicos. Y tampoco faltaban, por último, armas, que lucían las diversas fuerzas de policía, los militantes de las diferentes organizaciones políticas y los exmilicianos, contrarios a la militarización, que las habían llevado allí desde el frente.

Las fuerzas políticas y sindicales de Cataluña se enzarzaron durante el primer trimestre de 1937 en duras disputas sobre la escasez del pan, el alcance de las colectivizaciones, el control del armamento, de las industrias de guerra y del orden público, cuestión vital que desembocó a comienzos de marzo en la disolución de las patrullas de control, uno de los ejes del poder armado de la CNT. La imagen de la autogestión obrera dejaba paso a manifestaciones de mujeres que reclamaban alimentos y combustibles y a sangrientos disturbios en la retaguardia que dejaron

varias muertes entre manifestantes, mujeres incluidas, y miembros de las fuerzas de seguridad[17].

Ese escenario de crisis de subsistencia, de pugna política y sindical y de sentimiento de fracaso revolucionario alimentó los famosamente trágicos sucesos de mayo de 1937. La chispa que lo hizo estallar, el día 3, fue la decisión del consejero de Seguridad de la Generalitat, el nacionalista Artemi Aiguader, de ocupar el edificio de la Telefónica en la plaza de Cataluña, en poder de la CNT desde la derrota de los militares sublevados en julio de 1936. Las fuerzas de asalto que llegaron allí para cumplir la orden fueron recibidas a tiros por algunos anarquistas que se encontraban dentro. Acudieron al lugar anarquistas armados en ayuda de los sitiados. Los combates se extendieron. Muchos dejaron el trabajo. Las barricadas se levantaban de nuevo en Barcelona. Detrás de ellas, y frente a las fuerzas de seguridad, socialistas y comunistas, se encontraban antiguos milicianos que se habían negado a incorporarse al nuevo ejército, jóvenes libertarios, anarquistas de la FAI que ya no eran reconocidos como tales por la propia organización, y militantes del POUM.

Manuel Azaña, que se encontraba en Barcelona en esos momentos, desamparado y atrapado entre dos fuegos, pidió ayuda al Gobierno de Valencia, ante lo que él consideraba una insurrección anarquista de «graves consecuencias y deplorables efectos», y que le había privado de libertad a él, jefe de Estado, «no sólo para moverse libremente sino para ejercer su función»[18].

El Gobierno de Largo Caballero decidió enviar una delegación de anarquistas, con los ministros Joan García Oliver y Federica Montseny, y de la UGT, que nada más llegar a Barcelona pidieron por la radio el alto el fuego, la unidad antifascista. Y a Barcelona llegaron también unos cinco mil guardias, que ocuparon la ciudad y sofocaron las últimas resistencias. En la tarde del 7, la normalidad, según George Orwell, testigo de todos esos sucesos, «era casi absoluta»[19]. Se dio por oficial la cifra de cuatrocientos muertos y mil heridos.

Las cosas no podían seguir igual después de esos sucesos, aunque se hubiera restablecido «la normalidad». Lo que había pasado en Barcelona y en el frente de Aragón excedía el marco del enfrentamiento entre los diferentes sectores políticos y sindicales de la España republicana. Las grietas eran más profundas y sacudían los ejes de apoyo del poder político y militar. Ahí estaban todos los problemas básicos no resueltos desde el comienzo de la guerra, agravados por el paso del tiempo: la constante cosecha de fracasos militares; la incapacidad gubernamental de organizar el abastecimiento de la retaguardia; y la continua desunión en ámbito económico, político, social y militar.

En la reunión del Gobierno del 13 de mayo, los dos ministros comunistas, Vicente Uribe y Jesús Hernández, exigieron que Largo Caballero dejara el Ministerio de la Guerra y la disolución del POUM. El presidente se negó a aceptar la primera petición y trató de aparcar la resolución sobre la segunda mientras no se tuvieran los datos exactos sobre los culpables de los disturbios. Los ministros comunistas abandonaron

la reunión. La crisis quedaba abierta. Tras un intercambio de cartas y propuestas, en el que Largo Caballero no logró que se tuviera en cuenta la suya, seguir con un Gobierno en el que estuvieran representadas todas las fuerzas políticas y sindicales, Manuel Azaña prescindió del viejo líder de la UGT y encargó, el 17 de mayo, formar gobierno a Juan Negrín. Las dos organizaciones sindicales quedaban fuera. «Se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario», declaraba *Solidaridad Obrera* en su editorial del día siguiente[20].

La República en guerra dio un giro copernicano a partir de ese momento. El POUM fue liquidado, Largo Caballero se quedó solo, aislado, y los anarcosindicalistas vieron cómo se aceleraba la pérdida de su poder político y armado[21]. Del paso de la CNT por el Gobierno quedaron escasas huellas. Entraron en noviembre de 1936 y se fueron en mayo de 1937. Poco pudieron hacer en seis meses. Se ha recordado mucho más lo que significó la participación de cuatro anarquistas en un gobierno que su actividad legislativa. Como la revolución y la guerra se perdieron, nunca pudieron aquellos ministros pasear su dignidad por la historia. Para la memoria colectiva del movimiento libertario, derrotada y en el exilio, de aquella ruptura con la tradición antipolítica, de aquella traición y error, sólo podían derivarse funestas consecuencias.



La guerra civil española comenzó con una sublevación militar contra la República. Manuel Azaña, presidente de la República, y Francisco Franco, uno de los generales que dirigieron la rebelión, representaban dos visiones contrapuestas de cómo organizar el Estado y la sociedad.





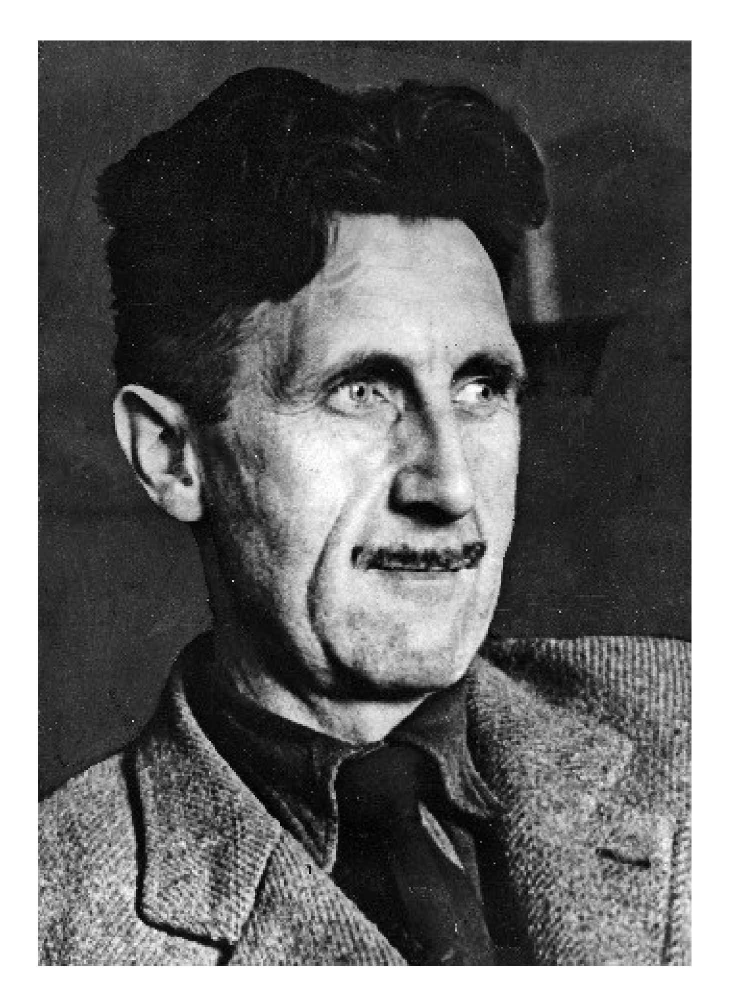
Juan Negrín, que aparece en esta ceremonia de despedida a las Brigadas Internacionales, jefe del Gobierno republicano desde mayo de 1937, defendió la disciplina y una estrategia de resistencia, que no tuvo éxito, basada en el apoyo de las potencias democráticas. (Ministerio de Cultura).



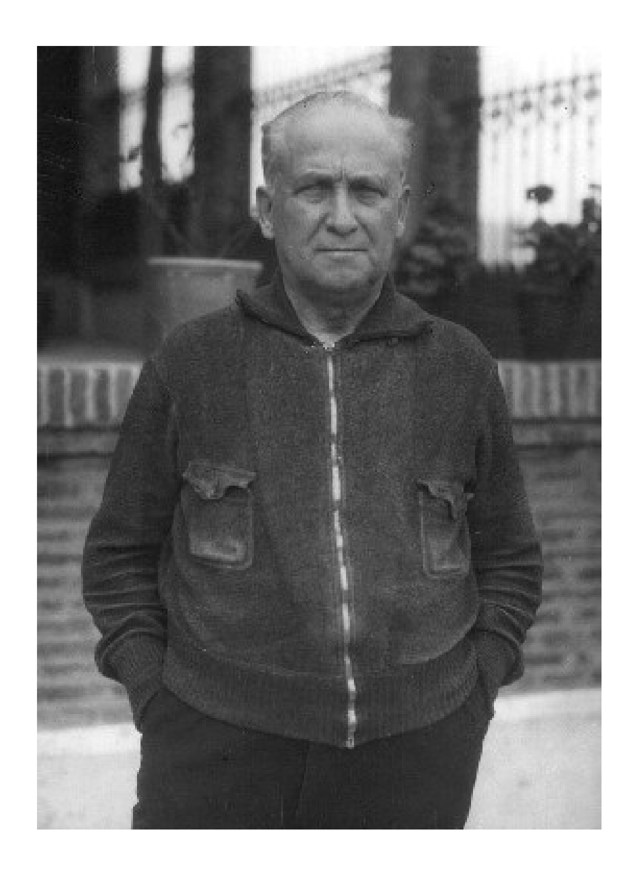
Andreu Nin, secretario político y máximo dirigente del POUM, destacado antiestalinista, fue consejero de Justicia de la Generalitat en los últimos meses de 1936. Fue secuestrado el 21 de junio de 1937 por agentes de los servicios soviéticos en España. Su cadáver nunca apareció. (© Agustí Centellas, Archivo de Salamanca).



El anarquista Buenaventura Durruti lideró las milicias que partieron de Barcelona hacia Aragón para «arrancarlo al fascismo» y después fue con su columna al Madrid sitiado por los franquistas. Allí murió, en circunstancias todavía no aclaradas, el 20 de noviembre de 1936. (Colección particular, Zaragoza).



El escritor George Orwell, nacido como Eric Arthur Blair en 1903 en la India británica, llegó a Barcelona en diciembre de 1936, para luchar contra el fascismo, y fue testigo de las tensiones y luchas en la retaguardia republicana. Su Homenaje a Cataluña es un relato excepcional de los seis meses de guerra y revolución que pasó en España. (Colección particular, Zaragoza).



Francisco Largo Caballero, principal dirigente del PSOE y de la UGT, fue presidente de Gobierno de la República entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Murió en París en 1946, tras haber pasado por el campo de concentración nazi de Oranienburg. (1935, © EFE/ Mayo).



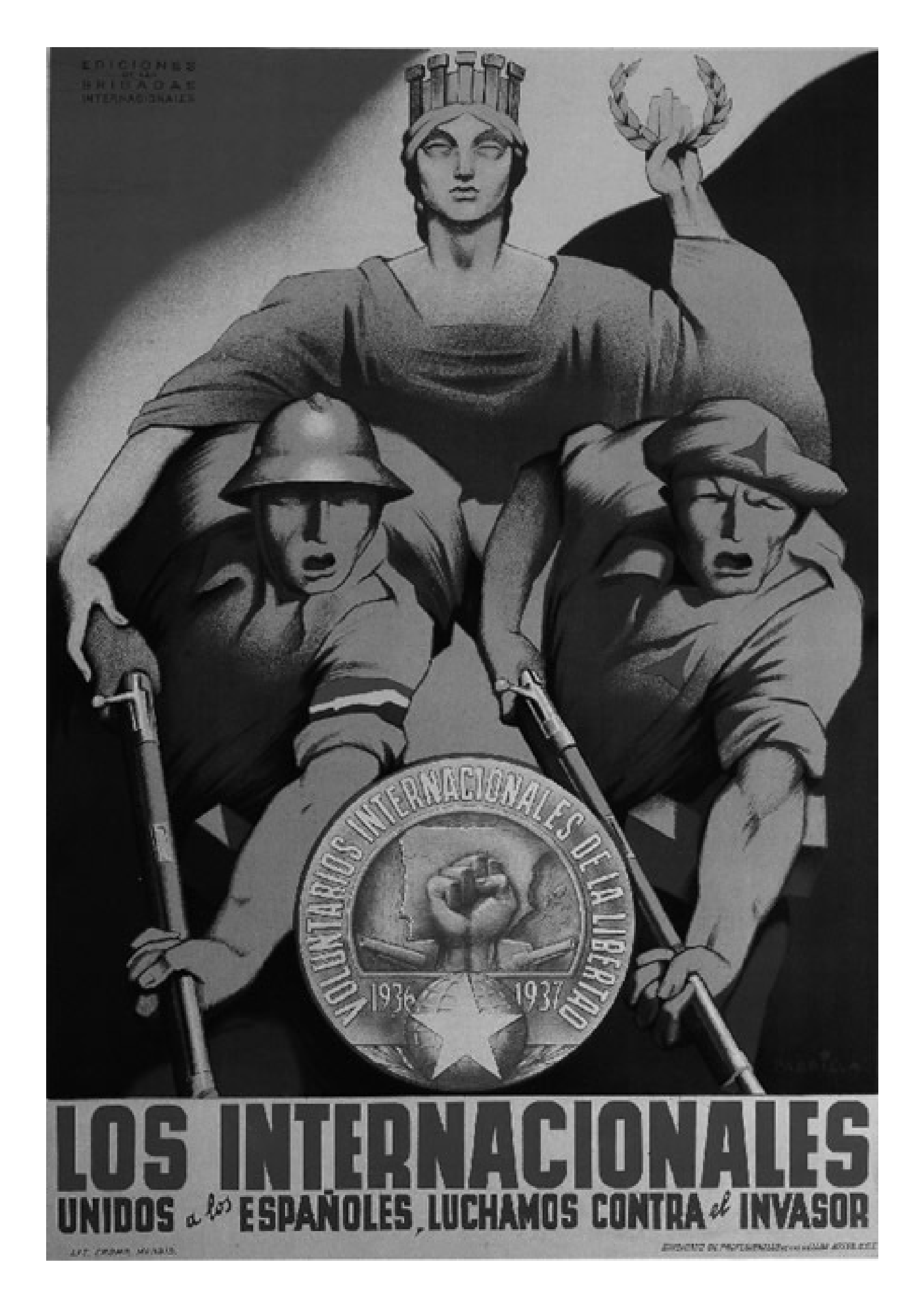
El lider fascista y dictador italiano Benito Mussolini, que aparece en la foto con Francisco Franco y Ramón Serrano Suñer en su encuentro, el 12 de febrero de 1941, en Bordighera, nunca respetó la política de no intervención y su ayuda militar, junto a la de Hitler, fue decisiva para el triunfo final del bando franquista. (Bordighera, Italia. © EFE/ Miguel Cortés).



El general Emilio Mola fue el principal organizador de la rebelión militar de julio de 1936, que coordinó con el seudónimo de El Director. Propuso la creación de la Junta de Defensa Nacional y después aceptó a Franco como máximo dirigente. Murió en un accidente de aviación en junio de 1937. (Colección particular, Zaragoza).



El general Franco aparece en esta foto presidiendo un desfile militar de soldados españoles e italianos en la población riojana de Recajo, el 2 de octubre de 1938. (© Archivo Sandri, Bolzano-Alto Adige, Italia).



Para luchar contra el fascismo, llegaron a España muchos voluntarios extranjeros, unos 35 000, reclutados y organizados en las Brigadas Internacionales. Negrín anunció su retirada en septiembre de 1938. Unos 10 000 brigadistas habían muerto en combate.



Cuando un importante sector del ejército tomó sus armas contra la República en julio de 1936, la mayoría del clero y de los católicos se apresuraron a apoyarlo, a darle su bendición como defensores de la civilización cristiana frente al comunismo y el ateísmo. Como declaró Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca, no era una guerra civil, sino «una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización».

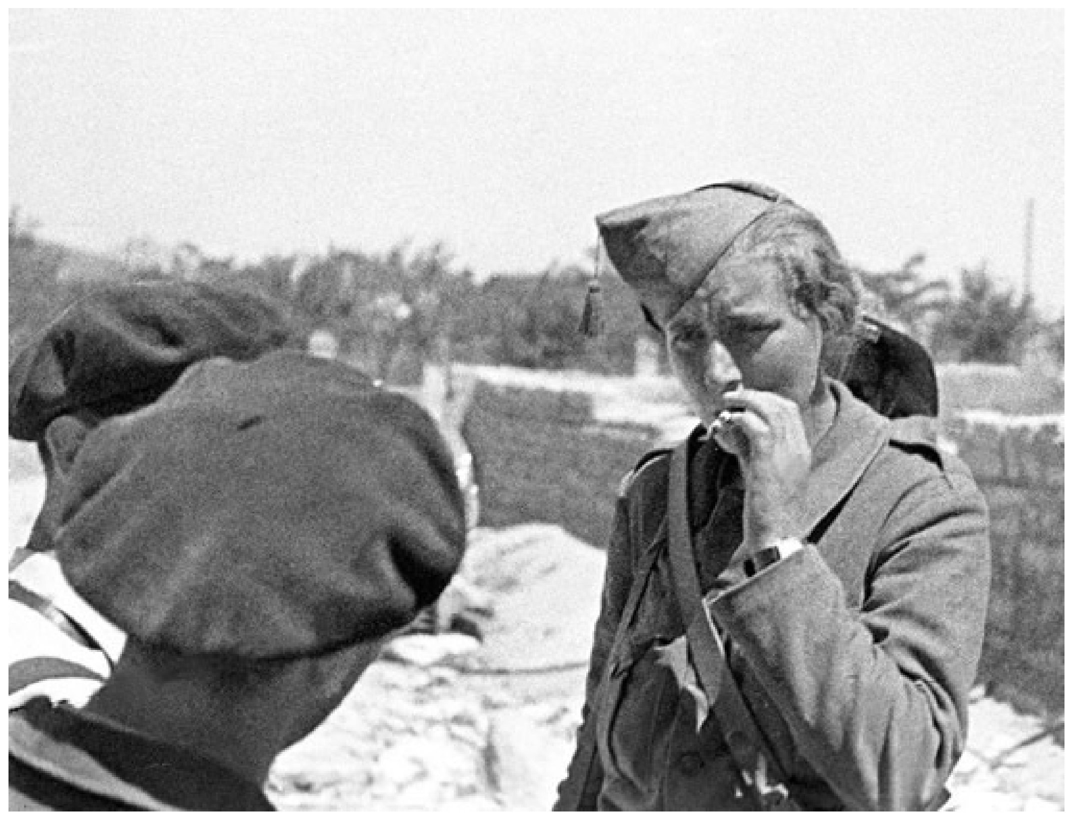


El apoyo de la Alemania de Hitler fue esencial para la conversión del golpe de Estado en guerra civil, decisivo para la posterior victoria de los militares rebeldes, y los símbolos y la parafernalia nazis estuvieron siempre presentes en la España de Franco. (Ministerio de Cultura).



En el fervor revolucionario del verano de 1936, la figura de la miliciana, luchadora heroica contra el fascismo, desafió la tradicional división de papeles entre hombres y mujeres, aunque desapareció muy pronto sustituida por la consigna «hombres al frente, mujeres a la retaguardia». (Arriba: Colección particular, Zaragoza. Abajo: Madrid, 30-07-1936. © Efe).





La miliciana, vestida con mono azul y atuendos masculinos, fue una figura muy común en los pósters y fotografías de la propaganda anarquista. En la práctica, sin embargo, la tradicional relación entre hombres y mujeres, como otros muchos aspectos de la vida cotidiana, apenas pudo cambiar en la corta experiencia revolucionaria y bajo las duras condiciones impuestas por la guerra. (Tardienta, Huesca, 11-08-1936. © EFE/ Juan Guzmán).



Barcelona fue la ciudad anarquista por excelencia, sede de los principales periódicos y revistas de la CNT-FAI, escenario de la revolución, de las colectivizaciones industriales. Y allí tuvieron lugar los trágicos sucesos de mayo de 1937, reflejo de las profundas grietas políticas e ideológicas existentes en la zona republicana, que dejaron centenares de muertos y heridos. (Arriba: Barcelona, diciembre de 1936. Abajo: Plaza de Sant Jaume, Barcelona, mayo de 1937. Ambas del Arxiu Nacional de Catalunya).





Los vientos favorables al nazismo y al fascismo soplaban por Europa cuando estalló la guerra civil española y la fascistización de la España de Franco, aunque nunca pudo poner en cuestión el poder del ejército y la presencia dominante de la Iglesia católica, se manifestó en la propaganda, en la cultura política y en la educación. (© Archivo Sandri, Bolzano-Alto Adige, Italia).



El catolicismo fue el punto de unión ideal para aglutinar a las diferentes fuerzas políticas que lucharon contra la República. Proporcionó, especialmente en la Vieja Castilla, Navarra y Álava y Aragón, una liturgia barroca político-religiosa, llena de gestos, creencias y fervor. (Arriba: Madrid, 7-04-1939. © EFE/ Vidal. Abajo: Aragón, ceremonia religiosa y castrense. © Coyne Collection. Archivo Histórico Provincial, Zaragoza).





La religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la batalla que sobre temas fundamentales relacionados con la organización del Estado y de la sociedad se estaba librando en España. La guerra civil adquirió así una dimensión religiosa, representada por la idea de la Cruzada en el bando franquista y por los ataques a la Iglesia católica y al clero en el republicano. (Arriba: Las Rozas, Madrid, 1937. Abajo: Toledo, 12-05-1937 © EFE).





El anticlericalismo más radical apareció de forma devastadora en aquellas comarcas donde la derrota de los militares sublevados abrió un proceso revolucionario súbito y violento. Más de 6800 eclesiásticos fueron asesinados y una buena parte de las iglesias, ermitas y santuarios fueron incendiados o sufrieron saqueos y profanaciones. La mofa carnavalesca de los símbolos religiosos dejó también importantes huellas en fotografías y en la memoria de los vencedores. (Arriba: Toledo, 1936. © Pelai Mas/ EFE/ lafototeca.com. Abajo: Madrid, entre 1936 y 1939).





El éxodo iniciado en enero de 1939, con la caída de Barcelona, llevó a Francia a unos 450 000 republicanos en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170 000 eran mujeres, niños y ancianos. Francia no esperaba esa llegada tan masiva de refugiados y el Gobierno de Édouard Daladier, presionado por los grupos de la derecha más reaccionaria, fascistas y xenófobos, condujo a muchos de ellos a campos de internamiento y concentración. (Arriba: Le Pertus, Francia, 28-01-1939. © EFE. Abajo: Frontera francesa. Ministerio de Cultura).



Desplazado Largo Caballero, el socialista Juan Negrín se convirtió en el tercer presidente del Gobierno de la República en guerra, el más influyente, que iba a mantenerse hasta la derrota final. La decisión la tomó Manuel Azaña, quien recuperó la iniciativa, liberado de la presencia de los anarquistas y de la izquierda socialista. En ese nuevo Gobierno, además de presidente, Negrín seguiría siendo ministro de Hacienda, Indalecio Prieto sería el hombre fuerte, en un nuevo Ministerio, de Defensa, que reunía en uno solo a los anteriores de Guerra, Marina y Aire, y había socialistas, comunistas, republicanos, un nacionalista catalán y otro vasco. Era un Gobierno de Frente Popular, que había sido recibido, según Azaña, «con gran satisfacción» y alivio[22].

A Negrín no lo nombraron los comunistas, como han repetido muchos, tratando de mostrar que era un títere en manos de Moscú, vendido al comunismo y a la Internacional. Lo nombró Manuel Azaña, que era, como presidente de la República, quien tenía esa potestad y pensó en él por «la eficacia demostrada al frente de la hacienda de un Estado en guerra», pero sobre todo por razones de política internacional[23]. Azaña creía que la República, en ese escenario marcado por la política de no intervención de las potencias democráticas, nunca podría ganar la guerra y que la única salida posible era una paz negociada con mediación internacional. Negrín, y no Largo Caballero, era el hombre idóneo para conseguirla. Era un político culto, que hablaba idiomas, nada revolucionario, y que además, hasta ese momento, no tenía en su currículum enfrentamientos con las organizaciones sindicales.

Juan Negrín, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1892, el mismo año que Francisco Franco, se doctoró en 1912 en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Leipzig e inició una brillante carrera profesional como fisiólogo, hasta que, tras la llegada de la República, comenzó la carrera política como diputado socialista, elegido en las tres elecciones, en 1931, 1933 y 1936, que tuvo ese régimen democrático hasta la rebelión militar. Unos meses antes de ser nombrado presidente de Gobierno, Negrín había apadrinado, ya como ministro de Hacienda del Gobierno de Largo Caballero, el envío de las tres cuartas partes de la reserva del oro del Banco de España a la Unión Soviética[24].

Negrín comenzó su mandato tratando de restablecer la autoridad del poder de la República en Cataluña y en el frente de Aragón. Su Gobierno asumió las competencias de orden público que tenía en ese momento la Generalitat y el 11 de agosto disolvió el Consejo de Aragón, el último órgano de poder que les quedaba a los anarquistas.

El otro asunto pendiente en la retaguardia catalana, qué hacer con el POUM, con aquel partido marxista revolucionario que tanto molestaba a los comunistas, se

resolvió también de forma rápida y violenta. Lo que querían los comunistas españoles, alentados por el cónsul general ruso en Barcelona, Vladimir Antonov-Ovseenko, era la destrucción de ese partido de «agentes trotskistas» y «espías fascistas» que criticaban además de forma abierta la ejecución de bolcheviques que estaba llevando a cabo Stalin en los procesos de Moscú[25].

Se acusó a la 29.ª División, controlada por el POUM, de abandonar el frente, se detuvo a su jefe y fue disuelta y reorganizada. Muchos de sus militantes acabaron perseguidos y torturados. Peor le fue a Andreu Nin, su secretario político y máximo dirigente, antiestalinista y antiguo secretario de León Trotski en Moscú, y que había sido consejero de Justicia de la Generalitat hasta mediados de diciembre de 1936, cuando el POUM, acosado ya por el poder creciente de los comunistas catalanes del PSUC, fue separado del Gobierno autónomo y arrinconado políticamente.

El 16 de junio de 1937, a la vez que se declaraba ilegal al POUM, Andreu Nin fue detenido en Barcelona por un grupo de policías, que lo trasladaron a Madrid y después a la prisión de Alcalá de Henares. Pese a estar vigilado por miembros de la Dirección General de Seguridad, fue secuestrado el 21 y asesinado, en fechas todavía desconocidas, por agentes de los servicios soviéticos en España, dirigidos por el general de la NKVD, Alexander Orlov. Su cadáver nunca apareció y Negrín nunca pudo ofrecer una explicación convincente a las peticiones que le hacían Manuel Azaña y algunos de sus ministros y no quiso enfrentarse con los comunistas, que cada vez tenían más poder y a quienes necesitaba para garantizar el envío de armas desde la Unión Soviética, la única potencia que prestaba ayuda militar efectiva a la República.

Negrín pensaba y quería ganar la guerra luchando con disciplina en la retaguardia, atrayendo la adhesión de la población, y organizando una fuerte industria de guerra, aunque el objetivo primordial de su estrategia consistía en conseguir un cambio radical en la política de no intervención y obtener de esa forma el apoyo vital de las potencias democráticas occidentales. La guerra iba a ser larga y se podía ganar. Es lo que pensaba Negrín cuando llegó al Gobierno y en los dos años en los que dirigió la política de la República pasó por momentos esperanzadores y otros desastrosos, que parecían presagiar el descalabro final.

El comienzo no fue bueno porque apenas un mes después de llegar al Gobierno, el 19 de junio, las tropas italianas y las brigadas navarras ocuparon Bilbao. Los batallones vascos desobedecieron la orden de replegarse hacia Santander y Asturias y se rindieron el 26 de agosto en Santoña ante las tropas del general Mario Roatta, las mismas que habían salido victoriosas en Málaga a comienzos de febrero y habían sufrido un estrepitoso descalabro en Guadalajara en marzo. Ese mismo día los franquistas entraban en Santander y la ofensiva, en la que emplearon 60 000 hombres, continuó hasta la caída de toda la zona republicana de Asturias a finales de octubre. La República perdió en poco tiempo todo el norte, sus importantes recursos mineros de carbón y su industria de producción de hierro.

El derrumbe del frente norte obligó a Negrín a acelerar su política de organización de la industria de guerra. El 31 de octubre de 1937 decidió trasladar el Gobierno y la capitalidad de la República desde Valencia a Barcelona. Ese traslado relegó al gobierno de la Generalitat a un papel secundario, favoreció el control sobre las colectivizaciones y restringió la autonomía que aún conservaban los sindicatos en la gestión de las empresas. El Gobierno de la República controló en los siguientes meses toda la industria bélica en Cataluña, pero había tardado demasiado tiempo, casi dos años, en hacerlo.

Los recursos productivos de la República no eran suficientes y así lo expresó públicamente Negrín en el discurso dirigido a la Diputación Permanente de las Cortes en noviembre: «La zona del país que nosotros ocupamos no produce lo suficiente para su propio abastecimiento, y tenemos, por lo tanto, que importar una cantidad considerable de alimentos […] Tenemos, además, que adquirir abundantes materias primas, indispensables para la industria de guerra. Y tenemos que adquirir material de guerra, aunque desgraciadamente no en la proporción que quisiéramos». Bajo esas condiciones tan adversas, concluía Negrín, «hay que proceder con un espíritu de gran economía y dentro del mayor rigor administrativo»[26].

La marcha de la guerra, pese a todas esas medidas, daba pocas alegrías y menos victorias estratégicas. Pese a la ocupación de Teruel en medio del duro invierno de 1937, la única capital de provincia conquistada por el ejército de la República durante toda la guerra, aunque perdida unas semanas después, eran las tropas del general Franco las que cosechaban todos los éxitos. Conquistaron el Aragón republicano en marzo de 1938, con el derrumbe del frente en tres semanas, y a comienzos de abril ya se habían apoderado de algunas partes de Cataluña, incluida Lérida, una de sus capitales. El 15 de abril llegaron al mar, a las playas del Mediterráneo de la provincia de Castellón, donde se grabó esa imagen reproducida en fotos y documentales de los soldados carlistas chapoteando en sus aguas. La República quedó partida en dos, y Cataluña aislada.

Con esas derrotas salió a la luz la profunda división entre quienes creían que se podía continuar la guerra, encabezados por Negrín, y los partidarios de negociar una rendición con apoyo franco-británico, un plan en el que Manuel Azaña nunca había dejado de insistir. El problema era que a esas alturas de la guerra el propio ministro de Defensa, el socialista y hasta entonces amigo de Negrín, Indalecio Prieto, compartía ese plan de buscar una rendición, algo que abrió la segunda gran crisis interna en el bando republicano, un año después de que se produjera la primera en mayo de 1937.

Aunque Indalecio Prieto había comenzado a mostrar su derrotismo tras la caída de Bilbao, la ciudad en la que había forjado su carrera política, lo difundió abiertamente en los días del derrumbe del frente de Aragón. El nuevo embajador de Francia en Barcelona, Eirik Labonne, le preguntó a Negrín el 27 de marzo de 1938 si se había enterado de lo que iba diciendo el líder socialista. ¿Cómo iban a cambiar de

política los franceses o los británicos si el propio ministro de Defensa de la República no confiaba en ganar la guerra? Dos días después, Prieto presentó en un Consejo de Ministros un informe catastrófico de la situación. Negrín decidió esa noche del 29 de marzo quitar a su amigo íntimo y colaborador de un puesto tan relevante.

Negrín le apartaba porque creía que desmoralizaba al Gobierno y a quienes confiaban todavía en la República y Prieto, sin embargo, siempre creyó que le echó porque cedía a las presiones del Partido Comunista. En realidad, fuera o no eso verdad, la creciente influencia de los comunistas se convirtió «en la principal semilla de discordia» en el seno de la coalición de organizaciones que estaban en el Gobierno[27]. «Al “despedir” a Prieto, Negrín sacó a la luz las crecientes divisiones dentro de la clase política republicana.»[28]

En el nuevo Gobierno que se formó el 6 de abril de 1938, sin Indalecio Prieto, Negrín asumió también el Ministerio de Defensa Nacional y volvieron a estar representados las dos organizaciones sindicales, la UGT y la CNT, aunque de una forma más bien testimonial y cuando ambas eran ya una sombra de su historia, escindida la socialista e impotente y en retirada la anarcosindicalista.

Ese «Gobierno de guerra» o de «unión nacional» arrancó con un programa, aprobado en el Consejo de Ministros el 30 de abril y hecho público en la significativa fecha del 1 de mayo, al que todos llamaron «Los trece puntos de Negrín». Pedía, entre otras cosas, la independencia e integridad territorial de España; afirmaba el respeto a la propiedad privada y la libertad de conciencia y de religión; y proponía una amnistía política general para poder iniciar, tras el fin de la guerra, la reconstrucción de España. Eran propuestas sinceras, difíciles de que pudieran llevarse a cabo, dado que ni el escenario internacional ni las posiciones de Franco, apoyadas por la Iglesia católica, lo iban a permitir.

Porque la supervivencia de la República a partir de mayo de 1938 no sólo dependía de un buen ejército y de la resistencia de la población civil, «Resistir es vencer», decía el lema, sino también de que se acabara la política de no intervención, algo que Negrín no pudo lograr pese a los tremendos esfuerzos diplomáticos que le dedicó en los meses centrales de aquel año. Si Francia y el Reino Unido no cambiaban de política, se trataba al menos de que presionaran a las potencias fascistas para que éstas convencieran a Franco de un final negociado, un armisticio que evitara el terror y la venganza que Negrín sabía que Franco iba a imponer. Y si la diplomacia y las negociaciones fallaban, habría que seguir resistiendo hasta que estallase en Europa el conflicto que se preparaba entre las potencias fascistas y las democracias. Entonces quedaría claro con quién estaba la República y a quién apoyaba Franco.

Hubo todavía esperanzas en el verano de 1938, con el inicio de la batalla del Ebro y la obtención de un crédito de 60 millones de dólares que proporcionó la Unión Soviética, a punto de extinguirse ya las reservas de oro que habían sido trasladadas allí. Pero las esperanzas se frustraron primero en el frente internacional, con el pacto

de Munich, el 29 de septiembre de 1938, cuando los jefes de gobierno de Gran Bretaña y Francia, Neville Chamberlain y Édouard Daladier, aceptaron la propuesta de Adolf Hitler, que Benito Mussolini expuso como si fuera suya, de entregar los territorios de los Sudetes a Alemania. Ese sacrificio de Checoslovaquia significó la sentencia de muerte para la única democracia que se mantenía en pie en Europa central y oriental. Con esa decisión, vinculada a la política de seguir apaciguando a las potencias fascistas, las democracias dieron también la sentencia de muerte a la República española[29].

A la República también la minaba el hambre, y de qué forma. Barcelona y Madrid, las dos primeras ciudades de España, padecieron, sobre todo en los últimos meses de la contienda, problemas de abastecimiento como consecuencia del encarecimiento de los bienes de consumo, utilización de bienes inferiores y brusca aparición del mercado negro.

En Cataluña, y con especial intensidad en Barcelona, conforme avanzaba la guerra, arreciaron las denuncias populares contra la ineficacia del sistema de suministros y las protestas contra la aparición del mercado negro. Muchas de esas quejas y manifestaciones estaban dirigidas por mujeres que asaltaban tiendas de comestibles y ocupaban ayuntamientos para solicitar pan y provisiones para sus familias. Es evidente que esas protestas nunca deben interpretarse desligadas de las condiciones excepcionales dictadas por la guerra y del exceso de refugiados que padeció Cataluña. Pero dejan también constancia del contraste entre el lujo y la abundancia en que se desarrollaba la vida de algunos sectores de la población vinculados a las nuevas formas de poder y la ausencia de productos de primera necesidad que padeció la mayoría de la población civil.

Tras la pérdida del territorio aragonés, en marzo de 1938, la producción agraria disminuyó y el hambre y el pesimismo aumentaron entre una población cada vez más numerosa y que se alejaba de la felicidad prometida por la revolución a la misma velocidad que experimentaba el deterioro de su nivel de vida. Cada vez quedaba menos territorio que defender. Algunos de los periódicos anarquistas, por ejemplo, no superaron esos difíciles meses y desaparecieron. La penuria alcanzó también a *Solidaridad Obrera*, que había vivido su edad de oro, plena de abundancia, en los primeros meses de la revolución. Comenzó a faltarle el papel y la censura se ensañó con el diario que había encarnado el poder de la CNT.

Si en Barcelona mucha gente se cansaba de la guerra, en Madrid, donde se había vivido ya de forma muy intensa en el otoño e invierno de 1936, las cosas no iban mejor. Aparecieron también las manifestaciones callejeras de mujeres protestando por la falta de víveres. Los obreros «pasaban hambre» y «las madres exigían leche para los niños», escribió Palmiro Togliatti, el delegado de la Internacional Comunista en España. La ración media alimenticia de pan descendió de forma acusada en el frente y en la retaguardia. En Madrid, el racionamiento de pan bajó de 230 gramos diarios por habitante anterior a la guerra a 100 gramos a finales de 1938. Como consecuencia

de todo ello, se decía en un Informe del Grupo de Ejércitos en la zona Centro-Sur de 19 de noviembre de 1938 que la mentalidad de la tropa era que «*la guerra se está terminando*… De ello se habla en la vanguardia y en la retaguardia, se habla en las cartas de soldados del frente, se habla en las tertulias, en los paseos, en los espectáculos». Los apoyos a Negrín y a su estrategia de resistencia eran cada vez más escasos[30].

Por esas mismas fechas, un informe confidencial del representante diplomático de Gran Bretaña en la zona republicana ponía énfasis en el deterioro interno causado por las derrotas militares y los problemas de suministros, tanto bélicos como de productos de primera necesidad: «La verdad es que la amplia mayoría de la población en la España republicana está sufriendo una severa subalimentación incluso en los distritos rurales. El racionamiento de los obreros de industria esenciales y de las tropas de retaguardia ya ha sido recientemente intensificado drásticamente». El ejército republicano, añadía, podría resistir «siempre que la escasez de alimentos no provoque una quiebra de su moral»[31].

No iba a ser, sin embargo, la «situación alimenticia», muy grave como era, tal y como demuestran esas fuentes de información, la que iba a acelerar el final de la República. Tras la pérdida de Cataluña, toda ella en manos de Franco a comienzos de febrero de 1939, reapareció la desunión interna, una de las lacras que marcó a la República durante toda la guerra. Dirigentes republicanos, socialistas y anarquistas comenzaron a criticar abiertamente la estrategia de resistencia de Negrín y su dependencia del Partido Comunista y de la Unión Soviética. El 5 de marzo de 1939 el coronel Segismundo Casado, jefe del ejército del Centro, inició una sublevación que tenía como principal misión derribar al Gobierno de Negrín y negociar con Franco la entrega de armas y hombres. Consiguió algunos apoyos militares y políticos, entre los que destacaban el de Cipriano Mera, un anarquista jefe del IV Cuerpo del Ejército, y el del socialista Julián Besteiro, el primer presidente de las Cortes de la Segunda República, quien ya había mantenido conversaciones con la Falange clandestina en Madrid y con agentes de Franco, quienes actuaban en connivencia con el espionaje internacional, emboscados en redes conectadas con las embajadas y la diplomacia.

Se trataba de una rebelión militar contra el Gobierno legal, todavía en funciones, aunque Gran Bretaña y Francia hubieran dado ya el reconocimiento jurídico a Franco, y como decía Manuel Azaña, extrañándose de que Julián Besteiro estuviera allí, «repetía el golpe de Estado de Franco y, lo que era peor, con el mismo pretexto: la preponderancia excesiva o la demasía intolerable de los comunistas»[32].

Durante unos días, lo que quedaba de la zona republicana vivió una pequeña guerra civil dentro de la otra que todavía se luchaba contra los franquistas. Los combates fueron intensos en Madrid durante unos días, hasta el 10 de marzo, dejando cerca de 2000 muertos. A los partidarios de Casado no les resultó muy difícil aplastar la resistencia comunista en medio del cansancio y del malestar general y lo que causó en realidad esa rebelión fue la quiebra definitiva de las instituciones republicanas.

Unos días después, las tropas de Franco entraban en Madrid. Comenzaba entonces una paz incivil, inclemente, y no «una paz sin crímenes», la clemencia de Franco, en la que los casadistas decían confiar en su justificación del golpe.

5
El nuevo orden

CUANDO UN SECTOR DEL Ejército español se sublevó contra la República en julio de 1936, los regímenes autoritarios de derecha se habían abierto camino ya en una buena parte de Europa. Tras la Primera Guerra Mundial y la conquista del poder por parte de los bolcheviques en Rusia, el movimiento contrarrevolucionario, antiliberal y antisocialista, se manifestó muy pronto en Italia, durante la profunda crisis posbélica que sacudió a ese país entre 1919 y 1922, se consolidó a través de dictaduras derechistas y militares en varios países europeos y culminó con la subida al poder de Adolf Hitler en Alemania en 1933.

Una buena parte de esa reacción se organizó en torno al catolicismo, la defensa del orden nacional y de la propiedad. La revolución rusa, el auge del socialismo y los procesos de secularización que acompañaron a la modernización política hicieron más intensa la lucha entre la Iglesia católica y sus adversarios anticlericales de la izquierda política.

La opción dictatorial que triunfó en una buena parte de Europa desde comienzos de los años veinte, con Miklós Horthy abriendo el camino en Hungría, recuperó algunas de las estructuras tradicionales de la autoridad presentes en su historia antes de 1914, pero tuvo que hacer frente también a la búsqueda de nuevas formas de organizar la sociedad, la industria y la política. En eso consistió el fascismo dirigido por Benito Mussolini en Italia y a esa solución se aferraron en los años treinta los partidos y las fuerzas de la derecha en España para echar abajo la Segunda República.

Los militares sublevados en España, con Franco a la cabeza desde el 1 de octubre de 1936, comenzaron a construir el nuevo Estado en la guerra. La construcción de ese nuevo Estado fue acompañada de la eliminación física del oponente, la destrucción de todos los símbolos y políticas de la República y de la búsqueda de una victoria rotunda e incondicional sin posibilidad de mediación alguna.

MILITARISMO

Los militares sublevados tenían muy claro lo que querían destruir y no sabían bien qué es lo que querían construir a cambio. El movimiento era nacionalista español, opuesto a la descentralización separatista, y repudiaba, con su ataque a la República, las ideologías de izquierda, el socialismo, el anarquismo, o, de forma genérica, el comunismo. Lo que dominó en los primeros momentos en los territorios ocupados por los militares rebeldes era la imposición del orden castrense frente a las fuerzas que habían movilizado a las masas en nombre del socialismo y de la revolución; la forja de una mentalidad autoritaria frente al liberalismo, al parlamentarismo y al sistema representativo de partidos y elecciones libres.

El «exaltado nacionalismo español» que caracterizaba a los golpistas más destacados, todos ellos «africanistas», llamados así por haber prestado servicio en el ejército de África, culpaba al liberalismo y a la democracia parlamentaria de la prolongada decadencia sufrida por España desde las guerras peninsulares de 1808 y se manifestaba en «una concepción militarista de la vida política y del orden público que hacía del Ejército una institución pretoriana virtualmente autónoma del poder civil»[1]. Dicha concepción la compartían muchos militares que habían nacido en las dos últimas décadas del siglo XIX y que habían desarrollado sus carreras en Marruecos durante los últimos años de la Restauración (1917-1923) y de la dictadura de Primo de Rivera, como Manuel Goded, Emilio Mola, José Enrique Varela, Juan Vigón, Juan Yagüe o Francisco Franco. La conversión de golpe de Estado en guerra civil les facilitó la puesta en marcha de un régimen de terror, con ejecuciones masivas, cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres.

La muerte en accidente de aviación, el 20 de julio, del general José Sanjurjo, que había sido nombrado por sus compañeros de armas jefe de la sublevación, obligó a los militares rebeldes a tomar una rápida decisión para sustituir ese vacío de autoridad. A propuesta del general Emilio Mola, que había actuado desde Pamplona como «El Director» de la conspiración, se creó en Burgos el 24 de julio la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas, sublevado en Zaragoza, y de la que formaban parte también, entre otros, el propio Mola y los generales Dávila y Andrés Saliquet. Fue en teoría el primer órgano de coordinación militar y administración en la zona sublevada, aunque la dirección estratégica de las operaciones bélicas siguió repartida durante toda su existencia, en el verano de 1936, entre el general Gonzalo Queipo de Llano en el sur, con su feudo en Andalucía, Mola en el norte y Franco al frente del ejército de África trasladado a la Península y que comenzó su avance hacia Madrid, cuya conquista se convirtió en el primer y principal objetivo militar de los golpistas.

Cuatro días después de su constitución, la Junta extendió el estado de guerra a todo el territorio español, un bando que se mantuvo en vigor hasta 1948. Y sus medidas más significativas comenzaron con la ilegalización de los partidos y sindicatos de izquierda, con la incautación de sus bienes y propiedades (16 de septiembre) y siguieron poco después con la prohibición de todas las actividades

políticas, incluidos los grupos derechistas que apoyaban la causa militar y habían mostrado un rechazo frontal a la República. La CEDA, el partido de masas católico desapareció, «condenado» su principal dirigente, José María Gil Robles, «a la impopularidad» por el fracaso de su política posibilista con la República. Sus dirigentes colaboraron en la instauración del nuevo orden dictatorial y millares de sus seguidores buscaron refugio en las milicias falangistas o tradicionalistas[2]. Y los monárquicos alfonsinos, huérfanos de líder desde el asesinato de José Calvo Sotelo poco antes de la sublevación militar, y sin una base social organizada, tampoco opusieron ninguna resistencia a la militarización de la política puesta en marcha por el mando sublevado.

A la vez que desaparecían los partidos políticos de la derecha que habían estado representados en el parlamento republicano, la Guerra Civil fue acompañada desde el principio de una movilización y crecimiento masivo de las milicias falangistas y tradicionalistas (carlistas), que incorporaron a decenas de miles de civiles subordinados en todo momento al mando militar. Fueron los ejes de la movilización civil que auxilió a los militares rebeldes desde el principio y juntos hicieron el trabajo sucio de la represión, de la eliminación de rojos, en los primeros meses, hasta que los tribunales militares otorgaron un carácter «legal» a la justicia en el bando franquista.

A finales del verano de 1936, tras dos meses de guerra, las tropas de Franco estaban a las puertas de Madrid y algunos generales plantearon la necesidad de un mando militar único y un aparato político centralizado. Las autoridades del Tercer Reich que negociaban con Franco el préstamo de material de guerra le presionaban desde finales de agosto para que tomara las riendas. Mientras, algunos generales muy fieles a Franco, como Kindelán, Orgaz y Millán Astray, acompañados de su hermano Nicolás, formaron, en palabras de Preston, «una especie de equipo de campaña política dedicado a asegurar que Franco se convirtiera primero en comandante en jefe y luego en jefe del Estado»[3]. Fue Alfredo Kindelán, antiguo jefe de Aeronáutica con la Monarquía que había pedido la baja del Ejército con la República, quien sugirió que se celebrase una reunión de la Junta de Defensa Nacional y otros generales para elegir un jefe supremo.

Hubo dos encuentros, el 21 y 28 de septiembre. El primero, que tuvo lugar en un barracón de un aeródromo cerca de Salamanca, lo presidió el general Miguel Cabanellas y estaban, entre otros, los generales Franco, Mola, Queipo de Llano, Dávila y Saliquet. En el almuerzo posterior, en la finca del ganadero de toros Antonio Pérez Tabernero, todos se mostraron a favor de nombrar un jefe único, salvo Cabanellas, que defendió que siguiera en funciones una junta como la que ya estaba constituida y él presidía. Y todos propusieron nombrar a Franco Generalísimo, excepto Cabanellas que se abstuvo y mentó más tarde: «Ustedes no saben lo que han hecho, porque no lo conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en el ejército de África como jefe de una de las unidades de la columna a mi mando; y si, como quieren, va a dársele en estos momentos España, va a creerse que es suya y no dejará

que nadie lo sustituya en la guerra ni después de ella, hasta su muerte»[4].

El 1 de octubre de 1936 Francisco Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado español, según se decía en el decreto redactado por el monárquico José Yanguas Messía, profesor de derecho internacional. La Junta de Defensa fue disuelta para ser sustituida por una Junta Técnica del Estado encabezada por el general Fidel Dávila. Franco adoptó el título de *Caudillo*, que le conectaba con los guerreros medievales, y la consigna más repetida desde ese momento, con obligada inclusión en la prensa, fue: «Una Patria, un Estado, un Caudillo». Comenzaba de esa forma una dictadura personal, en principio provisional, que sustituyó a una junta militar improvisada tras el golpe de Estado[5].

Francisco Franco, que había nacido en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892, tenía cuarenta y tres años cuando se sublevó contra la República. Casi toda su carrera militar la hizo en África, lo que le proporcionó ascensos rápidos por méritos de guerra y un buen número de medallas, cruces y distinciones. Ingresó en la Academia Militar de Toledo en 1907 y pese a que obtuvo el puesto 251 de los 312 oficiales de su promoción, en 1915 era capitán y en febrero de 1926, con treinta y tres años, había ascendido ya a general de brigada. Entre 1920 y 1925 sirvió en la Legión, o Tercio de Extranjeros, creada en 1920 por José Millán Astral y a la que Franco se incorporó como segundo jefe. Fue nombrado director de la Academia General Militar de Zaragoza el 4 de enero de 1928, hasta que la Segunda República la clausuró, y ya durante los años republicanos fue comandante militar de La Coruña en 1932, comandante general de Baleares en 1933 y 1934, jefe superior de las fuerzas españolas en Marruecos a comienzos de 1935, jefe del Estado Mayor Central desde el 17 de mayo de 1935 hasta febrero de 1936 y comandante general de Canarias desde marzo hasta el 18 de julio de ese año. El ascenso a general de división lo consiguió a finales de marzo de 1934, a propuesta del entonces ministro de la Guerra el radical Diego Hidalgo.

Franco era considerado por sus compañeros de armas un jefe preparado y competente, pero su camino al poder supremo quedó muy despejado por la desaparición de la escena de algunos de sus rivales más cualificados para ese puesto. El general José Sanjurjo, que tenía que volar desde Portugal a España para encabezar la sublevación, murió el 20 de julio cuando el pequeño avión en que lo llevaba el falangista Juan Antonio Ansaldo se estrelló cerca de Lisboa. Los generales Joaquín Fanjul y Manuel Goded habían fracasado en su intento de tomar Madrid y Barcelona y fueron detenidos y unos días después fusilados. José Calvo Sotelo, el ultraderechista líder monárquico que mantenía estrechos contactos con algunos de los conspiradores, había sido asesinado el 13 de julio y José Antonio Primo de Rivera, el jefe de Falange, estaba preso en Alicante, una ciudad donde la rebelión tampoco había podido triunfar.

Gonzalo Queipo de Llano, sublevado en Sevilla, era, como Franco, general de división, con mayor antigüedad además, pero tenía un pasado republicano de

conspirador contra gobiernos monárquicos y no podía ser un líder fiable para todos los oficiales rebeldes. Quedaba Emilio Mola, que había preparado la conspiración y la rebelión en calidad de Director, aunque era general de brigada, de rango inferior a Franco. Podía ser, no obstante, un competidor. De él salió la idea de crear la Junta de Defensa Nacional de Burgos, el primer órgano de coordinación militar de los sublevados, y había logrado, con la estimable ayuda del requeté, el control de una buena parte de la zona norte de España, incluida casi toda la provincia de Guipúzcoa desde principios de septiembre.

Franco jugó sus cartas con destreza y ambición. Se presentó ante periodistas y diplomáticos como el principal general de los sublevados y así informó también a alemanes e italianos, de tal forma que pocos días después del golpe de Estado en algunos ministerios de Asuntos Exteriores de Europa se referían ya a los rebeldes como «los franquistas». Dirigía además las tropas mejor preparadas del Ejército español, los 47 000 soldados de la Legión Extranjera y de los Regulares Indígenas, que logró pasar a la Península gracias a los aviones de transporte y bombarderos que le enviaron Hitler y Mussolini. Ése fue, según los mejores especialistas, el factor decisivo que colocó a Franco como el mejor candidato en la lucha por el poder: el control del ejército de África y la solución rápida que le dio al transporte de esas tropas a la Península, asegurándose así que la ayuda de las potencias fascistas pasara por sus manos[6].

Una vez instalado en el poder, la leyenda del general Franco, «un católico práctico de toda su vida», no paró de crecer gracias al culto que le rindió la jerarquía de la Iglesia católica. Todos los miembros de la Junta Técnica del Estado se distinguían por sus «creencias religiosas», eran «piadosos», pero «quien tenía mejores antecedentes en este punto es el Generalísimo». Así lo veía el cardenal Isidro Gomá, primado de la Iglesia católica española, cuando le habló de él por primera vez al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, el 24 de octubre de 1936. Y eso que Gomá no había mantenido todavía contacto personal con Franco, aunque ya percibía «que será un gran colaborador de la obra de la Iglesia desde el alto sitio que ocupa»[7].

Franco comenzó a tener desde ese 1 de octubre de 1936 un poder absoluto y en una alocución radiada tras su designación dio algunas pistas de cómo se iba a organizar el nuevo Estado: «dentro de un amplio concepto totalitario», con los más «severos principios de autoridad», al servicio de «la más absoluta unidad nacional». Y para construir eso debían antes destruir, algo que ya estaban haciendo de forma radical y violenta, la democracia, la República y los sindicatos obreros socialistas y anarquistas[8].

En esa labor de construcción de algo a partir de la destrucción del contrario acompañó a Franco durante los primeros meses de la guerra su hermano Nicolás, un personaje tradicional, gris, que había participado en el suministro de armas a los sublevados desde Lisboa. Alemania e Italia reconocieron oficialmente a Franco el 18

de noviembre de 1936, lo que sancionaba políticamente el apoyo que las potencias fascistas estaban prestando a Franco con el envío de material bélico, pese a la firma del Tratado de No Intervención.

La concentración del poder político y militar en la persona de Franco no impidió que durante un tiempo, al menos hasta abril de 1937, siguieran existiendo algunos centros de poder autónomos. El general Queipo de Llano desde Sevilla, donde inició una brutal represión que contó con la inquebrantable adhesión de las gentes de orden, dictó numerosos bandos y órdenes sin contar con la Junta de Defensa y alcanzó una popularidad considerable con sus charlas radiofónicas y su eficaz, y amenazadora para los republicanos, labor propagandística. Más allá de sus ansias de poder o excentricidades, Queipo compartía, sin embargo, las ideas básicas de esa dictadura militar que iba gestándose en el territorio controlado por los sublevados: «España no podrá reconstruirse mientras no se barra a escobazos a toda la canalla política», declaró en noviembre de 1936, cuando la limpieza iba ya muy avanzada[9].

En la España sublevada mandaban las autoridades militares, pero detrás de ellos había unas masas civiles a los que tenían que controlar. Y en los conflictos que surgieron siempre se impusieron Franco y los militares. El reclutamiento de miles de carlistas en Navarra y Álava aumentó su peso político en los primeros meses de la contienda[10]. Constituyeron una Junta Central de Guerra, presidida por el jefe-delegado de la Comunión, Fal Conde, con una sección militar y otra política, que en Navarra ejerció plenos poderes. En su afán por controlar militarmente esa movilización, los dirigentes carlistas crearon en diciembre de 1936 una Real Academia Militar de Requetés que chocaba frontalmente con la decisión de Franco de incorporar las milicias carlistas y falangistas al ejército regular. Franco le manifestó al conde de Rodezno, rival de Fal Conde en la dirección del tradicionalismo, su «disgusto» porque, al margen de la «jefatura del Estado», hubiera otro poder «que creaba y regulaba ejércitos, que concedía ascensos». Calificó ese acto de «delito de traición» y le dijo que Fal Conde tenía que abandonar esa empresa. El general Dávila, en nombre de Franco, le ofreció a Fal Conde cuarenta y ocho horas para abandonar España o enfrentarse a un consejo de guerra. Fal se fue a Portugal y Franco eliminó así a otro posible competidor y cortó las alas a un grupo que tenía una notable capacidad de movilización en esos momentos.

Espectacular fue también el crecimiento de FE de las JONS en esos primeros meses de la Guerra Civil, cuando una buena parte de sus dirigentes, algunos de ellos liberados de las cárceles por la sublevación militar, centraron sus energías en la labor de encuadramiento y recluta de nuevos miembros llegados en aluvión al partido fascista. Era una organización pequeña antes de las elecciones de febrero de 1936, aunque la derrota electoral de la CEDA y la fascistización de la derecha en los meses siguientes había multiplicado sus efectivos en vísperas del golpe de Estado. Su discurso radical y estructura paramilitar, además del descrédito de las organizaciones como la CEDA que habían aceptado el juego de la legalidad republicana, hicieron de

polo de atracción cuando las armas sustituyeron a la política. En el mes de octubre de 1936 había más de treinta y seis mil falangistas en los frentes, junto a más de veintidós mil carlistas y más de seis mil de otras tendencias, como los alfonsinos o cedistas.

Ahora que tenía miles de afiliados, carecía sin embargo de una dirección sólida, de dirigentes indiscutibles o carismáticos. José Antonio Primo de Rivera, el jefe nacional, estaba preso en Alicante junto con su hermano Miguel. Onésimo Redondo murió el 24 de julio en Labajos, Segovia, en un enfrentamiento armado con las milicias republicanas. Julio Ruiz de Alda y Fernando Primo de Rivera, hermano menor de José Antonio, fueron asesinados en agosto en la cárcel modelo de Madrid. Dos meses después, tras una «saca» de la cárcel de las Ventas, le tocó el turno a Ramiro Ledesma Ramos. En la cárcel estaban también Raimundo Fernández-Cuesta, que consiguió ser canjeado en octubre de 1937, y Rafael Sánchez Mazas, que logró escapar de un fusilamiento colectivo poco antes de finalizar la guerra. Lo dijo uno de los dirigentes falangistas de segunda fila, José Luna, jefe provincial de Cáceres y capitán de Infantería: la Falange había pasado de tener «un cuerpo minúsculo con una gran cabeza a un cuerpo monstruoso sin cabeza»[11].

Responsables falangistas de los distintos sectores de la España sublevada se reunieron en Valladolid el 2 de septiembre de 1936 y crearon una Junta de Mando provisional, presidida por Manuel Hedilla, hombre fiel a José Antonio, que estaba entonces dedicado a la formación de milicias falangistas. La Junta se trasladó a Salamanca a principios de octubre, para estar cerca del cuartel general de Franco. Desde allí se planearon varias operaciones de rescate de José Antonio, dirigidas por Agustín Aznar, jefe de las milicias falangistas, pero todas ellas fracasaron y toparon con la actitud poco entusiasta de Franco. Antes de morir fusilado el 20 de noviembre en el patio de la cárcel de Alicante, José Antonio redactó su testamento, del cual nombró albaceas a sus amigos Raimundo Fernández Cuesta y Ramón Serrano Suñer, quienes tras lograr pasar a la zona franquista tendrían un papel destacadísimo en la Falange unificada.

La noticia de la muerte de José Antonio, conocida a través de la prensa republicana y extranjera, se ocultó en la España de los sublevados. Franco utilizó el culto al «Ausente» para dejar vacío el liderazgo del partido y manejar a Falange como un mecanismo de movilización política de la población civil. Un mes después, el 20 de diciembre, un decreto de Franco ponía a las milicias falangistas y a las de las restantes organizaciones bajo las órdenes de las autoridades militares. Todo el personal combatiente, el militarizado y el profesional, quedaba ya subordinado a la autoridad del Generalísimo. Los centros autónomos de poder comenzaban a desaparecer. Faltaba crear una fuerza política única, un movimiento de masas que sirviera para identificarse con sus aliados fascistas y nazis.

Todas las fuerzas políticas que apoyaron la sublevación militar defendían a finales de 1936, asumido ya el mando supremo de Franco, algún tipo de unificación, aunque

el problema residía en dilucidar quién ocuparía más cotas de poder. Franco pensaba en un partido que le ayudara a concentrar todavía más el poder en su persona. También le presionaban en esa dirección los fascistas italianos. En febrero de 1937, un enviado de Mussolini, Roberto Farinacci, que desde las posiciones más radicales y violentas de los *squadristi* se había aupado a la secretaría del Partido Fascista Italiano, instó a Franco a que creara, «con las fuerzas que han dado combatientes», un Partido Nacional Español, con un auténtico programa fascista y corporativo[12].

Fascismo y catolicismo

Un personaje clave en la aproximación ideológica a ese modelo fascista italiano fue Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco. Serrano Suñer, nacido en 1901, había sido elegido diputado de la CEDA en las elecciones de 1933 y 1936 por Zaragoza, ciudad donde ejercía la abogacía. Estaba casado con Ramona Polo, hermana menor de Carmen Polo, la mujer de Franco, y era amigo íntimo de José Antonio Primo de Rivera desde su época de estudiante en la Universidad Central de Madrid.

Tras el fracaso de la sublevación militar en Madrid, Serrano Suñer fue detenido, aunque pudo escapar en enero de 1937. Poco después llegó a Salamanca, donde Franco había instalado su cuartel general, con su mujer e hijos, traumatizado por su cautiverio y porque había visto cómo sus hermanos José y Fernando caían asesinados por haber organizado su huida. Serrano Suñer, experto en derecho administrativo, parecía la persona idónea «para poner las bases jurídicas del Nuevo Estado», una labor para la que no estaban capacitados ni Nicolás Franco ni el monárquico autoritario José Antonio Sangróniz, los dos principales colaboradores del Caudillo hasta ese momento. «Serrano Suñer sería quien finalmente daría forma específica a la idea de Franco de conformación de un régimen de partido único.»[13]

Serrano Suñer le explicó a Franco que lo que él dirigía era un «Estado campamental», poco eficaz y de mentalidad cuartelera, que tenía que ser sustituido por una maquinaria política permanente, un nuevo Estado similar al de los fascismos. El plan de Serrano Suñer consistía en crear un movimiento político de masas a partir de la unión de Falange y la Comunión Tradicionalista Carlista, una empresa en la que el hermano de Franco, Nicolás, su hombre de confianza hasta que llegó Serrano Suñer, no había tenido éxito.

Franco convocó primero a Rodezno y a otros dirigentes tradicionalistas navarros, pera comunicarles su decisión: no habría negociaciones entre los dos grupos, algo que podría reproducir los enfrentamientos partidistas de la democracia, y sería él quien decretaría la unificación. La Falange le preocupaba más, porque era un partido mayor, con ambiciones totalitarias, pero sus dirigentes, desde la muerte de José Antonio, estaban enzarzados en una lucha por el poder.

Esa lucha por el poder desembocó en una reyerta sangrienta entre los dos grupos

rivales, el 16 de abril de 1937, que dejó dos muertos, hasta que fue controlada por el ejército, lo cual fue aprovechado por Serrano Suñer para silenciar cualquier foco de resistencia a la unificación. Tres días después se dio a conocer el decreto de unificación, elaborado por él. Falange y los carlistas se unían bajo la jefatura de Franco en una «sola entidad política nacional», Falange Española Tradicionalista y de las JONS, «enlace entre el Estado y la sociedad», donde la «espiritualidad católica» de los requetés, «la fuerza tradicional», se integraba en «la fuerza nueva», el fascismo, como había pasado «en otros países de régimen totalitario». Todos los demás grupos políticos que habían sustentado también el esfuerzo bélico de los rebeldes, incluidos los monárquicos alfonsinos y la CEDA, quedaban excluidos[14].

Con ese decreto, las estructuras jerárquicas de falangistas y requetés desaparecían porque el jefe supremo y único, a partir de ese momento, era Franco. Manuel Hedilla, que ante la ausencia de José Antonio Primo de Rivera presidía la Falange, no aceptó ser relegado y comunicó a los jefes provinciales que obedecieran únicamente sus órdenes. El 25 de abril, Hedilla fue arrestado junto con otros falangistas disidentes. Dos meses después, compareció ante un consejo de guerra sumarísimo que lo condenó a muerte por «adhesión a la rebelión» y resistencia al cumplimiento del decreto de unificación. Franco le indultó finalmente, pero pasó cuatro meses en la cárcel y ya nunca volvió a la actividad política[15].

Dado el control que Franco tenía de la situación, había poca posibilidad de resistencia, por mucho que los carlistas o el sector puro de la Falange reunido en torno a la hermana del fundador estuvieran enojados por la forma en que se había producido la unificación. Fue desde el principio un partido dominado por Franco, que culminaba así la eliminación de cualquier rival político. Antonio Goicochea disolvió Renovación Española y la posición de Gil Robles, que aceptó entusiastamente la unificación y dio instrucciones para que Acción Popular acatara el decreto, no mejoró. Los falangistas nunca le perdonaron el paso por el Gobierno de la República y Franco tampoco tenía mucho interés en incorporar a un representante de la vieja política que había sido además su superior como ministro de la Guerra.

Por si el camino no lo tuviera Franco suficientemente despejado, apenas un mes y medio después de la unificación desapareció también el único competidor con alguna posibilidad que quedaba. El 3 de junio de 1937 el avión que llevaba al general Emilio Mola a inspeccionar el frente, en plena campaña para la conquista del norte, se estrelló cerca de Alcocero, un pueblecito de la provincia de Burgos. Según la versión oficial, el avión chocó contra una colina a causa de la niebla, aunque se levantaron rumores de sabotaje y también de que al aparato, un Airspeed A. S. 6 Envoy de construcción británica, le dispararon por error los aviones de su propio bando. Franco se sintió «aliviado por la muerte del general Mola», como escribió el embajador alemán Von Faupel, pero dejó de viajar en avión y comenzó a visitar el frente de guerra en coche[16].

Soplaban en Europa vientos fascistas, Franco era apoyado en su guerra contra la

República por Italia y Alemania, pero ese proceso de fascistización en la España sublevada nunca pudo poner en cuestión el poder del ejército y tuvo que convivir siempre con la presencia de la Iglesia católica como una fuerza social y cultural muy influyente. Así, menos de un año después de la sublevación militar, la dictadura personal de Franco se asentaba ya sobre los tres pilares que la iban a acompañar hasta su muerte cuatro décadas después: el Ejército, la Iglesia católica y el partido único.

Militarismo, fascismo y catolicismo eran los componentes esenciales del Nuevo Estado que emergió conforme la guerra avanzaba. Por un lado, se exaltaba al líder, Caudillo, como el Führer o el Duce, se imponía el brazo en alto como saludo nacional, y la camisa azul; por otro, aparecían los ritos y las manifestaciones religiosas, las procesiones, misas de campaña y las ceremonias político-religiosas de tipo medievalizante. La España sublevada comenzó a ser un territorio especialmente apto para la «armonización» del fascismo, de la «moderna corriente autoritaria», con la «gloriosa tradición». Habría un doble proceso, por lo tanto, paralelo y simultáneo, «de fascistización progresiva del aparato del Estado (y del estilo político de la España nacional) y de restauración de la vida religiosa»[17].

La apelación al «sentido religioso y militar de la vida», al autoritarismo, al desprecio por los sistemas democráticos, acompañó ya para siempre el discurso sobre la cruzada. Sacerdotes y religiosos, sobre todo jesuitas y dominicos, se alinearon sin ningún rubor con los aires autoritarios y fascistas que soplaban entonces en muchas partes de Europa y ofrecían definiciones del fascismo adaptadas a las circunstancias presentes en España: «Si por fascistas se entiende a los que propugnan un Gobierno que dé al traste con las farsas del parlamentarismo y del sufragio universal; que ahogue los sindicatos y partidos de la revolución, cuevas de bandoleros; que abomine de la democracia al uso, disfraz de vividores y camisa de fuerza para el pueblo inculto; que descuaje la envenenada semilla judeo masónica»; si eso era el fascismo, entonces «el Alzamiento Nacional, el Gobierno de Franco, toda la España cristiana son fascistas»[18].

Durante un tiempo, que cubrió toda la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, el fascismo y el catolicismo fueron compatibles, en las declaraciones y en la práctica diaria, en los proyectos que germinaron en el bando de los militares rebeldes y en la forma de gobernar que impuso Franco. El fascismo era «una protesta viril contra una democracia absurda y un liberalismo huero» y era inútil oponerse a ese «torrente»: «los católicos no debíamos oponernos al movimiento denominado *fascismo*, que era eminentemente nacional; debíamos recibirlo con amor y encauzarlo debidamente por derroteros tradicionales y cristianos: era preciso armonizar la moderna corriente autoritaria con nuestra gloriosa tradición y así surgiría un Estado nuevo, libre de caducas huellas democráticas y liberales, impregnado en nuestras instituciones históricas»[19].

La España que iban construyendo militares, fascistas y católicos era un territorio especialmente apto para esa «armonización» de la «moderna corriente autoritaria»

con la «gloriosa tradición». El sentimiento de incertidumbre y temor provocado por los proyectos reformistas de la República, el anticlericalismo y la revolución expropiadora y destructiva que siguió al golpe militar fueron utilizados por los militares, la Iglesia católica y la Falange para movilizar y conseguir una base social dispuesta a responder frente a lo que se interpretaba como claros síntomas de descristianización y de «desintegración nacional». El Ejército, la Iglesia y el partido fascista los representaban y de ellos salieron, tras la victoria en la guerra y durante la larga dictadura que la siguió, el alto personal dirigente, el sistema de poder local y los fieles siervos de la Administración[20].

La radicalización que el fascismo aportó a los proyectos y prácticas contrarrevolucionarios, su potencial totalitario, la pureza y exclusivismo ideológico y la experiencia de la guerra de exterminio puesta en marcha por los militares rebeldes desde julio de 1936, se fusionó con la restauración de esa consustancialidad histórica entre el catolicismo y la identidad nacional española. El catolicismo era el antídoto perfecto frente a la República laica, el separatismo y las ideologías revolucionarias. Se convirtió en el vínculo perfecto para todos los que se adhirieron al bando rebelde, desde los más fascistas a quienes se habían proclamado como republicanos de derechas.

En España, por el peso del Ejército y de la Iglesia, el asalto de la derecha a la democracia parlamentaria nunca llegó a ser una acción «revolucionaria» para remodelar de arriba abajo la sociedad, pero es que eso, en realidad, sólo lo consiguió el nacionalsocialismo en Alemania. En la Italia fascista, el modelo más próximo al español, la Monarquía y la Iglesia católica coexistieron con el régimen hasta la destitución de Mussolini en julio de 1943.

La creación de ese nuevo Estado con el que soñaba Serrano Suñer dio sus primeros pasos tras la unificación de todas las fuerzas políticas en un solo partido. El «Estado campamental» dejó paso gradualmente a una burocracia más organizada. En el verano de 1937, el general monárquico Francisco Gómez Jordana sustituyó a otro general, Fidel Dávila, en la presidencia de la Junta Técnica del Estado, un hombre que se mostró bastante ineficaz en los meses que estuvo al frente de ese órgano de poder y al que los falangistas llamaban «don Fávila». Gómez Jordana, conde de Jordana, lamentó el caos y «maremagnum» que se encontró y, junto con Serrano Suñer, intentó poner orden en el aparato administrativo. Ambos creían que lo que necesitaba la España sublevada era un Gobierno propiamente dicho y no una Junta Técnica. Y así se lo dijeron a Franco.

El 30 de noviembre de 1938 Franco nombró su primer Gobierno, cuya composición había cocinado Serrano Suñer, si creemos lo que él mismo transmitió en sus memorias. Los cargos, como pasaría ya siempre en todos los gobiernos franquistas posteriores, fueron repartidos cuidadosamente entre militares, carlistas, falangistas y monárquicos, es decir, entre todos los sectores que formaban esa coalición de fuerzas que se levantó en armas contra la República en julio de 1936.

Cada uno de esos sectores controlaba las áreas que les resultaban más próximas o queridas: los ministerios militares y de orden público para los militares; el movimiento sindical y los ministerios «sociales», para los falangistas; los económicos, para hombres técnicos, abogados, juristas o ingenieros; y la educación y justicia para los católicos, tradicionalistas o exmiembros de Acción Española. Nunca en esos 37 años de gobiernos de Franco se sentaría una mujer en un ministerio. Y lo que siempre pedía el Caudillo, por encima de cualquier otro mérito, era fidelidad al «mando».

Ese primer Gobierno representaba el triunfo de Serrano Suñer, nuevo ministro de Interior, frente a Nicolás Franco, que era el representante de esa administración poco estructurada que había dominado durante el primer año de guerra. Como dijo Franco, el Gobierno se ocuparía de la «organización nacional-sindicalista del Estado», aunque más que construir lo que hizo fue destruir la obra legislativa de la República, especialmente en todo lo que tuvo que ver con la «revisión de la legislación laica». Pero sobre todo era un Gobierno «nacido por la guerra y en la guerra» y por eso, para ganarla definitivamente, tuvo gestos políticos de fascistización para satisfacer el compromiso adquirido con las potencias del Eje[21].

El principal fruto político de esa nueva etapa fue la aprobación el 9 de marzo de 1938 del Fuero del Trabajo, una especie de falsa constitución basada en la *Carta del lavoro* del fascismo italiano. Fue un texto de compromiso entre el falangismo, representado por Ridruejo y el tradicionalismo católico, cuya huella en el texto dejó Eduardo Aunós, de Acción Española, un término medio entre el «capitalismo liberal y el materialismo marxista», con la empresa de «canalizar […] la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, y de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia»[22].

Unas semanas más tarde, el 22 de abril, Serrano Suñer daba un paso más en el proceso de fascistización con la aprobación de la Ley de Prensa (que estaría en vigor hasta 1966) y que imponía el control gubernativo absoluto sobre los medios de comunicación con la censura previa. En enero de 1937 se había creado Radio Nacional y en enero de 1939 vería la luz la agencia estatal de noticias EFE. Cuando acabó la guerra, el Gobierno de Franco ya había sentado las bases de una política informativa orientada a través de consignas a la apología de la dictadura y a la represión de los disidentes.

Las raíces de la dictadura de Franco

La fusión entre la tradición católica y el ideario fascista tenía como vínculo común la destrucción de las políticas y de las bases sociales y culturales de la República. Antes de que apareciera en escena Francisco Franco como Generalísimo y Caudillo de los militares rebeldes, la Junta de Defensa Nacional de Burgos ordenó, el

4 de septiembre de 1936, «la destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas» y la supresión de la «coeducación», de la enseñanza de niñas y niños juntos en las escuelas, uno de los caballos de batalla de la jerarquía eclesiástica y de los católicos contra la política educativa republicana.

La revitalización religiosa llegó hasta el último rincón de las tierras en poder de los militares sublevados, con el cambio de calles, la restauración del culto público, el restablecimiento de la enseñanza religiosa y la «reposición» de los crucifijos en las escuelas. El «regreso» de los crucifijos a las escuelas, que habían sido retirados de ellas durante los años republicanos, adquirió una especial carga simbólica, con los niños como testigos. Alcaldes y sacerdotes dirigieron en la mayoría de los casos las ceremonias, mientras que los obispos solían aportar el discurso.

En la primera reunión del primer Gobierno de Franco, el jueves 3 de febrero de 1938, se decidió «revisar» toda la legislación laica de la Segunda República y así, a golpe de decreto derogatorio, se anularon los matrimonios civiles (marzo de 1938) y cayó una ley tras otra, desde la Ley de Divorcio (agosto de 1938) hasta la de Confesiones y Congregaciones Religiosas (febrero de 1939), aquella ley de junio de 1933 que había marcado el punto álgido de desencuentro entre la Iglesia católica y la República.

La «renovación» legal fue tan rápida que sólo unos meses después, el último día de junio de 1938, José María Yanguas Messía hacía balance de la «catolicidad» de su Gobierno en el discurso de presentación de credenciales como embajador ante la Santa Sede: «Ha devuelto ya el crucifijo y la enseñanza religiosa a las escuelas, ha derogado la Ley del Matrimonio Civil, ha suspendido el Divorcio, ha restaurado ante la Ley civil la Compañía de Jesús, ha reconocido en letras oficiales la personalidad de la Iglesia católica como sociedad perfecta […] la santidad de las festividades religiosas y ha llevado al Fuero del Trabajo una concepción auténticamente católica y española»[23].

Agradecida y feliz estaba la Iglesia católica ante tanta obra reparadora por parte del Gobierno. En primer lugar, con el «gloriosísimo Caudillo», a quien se le consideraba sin ninguna duda el «hombre providencial, elegido por Dios para levantar España», según rezaba el *Catecismo patriótico español* que el dominico Ignacio G. Menéndez Reigada publicó en Salamanca en 1937, anticipo del rosario de catecismos que iban a publicarse en los primeros años de la posguerra.

España volvía a ser católica, una, grande y libre, pero para consolidar eso había que meter «a Dios y sus cosas en todo», en las leyes, en la casa y en las instituciones. Y había que arrojar a los «falsos ídolos intelectuales», expurgar las bibliotecas, pedía Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca, en su carta pastoral de mayo de 1938, «sobre todas las populares y aun escolares y pedagógicas, en las cuales tanta mercancía averiada y venenosa se había introducido en los últimos años»[24].

La Iglesia pedía todo eso y mucho más a los gobernantes, a cambio del apoyo

prestado a la sublevación, de la bendición de la violencia emprendida contra republicanos y revolucionarios. La «reconstrucción espiritual» pasaba sobre todo por las escuelas. «Se acabó el desdén por nuestra historia», decía Pedro Sainz Rodríguez, monárquico fascistizado, ministro de Educación en el primer Gobierno de Franco, en una circular a la Inspección de Primera Enseñanza que envió a comienzos de marzo de 1938. Y unos meses después, desde el mismo Ministerio, se marcaba el camino a seguir en la reorganización de la enseñanza pública en Barcelona, cuando cayera conquistada por las tropas de Franco: «Debe llevarse a las escuelas Crucifijos, retratos del Jefe del Estado, banderas nacionales y algunos letreros breves con emblemas y leyendas sintéticas, que den la idea a los niños de que se forma un nuevo Estado español y un concepto de Patria que hasta ahora se desconocía»[25].

No todo era religión, sin embargo, en la retaguardia franquista. Y para escapar del viejo concepto de caridad y beneficencia y plasmar los sueños de «justicia social» falangistas, la lucha en plena guerra contra «el hambre, el frío y la miseria», nació en octubre de 1936 Auxilio de Invierno, convertida en Delegación Nacional de Auxilio Social en mayo de 1937. Fue la obra de Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, y de Javier Martínez de Bedoya, un antiguo amigo de estudios de Onésimo, quien tras pasar una temporada en la Alemania nazi, volvió a España en junio de 1936 y en otoño de ese mismo año le propuso a Sanz Bachiller, que era en ese momento jefa provincial de la Sección Femenina de Valladolid, crear algo similar a la Winterhilfe nazi para recoger donativos y repartir comida y ropa de abrigo entre los más necesitados. En menos de un año, lo convirtieron «en una institución al servicio de la política demográfica del "Nuevo Estado" franquista», defendiendo la maternidad, con la puesta en marcha de una obra de protección a la madre y al niño: «Necesitamos madres fuertes y prolíficas, que nos den hijos sanos y abundantes con que llevar a cabo los deseos de imperio de la juventud que ha muerto en la guerra»[26].

La formación de ese nuevo Estado y del nuevo concepto de Patria destrozó las conquistas y aspiraciones políticas de intelectuales, profesionales y sectores de la administración que habían desarrollado una cultura política común marcada por el republicanismo, el radicalismo democrático, el anticlericalismo y, en algunos casos, el mesianismo hacia las clases trabajadoras. Maestros, médicos, funcionarios y profesores de universidad eran perseguidos por haber desarrollado una labor «perturbadora». El castigo, en forma de asesinato, alcanzó a los rectores de algunas universidades. Famosos fueron los casos de Leopoldo García-Alas, hijo del escritor Leopoldo Alas «Clarín», jurista y político republicano, profesor y rector de la Universidad de Oviedo, fusilado en febrero de 1937. Y Salvador Vila Hernández, rector de la Universidad de Granada, notable arabista, discípulo de Miguel de Unamuno, fusilado en octubre de 1936 en Víznar, en el mismo lugar que había caído asesinado dos meses antes el poeta Federico García Lorca[27].

Frente a esos intelectuales republicanos, que desaparecían o eran silenciados, se

abrió paso el proyecto fascista «de recomposición de la unidad de la patria», que hasta 1936 apenas había podido echar alguna raíz. La sublevación militar cambió esa tendencia y el «programa político, retórica y símbolos» de Falange, un partido, recordemos, fundado en octubre de 1933, «atrajeron de inmediato a jóvenes intelectuales», de los que salió «el único y coherente proyecto de construir un Estado fascista en España»[28].

Dichos intelectuales alcanzaron buenas posiciones en el gobierno y la administración, dominaron el aparato de prensa y propaganda y hasta la derrota de las potencias del Eje en 1945, se creyeron de verdad el proyecto y mostraron un entusiasmo importante a la hora de ejecutarlo, a la vez que sustituían a los funcionarios e intelectuales depurados y represaliados por los políticos del nuevo Estado en construcción. Entre los más notables y entusiastas se encontraban Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester, Luis Rosales y Antonio Tovar. Católicos y fascistas estaban juntos en la misma empresa y pugnaban por agrandar sus parcelas de poder en la educación y en la prensa y propaganda respectivamente. Hubo fricciones entre esos dos proyectos «con pretensiones liberalizadoras», aspirando unos a restaurar una Monarquía católica y tradicional y los otros a instaurar un Estado fascista. Fue Franco, el jefe supremo, Caudillo y Generalísimo, quien puso orden y equilibrio, hasta que cayeron en desgracia o abandonaron la nave para reconstruir su pasado fascista y presentarse después de 1945 como liberales ante la historia[29].

Y al margen de esas fricciones, juntos estuvieron incluso en el recuerdo de sus mártires asesinados, porque juntos estaban también en el «pacto de sangre» sellado por la violencia política que aplicaron y bendijeron en la retaguardia durante la guerra y en los años victoriosos después. El ritual y la mitología montados en torno a los asesinados en la retaguardia republicana, de enorme impacto emocional, reforzaron el poder y presencia de los católicos y falangistas en la coalición de fuerzas que mandó Franco, atizaron las pasiones vengativas y anularon cualquier atisbo de sensibilidad hacia los vencidos cuando la guerra finalizó.

El decreto de la Jefatura del Estado del 16 de noviembre de 1938 proclamaba «día de luto» nacional el 20 de noviembre de cada año, en memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera un día como ese de 1936, y establecía, «previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas», que «en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista»[30].

Ése fue el origen de la colocación en las iglesias de placas conmemorativas de los «caídos». Y aunque no aparecía así en el decreto, todas esas inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa, «mártires de la Cruzada» todos ellos. Porque, como escribía Aniceto Castro Albarrán, el canónigo magistral de Salamanca en su *Guerra Santa*, todas las víctimas de la «barbarie rusa» eran religiosas y no sólo el clero: «los

católicos más destacados, las personas más piadosas, los “derechistas” más apóstoles, todos aquellos, en fin, cuyo martirio significaba, exclusivamente, odio religioso y persecución a la Iglesia»[31].

Todo parecía ir mejor en la España de Franco, más unida política e ideológicamente que la República, aunque esa unión tenía mucho que ver con la marcha de la guerra, siempre victoriosa, sin apenas reveses, gracias sobre todo a los efectos del Acuerdo de No Intervención respetado por las democracias y a la intervención alemana e italiana[32].

Así las cosas, el cansancio de la guerra, que se reflejó sobre todo en los últimos meses en ciudades como Madrid o Barcelona, las protestas y el malestar por la falta de víveres en la retaguardia no se dieron en la España franquista, en la que no hubo escasez de alimentos. Los militares rebeldes controlaron desde el principio las zonas más importantes de producción agraria. El predominio de lo militar sobre lo civil fue claro desde el principio, con una dirección militar unificada que «determinó una supeditación absoluta de las actividades económicas a los objetivos bélicos. Frente a la indisciplina provocada por la revolución, en la zona nacional reinó la más férrea disciplina productiva». Y frente al caos monetario en la zona republicana, con multitud de monedas y pagarés, la peseta «nacional» experimentó una depreciación limitada y el abastecimiento no sufría grandes trastornos. El auxilio exterior de Italia y Alemania y la preferencia de las grandes empresas internacionales por la causa de Franco fueron también básicos para mantener la unidad, la moral y la fe en la victoria[33].

Mientras que anarquistas y socialistas incautaban y colectivizaban tierras, una de las primeras medidas de la Junta de Defensa Nacional, constituida en Burgos el 24 de julio de 1936, y de su sucesora, la Junta Técnica del Estado, fue desmantelar la obra legislativa de la República y la actuación del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Allí donde se pudo, empezando por Andalucía, las tierras se devolvieron a sus antiguos propietarios. El ministro de Agricultura del primer Gobierno de Franco, el falangista Raimundo Fernández Cuesta, creó en 1938 el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, pero los propietarios no habían esperado a recuperar «legítimamente» sus tierras y la violenta contrarrevolución de militares, terratenientes, señoritos y falangistas había dado ya su merecido a miles de campesinos en Extremadura y Andalucía.

En el tema de la propiedad de la tierra y de las relaciones laborales, en el campo y la industria, los militares sublevados emprendieron una rápida contrarrevolución para restablecer el orden anterior a la proclamación de la República. La defensa de la propiedad privada y del orden social capitalista constituyeron ejes primordiales de la coalición reaccionaria que apoyó el golpe de Estado de julio de 1936 y la destrucción violenta de la República por medio de la guerra civil.

La entrada de las tropas franquistas en las ciudades conquistadas a los republicanos, desde Málaga en febrero de 1937 a Madrid a finales de marzo de 1939,

fue celebrada con tedeums, con rituales católicos que dotaban de unidad a todas las fuerzas reaccionarias. Los obispos levantaban el brazo con el saludo fascista en los actos cívico-militares, bendecían las armas, enardecían a las tropas, alentaban la persecución de los vencidos. Porque la recatolización por la fuerza de las armas no contempló nunca la reconciliación, el perdón para los vencidos. La rendición incondicional del enemigo y el «triunfo de la ciudad de Dios» llegarían acompañados de una retórica y de una práctica empapadas de militarismo, nacionalismo y triunfalismo católico. Una victoria total y definitiva.

Franco y sus compañeros militares dejaron claro desde comienzos de 1937 que no iban a aceptar ninguna mediación para acabar la guerra, «sino rendición sin condiciones». Ya se lo dijo Franco a Gomá en junio de 1937, para que el primado, un buen amigo ya del Generalísimo por esas fechas, lo transmitiera a la Santa Sede. Ni aceptaría un pacto ni tenía que rectificar nada sobre la supuesta dureza con que los militares trataban al enemigo «porque nadie era condenado sin los trámites previos y según las normas del código militar».

Y Gomá se lo creía. «El general Franco es magnánimo», solía decirle a los que dudaban. Porque él lo conocía de verdad, había intercedido ante él para que, tras la conquista de Bilbao, «la represión fuese lo más suave posible», especialmente con los sacerdotes, para que no se representara de nuevo esa «horrenda» escena de sacerdotes católicos asesinados por militares católicos que había seguido a la caída de Guipúzcoa[34].

Un año después, la opinión de Franco sobre una posible mediación se repetía ya como un sonsonete: «Cuantos desean la mediación, consciente o inconscientemente, sirven a lo rojos y a los enemigos encubiertos de España […] Nuestra justicia no puede ser más serena ni más noble; su generosidad encuentra sólo el valladar del interés supremo de la patria; ninguna clase de mediaciones podía hacerla más benigna». El 18 de octubre y a comienzos de noviembre de 1938, a punto de concluir la larga batalla del Ebro, declaró más de lo mismo al corresponsal de la agencia Reuter: «La victoria rotunda y definitiva de nuestro ejército es la única solución para que subsista España […] y el único final: la entrega incondicional del enemigo»[35].

Ni mediación ni perdón. Todos los militares hablaban y hablaban de un proceso de «depuración», como si hubiera que «purificar» España de los «cuerpos enfermos». Y hubo muchos eclesiásticos, obispos, religiosos y sacerdotes que los superaban con creces en la defensa del asesinato y de la sinrazón. «Estamos en la hora de vencer. Luego vendrá la de convencer. Convencer a los vencidos y ayudar a los vencedores a forjar una España grande para un Dios inmenso», pensaba ya el 1 de abril de 1937 Martín Sánchez-Juliá, dirigente de la Acción Católica Nacional de Propagandistas. Y el obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo y Garay, escribía que la mediación era «inadmisible», porque «transigir con el liberalismo democrático, absolutamente marxista, sería traicionar a los mártires». La pacificación por las armas, a punta de espada. Así era la paz que tenía que llegar[36].

De los púlpitos salían voces atronadoras pidiendo el exterminio del contrario. Lo sabemos gracias a los testimonios fidedignos de algunos sacerdotes, de George Bernanos, o de Antonio Ruiz Vilaplana, secretario del Juzgado de Instrucción de Burgos que «dio fe» y relató sus experiencias desde París tras huir de la «España nacionalista». En esa ciudad castellana, que tanto olió a incienso y asesinato necesario desde julio de 1936, el predicador de la iglesia de la Merced pedía un castigo implacable para los enemigos de Dios: «Habéis de ser con esas personas, todos hemos de ser, como el fuego y el agua…, no puede haber pactos de ninguna clase con ellos… no puede haber perdón para los criminales destructores de las iglesias y asesinos de los sagrados sacerdotes y religiosos. Que su semilla sea borrada, la semilla del mal, la semilla del diablo. Porque verdaderamente, los hijos de Belcebú son los enemigos de Dios»[37].

Fallaron todos los intentos de acabar la guerra por medio de una paz negociada, auspiciados por Manuel Azaña, presidente de la República, y acogidos incluso favorablemente por el Vaticano en la primavera de 1937, en el mismo momento en el que Franco pedía a Gomá que se difundiera en el extranjero un escrito colectivo del episcopado español. Nadie en la España de Franco quería hablar de «convivencia», de «seguir viviendo juntos para que la nación no perezca», como pedía Azaña en Valencia el 18 de julio de 1937, un año después del inicio de aquella «guerra terrible, guerra sobre el cuerpo de nuestra propia patria»[38].

El cardenal Gomá en ese tema era un militar más, que rechazaba cualquier paz que no fuera la de las armas y que incluso, como primado de la Iglesia de España y representante oficioso de la Santa Sede hasta octubre de 1937, aconsejaba al Vaticano que no colaborara en los intentos de lograr un armisticio, consejo en el que también insistía desde Roma el General de los jesuitas Ledechowski. Pocos eclesiásticos, tan pocos que ni siquiera se les oía, mostraron su desacuerdo con esa posición.

Las voces discordantes venían de fuera, de intelectuales católicos franceses como François Mauriac o Jacques Maritain, que escandalizados por tanto crimen bendecido crearon el Comité francés para la paz civil y religiosa en España. Pero la Iglesia católica española sentía pavor ante un posible cambio de rumbo, una vuelta a la República y a su anticlericalismo, precisamente ahora que por medio de la espada y la cruz resucitaba la España imperial, una, grande y libre[39].

Hubo quienes pudieron huir de esa España grande y libre y se refugiaron en las montañas de Andalucía, Asturias, León o Galicia. Fueron los «huidos» que permanecieron escondidos porque sabían que no podían volver a casa y que si les cogían les esperaba una durísima represión. En bastantes casos constituyeron el germen de la actividad guerrillera posterior a la Guerra Civil y que se mantuvo hasta comienzos de los años cincuenta. Y aunque varios cientos de ellos murieron en enfrentamientos con las fuerzas armadas ya durante la guerra, nunca estuvieron organizados ni plantearon una alternativa a la lucha abierta en los campos de batalla. La Guerra Civil española no combinó la guerra convencional con la lucha de

guerrillas, una estrategia que sí había sido utilizada en la llamada guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón y en las sucesivas guerras civiles carlistas del siglo XIX.

6
La guerra larga

CUANDO COMENZÓ LA GUERRA civil de 1936, el Ejército español carecía de armamento moderno, tenía un cuerpo inflado de jefes y oficiales y, exceptuando a los efectivos destinados en África, el grado de organización y preparación de las distintas unidades era bastante deficiente. Era una institución «pobre y anticuada, prácticamente sin carros de combate ni cañones antiaéreos y cuya aviación volaba en aparatos pasados de moda y frecuentemente en mal estado». Todos sus altos mandos eran veteranos del conflicto de Marruecos, donde habían adquirido la experiencia de luchas coloniales contra un «enemigo primitivo», pero ninguno de ellos había participado en una guerra moderna[1].

Como consecuencia del triunfo o fracaso de la sublevación militar de julio de 1936, que dejó a España partida en dos zonas con dos contendientes enfrentados, el Gobierno de la República, que disponía en principio de más territorio, recursos económicos y con las ciudades más importantes y pobladas en su poder, se quedó sin fuerzas militares y sin capacidad para organizar de forma disciplinada a las milicias revolucionarias que nacieron en lugar del ejército. Los militares sublevados, por el contrario, contaban con las tropas de África, que pudieron pasar muy pronto a la Península gracias a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista y eran profesionales que sabían las reglas básicas de la técnica militar.

La guerra fue larga, casi tres años, y antes de perderla, la República fue castigada de forma lenta, abandonada a su suerte por las potencias democráticas, con batallas que dejaban a sus tropas diezmadas frente a un ejército, el de Franco, que siempre pudo disponer de la ventaja de la ayuda exterior. No hubo grandes batallas, si se compara con la de las dos guerras mundiales, y hay especialistas que piensan que militarmente fue «una inmensa chapuza por ambos bandos»[2]. Pero fue la primera de las guerras del siglo XX en que la aviación se utilizó de forma premeditada en operaciones de bombardeo de la retaguardia y no hay duda de que los ataques de la aviación italiana sobre la población de Madrid, Barcelona y Valencia, las tres ciudades más grandes de España, ayudaron también a ganar la guerra al ejército de

Franco.

Ejércitos contra milicias

En los lugares donde la sublevación militar fue derrotada, los grupos más activos de la izquierda, fundamentalmente socialistas y anarquistas, quedaron armados y la marea del poder popular y revolucionaria hizo desaparecer, o incorporó en algunas ocasiones, a las unidades del ejército leales a la República. En los tres meses que siguieron a la sublevación, la guerra fue una lucha entre milicianos armados, que carecían de los elementos básicos que caracterizan a los ejércitos, y un poder militar que concentraba todos los recursos a golpe de autoridad y disciplina.

Las milicias, que nacieron en las ciudades, intentaron extender su poder armado a otros lugares. De ahí que ya el 21 de julio, una de las primeras decisiones tomadas por los anarquistas en Cataluña, vencidos los militares sublevados, fuera constituir el Comité Central de Milicias Antifascistas y enviar columnas armadas a tomar Zaragoza, la principal ciudad de Aragón, a trescientos kilómetros de Barcelona, que había quedado desde el principio en manos de los sublevados.

Resulta difícil, sin embargo, aceptar esa imagen convencional de miles y miles de milicianos dispuestos a tomar el camino hacia Aragón para combatir al fascismo. Las fotografías y documentales de la época nos muestran a multitudes aplaudiendo su partida en las calles de Barcelona, pero no parece que fueran tantos los que, seducidos por las arengas de algunos dirigentes anarquistas, se subían a los camiones con el fusil al hombro y el puño en alto. Las cifras que dieron los anarquistas oscilan entre 20 000 y 30 000 hombres agregados paulatinamente para cubrir todo el frente de Aragón. Según las fuentes franquistas, fueron 15 000 los que «invadieron» esa región[3].

Cada organización política o sindical tenía su milicia y cada milicia su comité dirigente. Para los anarquistas y los socialistas de izquierda las milicias eran una versión del «pueblo en armas» en las que confiaban para hacer la revolución y destruir los vestigios del orden que representaban los militares y los grupos sociales que les apoyaban. Educados en la tradición antimilitarista, y en la desconfianza en los militares profesionales, muchos de esos milicianos, empezando por sus dirigentes, no iban a ceder fácilmente sus posiciones. Por eso fueron tan unidos en los primeros momentos la organización de las columnas armadas, la revolución expropiadora y el asesinato de los enemigos políticos e ideológicos.

En otras palabras, que los militares que permanecieron fieles a la República y que tenían que enfrentarse en lo que ya era una guerra abierta a otros militares, se encontraron con que no tenían mandos intermedios y que en vez de soldados, disponían de miles de trabajadores y campesinos, muy entusiastas y revolucionarios, impregnados de ardor antifascista, pero sin entrenamiento y sin organización ni

disciplina para combatir con eficacia en campo abierto.

Durante el verano de 1936 las milicias fueron un recurso de emergencia para responder a la rebelión militar y a la escasez de unidades regulares del ejército fieles a la República. Su uniforme era un mono azul, con pañuelo rojo (socialista) o rojinegro (anarquista) al cuello y boina o gorro con la insignia de su organización. Llevaban fusiles y ametralladoras cogidos en los asaltos a las cuarteles, pero también escopetas de caza y muchas armas inservibles. Discutían en asambleas las decisiones a tomar, elegían a los jefes que les iban a mandar y en sus medios de expresión, periódicos y panfletos, abundantes en las primeras semanas, se resaltaba su valor y heroísmo frente a la «bestia fascista».

Pronto se comprobó que esas milicias mal organizadas, peor pertrechadas y con escasa disciplina no servían para hacer la guerra a un ejército que avanzaba hacia Madrid con las tropas trasladadas desde África. El 7 de agosto, José Giral, presidente de Gobierno de la República, nombró ministro de la Guerra al teniente coronel Juan Hernández Saravia, que ya había sido jefe del gabinete militar de Manuel Azaña y que intentó recuperar a los militares profesionales disponibles. Aunque las milicias iban a continuar durante un tiempo exhibiendo su poder armado, el nuevo ministro decretó el primer llamamiento a filas tras la quiebra del sistema de movilización provocado por el golpe militar.

Enfrente, los sublevados tenían también muchos voluntarios, pero en su ejército hubo desde el principio decenas de miles de soldados, guardias civiles y policías uniformados. La red de mando fue recompuesta por los oficiales africanistas y los generales rebeldes impusieron desde el principio la disciplina militar. Así las cosas, con esas dos formas diferentes de hacer la guerra, el verano de 1936 acabó con sustanciales avances rebeldes y pérdidas republicanas, incluidas dos capitales de provincia, Badajoz y San Sebastián. Cuando cayó esta ciudad vasca, el 13 de septiembre, las columnas de moros y legionarios de África estaban cerca de Madrid. En cuatro semanas habían avanzado casi quinientos kilómetros, matando a milicianos mal armados y sembrando el terror por donde pasaban.

El ejército de África, sin embargo, no siguió la marcha hacia Madrid, la capital de la República, una ciudad entonces con débiles defensas, y Franco ordenó al general José Enrique Varela que se desviara hacia Toledo para liberar a los sublevados que resistían en el Alcázar, sitiado desde el 22 de julio. Como resultado de esa decisión, los militares rebeldes perdieron una gran oportunidad de lanzarse sobre Madrid rápidamente, antes que los republicanos pudieran reorganizar la defensa y llegara el primer contingente importante de ayuda extranjera. Pero Franco estaba más interesado en los «beneficios políticos de liberar el Alcázar», que le iban a allanar el camino a su nombramiento como jefe supremo de las tropas sublevadas. El ataque a Madrid se retrasó dos semanas[4].

Mientras tanto, Franco había consolidado su liderazgo de forma indiscutible y la toma del Alcázar agrandó su leyenda. Porque Franco había prometido un mes antes

liberar pronto al millar de guardias civiles y falangistas que, mandados por el coronel José Moscardó, se habían encerrado allí en los primeros días de la sublevación, con bastantes mujeres y niños de conocidos militantes de izquierda como rehenes. La famosa frase de Moscardó «sin novedad en el Alcázar», repetida en un montaje ante Franco y numerosos periodistas dos días después de su liberación, fue adecuadamente propagada. Franco era el salvador de los héroes sitiados, el símbolo de un ejército dispuesto a ganar la guerra a cualquier precio.

Madrid

A mediados de octubre de 1936, las tropas de los militares rebeldes, que disponían ya de abundantes piezas de artillería y carros blindados italianos, habían ocupado la mayoría de las poblaciones alrededor de Madrid. Los milicianos, atemorizados por el avance del ejército de África, se replegaban hacia la capital y a ella acudían también cientos de refugiados de las localidades ocupadas. Franco anunciaba que la conquistaría el 20 de octubre y dicen que el general Mola había citado al corresponsal del *Dayly Express* en la Puerta del Sol para tomar café. El 29 de octubre aparecieron en Madrid los primeros carros de combate y aviones soviéticos que el Kremlin había decidido enviar para contrarrestar la ayuda italiana y alemana. El primer barco con armas procedente de la Unión Soviética había llegado al puerto de Cartagena tres semanas antes.

Por esas mismas fechas, el gobierno de Largo Caballero decretó la creación del Ejército Popular, formado por Brigadas Mixtas, que debería, a través de la militarización, convertir a los milicianos en soldados. El adoctrinamiento necesario para combatir lo proporcionarían los comisarios políticos, una figura que apareció entonces y que había sido ya introducida por los comunistas en el 5.º Regimiento, el modelo para el ejército profesional que ellos querían controlar, siempre asesorados por comunistas extranjeros.

El 19 de octubre Franco firmó el plan de ataque en tres frentes, con unos 30 000 hombres organizados en nueve columnas. El general José Enrique Varela, un africanista simpatizante del carlismo, mandaba las tropas coloniales y atacó por la Casa de Campo y por la Ciudad Universitaria. Nadie en el Gobierno, empezando por su presidente, Francisco Largo Caballero, confiaba en que Madrid pudiera resistir la embestida de los militares rebeldes, con todos los mercenarios de África, reforzados por las escuadrillas de la Luftwaffe y la Aviazione Legionaria italiana. Pero tampoco los diplomáticos y periodistas extranjeros esperaban otro resultado.

El 6 de noviembre, cuando las columnas franquistas tenían el objetivo a su alcance, el Gobierno republicano decidió salir de Madrid y trasladar la capital de la República a Valencia, lejos del frente[5]. El general José Miaja, a quien Largo Caballero confío la dirección de la Junta de Defensa de Madrid, y el teniente coronel

Vicente Rojo, jefe de su Estado Mayor, contaban con 20 000 hombres. Dos días después, los milicianos y los moros luchaban cuerpo a cuerpo en la Ciudad Universitaria.

La principal fuerza de los asaltantes era la infantería colonial, «acostumbrada a una guerra fluida, con escasa artillería y contra un enemigo que abandonaba fácilmente sus posiciones y nunca se empeñaba en defenderlas hasta el último cartucho»[6]. Franco y Varela, tras un avance triunfal desde el sur durante el verano, esperaban entrar en Madrid con asaltos de infantería. Se propusieron «un objetivo desmesurado con escasos medios. Treinta mil hombres no podían conquistar una ciudad de más de un millón y dispuesta a defenderse»[7]. Además, el retraso del ataque para liberar antes el Alcázar de Toledo permitió dar más tiempo a los republicanos para organizar la defensa y contar con la primera entrega de ayuda soviética y con la llegada de las Brigadas Internacionales. Aunque Vicente Rojo, no obstante, en su libro *Así fue la defensa de Madrid*, le quitó protagonismo a esas fuerzas de voluntarios que llegaron desde todas partes del mundo y subrayó la valentía y arrojo de miles de ciudadanos anónimos airados por los destrozos de los bombardeos de la aviación rebelde y por sentir amenazada su libertad. Era una batalla de resistencia en la que apareció por primera vez en la guerra en el bando republicano «el cumplimiento del deber militar, que comenzó a prevalecer sobre cualquier otro tipo de deberes»[8].

Algunas organizaciones vinculadas a los comunistas, como el Socorro Rojo Internacional y la Alianza de Intelectuales Antifascistas, invitaron a los madrileños a emular las jornadas gloriosas de 1808, la resistencia del pueblo contra las tropas napoleónicas, inmortalizadas por las pinturas de Goya, y el poeta Rafael Alberti le dedicó a esa defensa heroica su «Madrid, corazón de España»[9]. En las manifestaciones, en los edificios más emblemáticos de Madrid, se exhibían pancartas con el «No pasarán» o «Más vale morir de pie que vivir de rodillas», frases atribuidas para la posteridad a la dirigente comunista Dolores Ibárruri «La Pasionaria».

Aunque el héroe popular de la defensa de Madrid pudo ser el general José Miaja, al que se vio por la ciudad tratando de levantar la moral de la gente, de los aspectos técnicos y militares se ocupó Vicente Rojo, un militar que se mantuvo fiel a la República porque creía que ése era su deber y que se convirtió meses después en el jefe de su ejército. Se definía siempre como «católico, militar y patriota» y, según el retrato que ha trazado su nieto, José Andrés Rojo, se vio atrapado entre el mundo de los militares africanistas que dieron el golpe, con los que no se identificaba, y el de los milicianos armados que defendían la revolución y quemaban iglesias. Entre esos dos mundos abordó la tarea de diseñar una nueva estrategia para organizar un ejército eficaz frente al de los militares sublevados y trató de asentar la autoridad de militares profesionales como él y el funcionamiento jerárquico de la institución[10].

Vicente Rojo había nacido el 8 de octubre de 1894 en un pequeño pueblo de Valencia, Fuente de la Higuera. Tenía dos años menos que Franco y no había

cumplido todavía 42 cuando comenzó la guerra. Su padre, militar que había pasado seis años en Cuba, murió tres meses antes de nacer él y a los 13 años se quedó también sin madre. Para poder continuar sus estudios, entró en un internado que acogía a los huérfanos de Infantería e ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en junio de 1916. Salió de allí convertido en segundo teniente de Infantería, el número dos de una promoción de 390 alumnos.

En 1915 se fue de voluntario a África, ascendió a capitán en 1918 y desde 1922 a 1932 estuvo de profesor en la Academia de Toledo. Pasó después a la Escuela Superior de Guerra para obtener el diploma de Estado Mayor y en junio de 1936, poco después de ascender a comandante, se incorporó al Estado Mayor Central. Tras el caos provocado por la sublevación militar, el primer Gobierno de Largo Caballero reorganizó el Estado Mayor y Rojo se convirtió en el segundo de a bordo a las órdenes inmediatas del teniente coronel Manuel Estrada. El 25 de octubre de 1936, Rojo fue ascendido a teniente coronel «por lealtad», pocos días antes de que Miaja recibiera la orden de designarle Jefe de Estado Mayor de la defensa de Madrid. Coronel «por méritos de guerra» desde el 24 de marzo de 1937, Juan Negrín le nombró en mayo Jefe del Estado Mayor Central de la República, cargo que desempeñó hasta el final de la guerra. El 24 de septiembre de ese mismo año ascendió a general.

Una de las deficiencias mayores del ejército de la República que empezó a poner en marcha el Gobierno de Largo Caballero fue la escasez de mandos profesionales. De los 16 000 oficiales del ejército que estaban en activo antes de la sublevación militar, sólo alrededor de un veinte por ciento quedaron en la zona republicana, lo cual «era totalmente insuficiente para encuadrar un ejército cuyos efectivos se quintuplicaron en menos de un año». Muy pocos de sus jefes habían tenido mandos superiores antes de la guerra y esa carencia «obligó a catapultar a oficiales que desconocían el mando de grandes conjuntos»[11].

La improvisación de mandos constituyó, por lo tanto, un grave problema, mayor todavía a medida que se descendía en el escalafón porque la mayoría de los mandos intermedios estaban en el bando sublevado. Tuvieron que improvisarse jefes de batallón y de compañía e incorporar al ejército y subir de categoría a jefes políticos de las milicias y columnas que se formaron en los días siguientes a la sublevación militar. En opinión de Cardona, «mientras los republicanos se mantuvieron a la defensiva, estas carencias no fueron tan dramáticas como cuando se inició la estrategia de grandes ofensivas, donde era necesario el entramado jerárquico de todos sus eslabones»[12].

Pero conviene destacar que, junto a Rojo, existió un grupo de militares profesionales, como Juan Hernández Saravia, Antonio Escobar, Francisco Llano de la Encomienda, José Fontán o Manuel Matallana, que mantuvieron su lealtad a las instituciones de la República y, sin embargo, han padecido el olvido. Pese a que muchos de ellos fueron los últimos en abandonar España, la literatura más radical del

exilio, anarquista y socialista, los tachó de traidores, franquistas o de meras marionetas del estalinismo. Con el sabor amargo de la derrota, los comunistas entraron también en las descalificaciones, mientras que para los militares vencedores nunca merecieron respeto. Unos, los que ganaron la guerra, conservan todavía sus nombres en las calles de muchos pueblos y ciudades de España, y los otros, los que la perdieron, son unos auténticos desconocidos.

El otro grupo de mandos del ejército republicano procedía de las milicias. No tenían conocimientos militares, aunque Enrique Líster había recibido alguna instrucción en la URSS y Manuel Tagüeña tenía la formación de oficial de complemento. El que ascendió más rápido fue Juan Modesto, que había sido cabo en El Tercio y mandó desde su creación en el verano de 1937 el V Cuerpo del Ejército, una unidad de choque en la que los comunistas adquirieron especial relevancia. También algunos de los anarquistas que mandaron columnas desde julio de 1936 se integraron en la escala de mando del ejército de la República, aparcando sus prejuicios antimilitaristas. Cipriano Mera, Gregorio Jover o Miguel García Vivancos constituyen buenos ejemplos.

El primer gran asalto a Madrid de las tropas de Franco fracasó, pese a los insistentes bombardeos aéreos llevados a cabo por los Junkers Ju-52. El 23 de noviembre Franco ordenó suspender los ataques, por el cansancio de sus columnas y porque los republicanos habían conseguido armarse, con la incorporación de cazas soviéticos, y organizarse mejor. No era todavía un verdadero ejército, pero habían superado el estado de desorden inicial y la sensación de indefensión. Franco, pese a esa primera derrota, había conseguido en esos mismos días el reconocimiento alemán e italiano de la Junta Técnica del Estado como gobierno legítimo de España. En el escenario internacional, los militares rebeldes seguían consolidando sus posiciones. Mussolini y Hitler tenían muy claro de qué lado estaban en la batalla que se libraba en suelo español.

Ese Madrid sitiado en noviembre de 1936, cuya imagen quedó grabada en la memoria colectiva de los republicanos y brigadistas internacionales por la resistencia heroica de su población, fue también el escenario de una terrible matanza de prisioneros, especialmente de políticos, militares, derechistas y clero. Asaltos a prisiones, «paseos», «sacas» y asesinatos se habían producido en Madrid desde la derrota de los sublevados en julio de ese año, pero todo se quedó pequeño si se compara con la matanza de Paracuellos del Jarama, un hecho irrepetible en la Guerra Civil porque irrepetible fue también la situación que lo provocó, con el traslado del gobierno de la República a Valencia y la creación de una Junta de Defensa, que asumió la coordinación y control de las fuerzas del orden y seguridad.

En las cárceles de Madrid había en ese momento más de 5000 presos. Unos 2000 fueron sacados los días 7 y 8 de noviembre y trasladados en autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías hasta las localidades cercanas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. La mayoría fueron fusilados y enterrados en grandes fosas

comunes. Las «sacas» y asesinatos se repitieron varios días y adquirieron de nuevo carácter masivo a finales de mes. El 4 de diciembre, el nuevo inspector general de Prisiones, el anarquista Melchor Rodríguez, paró las «sacas». En un mes cayeron asesinados por ese procedimiento alrededor de 2700 presos, identificados tras la guerra, aunque en el culto que se hizo a los mártires por parte de los vencedores del 1 de abril de 1939 aparecían cerca de 9000.

Muy mal momento fue aquél para la causa republicana, con un Madrid sitiado, sin gobierno, en el que grupos armados asesinaban sistemáticamente a los presos. El asunto causó, como era de esperar, una retahíla de justificaciones, acusaciones y polémicas, aparecidas y reproducidas en una literatura que no cesa. No parece exagerado cargar la responsabilidad sobre los aparatos policiales, bajo control comunista y con asesores soviéticos, sobre militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas y sobre los máximos dirigentes de ese sistema policial: Manuel Muñoz, director general de Seguridad; Santiago Carrillo, consejero de Orden Público; y Segundo Serrano Poncela, «delegado para la Dirección General de Seguridad». Y aunque es muy probable que actuaran por su cuenta los típicos «incontrolados», esos que siempre se mueven a gusto en las situaciones caóticas, las «sacas de noviembre» en Madrid apuntan a una limpieza de la retaguardia en toda regla, dictada por la guerra y querida al mismo tiempo, una ocasión extraordinaria para aniquilar al enemigo político, ideológico y de clase[13].

La guerra continuaba y Madrid seguía siendo el objetivo primordial de un ejército franquista que sumó desde finales de 1936 la importante ayuda de decenas de miles de soldados italianos, organizados en el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), con generales experimentados en la Primera Guerra Mundial, y de varios miles de alemanes que sirvieron en la Legión Cóndor y en los refuerzos de la Wehrmacht de antitanques y artillería. Cuando comenzó 1937, el bando franquista sumaba casi 350 000 hombres, una cifra muy similar a los efectivos del ejército republicano.

Empantanado su ejército frente a Madrid, Franco decidió atacar Málaga para continuar la conquista de la extensa Andalucía. La batalla, donde iban a tener por primera vez protagonismo los italianos, empezó el 5 de febrero y el 7 las columnas motorizadas del CTV entraron en la ciudad, cubiertas desde el aire por abundantes bombarderos y cazas y por cruceros y lanchas desde el litoral. Era también el primer ensayo de la *guerra celere* (la versión italiana de la *Blitzkrieg*), que triunfó en Málaga porque los republicanos no tenían allí defensas y apenas pudieron oponer resistencia.

Dos días antes de la entrada de los italianos, varias decenas de miles de ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos y niños, habían emprendido una auténtica desbandada hacia Almería, para evitar las represalias y las razzias de los conquistadores. Se organizó una fuerza para perseguirlos, mientras la aviación y los buques de guerra los ametrallaban. El camino se cubrió de muertos y heridos y muchas familias perdieron a sus niños en la huida. A quienes se quedaron en Málaga no les fue mejor. Un mínimo de 1500 personas fueron asesinadas en los meses

siguientes, en la cárcel, en el cementerio, «paseados» de noche. Entre el 8 de febrero y abril de 1939, final oficial de la guerra, ingresaron en la prisión de la ciudad 818 mujeres y 4168 hombres, cifras que no incluyen a los detenidos en otras cárceles de la provincia y en los campos de concentración. Era el retorno del «terror caliente» del verano de 1936, con cadáveres que desaparecían sin registrar y asesinatos sin juicios ni garantías previas.

Coincidiendo con la conquista de Málaga, el ejército franquista preparó un nuevo ataque a Madrid. Se trataba de cortar la carretera a Valencia, a través del valle del río Jarama, la ruta por la que llegaban a la capital los suministros y el material militar. Esa operación debería completarse con un ataque de las tropas italianas del CTV desde Sigüenza hacia Guadalajara para cercar Madrid en un movimiento de pinza. Durante tres semanas de febrero, desde el 6 hasta final de mes, ambos bandos contendientes perdieron miles de hombres y aunque los franquistas consiguieron hacer avanzar el frente algunos kilómetros, la batalla del Jarama fue bastante estéril.

Unos días después, el 8 de marzo, la división motorizada del general Amerigo Coppi comenzó su ataque, pero se vio sorprendida por una gran tormenta de nieve y en unos pocos días sufrió una estrepitosa derrota, entre otras razones porque Franco no llevó a cabo su operación de diversión desde el Jarama y las tropas republicanas, apoyadas por el Batallón Garibaldi de las Brigadas Internacionales y los carros soviéticos, pudieron concentrar todos sus esfuerzos en detener el avance italiano.

El general Roatta ordenó la retirada. Era el final de la prolongada batalla de los rebeldes por tomar Madrid, que había durado cinco meses, sin lograr la meta pese a su superioridad militar. Los republicanos habían podido salvar la capital y ofrecer al mundo una imagen de heroísmo y resistencia frente al fascismo internacional. Documentales republicanos filmados con prisioneros italianos trataron de mostrar al mundo que no eran voluntarios fascistas, sino soldados regulares pagados[14]. Ninguna de esas pruebas, sin embargo, que al fin y al cabo podían considerarse como propaganda, iba a cambiar la posición del Comité de No Intervención.

Guerra de desgaste

Los sucesivos fracasos en el intento de tomar Madrid hicieron cambiar la estrategia de Franco, quien optó a partir de ese momento por una guerra larga, de desgaste, de aplastamiento gradual del enemigo. Y no le importó que los militares y estrategas italianos y alemanes dudaran de su competencia militar, porque lo que él pretendía era aniquilar totalmente al enemigo, a la anti-España, y al mismo tiempo «domesticar» a sus compañeros generales y consolidarse como único dictador[15].

Se lo dijo al coronel Emilio Faldella, jefe de Estado Mayor del general Roatta, que le trataba de convencer de las ventajas de la *guerra celere*: «En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza

necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infestado de adversarios». Y se lo volvió a decir, de forma más elaborada, al embajador de Mussolini, Roberto Cantalupo, el 4 de abril de 1937: «debemos llevar a cabo la tarea necesariamente lenta de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar será en gran parte inútil […] Nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz interior […] No tomaré la capital ni una hora antes de lo necesario: primero debo tener la certeza de poder fundar un régimen»[16].

Franco tenía todas las bazas y ventajas para aplicar esa estrategia militar. Tenía abundantes hombres, facilitados por la preservación del sistema tradicional de reclutamiento y por los numerosos voluntarios marroquíes que seguían incrementando el ejército de África. Contó, desde septiembre de 1936, con dos academias, en Burgos y Sevilla, para formar rápidamente a universitarios para el grado de alférez y creó también cuatro centros específicos para la formación de oficiales y suboficiales. Pero sobre todo contaba con la seguridad de que el panorama internacional de apoyo ítalo-germano a su causa y de abandono de la República por las democracias occidentales no iba a moverse. Tenía, por lo tanto, abundantes hombres y suministro de material garantizado.

Con todos esos medios, en vez de insistir en el ataque a Madrid, los militares franquistas miraron al norte, un sector débil desde el punto de vista defensivo, aislado del resto de la zona republicana, y que concentraba una buena parte de la industria y de la minería españolas. Los alemanes presionaban también a favor de ese cambio de rumbo en la guerra, porque pensaban que la obtención del carbón y del acero de la zona cantábrica ayudaría al programa de rearme acelerado de Hitler. Y el general Emilio Mola, que tenía sus tropas bien cerca del objetivo, quería conquistar esas tierras y dar un buen escarmiento a los vascos: «si la rendición no es inmediata, arrasaré Vizcaya hasta sus cimientos, comenzando por sus industrias de guerra»[17].

Mola contaba para la operación con la División de Navarra, con el CTV italiano, reorganizado a las órdenes del general Ettore Bastico, y con la Legión Cóndor, mandada por Von Richtofen, que iba a aprovechar esa guerra en el norte de España como un laboratorio para ensayar el bombardeo de ciudades. Los batallones republicanos vascos no tenían artillería antiaérea y su territorio «era tan estrecho que los aviones alemanes podían llegar a sus objetivos antes de que hubiera surtido efecto la alarma»[18].

Los franquistas iniciaron la campaña a final del mes de marzo con masivos bombardeos de la Legión Cóndor parar romper la moral de la población civil y destruir las comunicaciones terrestres. Primero le tocó a Durango, el 31 de marzo; después a Gernika, el 26 de abril. El 19 de junio, la ciudad de Bilbao, que estaba protegida por un perímetro defensivo de 80 kilómetros, construido por el Gobierno vasco, «el cinturón de hierro», inservible frente a la aviación que lo sobrevolaba, se rindió, «reintegrada a la civilización y al orden», según se decía en el parte de guerra de los ocupantes.

Unos días después, en la toma de posesión de la alcaldía, el falangista José María de Areilza se sumaba con fervor al ambiente patriotero español y antivasco: «Que eso quede bien claro: Bilbao ha sido conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ha triunfado la España una, grande y libre. Ha caído para siempre esa horrible pesadilla siniestra que se llama Euskadi […] Vizcaya es otra vez un trozo de España *por pura y simple conquista militar*»[19]. Un decreto del 23 de junio derogó el Estatuto de Autonomía, que había sido aprobado por las Cortes de la República en octubre del año anterior, y al considerar a Vizcaya y Guipúzcoa «provincias traidoras» les privó del régimen especial de competencias económicas y fiscales del que disfrutaban desde finales del siglo XIX.

La España una, grande y libre se extendió después a Santander y en octubre a la zona republicana de Asturias, con Gijón y Avilés como últimos baluartes. Con la caída del norte industrial y el control de la producción de hierro, la balanza de poder comenzaba a inclinarse claramente del lado franquista, que disponía de más hombres, mejor armamento y líneas de comunicación para mover las tropas de un frente a otro. Franco pudo concentrar todas sus fuerzas en el centro de España, para volver a atacar Madrid, y en el Mediterráneo. Las continuas victorias franquistas comenzaban a extender el derrotismo en la zona republicana. La opinión internacional creía que, una vez perdido el norte, la victoria franquista «era cuestión de tiempo»[20].

El coronel Vicente Rojo, recién nombrado por Juan Negrín jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, organizó desde el verano de 1937 hasta finales de año una estrategia para tratar de limitar en la medida de lo posible el avance franquista, dada su superioridad material y las dificultades para consolidar un auténtico ejército republicano. Ése fue el objetivo de las ofensivas de distracción montadas por sorpresa en Brunete, cerca de Madrid, en julio de 1937, para detener el avance franquista sobre Santander; en Belchite, cerca de Zaragoza, en agosto y septiembre, para frenar la conquista de Asturias; y en Teruel, en diciembre de 1937, para contrarrestar la prevista ofensiva de Franco sobre Madrid[21].

Porque una vez ocupado el norte, Franco volvió a intentar el asalto a la capital, a finales de otoño, por el sector de Guadalajara, por el mismo que lo habían hecho sin éxito los italianos unos meses antes. Vicente Rojo, que había sido ascendido a general a finales de septiembre, decidió un ataque preventivo para conquistar Teruel, la más pequeña de las tres capitales de Aragón, con apenas quince mil habitantes, sin interés militar, aunque con una guarnición escasa, algo que podía posibilitar, por fin, la toma de la primera capital de provincia por los republicanos durante toda la guerra.

Rojo, que dirigió en persona la operación, desplazó allí a unos 40 000 hombres, con algunas de las divisiones que actuaban en el frente de Aragón, la XI de Líster y la XXV de García Vivancos, y con el ejército de Levante, mandado por el coronel Juan Hernández Saravia. El ataque, iniciado por Líster el 15 de diciembre de 1937, cogió por sorpresa a las escasas fuerzas franquistas que defendían la capital del Turia, mandadas por el coronel Domingo Rey d’Harcourt, y el contraataque de los generales

Varela y Aranda quedó bloqueado por las durísimas condiciones meteorológicas de esos días.

El 22 los tanques republicanos entraron en Teruel, un acontecimiento captado por imágenes difundidas por todo el mundo, aunque los defensores se replegaron hacia el centro y se hicieron fuertes en varios edificios, en medio de varios temporales propios del clima siberiano, hasta que el 7 de enero de 1938 Rey d'Harcourt pactó una rendición en la que pedía «que sean respetadas las vidas del personal civil»[22].

Teruel fue reconquistado el 22 de febrero por las tropas mandadas por el general Juan Vigón, quien utilizó 100 000 hombres, incluido el CTV italiano. Franco quería demostrar de nuevo que no cedía un palmo de territorio a los republicanos y menos una capital de provincia. Acabó así una de las batallas más crueles de la Guerra Civil, con cuarenta mil bajas franquistas y más de sesenta mil republicanas. Teruel pasó en apenas unas semanas de ser la mayor victoria republicana, aireada por una propaganda desmesurada, al «mayor desastre republicano de toda la guerra», porque «la República se empecinó en defender una ciudad indefendible y de nula importancia estratégica a cambio de un montón de vidas y de gran cantidad de material de guerra»[23].

El fracaso abrió todavía más el abismo que había entre los comunistas e Indalecio Prieto, ministro de Defensa, sobre quien descargaron todos las culpas, aunque el general Vicente Rojo empezaba también a aparecer como responsable de las derrotas en los informes que algunos delegados de la Comintern en España enviaban a Moscú. Rojo tenía claro, sin embargo, que poco se podía hacer con «la escasez de material, la defectuosa moral de nuestras unidades, la incompleta organización de las mismas, la incapacidad o incompetencia de muchos mandos». Como le escribía a Prieto en su informe del 26 de febrero de 1938, pocos días después de la retirada de los soldados de Teruel: «Sólo se ha conseguido hasta el presente un boceto […] un estado embrionario de organización». Y se quejó también de la falta de disciplina y de la lentitud con que se preparaba a los reclutas que se incorporaban a filas[24].

La misma mañana de la pérdida de Teruel, Rojo había presentado a Prieto su dimisión. Negrín, el jefe del Gobierno, le contestó al día siguiente que, con él, el ejército de la República estaba en buenas manos, que no veía a nadie que pudiera «aproximarse a usted por su pericia profesional, serenidad, clara visión […] rigor científico y sentido de organización al actuar» y que, por si no fuera suficiente, «por encima de todas esas cualidades», lo que más estimaba de él, del jefe militar del ejército de la República, era «su personalidad humana». Las derrotas del ejército republicano no podían achacarse, según Negrín, a la dirección estratégica de su máximo jefe militar.

Al margen de la abrumadora superioridad material del ejército franquista, era cierto que el estado en que habían quedado las tropas republicanas con el desastre de Teruel era preocupante y así se demostró muy pronto, tan sólo un mes después, en la gran ofensiva que los militares franquistas iniciaron, a través de Aragón y Castellón,

hasta el mar. No hubo tregua después de tanto desgaste y Franco aprovechó que tenía más hombres allí desplazados que los republicanos, y con mejor moral y equipamiento, para eliminar el frente de Aragón y conquistar una amplia extensión de terreno.

El 9 de marzo de 1938, casi 200 000 hombres, apoyados por centenares de piezas de artillería y aviones de la Legión Cóndor y de la Aviazione Legionaria, atacaron un frente de más de cien kilómetros defendido por 40 000 republicanos. En apenas dos semanas conquistaron toda la mitad oriental de Aragón, después de descargar toneladas de bombas sobre la población de varias localidades. El 17 entraban en Caspe, que había sido la sede del anarquista Consejo de Aragón y lo era en ese momento de la autoridad republicana que lo sustituyó, el gobernador general José Ignacio Mantecón. El 3 de abril, el cuerpo Marroquí de Yagüe entró en Lérida, la primera capital catalana que conquistaban las tropas franquistas, que habían ocupado también las centrales eléctricas que proporcionaban energía a Barcelona. La campaña acabó el 15 de abril en el mar Mediterráneo. «La espada victoriosa de Franco», podía leerse en el periódico *ABC* de Sevilla al día siguiente, «partió en dos la España que aún detentan los rojos».

El dominio aéreo fue fundamental para esa rápida conquista de un frente tan amplio. Entre el 9 y 31 de marzo, los aviones rebeldes realizaron 285 bombardeos, por sólo 8 de los republicanos. En ese escenario intervino por primera vez el avión alemán Stuka, que adquirió fama después en la Segunda Guerra Mundial. La guerra de trincheras, que George Orwell narró en ese mismo frente para los primeros meses de la contienda, con fusiles y escasa artillería, dio paso a la guerra relámpago de 1938, con el uso de toda la artillería y tanques de las tropas italianas y de la Legión Cóndor. Los bombardeos afectaron a numerosas poblaciones, destacando el de la aviación italiana sobre la localidad turolense de Alcañiz el 3 de marzo de 1938, que dejó en medio de los escombros más de 250 muertos[25].

Partida en dos, acosada por una grave crisis económica y con la moral por los suelos, la República sufría. Indalecio Prieto, que no ocultaba su derrotismo, salió, «expulsado» dijo él, del Gobierno de la República, al que había prestado sus servicios en la paz y en la guerra. Fuera de España, las cosas no iban mejor porque el 20 de febrero Anthony Eden, el único que no manifestaba abiertamente un odio a la República en el Gobierno de Neville Chamberlain, dimitió como ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Su sucesor en el Foreign Office, lord Halifax, firmó el 16 de abril un acuerdo con Italia en el que los británicos hacían una vez más la vista gorda sobre la intervención fascista en el bando de Franco. En Francia, después de un Gobierno efímero del socialista Léon Blum, que duró sólo treinta días, el radical Édouard Daladier se hizo cargo de la presidencia en ese mismo mes y en junio cerró de nuevo la frontera con España. Así de crudas estaban las cosas para la República, cuyo Gobierno comenzó a reconstruir el ejército del Este con todas las unidades que se habían replegado hacia Cataluña. Había que defenderse, resistir, impedir al menos

un derrumbamiento rápido que iría acompañado con toda seguridad de la anunciada victoria incondicional de Franco y esperar a que los vientos internacionales tan contrarios cambiaran de dirección.

El avance de los militares rebeldes por Cataluña parecía que iba a ser imparable, el objetivo más próximo y acertado dado el estado en que habían quedado las tropas republicanas tras el derrumbe del frente de Aragón. Pero Franco, en vez de lanzar un rápido ataque contra Barcelona, como le pedían algunos de sus compañeros, los italianos y los alemanes, ordenó el avance desde Teruel a Castellón, Sagunto y Valencia. Ocuparon Castellón el 13 de junio, aunque la ofensiva sobre Valencia, la meta principal de esa campaña, iniciada uno días después, chocó con una eficaz acción defensiva republicana y el ejército franquista se quedó detenido a menos de cincuenta kilómetros de la que había sido durante un año la capital de la República.

Franco seguía con la idea de una guerra larga, de desgaste y en la que pudiera machacar para siempre a la República. Tenía un ejército enorme y su estrategia siempre estuvo al servicio de sus ambiciones políticas, consolidar el poder entre sus compañeros de armas. Su estrategia destrozaba al enemigo, pero también «costaba la vida a miles de sus propios soldados y prolongaba los sufrimientos de la población civil de su zona». Para él, las bajas y el sufrimiento eran «cuestiones inevitables en la guerra»[26].

La decisión de atacar Valencia en vez de avanzar hacia Barcelona mantuvo fuera de peligro a Cataluña durante un tiempo y permitió una reorganización del ejército republicano durante el final de la primavera y el comienzo del verano de 1938, con movilización de nuevas quintas, entre ellas la de los jóvenes nacidos en 1920 y 1921, conocidos como «la quinta del biberón». Con todos esos efectivos reorganizados, el general Rojo trazó un plan para juntar de nuevo el Levante con Cataluña con una ofensiva a través del río Ebro. En la noche del 24 al 25 de julio, varias unidades del ejército republicano, al mando del comunista Juan Modesto, cruzaron el río en botes. Comenzó así la batalla del Ebro, la más larga y dura de toda la guerra.

Casi todos los jefes que formaron el ejército del Ebro creado para esa ocasión eran comunistas. El comandante en jefe era el teniente coronel Juan Modesto y estaban también allí Enrique Líster, que dirigía el V Cuerpo de Ejército y el teniente coronel Manuel Tagüeña, un estudiante de física y matemáticas que comenzó la guerra de soldado raso y acabó mandando el XV Cuerpo de Ejército. El general Rojo les dijo, según cuenta Tagüeña en *Testimonio entre dos guerras*, «que respondía de cualquier decisión que pudiéramos tomar a la otra orilla del río, si nos encontrábamos aislados y en situación difícil». Pasaron el río por diferentes sitios, entre Fayón en el norte y Miravete en el sur. El avance inicial, como solía ser normal en esas acciones republicanas, fue considerable, pero pronto, también como siempre, quedó detenido. Y Franco actuó como lo hizo en anteriores ocasiones, en Brunete, Belchite o Teruel y emprendió la reconquista del territorio cedido.

La batalla pareció al principio una victoria táctica de los republicanos, que habían

frenado la ofensiva franquista sobre Valencia, pero fue, en casi todo su desarrollo, una batalla defensiva que buscaba más cansar al adversario, obligarle a negociar una victoria menos incondicional, que derrotarle, algo imposible. Lucharon durante casi cuatro meses, hasta el 16 de noviembre, 250 000 hombres. Los franquistas perdieron más de treinta mil y los republicanos el doble, aunque los principales historiadores militares no se ponen de acuerdo en el número exacto de muertos, unos trece mil en total, repartidos casi a partes iguales entre los dos bandos. La República había perdido lo mejor de su Ejército y poco después perdió toda Cataluña.

La República parecía ya derrotada, sobre todo porque el pacto de Munich, firmado a finales de septiembre y que dejaba a Hitler avanzar libremente sobre Checoslovaquia, quebró la estrategia de resistencia de Negrín y demostró que las democracias no querían cambiar su política de apaciguar a las potencias fascistas. El 7 de noviembre, Franco declaró al vicepresidente de la United Press, James Miller, algo que no se había cansado de repetir durante todo ese año: «No habrá mediación. No habrá mediación porque los delincuentes y sus víctimas no pueden vivir juntos»[27].

La opinión del general Rojo tras la derrota de Teruel seguía vigente después de la batalla del Ebro: sólo se había conseguido crear un «boceto» de ejército, «un estado embrionario de organización». La política y la estrategia militar no siempre coincidieron en el bando republicano. Y los conflictos y desunión en la retaguardia fueron también mayores que en la franquista. El hambre generó descontento y protestas conforme avanzaba la contienda y las sucesivas derrotas acabaron por desmoralizar a importantes sectores de la población, que abandonaron su compromiso con los valores e intereses materiales por los que estaban luchando.

La Guerra Civil en el bando republicano comenzó con una revolución y acabó con un intento desesperado por parte de Juan Negrín de presentar una alternativa democrática y disciplinada, que hiciera cambiar de política a Francia y Gran Bretaña y que muchos, sobre todo anarquistas y socialistas de izquierda, interpretaron como una dictadura comunista, por la dependencia de la Unión Soviética en el equipamiento militar y por el ascenso de militantes comunistas en el ejército republicano.

Los militares rebeldes, pese a la disparidad de las fuerzas coaligadas, nunca tuvieron problemas de ese tipo. La ayuda de las potencias fascistas resultó menos complicada y las autoridades militares, bajo la jefatura única de Franco, gobernaron la retaguardia con mano de hierro. Quienes compartían sus valores, vivían felices el renacer de una nueva España porque además su ejército siempre ganaba las batallas y no había lugar para la desmoralización. A los que no estaban en ese grupo de incondicionales, les esperaba una violencia salvaje, puesta en marcha desde el mismo día de la sublevación y que no cesó hasta años después de finalizada la guerra.

LA DERROTA

El final de la República estaba ya cantado desde el pacto de Munich y el desenlace de la batalla del Ebro, pero sus tres últimos meses de vida fueron agónicos. Toda Cataluña cayó rendida a los pies de las tropas de Franco en apenas un mes, en medio de la exaltación patriótica y religiosa. A mediados de enero de 1939 entraban en Tarragona y el 26 en Barcelona. Tres días después, el domingo 29 de enero, se celebró en la plaza de Cataluña una masiva misa de campaña presidida por el general Juan Yagüe.

Las tropas republicanas se retiraron hacia la frontera francesa de forma desorganizada. Según la descripción de Manuel Azaña, «la desbandada cobró una magnitud inmensurable. Una muchedumbre enloquecida atascó la carretera y los caminos, se desparramó por los atajos, en busca de la frontera […] El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la carretera […] Algunas mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños perecieron de frío o pisoteados…»[28]. Las bombas y los ametrallamientos de la aviación franquista causaron numerosos muertos y heridos.

Con la caída de Barcelona y la conquista de Cataluña, la República agonizaba. Los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia reconocieron por fin oficialmente al de Franco y el 27 de febrero de 1939 Manuel Azaña, que había pasado ya a Francia tres semanas antes, dimitió como presidente de la República. El 1 de ese mismo mes, en la última de las reuniones de las Cortes, Juan Negrín pidió en su discurso como condición para la rendición que no hubiera persecuciones ni represalias, algo imposible en los planes de Franco y de sus compañeros de armas. El 6 de marzo, tras el golpe del coronel Segismundo Casado contra su Gobierno para negociar con Franco la entrega de armas y hombres, Negrín abandonó España.

El golpe de Casado no fue sólo la culminación de un conflicto político sino también «la sublevación de los mandos profesionales» contra el Gobierno republicano, al que le negaban legitimidad. Era también la plasmación de la idea de que «sería más fácil liquidar la guerra a través de un entendimiento entre militares». Inauguró una desesperada y costosa lucha fratricida en esa República moribunda, con ramificaciones en otras partes de la zona central y en Cartagena, y no consiguió ninguna «paz honrosa», sino una rendición sin condiciones, lo que Franco, los militares, las autoridades civiles y la Iglesia católica habían anunciado insistentemente, es decir, el aniquilamiento del régimen republicano y de sus partidarios.

Quedaba todavía el drama de Alicante. Unas 15 000 personas, entre jefes militares, políticos republicanos, combatientes y población civil, se apiñaban en el puerto desde el 29 de marzo. Al atardecer del día siguiente, llegaron a la ciudad las tropas italianas de la División Vittorio, al mando del general Gastone Gambara, antes

de que gran parte de esa multitud pudiera embarcar en buques franceses y británicos. Muchos de los capturados fueron ejecutados allí mismo. Otros, prefirieron el suicidio antes que ser víctimas de la represión franquista. Como el maestro anarquista Evaristo Viñuales, exconsejero de Información y Propaganda del Consejo de Aragón. Se suicidó junto con el también anarquista Máximo Franco, jefe de la 127.ª Brigada Mixta de la 28.ª División.

«En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, nuestras tropas victoriosas han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado», decía el último parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939, con la voz del locutor y actor Fernando Fernández de Córdoba.

El catolicismo y la patria se fundían, liberados por la cruz redentora. La guerra había sido necesaria e inevitable porque «por los caminos ordinarios España ya no podía salvarse», escribía Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid, en la pastoral «La hora presente», publicada el 28 de marzo, el mismo día de la «liberación» de la capital. Era «la hora de la liquidación de cuentas de la humanidad con la filosofía política de la Revolución Francesa»[29].

Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales, según los historiadores, se aproximó a las 600 000, de las cuales 100 000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55 000 a la violencia en la zona republicana. Medio millón de personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración.

Aunque en la Primera Guerra Mundial ya pudo comprobarse el enorme potencial que el desarrollo de la aviación podía tener para los ejércitos modernos, la Guerra Civil española fue la primera de las guerras del siglo XX en que la aviación se utilizó de forma premeditada en operaciones de bombardeo en la retaguardia. La intervención extranjera mandó por el cielo español a los S-81 y S-79 italianos, a los He-111 alemanes y a los «Katiuskas» rusos, convirtiendo a España en un campo de pruebas para la gran guerra mundial que se preparaba. Madrid, Durango, Gernika, Alcañiz, Lérida, Barcelona, Valencia, Alicante o Cartagena, entre otras muchas ciudades, vieron cómo sus poblaciones idefensas se convertían en objetivo militar.

Las víctimas mortales como consecuencia de los bombardeos de la aviación franquista, italiana y alemana en la zona republicana superaron las 11 000, de las que más de 2500 ocurrieron en Barcelona, mientras que los muertos ocasionados por la aviación republicana y soviética, si se aceptan las cifras de los propios vencedores, serían 1088 hasta mayo de 1938. La actuación de la aviación italiana y alemana fue decisiva para la victoria franquista. La mayoría de sus bombardeos los realizaron con el único objetivo de castigar y sembrar el pánico en la población y muchos de ellos ocurrieron además en poblaciones catalanas y levantinas a partir de finales de 1938, cuando la guerra la tenía prácticamente ganada el ejército franquista[30].

Los militares sublevados en julio de 1936 ganaron la guerra porque tenían las

tropas mejor entrenadas del ejército español, al poder económico, porque estaban más unidos que el bando republicano y los vientos internacionales soplaban a su favor. Después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la revolución en Rusia, ninguna guerra civil podía ser ya sólo «interna». Cuando empezó la Guerra Civil española, los poderes democráticos estaban intentando a toda costa «apaciguar» a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses.

A la República no le faltó dinero ni tampoco tuvo escasez de armamento. En realidad, la República gastó una cantidad de dinero similar para perder la guerra a la que Franco utilizó para ganarla, unos setecientos millones de dólares en cada bando, pero el material bélico que adquirió a través de las reservas de oro del Banco de España fue inferior, en cantidad y calidad, al que las potencias fascistas suministraron a los militares rebeldes. Y lo más importante es que Franco recibió siempre esa ayuda de forma constante, mientras que la ayuda soviética dependió, además de otros factores, del entendimiento entre Moscú y las potencias democráticas occidentales.

Como las armas llegaban a la España republicana por vía marítima y dependían de la política de Stalin, de los controles navales del Comité de No Intervención y de los avatares de la política francesa al permitir o no el tránsito de las expediciones, «los vaivenes en el suministro resultaban muy frecuentes y podían faltar armas o municiones en el momento más grave o crítico»[31]. Así, en los meses finales de 1937 y 1938 los envíos se interrumpieron o no podían pasar la frontera francesa. La política expansionista de los fascismos y la de «apaciguamiento», defendida por Gran Bretaña y seguida por Francia, afectó de lleno a la evolución y resultado de la Guerra Civil española.

Los bandos que se enfrentaron en España eran tan diferentes desde el punto de vista de las ideas, de cómo querían organizar el Estado y la sociedad, y estaban tan comprometidos con los objetivos por los que tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo. Y el panorama internacional, de nuevo, tampoco dejó espacio para las negociaciones. De esa forma, la guerra acabó con la aplastante victoria de un bando sobre otro, una victoria asociada desde ese momento a los asesinatos y atrocidades que se extendían entonces por casi todos los países de Europa.

Las dictaduras dominadas por gobiernos autoritarios de un solo hombre y de un único partido estaban sustituyendo entonces a las democracias en muchos países europeos y, si se exceptúa el caso ruso, todas esas dictaduras salían de las ideas de orden y autoridad de la extrema derecha. Seis de las democracias más sólidas del continente fueron invadidas por los nazis al año siguiente de acabar la Guerra Civil. España no era, en consecuencia, una excepción ni el único país donde el discurso del orden y del nacionalismo extremo se imponían al de la democracia y de la revolución.

La victoria de Franco fue también una victoria de Hitler y de Mussolini. Y la derrota de la República fue asimismo una derrota para las democracias.

Epílogo: Paz incivil

TRAS EL FINAL OFICIAL de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, la destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta. Comenzó en ese momento un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270 000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50 000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.

La invasión de Francia por parte de las tropas alemanas, iniciada el 10 de mayo de 1940, había permitido la captura de miles de republicanos españoles refugiados en territorio francés desde la conquista de Cataluña por las tropas de Franco y el final de la Guerra Civil. Muchos acabaron exterminados en campos de concentración nazis. Algunos de los más distinguidos, reclamados por el Ministerio de la Gobernación, fueron entregados a las autoridades franquistas por la Gestapo y el régimen de Vichy[1].

El 21 de octubre, un juicio sumarísimo condenó a varios de ellos a muerte. En ese grupo estaba Julián Zugazagoitia, ministro de la Gobernación de la República, ejecutado el 9 de noviembre. Unos días antes, el 15 de octubre, había sido fusilado Lluís Companys, presidente de la Generalitat, acusado de «rebelión militar». También había sido entregado por esas fechas Joan Peiró, anarquista y ministro de Industria en el gobierno de Largo Caballero, a quien la hora de la ejecución le llegó en julio de 1942. Los tres habían denunciado sistemáticamente la brutal violencia del verano de 1936 en la zona republicana y habían contribuido a salvar la vida de numerosos políticos de la derecha y miembros del clero.

La cultura política de la violencia y de la división entre vencedores y vencidos, «patriotas y traidores», «nacionales y rojos», se impuso en la sociedad española al menos durante dos décadas después del final de la Guerra Civil. Los vencidos que pudieron seguir vivos tuvieron que adaptarse a las formas de convivencia impuestas

por los vencedores. Muchos perdieron el trabajo; otros, especialmente en el mundo rural, fueron obligados a trasladarse a ciudades o pueblos diferentes. Acosados y denunciados, los militantes de las organizaciones políticas y sindicales del bando republicano llevaron la peor parte. A los menos comprometidos, muchos de ellos analfabetos, el franquismo les impuso el silencio para sobrevivir, obligándoles a tragarse su propia identidad.

Hubo quienes resistieron con armas a la dictadura, los llamados maquis o guerrilleros. Su origen estaba en los «huidos», en aquellos que para escapar a la represión de los militares rebeldes se refugiaron en diferentes momentos de la Guerra Civil en las montañas de Andalucía, Asturias, León o Galicia, sabiendo que no podían volver si querían salvar la vida. La primera resistencia de esos huidos, y de todos aquellos que no aceptaron doblar la rodilla antes los vencedores, dio paso gradualmente a una lucha armada más organizada que copiaba los esquemas de resistencia antifascista ensayados en Francia contra los nazis. Aunque muchos socialistas y anarquistas lucharon en las guerrillas, sólo el PCE apoyó claramente esa vía armada. En esa década de los cuarenta, unos 7000 maquis participaron en actividades armadas por los diferentes montes del suelo español y unos 70 000 enlaces o colaboradores fueron a parar a las cárceles por prestar su apoyo. Si creemos a las fuentes de la Guardia Civil, 2173 guerrilleros y 300 miembros de las fuerzas armadas murieron en los enfrentamientos.

El éxodo iniciado a finales de 1939, con la caída de Barcelona, dejó también huella. Nunca, en su larga historia de exilios, España había conocido uno de esas características, por su amplitud y duración, y tampoco Francia había acogido nunca sobre su suelo un éxodo tan masivo y repentino como el de los republicanos españoles de 1939. Y eso que España había pasado en su historia, desde los «afrancesados» y liberales de 1814, una larga serie de exilios políticos y Francia experimentó en los años veinte y treinta del siglo XX una llegada masiva de extranjeros que la convirtieron en el primer país del mundo de inmigrantes: trabajadores (polacos e italianos) y refugiados (rusos, armenios, judíos de la Europa oriental y antifascistas italianos, alemanes y austriacos).

«La retirada», como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450 000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170 000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200 000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista. Otras 15 000 personas lograron salir desde los puertos del Levante hasta el norte de África, donde las autoridades francesas les recibieron también con la misma hostilidad que en Francia. Los tres presidentes de Gobierno que tuvo la República en guerra murieron en el exilio: José Giral en México, en 1962; Francisco Largo Caballero en París, en 1946, tras haber pasado por el campo de concentración nazi de Oranienburg; y en la misma ciudad murió Juan Negrín en 1956. Manuel Azaña, el presidente de la República y el político más importante de la España de los años treinta, murió en Montauban,

Francia, el 3 de noviembre de 1940.

Francia no esperaba esa llegada tan masiva de refugiados y el Gobierno de «concentración» de centro-derecha de Édouard Daladier, que ya había mostrado escasas simpatías por la causa republicana durante la Guerra Civil, estaba muy presionado por los grupos de la derecha más reaccionaria, fascistas y xenófobos, y por sus medios de comunicación, para que evitara la «invasión» de ese «ejército marxista en retirada». En poco más de tres semanas, 450 000 personas llegaron al departamento de Pirineos Orientales, que apenas tenía un cuarto de millón de habitantes. Una vez allí, la mayoría, especialmente los hombres civiles y los antiguos combatientes del ejército republicano, pasaron a campos de internamiento o concentración, a los de la playa de Argelés y Saint-Ciprien, en Vallespir y en la Cerdeña. Los 275 000 internados en campos que había en marzo de 1939 fueron disminuyendo gradualmente, hasta quedar sólo unos cuantos miles un año después, en el momento de la invasión de Francia por las tropas nazis.

A partir de esa fecha, unos 40 000 republicanos españoles fueron trasladados forzosamente a Alemania a trabajar en las industrias de guerra y muchos de ellos acabaron en campos de concentración, sobre todo en Mauthausen, donde murieron 5000 de los 7000 que fueron internados. En la Francia de Vichy, Alemania y Argelia los republicanos españoles fueron tratados durante la Segunda Guerra Mundial como «rojos» que no tenían derecho a la vida. Era la prolongación de los asesinatos, las persecuciones y de las humillaciones para los vencidos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. «Aquí la libertad sólo la concede la muerte», les dijo el comandante Caboche cuando recibió a los españoles supervivientes de la División de Durruti en el campo argelino de Djelfa (donde estuvo el escritor Max Aub desde noviembre de 1941 a octubre de 1942)[2].

La victoria incondicional de las tropas del general Francisco Franco, el 1 de abril de 1939, inauguró la última de las dictaduras que se establecieron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura de Franco, como la de Hitler, Mussolini u otros dictadores derechistas de esos años, se apoyó en el rechazo de amplios sectores de la sociedad a la democracia liberal y a la revolución, quienes pedían a cambio una solución autoritaria que mantuviera el orden y fortaleciera el Estado.

Pocas horas después de anunciar la derrota del ejército republicano, el Generalísimo recibió un telegrama de Pío XII, el antes cardenal Pacelli, que había sido elegido Papa el 2 de marzo de ese mismo año, tras la muerte inesperada de su antecesor Pío XI el 10 de febrero: «Levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente, con V. E., deseada victoria católica España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones que tan grande la hicieron».

Una victoria como ésa merecía la bendición apostólica. Y Franco de verdad que se lo agradeció: «Intensa emoción me ha producido paternal telegrama de Vuestra Santidad con motivo victoria total de nuestras armas, que en heroica Cruzada han

luchado contre enemigos de la Religión, de la Patria y de la civilización cristiana. El pueblo español, que tanto ha sufrido, eleva también, con Vuestra Santidad, su corazón al Señor, que le dispensó su gracia, y le pide protección para su gran obra del porvenir»[3].

Las aguas volvieron a su cauce. La victoria del ejército de Franco en la guerra supuso el triunfo absoluto de la España católica. El catolicismo volvía a ser la religión oficial del Estado. Todas las medidas republicanas que la derecha y la Iglesia habían maldecido fueron derogadas. La Iglesia recuperó todos sus privilegios institucionales, algunos de golpe, otros de forma gradual. Y la Iglesia católica vivió una larga época de felicidad plena, con un régimen que la protegió, la colmó de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos[4].

España vivió a partir de abril de 1939 la paz de Franco, las consecuencias de la guerra y de quienes la causaron. España quedó dividida entre vencedores y vencidos. Las iglesias se llenaron desde antes del final de la guerra de placas conmemorativas de los «caídos por Dios y por la Patria». Por el contrario, miles de asesinados por la violencia iniciada por los militares sublevados en julio de 1936 nunca fueron inscritos ni recordados con una mísera lápida y sus familiares andan todavía buscando sus restos. El proyecto reformista de la República y todo lo que esa forma de gobierno significaba fue barrido y esparcido por las tumbas de miles de ciudadanos; y el movimiento obrero, sus organizaciones y su cultura, resultaron sistemáticamente eliminados en un proceso más violento y duradero que el sufrido por otros movimientos europeos de resistencia al fascismo. En eso consistía también la «operación quirúrgica en el cuerpo social de España» reclamada con tanto ahínco por los militares sublevados, las clases poseedoras y la Iglesia católica.

El discurso del orden, de la patria y de la religión se había impuesto al de la democracia, la República y la revolución. En la larga y cruel dictadura de Franco reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX, si se compara con la de los otros países capitalistas occidentales. Fue la única dictadura, junto con la de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, creada en la Europa de entreguerras que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió treinta años más. El lado más oscuro de esa guerra civil europea, de ese tiempo de odios, que acabó en 1945, tuvo todavía larga vida en España.

Cronología

1931

12 de abril	Elecciones municipales. Victoria republicana.
14 de abril	Proclamación de la República y salida al exilio del Rey Alfonso XIII.

1936

16 de febrero	Victoria electoral del Frente Popular.
19 de febrero	Gobierno de Manuel Azaña.
10 de mayo	Manuel Azaña, presidente de la República.
12 de mayo	El republicano Santiago Casares Quiroga es nombrado jefe de Gobierno.
17-20 de julio	Sublevación militar en Marruecos y en la Península.

Guerra Civil

20 de julio	Formación del Gobierno del republicano José Giral; el Gobierno apela a Francia; Franco envía emisarios a Italia y Alemania.
28-30 de julio	Llegan a Marruecos y Sevilla aviones italianos y alemanes.
8 de agosto	Cierre de la frontera francesa; comienzo unilateral de la No Intervención.
4 de septiembre	Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero con republicanos, socialistas y comunistas.
9 de septiembre	Primera reunión del Comité de No Intervención en Londres.
1 de octubre	Las Cortes republicanas aprueban el Estatuto vasco; en el otro bando, Franco es nombrado Generalísimo y jefe supremo de los militares rebeldes.
6 de octubre	Los soviéticos declaran que no se sentirán más ligados por la No Intervención que Alemania, Italia y Portugal.

4 de noviembre	Los anarquistas, en un hecho histórico, se unen al Gobierno de Largo Caballero.
6 de noviembre	Ante el temor de que los franquistas se apoderen de Madrid, el Gobierno republicano se traslada a Valencia.
8 de noviembre	Asalto general contra Madrid; llegada de las brigadas internacionales.
18 de noviembre	Se suspende el asalto a Madrid; Alemania e Italia reconocen al Gobierno de Franco en Burgos.

1937

10 de febrero	Los nacionalistas se apoderan de Málaga.
6-15 de febrero	Batalla del Jarama.
8-18 de marzo	Batalla de Guadalajara.
19 de abril	Franco ordena la fusión de Falange y los carlistas y surge el partido único FET-JONS.
26 de abril	Bombardeo de Gernika.
3-8 de mayo	Barricadas y luchas políticas, con varios cientos de muertos, en Barcelona.
17 de mayo	Destitución de Largo Caballero y formación del Gobierno del socialista Juan Negrín.
16 de junio	Detención de los dirigentes del POUM, acusados de provocar los sucesos de mayo en Barcelona. Desaparición de su líder Andreu Nin.
19 de junio	Los franquistas toman Bilbao.
1 de julio	Carta colectiva de los obispos españoles apoyando la Guerra Civil como Cruzada religiosa.
7-26 de julio	Batalla de Brunete.
24 de agosto-15 de septiembre	Batallas de Belchite y Quinto.
26 de agosto	Los franquistas toman Santander.
19 de octubre	Los franquistas se apoderan de Gijón.
31 de octubre	El Gobierno Negrín se traslada a Barcelona.
14 de diciembre	Se inicia la ofensiva de Teruel y los republicanos la toman, única capital de provincia que pudieron ocupar durante la guerra.

1938

22 de febrero	Los nacionalistas vuelven a apoderarse de Teruel.
9 de marzo	Comienza la ofensiva nacionalista en Aragón.
15 de abril	Los franquistas llegan al Mediterráneo.
24 de julio	Comienza la batalla del Ebro.
15 de noviembre	Retirada del Ebro; desfile de despedida de las brigadas internacionales.
23 de diciembre	Ofensiva nacionalista en Cataluña.

1939

15 de enero	Los franquistas se apoderan de Tarragona.
26 de enero	Ocupación de Barcelona.
4 de febrero	Ocupación de Gerona y retirada masiva hacia la frontera francesa; los franquistas terminan la ocupación de Cataluña.
9 de febrero	Ley de Responsabilidades Políticas, la principal ley represiva de la Dictadura de Franco.
27 de febrero	Francia e Inglaterra reconocen al Gobierno de Burgos; dimisión de Azaña.
7-11 de marzo	Sublevación comunista en Madrid, contra el gobierno de Negrín, que acelera el final de la República.
28 de marzo	Los franquistas entran en Madrid.
1 de abril	Total rendición del ejército republicano. Fin oficial de la Guerra Civil.

Bibliografía.

Veinticinco libros básicos sobre la guerra civil española[2*].

Obras generales.

Beevor, Antony: *La guerra civil española*, Crítica, Barcelona, 2005.
Bernecker, Walter L.: *Guerra en España, 1936-1939*, Síntesis, Madrid, 1996.
Casanova, Julián: *República y guerra civil*, Crítica, Barcelona, 2007.
Fraser, Ronald: *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Crítica, Barcelona, 1979.
Graham, Helen: *Breve historia de la guerra civil*, Espasa Calpe, Madrid, 2005.
Jackson, Gabriel: *La República española y la guerra civil*, Crítica, Barcelona, 1976.
Preston, Paul: *La guerra civil española*, Debate, Barcelona, 2006.
Thomas, Hugh: *La guerra civil española*, Grijalbo, Barcelona, 1976.

Violencia.

Espinosa, Francisco (ed.), García Márquez, José M.ª, Gil Vico, Pablo y Ledesma, José Luis: *Violencia roja y azul. España, 1936-1950*, Crítica, Barcelona, 2010.
Juliá, Santos (coord.), Casanova, Julián, Solé i Sabaté, Josep M., Villarroya, Joan y Moreno, Francisco: *Víctimas de la guerra civil*, Temas de Hoy, Madrid, 1999.
Preston, Paul: *El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después*, Debate, Barcelona, 2011.

Clericalismo/anticlericalismo.

Casanova, Julián: *La Iglesia de Franco*, Temas de Hoy, Madrid, 2001.
Montero Moreno, Antonio: *Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939*, BAC, Madrid, 1961.
Raguer, Hilari: *La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española, 1936-1939*, Península, Barcelona, 2001.

Intervención extranjera.

Howson, Gerald: *Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española*, Península, Barcelona, 2000.
Moradiellos, Enrique: *El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española*, Península, Barcelona, 2001.
Viñas, Ángel: *Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil*, Alianza, Madrid, 2001.

Políticas.

Graham, Helen: *La República española en guerra, 1931-1936*, Random House-Mondadori, Barcelona, 2006.
Tusell, Javier: *Franco y la guerra civil española. Una biografía política*, Tusquets, Barcelona, 1992.

Batallas.

Cardona, Gabriel: *Historia militar de una guerra civil*, Flor del Viento, Barcelona, 2006.
Reverte, Jorge M.: *La batalla del Ebro*, Crítica, Barcelona, 2003.

Personajes.

Juliá, Santos: *Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940)*, Taurus, Madrid, 2008.
Miralles, Ricardo: *Juan Negrín. La República en guerra*, Temas de Hoy, Madrid, 2003.

Preston, Paul: *Franco «Caudillo de España»*, Grijalbo, Barcelona, 2002.
Rojo, José Andrés: *Vicente Rojo. Retrato de un general republicano*, Tusquets, Barcelona, 2006.



JULIÁN CASANOVA RUIZ (Valdealgorfa, Teruel, 1956) es un historiador español. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Ha sido profesor visitante en diversas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas. Es miembro del consejo de redacción de las revistas Historia Social y Jerónimo Zurita. Miembro del consejo asesor de Studia Histórica (revista de Historia Contemporánea editada por la Universidad de Salamanca), Historia del Presente (revista semestral editada por la Asociación de Historiadores del Presente), Historiar (revista trimestral de Historia) y The International Journal of Iberian Studies. Miembro del Comité Científico de la revista Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, Argentina.

Es colaborador habitual de la páginas de opinión de El País y tertuliano habitual de Onda Cero. Ha publicado además numerosos artículos en diferentes revistas especializadas. En el año 2007 fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Zaragoza. Asesor histórico y presentador de «La guerra filmada», serie de ocho horas de programas documentales sobre la Guerra Civil Española, TVE, 2006 (editado por Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009).

En 2008 fue elegido, a propuesta de las partes (los familiares de desaparecidos y las asociaciones para la recuperación de la «memoria histórica» denunciantes), miembro del grupo de expertos encargado de búsqueda de fosas comunes y la identificación de las víctimas en el sumario contra los crímenes del franquismo promovido por el juez Baltasar Garzón. Destacó su trabajo en la identificación de los más de 3500

republicanos fusilados en Zaragoza.

Entre las obras que ha escrito o en las que ha participado como editor o coordinador se encuentran las siguientes:

La historia social y los historiadores (Editorial Crítica, 1991); *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón, 1936-1939* (coautor, Mira Editores, 1992); *República y guerra civil* (Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007); *Historia de España en el siglo XX* (coautor junto a Carlos Gil Andrés, Ariel, 2009) y *Europa contra Europa, 1914-1945* (Crítica. 2011).

Notas.

[1] Edward H. Carr, *The Twenty Years' Crisis. An Introduction to the Study of International Relations*, publicado en 1939, aunque la edición que he utilizado es la de Harper & Row, Nueva York, 1964.<<

[2] Manuel Tuñón de Lara, fallecido en 1997, utilizó «bloque de poder» como categoría analítica en una buena parte de su obra, empezando por *Historia y realidad del poder. El poder y las elites en el primer tercio de la España del siglo* XX, Edicusa, Madrid, 1967.<<

[3] Un análisis de esa República, de sus logros, límites y del acoso, por arriba y por abajo, que sufrió, puede verse en mi libro *República y guerra civil*, Crítica, Barcelona, 2007.<<

[4] José María Gil Robles, *No fue posible la paz*, Ariel, Barcelona, 1968, p. 32.<<

[5] El mejor estudio sobre la reforma agraria continúa siendo el de Edward Malefakis, *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain*, Yale University Press, New Haven, 1971 (traducción al castellano en Ariel, Barcelona, 1971).<<

[6] Hasta la creación de la CNT, al anarquismo, que había penetrado en España en los años setenta del siglo XIX, no tuvo especial arraigo. Pero apareció como un movimiento de masas desde finales de los años diez del siglo XX y su masiva implantación en Barcelona, en la ciudad más moderna e industrial de España, lo convirtió en algo excepcional, atípico, en los países de Europa occidental. Una síntesis de las protestas, huelgas e insurrecciones protagonizadas por los anarquistas durante la Segunda República la he ofrecido en *De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939*. Crítica, Barcelona, 1997.<<

[7] Mark Mazower, *Dark Continent: Europe’s Twentieth Century*, Penguin Books, Londres, 1999, p. 23 (traducción al castellano en Ediciones B, Barcelona, 2003).<<

[8] Tras proclamarse la República, Ramiro Ledesma Ramos, joven intelectual, y Onésimo Redondo, un abogado ultracatólico, habían apadrinado las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). A principios de 1934, falangistas y jonsistas se fusionaron en la Falange Española de las JONS, que se mantuvo hasta la primavera de 1936 como una organización minúscula, con apenas varios miles de afiliados. La Falange no obtuvo ningún diputado en las elecciones de febrero de 1936.<<

[9] «Copia de los documentos facilitados por el Teniente Coronel Emilio Fernández Cordón, referentes a la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional» (75 páginas), conservados en el Servicio Histórico Militar de Madrid.<<

[10] El 4 de julio de 1936, el acaudalado Juan March, que ya había financiado el golpe de Sanjurjo en 1932 y otras conspiraciones monárquicas contra la República, aportó el dinero para conseguir el avión que trasladaría a Franco desde Canarias a Marruecos. El avión, un De Havilland Dragon Rapide, fue adquirido dos días después en Inglaterra, con las 2000 libras esterlinas que proporcionó March, por Luis Bolín, el corresponsal del periódico *ABC* en ese país.<<

[1] El republicano de izquierda Santiago Casares Quiroga (1884), abogado, había sido ministro de Gobernación en el Gobierno de coalición de republicanos y socialistas presidido por Manuel Azaña entre octubre de 1931 y septiembre de 1933. Azaña, tras las elecciones de febrero de 1936, le volvió a nombrar ministro, en este caso de Obras Públicas. En abril de ese año, Niceto Alcalá Zamora fue destituido por las Cortes como presidente de la República y el 10 de mayo Manuel Azaña pasó a ser el nuevo Jefe de Estado y nombró presidente de Gobierno a Casares Quiroga, uno de sus colaboradores más fieles, que asumió también el cargo de ministro de la Guerra. Ese Gobierno, formado sólo por republicanos de izquierda, ya que los socialistas se negaron a participar, ha pasado a la posteridad como el Gobierno débil que permitió los conflictos y la violencia política, en vez de reprimirla, y que tampoco supo parar el golpe militar, responsabilidad que se suele cargar sobre las espaldas de Casares Quiroga.<<

[2] Gabriel Cardona, *Historia militar de una guerra civil. Estrategias y tácticas de la guerra de España*, Flor del Viento, Barcelona, 2006, p. 33.<<

[3] Paul Preston, *Franco. A Biography*, HarperCollinsPublishers, Londres, 1993, pp. 144-170 (traducción al castellano en Grijalbo, Barcelona, 2002).<<



[4] Paul Preston, *A Concise History of the Spanish Civil War*, Fontana Press, Londres, 1996, p. 87.<<

[5] Pablo Martín Aceña, *El oro de Moscú y el oro de Berlín*, Taurus, Madrid, 2001.<<

[6]*Rapport fait au nom de la Comission chargée d'enquêter sur les événements survenus en France du 1933 à 1945*, Imprimerie de l'Assamblée National, 1951, reproducido en Enrique Moradiellos, *El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española*, Península, Barcelona, 2001, pp. 268-271. Léon Blum había sido nombrado en junio de 1936 presidente del Gobierno en Francia, tras las elecciones ganadas un mes antes por la coalición del Frente Popular. En Francia entraron en el Gobierno los socialistas junto con el Partido Radical. En España, tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, sólo los republicanos de izquierda participaron en el Gobierno. Las citas posteriores referidas a este asunto pertenecen al mismo *Rapport* de Blum.<<

[7] Citado en Enrique Moradiellos, *El reñidero de Europa*, p. 79.<<

[8] Ibídem, p. 87 y p. 81 para la directriz de Baldwin a Eden.<<

[9] Las «instrucciones reservadas» que firmó el general Mola como «El Director» se reproducen en «Copia de los documentos facilitados por el teniente coronel Emiliano Fernández Cordón, referentes a la preparación y desarrollo del Alzamiento» (75 páginas), documento conservado en el Servicio Histórico Militar de Madrid.<<

[10] Los carlistas, organizados en Comunión Tradicionalista y con una rama paramilitar, los requetés, eran monárquicos, herederos del movimiento político y social originado en los años treinta del siglo XIX en torno al infante Carlos, hermano de Fernando VII, enfrentado a Isabel, hija de éste, y a la rama borbónica que reinó en España hasta 1931. Durante la Segunda República, sus posiciones se radicalizaron, aunque su implantación seguía reducida a los focos tradicionales de las provincias de Álava y Navarra. Sus doctrinas y prácticas durante la República y la Guerra Civil están bien estudiadas en Martin Blinkhorn, *Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1936*, Crítica, Barcelona, 1979.<<

[11] George Orwell, *Homenaje a Cataluña*, Ariel, Barcelona, 1983, pp. 40-42.<<



[12] Francisco Lacruz, *El Alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona*, Librería Arysel, Barcelona, 1943, p. 129.<<

[13] Juan García Oliver, *El eco de los pasos*, Ruedo Ibérico, Madrid, 1978, p. 347.<<

[14] Ian Gibson, *Federico García Lorca: A Life*, Faber and Faber, Londres, 1989. Ian Gibson sostiene en otro lugar que, dada la reputación de García Lorca, el comandante Valdés consultó sobre la suerte del poeta con el general Gonzalo Queipo de Llano, máxima autoridad de los sublevados en Andalucía, quien al parecer le contestó esa frase ya célebre de «dele café, mucho café»: *Queipo de Llano. Sevilla, verano de 1936*, Grijalbo, Barcelona, 1986, p. 106.<<

[15] Ahí empezó la leyenda del mártir falangista, astutamente cultivada por Franco. A José Antonio se le dedicaron durante toda la dictadura, en el aniversario de su fusilamiento, solemnes funerales y el destino, o la medicina, quiso que Franco muriera también un 20 de noviembre (1975). Acabada la Guerra Civil, los restos de José Antonio Primo de Rivera fueron trasladados desde Alicante al monasterio de El Escorial, donde estuvo dos décadas, tratado con los honores de rey, inextricablemente unido al pasado imperial español. Cuando se inauguró el Valle de los Caídos, el 1 de abril de 1959, dos décadas después de que Franco proyectara construirlo como «el templo grandioso […] de los que cayeron por Dios y la Patria», los restos de José Antonio fueron trasladados allí, donde reposan al lado de los de Franco.<<

[16] Una primera síntesis de todo lo que se sabía sesenta años después de su final puede verse en Santos Juliá (coordinador), Julián Casanova, Josep Maria Solé i Sabaté, Joan Villarroya y Francisco Moreno, *Víctimas de la guerra civil*, Temas de Hoy, Madrid, 1999. Desde entonces ha habido un *boom* de estudios sobre la represión franquista de guerra y posguerra. El más ambicioso y exhaustivo es el recientemente aparecido de Paul Preston, *The Spanish Holocaust. Inquisition and Extermination in Twentieth Century Spain*, Harper Collins, Londres, 2011 (versión en castellano en Debate, Barcelona, 2011).<<

[17] En la noche del 22 al 23 de agosto, un grupo de milicianos seleccionó a unos cuantos presos de los casi dos mil amontonados en ese momento en la cárcel Modelo. Asesinaron allí mismo a varios militares, derechistas y políticos. Allí estaban, entre otros, los falangistas Fernando Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda; el fundador del Partido Nacionalista José Albiñana; algunos ministros de los gobiernos republicanos de 1934-1935, y el anciano y experto político Melquíades Álvarez, de setenta y dos años, adalid del reformismo en España durante el primer tercio del siglo XX. Manuel Azaña, presidente de la República, recordaba un año después «el mazazo, tristeza y desolación que le causó el asesinato de aquellas personas conocidas»: *El cuaderno de la Pobleta*, publicado en 1937, que puede encontrarse en Manuel Azaña, *Memorias políticas y de guerra*, Crítica, Barcelona, 1981, vol. II, pp. 22-283.<<

[18] Sobre el «complejo entramado de la justicia popular» puede verse Glicerio Sánchez Recio, *Justicia y guerra en España: Los Tribunales Populares (1936-1939)*, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1991.<<

[19] Juan García Oliver, *El eco de los pasos*, p. 347.<<

[20] La información sobre Emili Darder procede de Jean Schalekamp, *Mallorca, any 1936. D’una illa hom no en pot fugir*, Prensa Universitaria, Palma de Mallorca, 1937, p. 125.<<

[21] Georges Bernanos, *Los grandes cementerios bajo la luna*, Alianza Ed., Madrid, 1986. Bernanos, un escritor profundamente religioso, denunció en ese libro la complicidad del clero y del obispo, José Miralles, con la violencia de los sublevados, especialmente en la matanza ocurrida en el cementerio de Manacor, donde doscientos ciudadanos fueron asesinados y quemados después en un montón. El obispo había enviado allí a «uno de sus curas, quien, con los zapatos entre la sangre, daba la absolución entre las descargas» (p. 84).<<

[22] Manuel Azaña, *Los españoles en guerra*, Crítica, Barcelona, 1982, p. 19.<<

[23] Ibídem, pp. 74-75.<<

[1] Joan Connelly Ullman, «The Warp and Woof of Parliamentary Politics in Spain, 1808-1939: Anticlericalism versus “Neo-Catholicism”», *European Studies Review*, vol. 13, 2 (1983), p. 155.<<

[2] Feliciano Montero, *El primer catolicismo social y la «Rerum Novarum» en España, 1899-1902*, CSIC, Madrid, 1983, p. 401, quien traza un buen balance del «retraso» del catolicismo social español en relación con el europeo en aquellos años. <<



[3] Citado por Hilari Raguer, «La cuestión religiosa», en Santos Juliá, ed., «Política en la Segunda República», *Ayer*, 20 (1995), p. 232.<<

[4] El significado de la frase de Azaña, pronunciada en su discurso histórico en las Cortes el 13 de octubre de 1931, se recoge en Santos Juliá, *Manuel Azaña, una biografía política. Del Ateneo al Palacio Nacional*, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 132-133.<<

[5] Santos Juliá, *Manuel Azaña*, pp. 242-243.<<

[6] Citado en Domingo Benavides, «Maximiliano Arboleya y su interpretación de la revolución de octubre», en Gabriel Jackson et al., *Octubre 1934. Cincuenta años para la reflexión*, Siglo XXI, Madrid, 1985, p. 262.<<



[7] Borja de Riquer, *El último Cambó 1936-1947. La tentación autoritaria*, Grijalbo, Barcelona, 1997, p. 31.<<

[8] Bruce Lincoln, «Revolutionary Exhumations in Spain, July 1936», *Comparative Studies in Society and History*, vol. 27, 2 (1985), pp. 241-260 (traducción al castellano en *Historia Social*, 35, 1999).<<



[9] Citado en Hilari Raguer, *La Espada y la Cruz (La Iglesia, 1936-1939)*, Bruguera, Barcelona, 1977, p. 27.<<

[10] «Venga a nosotros tu Reino». Véase Martin Blinkhorn, *Carlismo y contrarrevolución en España*, pp. 319-347.<<

[11] «Informe acerca del levantamiento cívico-militar de España en julio de 1936», firmado en el Balneario de Belascoain (Navarra) el 13 de agosto de 1936, reproducido en *Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil. 1: Julio-Diciembre de 1936*, edición de José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos, CSIC, Madrid, 2001, pp. 80-89 (en adelante *Archivo Gomá*). Para la relación que se estableció durante la guerra entre Gomá, la Santa Sede y el general Franco debe verse María Luisa Rodríguez Aísa, *El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado 1936-1939*, CSIC, Madrid, 1981. El argumento de que la sublevación militar se hizo para evitar un levantamiento comunista organizado desde Moscú fue una de las grandes mentiras propagadas por los militares sublevados y después por los vencedores de la guerra, desmontado ya hace años por Herbert Rutledge Southworth en *El mito de la cruzada de Franco*, Ruedo Ibérico, París, 1963. <<

[12] «Carta colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España», firmada el 1 de julio de 1937, reproducida en el *Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Burgos*, de 31 de agosto de 1937, pp. 180-213, que es la copia que yo utilizo en este libro. Con un título ligeramente diferente, se encuentra reproducida, al igual que otros importantes documentos episcopales y pontificios, en Antonio Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939*, BAC, Madrid, edición de 1999 (primera edición en 1961), pp. 726-741. Gomá, primado de los obispos españoles, murió el 22 de agosto de 1940. Pla y Deniel, que era sólo siete años más joven que Gomá, ocupó su sitio en 1941. Cuando murió en 1968, a punto de cumplir noventa y dos años, desapareció con él uno de los artífices de la Iglesia de la cruzada y de Franco.<<



[13] Enrique Pla y Deniel, «Las dos ciudades», 30-IX-1936, reproducida en Antonio Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa en España*, pp. 688-708.<<

[14] Alfonso Álvarez Bolado, *Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y Guerra Civil: 1936-1939*, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1995, pp. 50-53, el libro básico para examinar, con documentos oficiales de primera mano, de qué forma «la Iglesia es implicada y se implica» (p. 22) en la sublevación militar y en la Guerra Civil.<<

[15] Citado en ibídem, p. 54.<<

[16] «Informe acerca del levantamiento militar», p. 87.<<

[17] Alfonso Álvarez Bolado, *Para ganar la guerra, para ganar la paz*, pp. 55-56.<<

[18] Citado en Ronald Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, tomo I, pp. 209-210.
<<



[19] Fernando Díaz-Plaja, *La guerra de España en sus documentos*, Plaza y Janés, Barcelona, 1973, p. 87.<<

[20] «Informe del Cardenal Gomá a Secretaría de Estado. Tercer informe general sobre la situación de España con motivo del movimiento cívico-militar de julio de 1936» (24 de octubre de 1936), en *Archivo Gomá*, pp. 245-252.<<

[21] Ibídem. El argumento de Paul Preston en *Franco*, p. 188.<<

[22] «Carta del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli», 9 de noviembre de 1936, *Archivo Gomá*, pp. 289-293.<<

[23] Sigo aquí el relato de Paul Preston, *Franco*, pp. 243-347.<<

[24] Para la gestación de la carta colectiva puede verse Hilari Raguer en *La Espada y la Cruz*, pp. 102-119. He seguido también aquí el documentado resumen de María Luisa Rodríguez Aísa, «La Carta del Episcopado», en «La Guerra Civil», *Historia 16*, vol. 13 (1986), pp. 56-63. El arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Baraquer, que se encontraba en Italia, tras haber podido escapar de la explosión revolucionaria de Cataluña en el verano de 1936, mantuvo siempre una posición crítica frente a la estrecha conexión entre los militares rebeldes y la Iglesia católica y ya no regresó a España tras la victoria de Franco.<<

[25] Véase la nota 12 de este capítulo.<<

[26] Alfonso Álvarez Bolado, *Para ganar la guerra, para ganar la paz*, p. 159, quien examina en pp. 207-209 la repercusión internacional de la Carta Colectiva.<<

[27] Gumersindo de Estella escribió unas memorias estremecedoras sobre esa violencia y denunció desde dentro de la Iglesia, algo extraordinario, «el abuso político de la religión». Sus memorias permanecieron inéditas durante un tiempo y han sido publicadas recientemente con el título de *Fusilados en Zaragoza, 1936-1939* . *Tres años de asistencia espiritual a los reos*, Mira Editores, Zaragoza, 2003.<<

[28] El sacerdote jesuita Eduardo Fernández Regatillo, uno de los más famosos canonistas y moralistas de entonces, llegó incluso al extremo de prescribir cuál era el mejor momento para administrar el sacramento de la extremaunción: «después de la primera descarga, antes del tiro de gracia». Citado en Hilari Raguer, «Caídos por Dios y por España», *La aventura de la Historia*, 17 (marzo de 2000), pp. 14-18.<<

[29] «Los comunistas y anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud, y por ello les asesinan y les martirizan; y no pudiendo acabar con Dios ni con Cristo, sacian su odio en sus imágenes, en sus templos y en sus ministros, y se gozan en el asesinato, en el saqueo, en la destrucción y en el incendio» (Enrique Pla y Deniel, «Las dos ciudades», 30 de septiembre de 1936).<<

[30] Pelai Pagés, *La presó Model de Barcelona. Història d'un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939)*, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996, pp. 306-307.<<

[31]*La Vanguardia*, 2 de agosto de 1936.<<

[32] El anticlericalismo como «constante cultural» de la izquierda española desde la revolución liberal hasta la Guerra Civil es una de las tesis de José Álvarez Junco desarrollada en *El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista*, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 397-418.<<

[33] Ronald Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, tomo I, p. 207. Gerald Brenan, *The Spanish Labyrinth: An Account of the Social and Political Background of the Spanish Civil War*, Cambridge University Press, Cambridge, 1943 (primera traducción al castellano en Ruedo Ibérico, París, 1962).<<

[34] José Álvarez Junco, *El emperador del Paralelo*, p. 401.<<



[35] Antonio Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa en España*, p. 392.<<



[36] José Álvarez Junco, «El anticlericalismo en el movimiento obrero», en Gabriel Jackson y otros, *Octubre 1934*, pp. 283-300.<<

[37] La interpretación de Frances Lannon en «Los cuerpos de las mujeres y el cuerpo político católico: autoridades e identidades en conflicto en España durante las décadas de 1920 y 1930», *Historia Social*, 35 (1999), pp. 72-75.<<



[38] Antonio Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa*, p. 430 y 495-514 para el relato de las monjas asesinadas en grupos.<<

[39] Los argumentos sobre el respeto a las monjas están elaborados a partir de la lectura de Frances Lannon, *Privilegio, persecución y profecía*, pp. 82-86 y Joan Connelly Ullman, «The Warp and Woof of Parliamentary Politics in Spain, 1808-1939», pp. 145-176.<<

[40] Antonio Bermúdez, *República y guerra civil. Manzanares (1931-1939)*, Diputación de Ciudad Real, Ciudad Real, 1992, pp. 62-76.<<

[41] Para Aragón debe verse Pilar Salomón, *Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939)*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2002. La cita de Susan Harding procede de *Remaking Ibieca. Rural life in Aragon under Franco*, University of North Carolina Press, Chapell Hill, 1984, p. 63 (traducción al castellano en Instituto Aragonés de Antropología, 1999).<<



[42] Antonio Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa en España*, p. 627.<<

[43] Bruce Lincoln, «Revolutionary Exhumations in Spain, July 1936», pp. 255-256. <<



[44] Mary Low y Juan Brea, *Red Spanish Notebook. The First Six Months of the Revolution and Civil War*, Martin Secker and Warbug, Londres, 1937, pp. 75-77.<<

[45] Eduardo Barriobero, *Memorias de un tribunal revolucionario*, Hacer, Barcelona, 1986, p. 70. Exhaustivo balance del anticlericalismo en aquellos años en Julio de la Cueva, «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil», en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.), *El anticlericalismo español contemporáneo*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, pp. 211-301. La información sobre la Causa General de Ciudad Real procede de Francisco Alía, *La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939)*, Diputación Provincial, Ciudad Real, 1994, p. 229.<<

[46] Frances Lannon, *Privilegio, persecución y profecía*, p. 127.<<

[47] Obispos que salvaron sus vidas en Antonio Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa en España*, pp. 83-91. También en Nicolau Pons i Llinàs, *Jesuites Mallorquins víctimes de la guerra civil*, Lleonard Muntaner, Palma de Mallorca, 1994, pp. 11-12.<<

[48] Tras la ocupación franquista de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, en septiembre de 1936, dieciséis sacerdotes nacionalistas vascos fueron fusilados, lo cual originó una protesta del cardenal Gomá a Franco, quien le aseguró que no ocurrirían más fusilamientos de clérigos en su zona. Algunos curas más fueron asesinados en otras provincias, por ser sospechosos de republicanos o no adherirse a los principios de Falange Española, pero ese tipo de persecución fue bastante extraordinaria en la zona franquista. Traté de ello en *La Iglesia de Franco*, Crítica, Barcelona, 2005, pp. 163-170.<<

[49] Bruce Lincoln, «Revolutionary Exhumations in Spain, July 1936», pp. 241-260. <<

[50]*Heraldo de Aragón*, 11 de agosto de 1936.<<



[1] Piers Brendon, *The Dark Valley. A Panorama of the 1930s*, Vintage Books, Nueva York, 2002, p. 354.<<

[2] El temor y los prejuicios de la diplomacia británica y norteamericana hacia la República fueron examinados ya hace años por Douglas Little, *Malevolent Neutrality. The United States, Great Britain and the Origins of the Spanish Civil War*, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1985. Los análisis más detallados, tras la aparición del libro de Little, son los de Enrique Moradiellos, *La pérfida Albión. El gobierno británico y la guerra civil española*, Madrid, Siglo XXI, 1996, y Tom Buchanan, *Britain and the Spanish Civil War*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. El juego de palabras «Rebel versus Rabble» se traduce como «rebeldes contra chusma».<<

[3] Enrique Moradiellos, *El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española*, Península, Barcelona, 2001, p. 56.<<



[4] Ángel Viñas, *Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil*, Alianza Ed., Madrid, 2001, p. 518.<<



[5] Jean-François Berdah, *La democracia asesinada. La República española y las grandes potencias*, Crítica, Barcelona, 2002, pp. 204205.<<

[6] Antony Beevor, *La guerra civil española*, Crítica, Barcelona, 2005, pp. 202-203. <<

[7] Citado en Enrique Moradiellos, *La pérfida Albión*, p. 61.<<

[8] Kenneth Williams Waltkins, *Britain Divided: the Effects of the Spanish Civil War on British Political Opinion*, Thomas Nelson & Sons, Londres, 1963, p. 70.<<



[9] Antonio Marquina Barrio, «Estados Unidos y la guerra de España», en «La Guerra Civil», *Historia 16*, n.º 18, 1986, p. 81.<<

[10] Reproducido en Enrique Moradiellos, *El reñidero de Europa*, pp. 98-99.<<

[11] Las cifras detalladas de la ayuda italiana y alemana a Franco se encuentran, respectivamente, en John Coverdale, *Italian Intervention in the Spanish Civil War*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1977 (traducción al castellano en Alianza, Madrid, 1979), y R. L. Proctor, *Hitler's Luftwaffe in the Spanish Civil War*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1983.<<

[12] Citado en Enrique Moradiellos, *El reñidero español*, p. 101.<<

[13] Los aviones que Francia vendió a la República tuvieron que ser pagados en efectivo a precios elevados, y no a crédito, como los que procedían de Italia y Alemania, y fueron entregados desarmados y sin pilotos. El análisis más detallado de todos los envíos a España se encuentra en Gerald Howson, *Arms for Spain. The Untold Story of the Spanish Civil War*, St. Martin's Press, Nueva York, 1999 (traducción al castellano en Península, Barcelona, 2000).<<

[14] Citado en Walther L. Bernecker, *Guerra en España, 19 361 939*, Síntesis, Madrid, 1996, pp. 49-50. La obra pionera de Ángel Viñas fue *La Alemania nazi y el 18 de juli*o, Alianza Ed., Madrid, 1977.<<

[15] Enrique Moradiellos, «El mundo ante el avispero español: intervención y no intervención extranjera en la guerra civil», en Santos Juliá (coord.), *Historia de España de Menéndez Pidal*, tomo XL, Espasa Calpe, Madrid, 2004, pp. 247-248.<<

[16] Ibídem, p. 253.<<

[17] Citado en Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939*, Planeta, Barcelona, 1999, p. 460.<<

[18] Daniel Kowalsky, *Stalin and the Spanish Civil War*, Columbia University Press, Nueva York, 2004 (traducción al castellano en Crítica, Barcelona, 2003).<<



[19] Pablo Martín Aceña, *El oro de Moscú y el oro de Berlín*, Taurus, Madrid, 2001, pp. 23-25.<<

[20] Unas 40 toneladas ya habían sido enviadas, a finales de julio de 1936, a París, por orden del Gobierno republicano, para obtener dinero, unos 507 millones de francos, que sirvieron para comprar armas y municiones antes de que el Tratado de No Intervención se pusiera en marcha.<<

[21] Pablo Martín Aceña, *El oro de Moscú y el oro de Berlín*, p. 64.<<

[22] La cita de Paul Preston está sacada de *The Spanish Civil War. Reaction, Revolution and Revenge*, Harper Collins, Londres, 2006, pp. 191-192 (traducción al castellano en Debate, Barcelona, 2006). El argumento de Pablo Martín Aceña en *El oro de Moscú y el oro de Berlín*, pp. 160-161. El estudio que abrió los caminos a la investigación, considerado el más sólido, fue el de Ángel Viñas, *El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista*, Grijalbo, Barcelona, 1979, resumido después en *Guerra, dinero y dictadura*, Crítica, Barcelona, 1984, de donde tomo la información que aquí manejo (pp. 168-204).<<



[23] Gerald Howson, *Arms for Spain: The Untold Story of the Spanish Civil War*, pp. 28-29.<<

[24] Robert Whealey, «How Franco financed his war-reconsidered», en Martin Blinkhorn (ed.), *Spain in Conflict 1931-1939: Democracy and Its Enemies*, Sage Publications, Londres, 1986, pp. 244-263, argumento desarrollado con más detalle en su *Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War*, University Press of Kentucky, Lexington, 1989.<<

[25] Eduardo González Calleja, «El exrey», en Javier Moreno Luzón (ed.), *Alfonso XIII. Un político en el trono*, Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 426.<<

[26] Ricardo de la Cierva, *Historia del Franquismo. Orígenes y configuración (2939-1945)*, Planeta, Barcelona, 1975, p. 80. Un buen exponente de esa historiografía, representada por De la Cierva, Ramón y Jesús Salas Larrazábal, en la obra colectiva, *Síntesis histórica de la Guerra de Liberación, 1936-1939*, Servicio Histórico Militar, Madrid, 1968. Pío Moa es en la actualidad el publicista y divulgador que más éxito ha tenido en reproducir de forma acrítica esas tesis y hacerlas pasar por investigación propia y novedosa: *Los mitos de la guerra civil*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003.<<

[27] Citado en Walther L. Bernecker, *Guerra en España 1936-1939*, Síntesis, Madrid, 1996, p. 45.<<

[28] Informe del 19 de febrero de 1939, recogido en la colección *Documents on German Foreign Policy 1918-1945*, serie D, vol. 3, *German and the Spanish Civil War*, Londres, HMSO, 1951, documento 740, p. 844. Citado en Enrique Moradiellos, «La intervención extranjera en la guerra civil: un ejercicio de crítica historiográfica», en Enrique Moradiellos ed., «Dossier. La Guerra Civil», *Ayer*, 50 (2003), p. 231. Ver también H. R. Trevor-Roper (ed.), *Hitler's Secret Conversations 1941-1944. With and introductory essay on the mind of Adolf Hitler*, Nueva York, 1953, p. 558.<<

[29] Informe del mayor E. C. Richards, 25 de noviembre de 1938, reproducido en Enrique Moradiellos, *La pérfida Albión. El gobierno británico y la guerra civil española*, p. 257.<<

[30] Jason Gurney, *Crusade in Spain*, Faber, 1974, p. 18.<<



[31] Lo de las batallas universales en Piers Brendon, *The Dark Valley. A Panorama of the 1930s*, p. 359.<<



[32] Michel Lefebre and Rémi Skoutelelsky, *Brigadas Internacionales. Imágenes recuperadas*, Lunwerg Editores, Barcelona, 2003.<<

[33] Kenneth William Watkins, *Britain Divided*, p. 170.<<

[34] La información y la cita de Eoin O’Duffy, procedente de su *Crusade in Spain*, 1938, están sacadas de Paul Preston, *A Concise History of the Spanish Civil War*, pp. 125-126.<<

[35] Raymond L. Proctor, *Hitler's Luftwaffe in the Spanish Civil War*, Greenwood Press, Westport, C. T., 1983.<<

[36] John F. Coverdale, *Italian Intervention in the Spanish Civil War*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1977.<<



[37] Citado en Hugh Thomas, *The Spanish Civil War*, Hamish Hamilton, Londres, 1986, p. 853 (traducción al castellano en Grijalbo, Barcelona, 1976).<<

[38] Jason Gurney, *Crusade in Spain*, p. 188.<<



[39] George Orwell, *Homage to Catalonia*, Harmondsworth, 1966, p. 221 (primera edición en inglés en1938, traducción al castellano en Ariel, Barcelona).<<

[1] Hay dos documentales que resumen perfectamente el alcance de esa revolución: *Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona*, dirigido por Mateo Santos, Oficina de Información y Propaganda de la CNT-FAI, 1936; y *Barcelona trabaja para el frente*, dirigido también por Santos y producido por la Oficina de Información y Propaganda de la CNT-FAI, 1936. Ambos documentales pueden encontrarse en *La guerra filmada*, Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009.<<

[2] Una biografía, extensa, apologética, es la del militante anarquista Abel Paz, *Durruti en la Revolución española*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004. Un breve esbozo, preciso y actualizado, en José Luis Ledesma, «20 personajes clave de la historia del anarquismo español», en Julián Casanova (coord.), *Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España*, Crítica, Barcelona, 2010, pp. 256-260.<<

[3]*Solidaridad Obrera*, el periódico anarquista de más difusión e importancia, 14 de agosto de 1936. El 12 de septiembre declaraba en el mismo periódico: «Nosotros no vamos por medallas ni fajines. No queremos Diputaciones ni Ministerios. Cuando hayamos vencido, volveremos a las fábricas y talleres de donde hemos salido, apartándonos de las cajas de caudales, por cuya abolición hemos luchado tanto. En la fábrica, en el campo y en la mina es donde se creará el verdadero ejército defensor de España».<<

[4] He analizado ese proceso en profundidad en *De la calle al frente*, pp. 209-220. El Pleno Regional de Grupos Anarquistas de Cataluña, celebrado en Barcelona el 21 de agosto de 1936, primer testimonio documental sobre ese tema, discutió y aprobó «la incautación y colectivización de los establecimientos abandonados por sus propietarios […] el control obrero de los negocios bancarios hasta llegar a la nacionalización de la Banca […] y el control sindical obrero sobre todas las industrias que continúen explotadas en régimen de empresa privada».<<

[5] Sigo aquí la investigación de Mary Nash, *Defying Male Civilization: Women in the Spanish Civil War*, Arden Press, Denver, 1995, pp. 101-102 (traducción al castellano como *Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra civil*, Taurus, Madrid, 1999), quien ya había dedicado una primera aproximación al tema en «Milicianas and Homefront Heroines: Images of Women in War and Revolution 19 361 939», *History of European Ideas*, 11 (1989).<<

[6] «Materiales para la discusión española, en el Pleno de la AIT, el 11 de junio de 1937», documento inédito, una de las reflexiones más profundas que existen sobre los cambios que tuvo que experimentar el movimiento anarquista durante la guerra. Hizo públicos parte de esos razonamientos en *El anarcosindicalismo en la Revolución Española*, Comité Nacional de la CNT, Barcelona, 1938.<<

[7] Raymond Carr, *The Spanish Tragedy. Civil War in Perspective*, Weidenfeld & Nicholson, Londres, 1977, p. 118 (traducción al castellano en Alianza Editorial, Madrid, 1986).<<

[8] Julián Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, Tusquets, Barcelona, 2001, p. 134. Zugazagoitia, diputado socialista en 1936, ministro de Gobernación en el primer Gobierno de Juan Negrín durante la guerra, se exilió a Francia, fue detenido por la Gestapo en julio de 1940, entregado a las autoridades franquistas y fusilado en el cementerio del Este de Madrid el 9 de noviembre del mismo año. El avance de las tropas rebeldes por Extremadura y la matanza de Badajoz en Francisco Espinosa, *La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz*, Crítica, Barcelona, 2007. Un relato actualizado de la matanza de Badajoz en Paul Preston, *The Spanish Holocaust*, pp. 321-323.<<

[9] John Whitaker, «Prelude to World War: A Witness from Spain», *Foreing Affairs*, Vol. 21, n.º 1, octubre de 1942, pp. 104-106.<<

[10] La cita de Araquistain y la de la dimisión de Giral proceden de Santos Juliá, «El Frente Popular y la política de la República en guerra», en Santos Juliá (ed.), *Historia de España de Menéndez Pidal, República y guerra civil*, Espasa Calpe, Madrid, 2004, vol. XL, p. 126.<<

[11] Indalecio Prieto, el gran oponente de Largo en el Partido Socialista, le dijo a Mijail Koltsov, corresponsal de *Pravda*, que Largo Caballero era «un burócrata congelado […] capaz de echarlo a perder todo», aunque reconocía también que era «el único hombre […] que sirve para encabezar el nuevo gobierno». Y Negrín aceptó participar después de calificar a ese Gobierno de «disparate»: «¿Es que se busca resueltamente que se pierda la guerra? ¿Se trata de un desafío a Europa?» Citas en Ricardo Miralles, *Juan Negrín. La República en guerra*, Temas de Hoy, Madrid, 2003, pp. 79-80.<<

[12] Francisco Largo Caballero, *Mis recuerdos*, Ediciones Unidas, México, 1976, pp. 175-176, de quien procede el término «regateo». Manuel Azaña, presidente de la República, se negó al principio a firmar el decreto «porque le repugnaba tener en el Gobierno a cuatro anarquistas». El mismo Azaña, efectivamente, escribió meses después, «que no solamente contra mi opinión, sino con mi protesta más airada, se impuso la modificación ministerial de noviembre, con la entrada de la CNT y los anarquistas» (en «Cuadernos de la Pobleta», anotación del 20 de mayo de 1937, en *Memorias políticas y de guerra*, II, p. 43). He proporcionado un relato de la negociación de los anarquistas para entrar en el Gobierno de la República en *De la calle al frente*, pp. 178-183.<<

[13] El periódico anarquista *Solidaridad Obrera* apoyó el 10 de noviembre el traslado del Gobierno. Unos días después, sin embargo, un Pleno Nacional de la CNT acogía la indignación de algunos delegados por la forma en que se había secundado esa medida tan impopular. La víctima fue el secretario nacional Horacio Martínez Prieto, a quien se hizo responsable del abandono. Tuvo que dimitir y fue sustituido por Mariano R. Vázquez, el hombre que controlaba la CNT en Cataluña, que sería ya el máximo dirigente de la organización durante toda la Guerra Civil.<<

[14] Helen Graham, *The Spanish Civil War. A very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 52 (traducción al castellano en Espasa Calpe, Madrid, 2006). A Helen Grahan le debemos el estudio más exhaustivo sobre las fuerzas políticas y sus disputas en la zona republicana: *The Spanish Republic at War 1936-1939*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002 (Random House-Mondadori, Barcelona, 2006).<<

[15] Helmut Rudiger, *El anarcosindicalismo en la Revolución Española*, p. 49.<<

[16] Según el informe del búlgaro Sotyán Minéevich («Stepánov»), enviado a Moscú el 17 de marzo de 1937, citado en Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939*, Planeta, Barcelona, 1999, p. 340.<<



[17] El origen de esas disputas, relato de esos conflictos y descripción de esas muertes en mi libro *De la calle al frente*, pp. 213-219.<<

[18] La versión de Azaña en «Cintas telegráficas entre Presidente de la República en Barcelona y Gobierno central en Valencia, sobre situación de aquella capital», 4-6 de mayo de 1937, Servicio Histórico Militar (Madrid), armario 53, legajo 461, carpeta 1. <<

[19] La versión de George Orwell en *Homage to Catalonia*, Sacker&Wargburg, Londres, 1971, pp. 160-192. Ese mismo día, sin embargo, hubo disturbios en la retaguardia del frente de Aragón, con grupos armados que asaltaron dos cuarteles militares, llevándose armas y municiones, y asesinatos de algunos presos: Informe de la Asesoría Jurídica del Frente de Aragón, Servicio Histórico Militar, armario 62, legajo 788, carpeta 1.<<



[20] Toda la información sobre la tramitación de la crisis en el Archivo de la Guerra Civil, Salamanca, carpeta 39 de Bilbao.<<

[21] Con su cese, provocado por el Partido Comunista y un sector de la ejecutiva del PSOE, Largo Caballero, que tenía entonces sesenta y siete años, dijo prácticamente adiós a una larga vida dedicada a las luchas sindicales, al socialismo y a la República, aunque, ya en el exilio, todavía le esperaba el campo de concentración nazi de Oranienburg. Liberado por las tropas soviéticas en abril de 1945, volvió a Francia y murió en París el 23 de marzo de 1946. «Una forma de examinar la última fase de la guerra civil, escribe Raymond Carr, es verla como el triunfo final de los partidos políticos sobre los sindicatos. Los derrotados de mayo de 1937 fueron Largo Caballero y la CNT. Los vencedores, Prieto y el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, los comunistas y los republicanos» (*The Spanish Tragedy*, p. 199).<<

[22] Manuel Azaña, «El cuaderno de la Pobleta», p. 56.<<

[23] Ésa era la «razón decisiva» de su nombramiento, según Santos Juliá, *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Taurus, Madrid, 1996, pp. 262-263. La cita sobre su «eficacia», en Ricardo Miralles, *Juan Negrín*, p. 129.<<

[24] Tras la derrota de la República, Negrín pasó los primeros meses del exilio en Francia. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Inglaterra, como presidente del Gobierno republicano en el exilio, un cargo que Winston Churchill nunca le reconoció. Cuando acabó la guerra mundial, volvió a París, donde murió el 12 de noviembre de 1956. Demonizado por sus enemigos y por parte de sus supuestos amigos, su vida y actividad política se conoce ahora mejor gracias a los estudios, ente otros, del ya citado Ricardo Miralles, *Juan Negrín*; Enrique Moradiellos, *Negrín*, Península, Barcelona, 2006; y Gabriel Jackson, *Juan Negrín. Médico, socialista y jefe de Gobierno de la II República española*, Crítica, Barcelona, 2008.<<

[25] Paul Preston, *The Spanish Civil War. Reaction, Revolution and Revenge*, pp. 253-255 y Julián Casanova, *De la calle al frente*, pp. 225-226.<<

[26] Discurso del 16 de noviembre de 1937, reproducido en J. M. Cuenca Toribio, *La oratoria parlamentaria española*, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 2002, p. 944. <<



[27] Enrique Moradiellos, *1936. Los mitos de la Guerra Civil*, Península, Barcelona, 2004, p. 131.<<

[28] Helen Graham, *The Spanish Civil War: A very Short Introduction*, p. 101.<<

[29] Helen Graham, *The Spanish Republic at War*, p. 383.<<

[30] Los dos informes se encuentran en Ricardo Miralles, *Juan Negrín*, pp. 297-298. <<

[31] Despacho de R. S. Stevenson, 25 de noviembre de 1938, citado en Enrique Moradiellos, *El reñidero de España*, p. 235.<<



[32] Cipriano Rivas Cheriff, *Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña*, Grijalbo, Barcelona, 1979, p. 437.<<

[1] Enrique Moradiellos, *1936. Los mitos de la Guerra Civil*, Península, Barcelona, 2004, pp. 197-198. La «relación directa entre militarización del orden público y politización de sectores militares», agudizada durante los años republicanos, fue señalada ya hace tiempo por Manuel Ballbé, *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Alianza Ed., Madrid, 1985, pp. 317319.<<



[2] Ismael Saz, «Política en zona nacionalista: la configuración de un régimen», en Enrique Moradiellos, ed., «La guerra civil», *Ayer*, 50 (2003), p. 59.<<

[3] Paul Preston, *Franco*, p. 177.<<

[4] Citado por su hijo Guillermo Cabanellas, *La guerra de los mil días*, Grijalbo, Barcelona, 1973, p. 652, vol. 1. El general Cabanellas fue relegado al cargo de inspector general de hospitales del ejército y murió, con escasos honores, en Málaga en mayo de 1938.<<

[5] En su primer discurso, Franco mostró ya sus intenciones: «Ponéis en mis manos a España. Mi mano será firme, mi pulso no temblará y yo procuraré alzar a España al puesto que le corresponde conforme a su Historia y que ocupó en épocas pretéritas» (citado en Enrique Moradiellos, *1936. Los mitos de la Guerra Civil*, p. 208).<<

[6] Paul Preston trata con detalle esa «forja de un Caudillo», en *Franco*, pp. 171-198. Véase también Juan Pablo Fusi, *Franco. Autoritarismo y poder personal*, Taurus, Madrid, 1995, pp. 61-62.<<

[7] «Informe del Cardenal Gomá a Secretaría de Estado. Tercer informe general sobre la situación de España con motivo del movimiento cívico-militar de julio de 1936» (24 de octubre de 1936), reproducido en *Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil. 1: Julio-Diciembre de 1936*, edición de José Andrés Gallego y Antonio M. Pazos, CSIC, Madrid, 2001, pp. 245-252.<<

[8] Juan Pablo Fusi, *Franco*, p. 65.<<



[9] Citas de las frases, amenazas y excentricidades en Ian Gibson, *Queipo de Llano. Sevilla, verano de 1936*, Grijalbo, Barcelona, 1986, pp. 72, 224, 256.<<

[10] El carlismo, como ya se ha apuntado, era un movimiento popular monárquico, de extrema derecha, nacido un siglo antes de la Segunda Republica, en los años treinta del siglo XIX, en medio de una disputa dinástica. Debilitados por la presencia de la monarquía de Alfonso XIII durante el primer tercio del siglo XX, los carlistas se beneficiaron de la caída de la monarquía y del establecimiento de un régimen republicano. Su ideología antirrepublicana fue acompañada en esos años de la reconstrucción activa del *Requeté*, la fuerza militar formada por sus miembros jóvenes más beligerantes, una unidad paramilitar moderna que fue entrenada para auxiliar al golpe de Estado en julio de 1936. Véase Martin Blinkhorn, *Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939*. La información que sigue sobre Fal Conde en Paul Preston, *Franco*, pp. 208-209.<<



[11] Citado en Javier Tusell, *Franco en la Guerra Civil. Una biografía política*, Tusquets, Barcelona, 1992, pp. 91-92.<<

[12] Ibídem, p. 112.<<



[13] Joan Maria Thomàs, *Lo que fue la Falange*, Plaza & Janés, Barcelona, 1999, p. 145.<<

[14] El proceso de unificación está detallado por Paul Preston, *Franco*, pp. 248-274. <<

[15] Hedilla pidió a Franco «clemencia y magnanimidad» y Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, y Serrano Suñer intervinieron también para que la sentencia no se ejecutara, mientras que el embajador alemán, el general Wilhelm von Faupel, advirtió que «en los momentos actuales es muy peligroso crear mártires». Ver Javier Tusell, *Franco en la guerra civil*, pp. 130-131, 301.<<

[16] Paul Preston, *Franco*, p. 279.<<

[17] Juan Pablo Fusi, *Franco*, p. 76.<<



[18] Constantino Bayle, padre jesuita, «El espíritu de Falange española, ¿es católico?», *Razón y Fe*, 112 (1937), p. 236.<<

[19] Eloy Montero, *Los estados modernos y la nueva España* (1939), citado en Alfonso Botti, *Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975)*, Alianza Ed., Madrid, 1992, pp. 102-103. La fusión, sin problemas, entre la tradición católica y el nuevo ideario fascista desde comienzos de la Guerra Civil está también detallada con citas significativas en Santos Juliá, *Historia de las dos Españas*, Taurus, Madrid, 2004, pp. 298-299; también Helen Graham, *The Spanish Civil War*, pp. 83-84.<<

[20] Con el paso del tiempo, ya durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del Eje veían cercana la derrota, la dictadura tuvo que desprenderse de sus apariencias fascistas y resaltar la base católica, la identificación entre el catolicismo y la tradición española. El régimen que había salido de la Guerra Civil nada tenía que ver con el fascismo, declaró Franco en una entrevista a *United Press* en noviembre de 1944, porque el fascismo no incluía al catolicismo como principio básico.<<

[21] Información detallada sobre ese Gobierno en Paul Preston, *Franco*, 295-298; y Javier Tusell, *Franco en la Guerra Civil española*, pp. 228-246. Nada más constituirse el Gobierno, el cardenal Gomá envió un informe al cardenal Pacelli en el que le expresaba su convicción de que en España se estaba en vísperas de «una renovación legal en todo cuanto se refiere a las cosas de la Iglesia en sus diferentes aspectos» («Informe del Primado al Cardenal Pacelli», 2 de febrero de 1938, en María Luisa Rodríguez Aísa, *El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado 1936-1939*, CSIC, Madrid, 1981, pp. 295-296).<<

[22] Publicado en el *Boletín Oficial del Estado* del 10 de marzo y recogido en la publicación de FET y de las JONS, *Doctrina e Historia de la Revolución Nacional Española*, 1939.<<

[23] Citado en Alfonso Álvarez Bolado, *Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y guerra civil: 1936-1939*, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1995, p. 254.<<

[24] Carta pastoral de Enrique Pla y Deniel, «Los delitos del pensamiento y los falsos ídolos intelectuales», citada en Alfonso Álvarez Bolado, *Para ganar la guerra, para ganar la paz*, p. 292. Lo de «meter a Dios y sus cosas en todo» lo escribió el cardenal Gomá en *La España heroica. Ascética de nuestra guerra*, Gráficas Bercausa, Pamplona, 1937, pp. 37-38.<<

[25] Informe de la Asesoría Técnica sobre la enseñanza en Barcelona, firmada el 16 de enero de 1939 (las tropas de Franco entraron en la ciudad catalana el 26 de enero). La circular de Sainz Rodríguez está sacada del *Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Burgos*, 22 de marzo de 1938.<<



[26] Ángela Cenarro (citando a Martínez de Bedoya), *La sonrisa de Falange. Auxilio social en la guerra civil y en la posguerra*, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 1-13.<<

[27] Jaume Claret, *El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945*, Crítica, Barcelona, 2006; y Mercedes del Amo, *Salvador Vila: el rector fusilado en Víznar*, Universidad de Granada, Granada, 2005.<<

[28] Santos Juliá, *Historia de las dos Españas*, p. 318.<<

[29] Ibídem, pp. 303-304 y 318.<<

[30] Alfonso Álvarez Bolado, *Para ganar la guerra, para ganar la paz*, pp. 324 y 348.
<<

[31] Aniceto de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido católico del Movimiento Nacional Español*, Editorial Española, Burgos, 1938, p. 33.<<

[32] Helen Graham cree que tras mayo de 1937 y con la llegada de Juan Negrín al Gobierno de la República y la creación de un ejército regular, «la desunión en la España republicana tenía menos que ver con la ideología y la política interior que con el impacto negativo, material y psicológico de la No Intervención y de la derrota militar» (*The Spanish Civil War*, p. 68).<<

[33] Pablo Martín Aceña, «La economía española de los años treinta», en Santos Juliá (ed.), *Historia de España de Menéndez Pidal. República y guerra civil*, (42 vols.), Espasa Calpe, Madrid, 2004, Vol. XL, p. 403.<<

[34] Gestiones para mitigar la represión de sacerdotes nacionalistas vascos en María Luisa Rodríguez Aísa, *El cardenal Gomá y la guerra de España*, pp. 222-223. Franco era «magnánimo», en p. 229; y la declaración de Franco a Gomá sobre la «rendición sin condiciones», en p. 170. La ocupación de Guipúzcoa por los militares rebeldes en septiembre de 1936 fue acompañada de una represión sangrienta de izquierdistas, pero dieciséis sacerdotes vascos fueron fusilados en octubre de 1936, por los mismos abanderados de la guerra «santa y justa», lo que ocasionó una protesta del cardenal Gomá a Franco, quien le contestó que desconocía la noticia y le dio «la seguridad de que esto queda cortado inmediatamente» («Carta del Cardenal Gomá al Cardenal Pacelli. Informe del fusilamiento de sacerdotes por la autoridad militar del Gobierno nacional», 8 de noviembre de 1936, *Archivo Gomá*, pp. 283-286). De esos hechos y de otros casos de curas asesinados por los militares rebeldes escribí en *La Iglesia de Franco*, pp. 160-170.<<



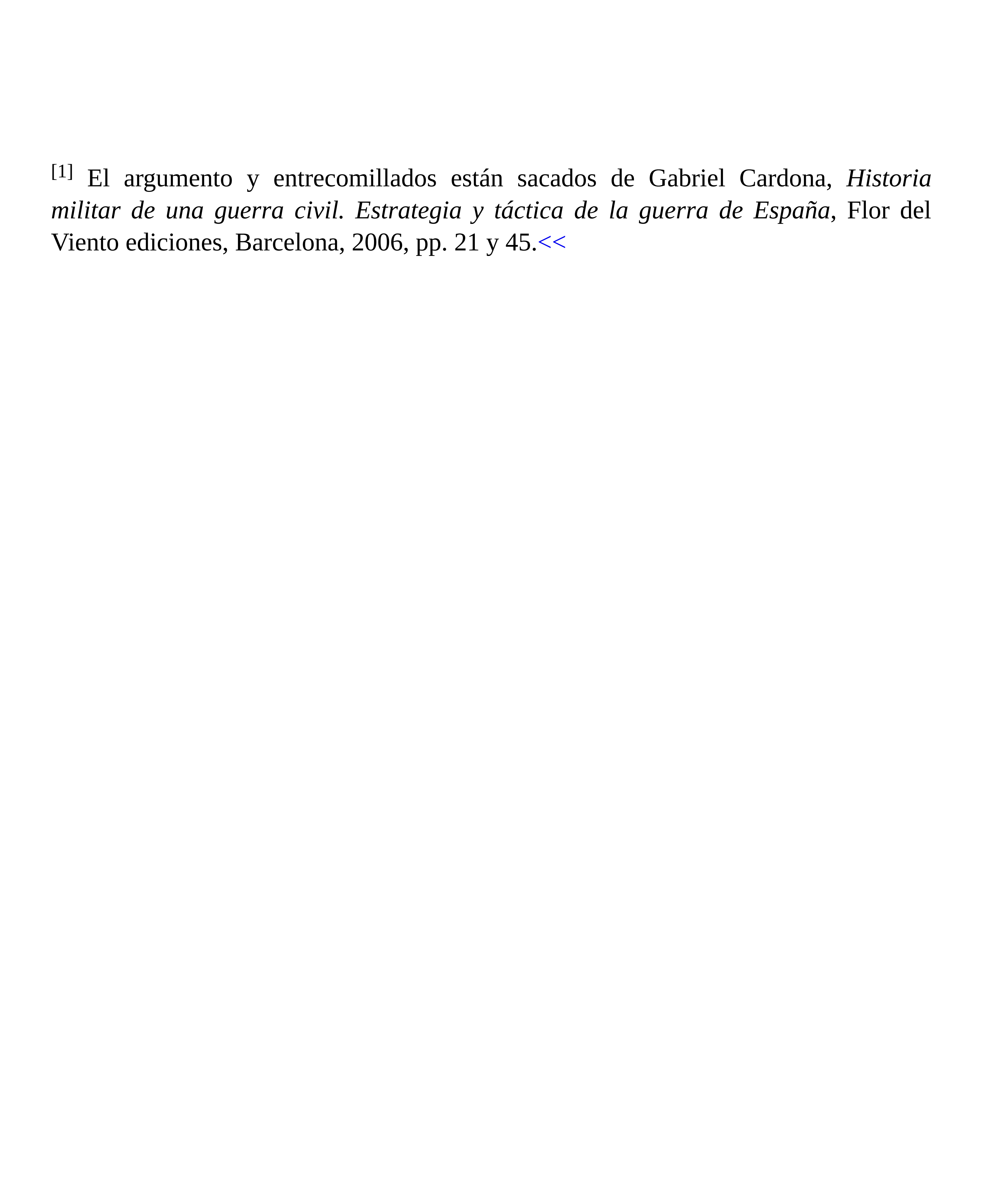
[35] Citado por Alfonso Álvarez Bolado, *Para ganar la guerra, para ganar la paz*, pp. 318-319.<<

[36] Ibídem, p. 319. La cita de Sánchez-Juliá en José Ángel Tello, *Ideología política. La Iglesia católica española, 1936-1959*, Pórtico, Zaragoza, 1984, p. 85.<<

[37] Ibídem, p. 86; Georges Bernanos, *Los grandes cementerios bajo la luna*, Alianza Ed., Madrid, 1986; Antonio Ruiz Villaplana, *Doy fe… un año de actuación en la España nacionalista*, París, n. d., 1938.<<

[38] Manuel Azaña, «Discurso en la Universidad de Valencia», 18 de julio de 1937, en *Los españoles en guerra*, Crítica, Barcelona, 1977, pp. 74-75, aunque lo de «guerra terrible» es del «Discurso en el Ayuntamiento de Valencia», 21 de enero de 1937 (p. 19).<<

[39] Las voces discordantes en Juan María Laboa, «La reacción católica mundial», en «La guerra civil», *Historia 16*, vol. 13, 1986, pp. 111-112. La «conveniencia» de que la Santa Sede no colaborara en la mediación para acabar la guerra se la comunica Gomá a Monseñor Pizzardo el 25 de mayo de 1937, en escrito que cita María Luisa Rodríguez Aísa, *El cardenal Gomá y la guerra de España*, p. 167.<<



[1] El argumento y entrecomillados están sacados de Gabriel Cardona, *Historia militar de una guerra civil. Estrategia y táctica de la guerra de España*, Flor del Viento ediciones, Barcelona, 2006, pp. 21 y 45.<<

[2] Ibídem, p. 24.<<

[3] José Martínez Bande, *La invasión de Aragón y el desembarco en Mallorca*, San Martín, Madrid, 1970, p. 75 y Ramón Salas Larrazábal, *Historia del Ejército Popular de la República*, Editora Nacional, Madrid, 1973, pp. 330-332, vol. I. Cifras desde la óptica anarquista en Juan García Oliver, *El eco de los pasos*, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978, pp. 198-199, y Rudolf Rocker, *The truth about Spain*, Frei Abeiter, Stimme, Nueva York, sin fecha, p. 3.<<

[4] Lo de los «beneficios políticos» en Paul Preston, *Franco*, p. 175. Según Gabriel Cardona, desviarse a Toledo en vez de avanzar hacia Madrid fue «el primero de los muchos disparates estratégicos que Franco cometió durante la guerra» (*Historia militar de una guerra civil*, p. 79).<<

[5] «Dentro del alcance de nuestra artillería», decía el parte del ejército franquista del 6 de noviembre, citado por Jorge M. Reverte, *La batalla de Madrid*, Crítica, Barcelona, 2004, una narración pormenorizada, día a día, del asalto y defensa de la capital.<<

[6] Gabriel Cardona, *Historia militar de una guerra civil*, p. 96.<<

[7] Julio Aróstegui, «La defensa de Madrid y el comienzo de la guerra larga», en Edward Malefakis (ed.), *La guerra de España (19 361 939)*, Taurus, Madrid, 1996, p. 151.<<



[8] Citado en José Andrés Rojo, *Vicente Rojo. Retrato de un general republicano*, Tusquets, Barcelona, 2006, pp. 102-104.<<

[9] Abundantes ejemplos de esa labor propagandística pueden verse en el documental de 1936 *Defensa de Madrid*, con dirección de Ángel Villatoro y producción de Socorro Rojo Internacional, reproducido en *La guerra filmada*, Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009.<<

[10] José Andrés Rojo, *Vicente Rojo*, p. 76.<<

[11] Gabriel Cardona, «Entre la revolución y la disciplina. Ensayo sobre la dimensión militar de la guerra civil», en Enrique Moradiellos, ed., «La Guerra Civil», *Ayer*, 50 (2003), pp. 41-51.<<

[12] Ibídem.<<

[13] Según Jorge M. Reverte (*La batalla de Madrid*, p. 209), «la diferencia con los “paseos” o las matanzas indiscriminadas de agosto es clara: hay en estas acciones [en las de noviembre] una intervención directa de la autoridad republicana, de personas responsables en cargos oficiales». Debe verse también Javier Cervera, *Madrid en guerra. La ciudad clandestina*, Alianza Ed., Madrid, 2006. Un reciente examen, minucioso y detallado, en Paul Preston, *The Spanish Holocaust*, pp. 341-380, quien observa las dificultades que existen para averiguar la «responsabilidad colectiva» de esos crímenes. El debate político, caldeado por la ultraderecha franquista, siempre ha girado en torno a la implicación de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España durante casi treinta años (1956-1985) y político relevante durante la transición de la dictadura a la democracia a finales de los años setenta.<<

[14] Un buen ejemplo en *Prisoners prove intervention in Spain* (1938), de la productora Progressive Films Institute, dirigido por Ivor Montagu, donde aparece el subteniente italiano Gino Poggi, derribado cuando tripulaba un Savoia 79, reconociendo haber participado en la campaña de Abisinia y ser miembro del ejército italiano (incluido en *La guerra filmada*, Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009).<<

[15] Dudaba, por ejemplo, de su «aptitud» para dirigir la guerra el general Wilhelm von Faupel, primer embajador alemán en la España rebelde, quien lo transmitió confidencialmente a las autoridades nazis en un despacho del 10 de diciembre de 1936 (citado en Enrique Moradiellos, *Francisco Franco. Crónica de un Caudillo casi olvidado*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, p. 85). La tesis de que Franco quería una guerra larga para exterminar al enemigo fue ampliamente documentada por Paul Preston en su biografía *Franco*, una interpretación que han respaldado entre otros Enrique Moradiellos y, desde la historia militar, Gabriel Cardona, de quien está sacado lo de «domesticar» a los generales (*Historia militar de una guerra civil*, p. 147). Militares franquistas niegan esa tesis y alaban la estrategia de Franco (por ejemplo, Rafael Casas de la Vega, *Franco militar*, Fénix, Madrid, 1995) y otros, que simpatizaron poco con él, como Carlos Blanco Escolá, confirman, como el título de uno de su libros indica, *La incompetencia militar de Franco*, Alianza, Madrid, 2000. <<

[16] Las dos citas en Paul Preston, *Franco*, la primera en p. 222 y la segunda en 242. <<

[17] Ibídem, p. 239.<<

[18] Gabriel Cardona, *Historia militar de una guerra civil*, p. 150. Los aspectos militares de esa guerra de desgaste, desde Madrid a la victoria final de los franquistas, están bien narrados y con mucha información en Antony Beevor, *The Battle for Spain. The Spanish Civil War 1936-1939*, Weidenfeld & Nicholson, Londres, 2006 (apareció primero en español en Crítica, Barcelona, 2005).<<



[19] Citado en Gonzalo Redondo, *Historia de la Iglesia en España 1931-1939.Tomo II. La guerra civil 1936-1939*, Rialp, Madrid, 1993, p. 288.<<

[20] Michael Alpert, «La historia militar», en Stanley Payne y Javier Tusell (dir.), *La guerra civil. Una nueva visión del conflicto que dividió a España*, Temas de Hoy, Madrid, 1996, p. 163.<<

[21] Esa estrategia, según Gabriel Cardona, lograba éxitos en los primeros días, pero poco después, como el ejército republicano carecía de «reservas capaces de tomar el relevo y continuar la ofensiva», Franco podía transportar tropas frescas al lugar de la batalla y la victoria momentánea se convertía en derrota: «Entre la revolución y la disciplina. Ensayo sobre la dimensión militar de la guerra civil», p. 49.<<

[22] Junto a Rey d’Harcourt, fue detenido el agustino fray Anselmo Polanco, obispo de Teruel, quienes fueron llevados con otros muchos prisioneros a Valencia y después a Barcelona. El 16 de enero de 1939, unos días antes de caer Barcelona en poder de las tropas de Franco, fueron sacados del convento que hacía de prisión y conducidos hacia la frontera, aunque fueron ametrallados antes, el 7 de febrero. Entre las víctimas, estaban el obispo Polanco, el coronel Rey d’Harcourt y el vicario general de la diócesis de Teruel Felipe Ripoll. He tratado esos hechos en *La Iglesia de Franco,* pp. 207-209.<<

[23] Antony Beevor, *La guerra civil española*, p. 476.<<



[24] José Andrés Rojo, *Vicente Rojo*, pp. 190-196, de donde procede también la respuesta de Negrín que se cita en el párrafo siguiente.<<

[25] Un estudio exhaustivo de los más de 2000 bombardeos en territorio aragonés durante toda la guerra (de los que un 71 por ciento fueron realizados por la aviación franquista) en José María Maldonado, *Aragón bajo las bombas*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2011. Ese dominio aéreo de artillería y tanques del ejército franquista contrastaba con la situación en la que se encontraba el ejército republicano en ese frente, según el dictamen que el juez instructor, el general Carlos Masquelet, dirigió el 2 de abril de 1938 al ministro de Defensa sobre el «derrumbamiento» del frente del Este: «unidades incompletas, unidades sin armar […] fortificaciones embrionarias […] penuria en los medios de transporte y sobre todo, desproporción enorme entre nuestros aparatos y los del enemigo, con ventaja para éstos» («El derrumbamiento del frente del Este en marzo de 1938», 2 de abril de 1938, Servicio Histórico Militar, armario 46, legajo 768, carpeta 1).<<

[26] Gabriel Cardona, *Historia militar de una guerra civil*, p. 242. Paul Preston también explica esa decisión de no atacar Cataluña a causa de su estrategia de aniquilar a sus enemigos y de no preocuparle las vidas de sus hombres: *Franco*, pp. 304-316.<<

[27] Paul Preston, *Franco*, p. 316.<<

[28] Manuel Azaña, «Carta a Ángel Osorio», en *Obras Completas III*, editado por Juan Marichal, Oasis, México, 1967, p. 539.<<

[29] Citado en Gonzalo Redondo, *Historia de la Iglesia en España*, pp. 603-605.<<



[30] Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya, *España en llamas. La guerra civil desde el aire*, Temas de Hoy, Madrid, 2003, pp. 9-10 y 313-316.<<



[31] Gabriel Cardona, «Entre la revolución y la disciplina. Ensayo sobre la dimensión militar de la guerra civil española», pp. 41-51.<<

[1] El 16 de octubre de 1940, Franco nombró ministro de Asuntos Exteriores a su cuñado Ramón Serrano Suñer, que ya era ministro de Gobernación desde enero de 1938. El 20 de octubre de 1940, como estreno majestuoso de su nuevo cargo, Serrano Suñer recibió en Madrid con todos los honores y parafernalia fascista a Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y jefe del entramado policial nazi, para preparar las medidas de seguridad del histórico encuentro entre Hitler y Franco que tendría lugar en Hendaya, en la frontera de Francia con España, tres días después. En ese encuentro entre Himmler y Serrano Suñer se selló también, como ha contado Paul Preston, una mayor colaboración entre la Gestapo y las fuerzas de la policía franquista (Paul Preston, *Franco*, p. 392).<<

[2] Sobre los campos de concentración y el exilio en Francia el mejor estudio es el de Genoviève Dreyfus-Armand, *L'exil des républicains espagnols en France. De la Guerre civile à la mort de Franco*, Albin Michel, París, 1999 (traducción al castellano en Crítica, Barcelona, 2000).<<

[3] El intercambio de telegramas entre Pío XII y Franco puede verse en Gonzalo Redondo, *Historia de la Iglesia en España 19 311 939*. Tomo II. *La Guerra Civil 1936-1939*, Rialp, Madrid, 1993, pp. 607-608.<<

[4] De las relaciones entre la Iglesia y la dictadura de Franco y de la legitimación que la Iglesia y el catolicismo proporcionaron a la persecución del contrario, especialmente durante las dos primeras décadas de la dictadura, he tratado en mi libro *La Iglesia de Franco*, Crítica, Barcelona, 2005.<<

[1*] Julián Casanova: *A Short History of the Spanish Civil War*, I. B. Tauris, Londres, 2012. Quiero recordar aquí, y dar las gracias, a Martin Douch, traductor al inglés de algunos de mis libros y artículos en revistas científicas; a los profesores Gabriel Jackson y Helen Graham, por su amistad y sabiduría; a Víctor Pardo y José Luis Ledesma, por su ayuda en la búsqueda de imágenes; a Alex Wright, editor de I. B. Tauris, quien me invitó a escribir el libro; y a Carmen Esteban, mi editora en Crítica y fiel consejera. El estímulo, la amistad y la generosidad de Paul Preston merecen una mención especial. Y se fue Ronald Fraser, a quien tanto aprecié. Algunas de mis investigaciones en los últimos años se han realizado en grupos financiados por la Dirección General de Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006/05 172 y HAR2009-07 784) y por el Gobierno de Aragón (H-24).<<

[2*] El lector encontrará en las notas los trabajos más específicos citados en el libro. La literatura sobre la guerra civil española es, como todo el mundo reconoce, vasta; sin embargo, pese a la subjetividad que puede acarrear cualquier selección de este tipo, en los veinticinco libros que aquí se incluyen está lo esencial. En todos los casos la fecha hace referencia a la primera edición en España.<<